

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



RECURSO DE RECLAMACIÓN

NÚMERO: 1734/2018

AGOSTO/27/2018

III

19:03 (HORAS)

RECURRENTES: CAROLINA GONZÁLEZ NAVA Y OTROS

EN CONTRA DE LOS: PROVEÍDOS DE PRESIDENCIA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE 10 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2018, DICTADOS EN LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018

MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EXT. _____

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: _____

EXPEDIENTE QUE CONSTA DE: UN CUADERNO Y UN CUADERNO AUXILIAR

PENAL PRIMERA SALA

29 AGO 2018

12:40

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS


9 MAY 2019

24 SEP 2018

OK-ot
abm-pbb.

RED DE INFORMÁTICA JURÍDICA

Núm. de Reg.	Número de Expediente	Tipo de Asunto Materia	Promovente, Datos de Origen	Fecha de Ingreso	Contenido	Destino
035333	1734/2018	RECURSO DE RECLAMACIÓN MATERIA: PENAL	<p>RECURRENTE: CAROLINA GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSA EN EL JA.- 260/2018 Y JA.- 627/2017) (QUEJOSO)</p> <p>RECURRENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSA EN EL JA.- 260/2018, JA.- 651/2017 Y JA.- 627/2017) (QUEJOSO)</p> <p>RECURRENTE: JULIO CÉSAR GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSO EN EL JA.- 260/2018) (QUEJOSO)</p> <p>RECURRENTE: ISRAEL GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSO EN EL JA.- 260/2018) (QUEJOSO)</p> <p>OTRAS EN EL RESPECTIVO JUICIO DE ORIGEN: ODILÓN NAVA DE LA ROSA (TERCERO INTERESADO EN EL JA.- 651/2017) (TERCERO INTERESADO)</p> <p>MINISTERIO PÚBLICO: MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN</p> <p>ÓRGANO JURISDICCIONAL: JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO</p> <p>ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MÉXICO</p> <p>OFICIO: ESCRITO DE 27/08/2018</p>	27/08/2018	<p>CUADERNOS: RECIBIDO DE UN ENVIADO CON EL ORIGINAL DEL ESCRITO DE CAROLINA GONZÁLEZ NAVA EN 7 FOJAS CON 3 COPIAS DEL MISMO Y DIVERSOS ANEXOS EN COPIA SIMPLE EN UN TOTAL DE 36 FOJAS</p> <p>ACTO RECLAMADO: LOS PROVEÍDOS DE PRESIDENCIA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE 10 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2018, DICTADOS EN LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018</p> <p>FECHA RESOLUCIÓN: 10/07/2018</p> <p>RESOLUCIÓN RECURRIDA: SE DESECHA, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, LA PETICIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN QUE FORMULAN LOS SOLICITANTES AL RUBRO MENCIONADOS.</p> <p>JUZGADO DE DISTRITO: JA.- 651/2017, JA.- 627/2017 Y JA.- 260/2018, TRIBUNAL COLEGIADO: AR.- 157/2018</p>	<p>SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>N.E.U.N.: 21382657</p> <p>NUEVA LEY DE AMPARO (01/08/2017)</p> <p>FACULTAD DE ATRACCIÓN SOLICITADA POR LA PARTE QUEJOSA</p> <p>CLASIFICACIÓN: OTROS - DESECHA</p> <p>R.R. EN LA S.E.F.A. 479/2018</p>



SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Folio: 00088201

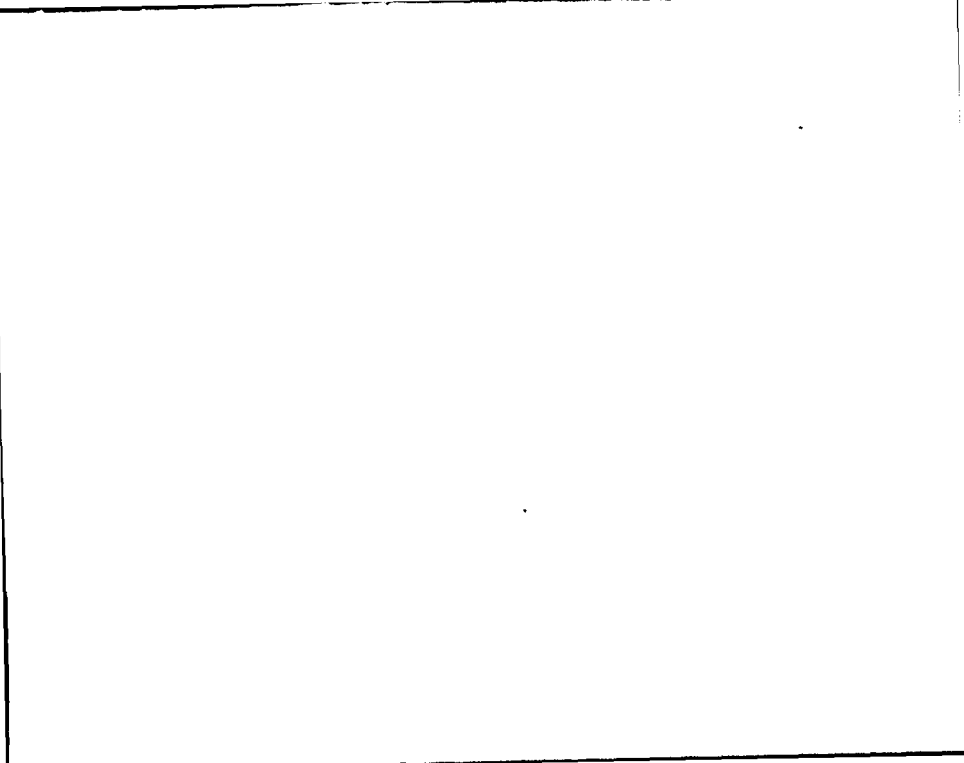
Expediente: 1734/2018

Firma: *[Handwritten Signature]*

ELABORÓ: MÓNICA ARLETTE GONZÁLEZ CASTAÑEDA

RECIBÍ 1 ASUNTO _____

REVISÓ TEMA: _____





Ficha del Expediente Electrónico

Buscar expediente
 Usuario: goramireza
 Cerrar Sesión

Expediente	RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018
Fecha de recepción	27/08/2018 19:03:00
Promoviente	RECURRENTE: CAROLINA GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSA EN EL JA.- 260/2018 Y JA.- 627/2017) RECURRENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSA EN EL JA.- 260/2018, JA.- 651/2017 Y JA.- 627/2017) RECURRENTE: JULIO CÉSAR GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSO EN EL JA.- 260/2018) RECURRENTE: ISRAEL GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSO EN EL JA.- 260/2018) OTRAS EN EL RESPECTIVO JUICIO DE ORIGEN: ODILÓN NAVA DE LA ROSA (TERCERO INTERESADO EN EL JA.- 651/2017)
Órgano de radicación	PLENO
Ministro	
Órgano Jurisdiccional de Origen	JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (EXP. ORIGEN: JA.- 651/2017, JA.- 627/2017 Y JA.- 260/2018) QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (EXP. ORIGEN: AR.- 157/2018)
Asuntos vinculados	S.E.F.A. 479/2018
Número de Expediente Único Nacional (NEUN)	21382657
12 Sentencia relacionada	No está disponible

PLENO

● CARÁTULA	PAGINAS(2)
FECHA DE INGRESO SCJN: 27/08/2018 19:03:00 FECHA DE INGRESO AL EE: 27/08/2018 19:03:00	

● BOLETA DE CONTROL	PAGINAS(2)
FECHA DE INGRESO SCJN: 27/08/2018 19:03:00 FECHA DE INGRESO AL EE: 27/08/2018 19:03:00	

● ESCRITO DE RECURSO DE RECLAMACIÓN - ESCRITO	PAGINAS(9)
FECHA DE INGRESO SCJN: 27/08/2018 19:03:00 FECHA DE INGRESO AL EE: 27/08/2018 19:03:00	



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-84

SOLICITANTES: CAROLINA GONZÁLEZ
NAVA Y OTROS
SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN NÚMERO:
479/2018
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

En la Ciudad de México, a diez de julio de dos mil
dieciocho, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Escrito de los splicitantes al rubro mencionados, registrado con el folio 029609.	Original
2. Diversas constancias que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto.	Un legajo en copias simples

Las constancias antes descritas fueron recibidas en la
Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto
Tribunal el cinco de julio del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a diez de julio de dos mil
dieciocho.

En términos de la normativa aplicable, con el
escrito original de cuenta, fórmense los expedientes impreso y
electrónico correspondientes a la solicitud de ejercicio de la facultad
de atracción respectivo. Con copia autorizada de este proveído
fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los
documentos que no resulten indispensables para sustentar las
determinaciones que se adopten en este asunto, en la
inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes,
atendiendo a la normativa aplicable.

SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018

Ahora bien, como en el caso los promoventes al rubro mencionados solicitan a este Alto Tribunal ejerza su facultad de atracción para conocer y resolver los juicios de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018, todos del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; **procede desechar, por notoriamente improcedente, dicha petición, toda vez que no se surte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte final, y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se refieren expresamente a amparos directos y amparos en revisión.** Sirve de apoyo, por analogía, además, la tesis aislada de la Segunda Sala de este Alto Tribunal que se identifica con el número 2a. CLXV/2008, cuyo rubro es el siguiente: **"FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA."**, consultable en la página setecientas ochenta y cuatro, Tomo XXIX, correspondiente al mes de enero de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.

En consecuencia, y con apoyo, además, en los artículos 10, fracción XII, y 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

I. Se desecha, por notoriamente improcedente, la petición del ejercicio de la facultad de atracción que formulan los solicitantes al rubro mencionados.

#	Expediente	Abreviatura	Vin...
1	1734/2018	A.D.R.	
2	1734/2018	R.R.	

[Datos Principales](#)
[Ponencia](#)
[Historia](#)
[Observaciones](#)
[Temas](#)
[Registros](#)
[Datos Complementarios](#)
[Flujo de Expedientes](#)

Ministro: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

Secretario: CASTILLO VORRATH MARÍA ISABEL

Fecha de Lista:

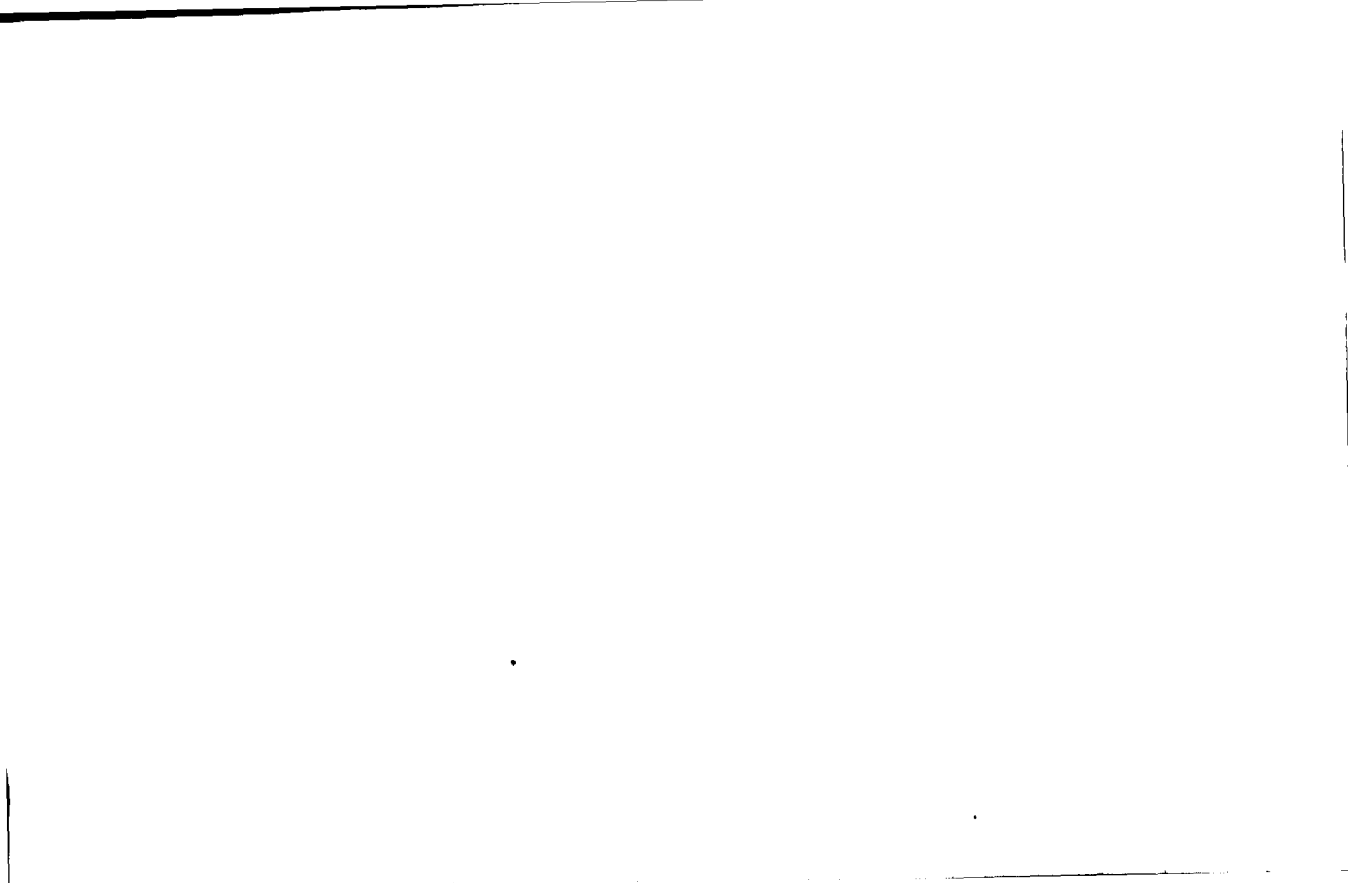
Total de registros: 2

MXSUSQL SU SCJNMSalinas v0.1.0.119

Escribe aquí para buscar



ENGROSE:	FECHA/HORA:	PONENCIA:
RR 1734/2018	13. Feb - 2019	JM PR
ANEXOS:		
1	Cuando RR 1734/2018 F. 283	
2	Cuando SEFA 479/2018 F. 88.	
3	Cuando Aux 479/2018 F. 59 283	
4	Cuando Aux RR 1734 F. 59	
5		
6		
7		
8		
9		
TOTAL	4 Cuandos (2 Cuad. SON AUXILIARES)	
ENTREGA/EXTENSIÓN:	Gonzalo 2318	RECIBE Jose W. H



OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y DE CORRESPONDENCIA
BOLETA DE CONTROL PARA LA FORMACIÓN DE EXPEDIENTES

TIPO EXPEDIENTE (PROVISIONAL)

PC. PC.

FECHA

27/08/18

FOLIO

035333

FIRMA DEL SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA RESPECTIVA MESA DE FORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EFECTOS DE LA CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DE ESTE EXPEDIENTE (LIC. JOSÉ OSCAR VILLEGAS TABARES, LIC. G. ROCÍO PÉREZ MAQUEDA, LIC. BRENDA M. PALMA MARTÍNEZ, LIC. ROMÁN MARÍN ENRÍQUEZ, LIC. MARIO ENRIQUE CAMACHO MARTÍNEZ O LIC. AZHUR TEJADA FLORES)

FIRMA DEL TITULAR DE LA OFICINA - LIC. RODRIGO ROBLES ENRÍQUEZ

TURNO AL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE

Lic. Anette Cárdenas

PARA SER LLENADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE: (MIRIAM ÁVILA SALCEDO, ISIDRO ZUÑIGA SOLORZANO, GUADALUPE A. GARZA GUILLÉN, ERNESTO ALTAMIRANO LAGUNAS, CYNTHIA ROMÁN ARRIAGA, RICARDO ALEJANDRO RAMÍREZ PADILLA Y VÍCTOR HUGO ESPINOSA PIÑA)

NÚMERO ASIGNADO AL EXPEDIENTE

1734/2018

ANTECEDENTES SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS RELATIVOS AL EXPEDIENTE QUE SE INTEGRA

S.E.F.A. 479/2018

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE

Lic. R. R.

TIPO DE EXPEDIENTE (CLASIFICACIÓN DEFINITIVA)

PC. PC.

FIRMA DEFINITIVA DEL SUPERVISOR DE LA MESA RESPECTIVA DE FORMACIÓN DE EXPEDIENTES

FIRMA DEFINITIVA DEL TITULAR DE LA OFICINA

INSTRUCCIONES

1. La presente boleta se utilizará y se agregará como primer foja a todo expediente que se forme en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia (OCJC).
2. En la boleta deberá indicarse la fecha de ingreso y el número de folio, así como el tipo de expediente que corresponda provisionalmente.
3. El supervisor de la mesa respectiva de formación de expedientes y el titular de la OCJC deberán suscribirla indicando la clasificación provisional. Posteriormente el referido supervisor turnará el material relativo al servidor público que formará el expediente respectivo y revisará los antecedentes.
4. El servidor público que forme el expediente deberá estudiar las constancias y en caso de duda sobre el tipo de expediente asignado lo hará del conocimiento del supervisor de la mesa respectiva de formación de expedientes, el cual de inmediato confirmará la clasificación asignada o, en caso de duda, lo consultará con el titular de la OCJC, este último deberá confirmar dicha categoría o, en su caso, consultar al titular de la Secretaría General de Acuerdos.
5. El servidor público responsable de formar el expediente respectivo asignará el número que corresponda, atendiendo a la categoría en que se ubica, revisará los ANTECEDENTES sobre asuntos relacionados con el asunto relativo al expediente que se forma, los indicará en esta boleta y la suscribirá.
6. El servidor público que forme el expediente lo entregará al supervisor de su mesa de formación de expedientes, el cual lo revisará e informará al titular de la OCJC cualquier situación que dé lugar a estimar incorrecta la clasificación de aquél, incluso la relevancia del asunto que justifique informe especial al Secretario General de Acuerdos.
7. Con base en lo anterior el titular de la OCJC suscribirá la presente boleta junto con el supervisor de la respectiva mesa de formación de expedientes y previa asignación del secretario auxiliar al que corresponda su estudio, remitirá el expediente a la Subsecretaría General de Acuerdos por conducto de la mesa de informes de la OCJC.

2

2

7

10

2

2

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

P r e s e n t e.

Carolina González Nava, por propio derecho, en mi calidad de representante común de la parte quejosa, ante usted, con el debido respeto, comparezco, y expongo:

Con fundamento en el artículo 104 de la Ley de Amparo, artículo 10, fracción II, inciso c, y fracción V, de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vengo a formular graves agravios que le causa a la parte quejosa los proveídos de fecha diez de julio y siete de agosto de dos mil dieciocho, suscritos por el Presidente de este Alto Tribunal.

La parte quejosa acude en forma y tiempo ante este Alto Tribunal a interponer Recurso de Reclamación. El proveído de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, suscrito por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, le fue notificado a la quejosa Martha Patricia González Nava el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.

Retomando el artículo 104, segundo párrafo de la Ley de Amparo que mandata que el Recurso de Reclamación se interpondrá por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresaran los agravios, dentro del término de tres días al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. En este fundamento vengo a decir:

Los acuerdos de éstos proveídos anulan de forma definitiva el derecho humano al acceso a la justicia a la parte quejosa, causándonos graves agravios.

— El acuerdo recurrido viola el artículo 10, fracción c, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presente caso ha sido expuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, el estado de excepción de Derecho y la violación flagrante y sistemática a derechos inderogables es un hecho notorio.

Causa un grave agravio a la parte quejosa los proveídos recurridos, pues los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento los atributos de la persona humana, el reconocimiento a las garantías judiciales para la protección de los derechos fundamentales vulnerados en el caso concreto, son prueba de ello.

Las garantías judiciales indispensables a que alude el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 4.2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no autoriza ni siquiera en conflictos armados la suspensión a un recurso sencillo y efectivo que proteja los derechos fundamentales inderogables conculcados en el presente caso.

Los proveídos recurridos causan un grave agravio, redundando en detrimento manifiesto a las normas internacionales de derechos humanos, el derecho de las víctimas a tener un acceso igual a un recurso judicial efectivo de acceso a la justicia a un procedimiento justo e imparcial, al inaccesso del remedio al estado de excepción de Derecho y violaciones flagrantes y sistemáticas a derechos fundamentales inderogables:

El derecho a una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. La reparación e indemnización ha de ser proporcional a la gravedad de la de las violaciones y al daño sufrido.



Los acuerdos recurridos violan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Anulando la posibilidad que este Alto Tribunal reconozca en el presente caso el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia, considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derechos a igual protección de la ley, sin exclusión alguna.

Ello es así, los acuerdos recurridos son ilegales, violan el artículo 10 fracción II, inciso c de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el artículo 79 *in fine* de la Ley de Amparo; el principio de progresividad, "pro homine", pro actione, favor debilis, favor libertatis.

Esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno cuando se trate de los casos comprendidos en la fracción III del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el estado de excepción de Derecho ha sido formalizado en los juicios de amparo indirecto 627/2017, 651/2017 y 260/2018, todos substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito en concatenación con las resoluciones del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito, recursos, que carecen de independencia e imparcialidad para la obtención de la justicia.

Ello es así, éstos tres juicios que no han causado estado, son hechos notorios que dan soporte de iure a este estado de excepción de Derecho. Sin garantías judiciales efectivas, en el que se ha simulado juicios constitucionales, en un asombroso desprecio al orden jurídico, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día.

Los acuerdos recurridos violan la certeza y seguridad jurídica, pues el presente caso cuenta con sentencias, quejas. Solicitud de amparos que, por un periodo de un año, con ocho meses, cuentan con sendas violaciones procesales que violentan el derecho humano al acceso a la justicia, en relación al artículo 25, 27.2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al artículo 29 párrafo II, in fine, y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Un ejemplo de ello es el amparo en revisión 627/2017, con número de toca 157/2018, en el que se resolvió, "en razón que de oficio se advierte la existencia de sendas violaciones procesales en el procedimiento del juicio de amparo, lo cual obliga a revocar el fallo impugnado y ordenar su reposición...", en el que la Juez a quo, formaliza y prosigue el estado de excepción de Derecho. Lo que deviene a probar la desviación a la legalidad.¹

Luego, los proveídos recurridos son vagos, no dan razón jurídica suficiente para considerar que son emitidos en plena legalidad.

Los amparos mencionados anteriormente, tienen recursos en revisión², por lo que le causa total indefensión a la parte recurrente la invocación de la jurisprudencia con el número 2a. CLXV/2008, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, bajo el rubro "FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA", en la que se basó los proveídos recurridos para desechar la solicitud de acceso al derecho humano al acceso a la justicia.

Los acuerdos recurridos inobservan el artículo 10, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que a la letra dice:

¹Queja Administrativa 1022/2018-II, de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, pág. 9.

²Recurso de queja derivada del juicio de amparo 260/2018; Recurso de Inconformidad 53/2018, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.



"Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;"

El presente caso se encuentra en un absurdo jurídico, existe plena inseguridad jurídica ("*habeas corpus*") que ha afectado el Estado de Derecho, lo cual configura un cuadro sistematizado de delitos de lesa humanidad. Dando una formalidad jurídica de estado de excepción de Derecho, suspensión de derechos fundamentales inderogables por un periodo de cinco años con ocho meses (enero de dos mil trece al mes de agosto de dos mil dieciocho), sin garantías judiciales efectivas, en el que se ha simulado que los quejosos tenemos acceso a un juicio de amparo, a la fecha no se ha dado de forma mínima un establecimiento al orden jurídico, limitación a la ilegalidad o régimen relativo al ejercicio de los derechos que han sido suspendido. En un asombroso desprecio y rechazo al orden jurídico, en el presente caso, se ha "suspendido el Estado de Derecho, ateniéndonos la parte quejosa a la informalidad y la inseguridad jurídica."⁴

La suspensión de los derechos fundamentales, ha incidido sobre diversos derechos fundamentales a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre; los derechos de la niñez; la inviolabilidad del hogar doméstico (vivienda); el derecho de acceso a la justicia; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición y la tortura; a las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Al haberse decretado en el presente caso la suspensión de derechos fundamentales, y no regularse ejecutivamente nada al respecto, ello abrió de forma sistemática de forma ilimitada a la ilegalidad de los funcionarios, figuras políticas, particulares, en conjunto y/o "pacto criminoso", han actualizado delitos que pueden constituir de lesa humanidad. Nada se ha decretado, nada se ha regulado, nada se ha dicho, y las autoridades han hecho lo que les ha parecido, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día. Condenable (ilegal) desde cualquier punto de vista.

En más de una ocasión a la parte quejosa: nos han torturado, la Representación Social ha hecho acusaciones insólitas, en el catálogo penal, no existe el tipo penal de solicitud de acceso a la justicia; el despojo de seguridad jurídica, lo demuestra; ello es así, en el presente caso se ha suspendido formalmente el derecho.

Pues sin el menor respeto al Estado Constitucional, la parte quejosa ha sido arrastrada a sufrimientos ignominiosos por un periodo de cinco años, con ocho meses, hechos que no han cesado, en que se nos ha denegado la protección judicial

³ En el sentido que el "*habeas corpus*" tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos

⁴ Siendo un ejemplo de ello, en días pasados, autoridades pertenecientes a seguridad pública (policías auxiliares abordo de patrullas) y al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras en conjunto con particulares, María Dolores Espinoza Bassoco (habitante de Andador Tabaqueros), acudieron al domicilio de la parte quejosa golpeando sus muros con mazos (dañándolos, a su vez, rompiendo tubería de drenaje), "mencionado que en cuanto salgan los detienen", observando, Carolina González Nava, que venían servidores públicos y particulares con herramientas (mazos) a bordo de un automotor con número de unidad ECO 366.



en los términos que mandata el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el presente caso las normas imperativas, relativas a los derechos del hombre, al reconocimiento de la dignidad humana base de los demás derechos: a la no impunidad, a la justicia, al derecho de no ser torturado como forma de castigo, el derecho a la vida, al derecho de no ser discriminado, el derecho a no ser amenazado con pena privativa de la libertad o de la vida, el derecho de que no se imponga a los quejosos castigos como penas anticipadas, el de ejercer acción penal ante un Juez Oral con competencia para delitos oficiosos, como forma de castigo, el derecho a que no se soslaye el interés superior de la niñez, el derecho a la propiedad, el derecho a una vida libre de violencia de género, el derecho a una defensa técnica adecuada, el derecho a no vivir con zozobra, que en cualquier momento el Gobierno de la Ciudad de México⁵ nos impute hechos falsos con toda impunidad, en los que no se permita conocer a los quejosos de que se nos acusa, ejerciendo acción penal, como delito oficioso (unidad de gestión once, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México)⁶, el derecho a no ser privados de seguridad jurídica, a no ser vejado, a no recibir castigos infamantes, **actualizando persecución basada en motivos políticos y sociales cometida por autoridades y un grupo que ejerce un poder sobre un territorio determinado con objeto de someter a la parte quejosa a una forma de vida en la que se ha negado y se sigue negando de forma permanente el goce de derechos fundamentales de los quejosos, entre otras violaciones graves a derechos humanos, denunciando una y otra vez inaccesso a la justicia**; solicitando en el transcurso de cinco años con ocho meses ante diferentes autoridades (órganos de gobierno de la Ciudad de México) que cesaran estas graves violaciones, máxime si en el presente caso la sistemática y planificada violación a los derechos humanos que han sido denunciados: al Procurador General de Justicia del Distrito Federal⁷, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; al Secretario de Gobernación⁸.

Ahora bien, las resoluciones recurridas son un resumen de la nula disposición a actuar en el presente caso, sin tomar en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidas por el derecho internacional.

⁵ Juicio de amparo indirecto: 627/2017 y 349/2017.

⁶ Ello es así, por ejemplo, la policía; el Ministerio Público en conjunto con algunos habitantes del "pueblo", como lo llama el agente del ministerio público Manuel Gallegos Guzmán (juicio de amparo 627/2017, 349/2017, 288/2017, 651/2017 substanciados en el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México), nos imputan a los quejosos hechos falsos, ejerciendo extrema violencia, haciéndonos saber por terceros, o bien, mediante informes de fecha 26 de octubre de 2017, 09 de noviembre de 2017, rendidos ante el Juzgado de Distrito en la substanciación del juicio 627/2017, en la que la autoridad responsable informa respectivamente, que sigue investigando, sin tener certeza jurídica los quejosos que delito investiga, acudiendo la policía a ejercer castigos infamantes. Por lo que la parte quejosa vive con temor, zozobra; sin derechos fundamentales, sin que la autoridad responsable a la fecha del presente escrito se pronuncie e **instaure una investigación, sanción y reparación del caso concreto**.

⁷ En fecha 27 de diciembre de 2017, mediante escrito dirigido respetuosamente al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, solicitamos se nos proporcionara copia de las "audiencia públicas" **(que eran concertadas por la licenciada Fabiola Hernández Espíndola, Secretaria Auxiliar del C. Procurador de Justicia de la Ciudad de México)** e informes de las mismas, que tenían verificativo en las Fiscalías Desconcentradas de Investigación en Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, etc.; audiencias a las que acudían los quejosos: Julio Cesar González Nava, Martha Patricia González Nava y/o Carolina González Nava, acompañados por Israel González Nava; con la finalidad de presentarlas como prueba de los malos tratos, burlas, interrogatorios, tortura, vejaciones, violencia, humillaciones, intimidación, amenazas; conductas realizadas una y otra vez, en contra de los quejosos por agentes del ministerio público. **Acudíamos de buena fe a estas audiencias a solicitar tener acceso a la justicia, a que se respetaran derechos fundamentales como lo es el de la vida, la integridad psíquica y física, el patrimonio entre otras**. Más deliberadamente en estas audiencias, una y otra vez como método sistemático perpetraban estas violaciones; **en el presente caso no se tiene acceso al Ministerio Público local ni federal**.

⁸ Juicio de amparo indirecto 260/2018



Los juicios de amparo 627/2017, 651/2017 y 260/2018, representan el treinta y tres por ciento del total de solicitud de acceso a la justicia, un ejemplo de parcialidad y de violación al artículo 8, 25, 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la queja administrativa 1022/2018-II, documental, que se anexa en copia simple.

Ello es, los juicios de amparo indirecto: 1118/2016; 288/2017; 349/2017; 627/2017; 651/2017; 74/2018; 260/2018; 909/2018. Representan este estado excepción de Derecho, es loable presentar como prueba el juicio 627/2017, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ha reconocido las sendas violaciones procesales en juicio constitucional que acontecen en el presente caso, el injustificado inacceso a la justicia; así mismo, el juicio de amparo 909/2018, substanciado en el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, representa otra probanza (no existió violación inicial al artículo 76 de la Ley de Amparo) en contra de lo que acontece en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito que en conjunto con el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, han hecho del caso un estado de excepción de Derecho formal.

En estos juicios en marcha en sí mismos y por sí mismos demuestran que las resoluciones de la Juez a quo han sido adoptadas con el propósito de sustraer a las autoridades responsables de su responsabilidad penal por delitos que pueden constituir de lesa humanidad, las demoras injustificadas en estos juicios son compatibles con la nula intención de hacer que se respete la Constitución, en una clara desviación a la legalidad, en el que no se ha acatado la jurisprudencia de carácter obligatorio; así mismo los juicios no han sido ni son sustanciados de manera imparcial, es notorio que las decisiones han sido con la nula intención de que el estado de excepción de Derecho y de suspensión de derechos no derogables, cese, que sea reconocido el derecho violado, la sanción, reparación e indemnización a que tiene derecho toda víctima.

Así es, la parte quejosa ha ofrecido probanzas, los expedientes y anexos de los innumerables juicios de amparo, documentales públicas, que en sí y por sí mismas, demuestran el estado de excepción de Derecho y la violación sistemática y flagrante de derechos fundamentales inderogables, un ejemplo de ello, es el informe médico suscrito por la doctora Yamel Rito García, Subdirectora de Consulta Externa, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud, informe, que prueba de forma idónea y fehacientemente los daños físicos y psicológicos, que derivaron del "estado de excepción" de Derecho y suspensión de derechos no derogables, documento público, que está basado en exámenes científicos y técnicos, en el que la suscrita se sometió a estudios de resonancia magnética, entre otros estudios. Probanza que demuestra los daños presentes y futuros que han derivado en violación al proyecto de vida; daños planificados con la finalidad de destruir, de anular el derecho humano a la existencia. Ello es así, hechos que devienen a comprobar que el Estado busca el exterminio de la parte quejosa, hechos que son comparables a la tortura de la "gota de agua".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expresado⁹ que si el juicio ha sido anticonstitucional queda expedita la jurisdicción del Juez competente para hacer la reposición del proceso, hecho notorio que es acorde con el artículo 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:

"NON BIS IN IDEM", CASOS EN QUE NO OPERA EL PRINCIPIO.

La Constitución establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, consagrando así el antiguo principio "non bis in idem"; mas ello debe entenderse de acuerdo con el régimen federal marcado por la propia Ley Fundamental, la cual señala a los Estados miembros las facultades no conferidas en forma expresa a la Federación; por ende,

⁹ Tesis aislada penal, Volumen LXI, Segunda Parte, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, pág. 33, registro 260202, con el rubro: **"NON BIS IN IDEM", CASOS EN QUE NO OPERA EL PRINCIPIO."**

88

88

88

88

la cosa juzgada sólo puede operar cuando se pronuncia por una entidad federativa, o por la autoridad judicial federal competente, una resolución irrevocable; pero si la sentencia definitiva dictada por un Estado adolece de nulidad, no existe impedimento alguno para que los tribunales federales competentes, juzguen al inculpado. Ya esta Suprema Corte de Justicia ha expresado que si bien la Constitución previene que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, esto se entiende cuando el primer juicio es válido y no anticonstitucional y nulo, porque en este caso hay que volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, quedando expedita la jurisdicción del Juez competente para hacer la reposición del proceso.

Lo anterior es así, por lo que las resoluciones recurridas hace nugatorio de manera formal el derecho de la parte quejosa al derecho humano a un juicio imparcial, efectivo, sencillo, pues no sólo se trata de vicios cometidos en las decisiones judiciales federales de mérito, los recursos promovidos que son previstos en la ley de la materia, sus resoluciones nos han privado de manera formal de la posibilidad de obtener una sentencia que proteja a la parte quejosa, pues las violaciones a la Constitución son manifiestas, si el Máximo Órgano Jurisdiccional del país lo ratifica, veda el acceso a la justicia, a un recurso efectivo y sencillo. Cabe hacer la pregunta a este Alto Tribunal si es legal la violación al artículo 25, 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al artículo 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en violación al artículo 1, 17, 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en juicio constitucional.

Suplencia de la queja

A la luz del artículo primero de la Constitución y del numeral 1o. de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, solicitamos a este órgano de control constitucional, la suplencia de la queja, esto, con fundamento en el artículo 79, fracción III, *in fine*, de la Ley de Amparo, que menciona:

“...la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio”

Figura procesal, que contrarresta el grado de vulnerabilidad, a una interpretación *pro homine*, intensificado al derecho del debido proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹⁰, en aras de la protección de los más débiles (*favor debilis*), el daño al proyecto de vida: el derecho a la existencia comprende condiciones mínimas de una vida digna, de seguridad, certeza jurídica e integridad de la persona humana.

Asimismo, intensifica el principio de progresividad, el deber de aplicar el Derecho Internacional en materia de derechos humanos, pues el estado de excepción de derechos fundamentales no es permitido ni siquiera en conflictos armados (Convenios de Ginebra)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en pronunciamiento en el Caso de los “Niños de la Calle” (*Villagrán Morales y otros*) Vs Guatemala, es clarificador del presente caso, la comprensión del principio de interdependencia de los derechos humanos: el proyecto de vida es consustancial del derecho de la existencia, que requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad, e integridad de la persona humana¹¹:

¹⁰ Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 70, y Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, párr. 115

¹¹ Caso de los “Niños de la Calle” (*Villagrán Morales y otros*) Vs Guatemala



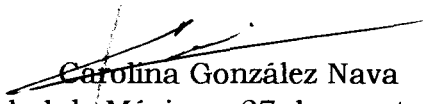
El proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a la libertad, como derecho de cada persona a elegir su propio destino. (...) El proyecto de vida envuelve plenamente el ideal de la Declaración Americana [de los Derechos y Deberes del Hombre] de 1948 de exaltar el espíritu como finalidad suprema y categoría máxima de la existencia humana⁴.

Por lo anteriormente, expuesto y fundado a Usted C. **PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**; actualmente Ocurro y pido:

Primero. - Tener por presentado el presente recurso de reclamación.

Segundo. - Que el presente estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, sea expuesto ante el Pleno del Alto Tribunal del país.

PROTESTO LO NECESARIO


Carolina González Nava
Ciudad de México a 27 de agosto de 2018

035033

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

1734/2018

2018 AGO 27 PM 7 03

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibido de un enviado
en (7) l^{as}, con (3) copias
del mismo.

- Diversos anexos en copia
simple en un total de
(36) l^{as}.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-54

SOLICITANTES: CAROLINA GONZÁLEZ /
NAVA Y OTROS
SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN NÚMERO: ✓
479/2018
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

En la Ciudad de México, a diez de julio de dos mil
dieciocho, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Escrito de los solicitantes al rubro mencionados, registrado con el folio 029609 .	Original
2. Diversas constancias que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto.	Un legajo en copias simples

Las constancias antes descritas fueron recibidas en la
Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto
Tribunal el cinco de julio del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a diez de julio de dos mil
dieciocho.

En **términos** de la normativa aplicable, con el
escrito original de cuenta, fórmense los expedientes impreso y
electrónico correspondientes a la solicitud de ejercicio de la facultad
de atracción respectivo. **Con copia autorizada de este proveído**
fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los
documentos que no resulten indispensables para sustentar las
determinaciones que se adopten en este asunto, en la
inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes,
atendiendo a la normativa aplicable.

Ahora bien, como en el caso los promoventes al rubro mencionados solicitan a este Alto Tribunal ejerza su facultad de atracción para conocer y resolver los juicios de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018, todos del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; **procede desechar, por notoriamente improcedente, dicha petición, toda vez que no se surte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte final, y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se refieren expresamente a amparos directos y amparos en revisión.** Sirve de apoyo, por analogía, además, la tesis aislada de la Segunda Sala de este Alto Tribunal que se identifica con el número 2a. CLXV/2008, cuyo rubro es el siguiente: ***"FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA."***; consultable en la página setecientas ochenta y cuatro, Tomo XXIX, correspondiente al mes de enero de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.

En consecuencia, y con apoyo, además, en los artículos 10, fracción XII, y 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

I. Se desecha, por notoriamente improcedente, la petición del ejercicio de la facultad de atracción que formulan los solicitantes al rubro mencionados.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

II. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

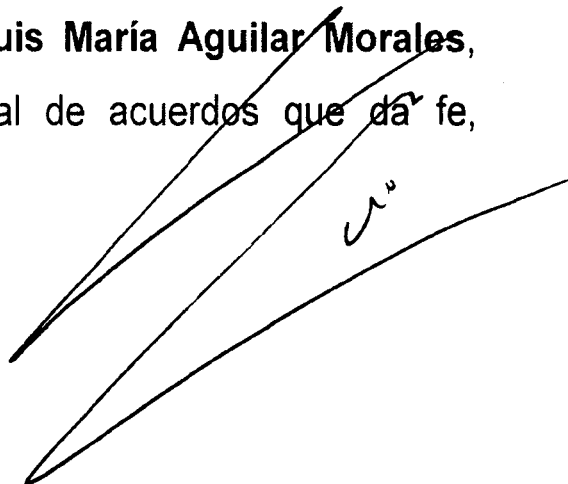
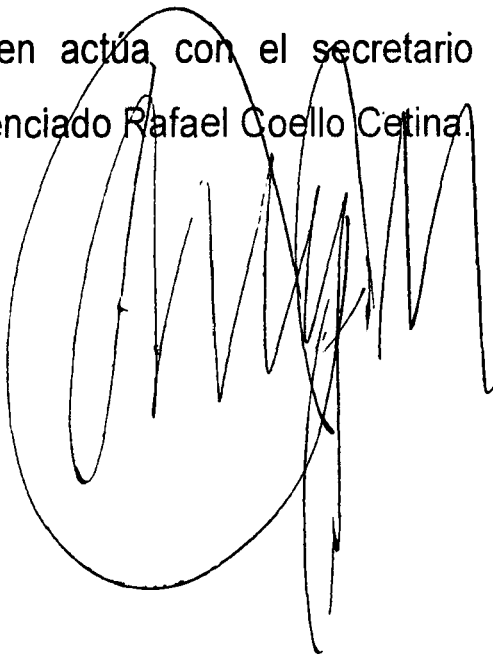
III. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

IV. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica.

V. Notifíquese por lista y haciéndolo en forma personal a la parte solicitante en el domicilio señalado en el escrito de mérito, entregándole copia autorizada del presente proveído, en la inteligencia que deberá procederse, según sea el caso, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, por lo que si se dejó citatorio o se fijó aviso y el interesado no acude ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a notificarse dentro del plazo de dos días hábiles siguientes, se notificará por lista conforme a las reglas establecidas en el artículo 29 del mencionado ordenamiento. Ante la imposibilidad de realizar la notificación ordenada en el domicilio señalado, el Actuario Judicial respectivo deberá dar cuenta a la Presidencia de este Alto Tribunal con la respectiva razón circunstanciada, para que se acuerde lo que corresponda. Cumplido lo anterior, previa certificación que se elabore en la que se haga constar que este

acuerdo causó estado, archívese el expediente como asunto concluido.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **Ministro Luis María Aguilar Morales**, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.



RCC/DDV/GORA

En 09 AGO 2018 por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior al(os) interesado(s) de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-53

**SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS.**

**SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN NÚMERO: 479/2018.**

AVISO.

SOLICITANTES: CAROLINA GONZÁLEZ NAVA Y OTROS.

**DOMICILIO: CALLE TABAQUEROS NÚMERO 43, COLONIA SAN NICOLÁS
TOTOLAPAN, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10900, EN ESTA
CIUDAD DE MÉXICO.**

Para la práctica de una diligencia judicial de carácter personal, ordenada por el **Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, se servirá(n), usted(es) acudir al local que ocupa la Actuaría de este Máximo Tribunal, ubicado en la calle Pino Suárez número 2, primero piso, puerta 2010, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06060, de esta Ciudad, a fin de que se le notifique el proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en la SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN NÚMERO: 479/2018, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la fecha en que se deja el presente aviso, apercibido(s) que de no comparecer en el plazo indicado, se notificará el proveído en mención, por medio de lista que se fijara en los Estrados de este Máximo Órgano Jurisdiccional, y por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Alto Tribunal, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

Hago constar que dejo el presente aviso, en virtud de no haberlo (s), encontrado, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se le (s) hace saber, que dicha diligencia tiene por objeto notificarle (s), de manera personal el proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado por el **Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, hoy a las trece horas con diez minutos.

Ciudad de México, a veintidos de agosto de dos mil dieciocho.

ACTUARIO JUDICIAL

LIC. BENJAMÍN CAMACHO VELÁZQUEZ.



**SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS.**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SOLICITANTES: CAROLINA GONZÁLEZ NAVA Y OTROS.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EXPEDIENTE: SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN
NÚMERO: 479/2018.

En la Ciudad de México, siendo las **doce horas con cincuenta minutos, del veintidós de agosto de dos mil dieciocho**, el que suscribe licenciado Benjamín Camacho Velázquez, Actuario Judicial, adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hago constar que me constituí en el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, ubicado en **CALLE TABAQUEROS NÚMERO 43, COLONIA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10900, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO**; en busca DE LA PARTE SOLICITANTE AL RUBRO CITADA, a efecto de notificarles personalmente el contenido del proveído de **diez de julio de dos mil dieciocho** dictado por el **Presidente de este Alto Tribunal**, en el expediente en el que se actúa, cerciorado de ser el domicilio correcto para tal efecto, por corresponder al número visible y la nomenclatura de la calle, colonia, delegación y código postal citados; procedí a tocar la puerta del mencionado inmueble, esperando por un lapso de diez minutos, sin que nadie acudiera a mí llamado, de nueva cuenta, procedí a tocar la puerta de ingreso, esperando otro lapso de diez minutos, sin que nadie acudiera a mí llamado, por lo anterior, siendo las **trece horas con diez minutos, del veintidós de agosto de dos mil dieciocho**, y en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se fija en la puerta del inmueble citado el aviso respectivo, con el objeto de que se practique la diligencia judicial de carácter personal, ordenada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se sirvan acudir al local que ocupa la Actuaría de este Máximo Tribunal, ubicado en la calle Pino Suárez número 2, primero piso, puerta 2010, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06060, de esta Ciudad de México, a fin de que se les notifique el proveído de **diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018**, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la fecha en que se fijó el aviso respectivo, apercibidos que de no comparecer en el plazo indicado, se notificara el proveído en mención, por medio de lista que se fijara en los Estrados de este Máximo Órgano Jurisdiccional; y por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Alto Tribunal. Doy fe.

ACTUARIO JUDICIAL

LIC. BENJAMÍN CAMACHO VELÁZQUEZ.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

SOLICITUD DE LA FACULTAD DE ATRACCION NÚMERO 479/2018.

NOTIFICACIÓN PERSONAL POR COMPARECENCIA

SOLICITANTE: CAROLINA, MARTHA PATRICIA, JULIO CÉSAR E ISRAEL,
TODOS DE APELLIDOS GONZÁLEZ NAVA

En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, la suscrita licenciada Claudia Flores Díaz, Actuaría Judicial, adscrita a la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hago constar que comparece en las oficinas de la Actuaría de dicha Subsecretaría la solicitante Martha Patricia González Nava, quien se identifica con la credencial para votar con número IDMEX 1668230512-3094039553974 expedida por el Instituto Nacional Electoral, año de registro mil novecientos noventa y siete, la cual contiene una fotografía que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente, misma que tengo a la vista y devuelvo al interesado, cuya copia simple se agrega a la presente acta. Acto continuo, manifiesta que en cumplimiento al aviso de fecha veintidós del mes y año en curso, comparece a darse por notificada del proveído de diez julio del año que transcurre, dictado por el Presidente del Máximo Tribunal en los autos del expediente en que se actúa, por consiguiente, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso j), y 27, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, la suscrita notifico personalmente a la solicitante Martha Patricia González Nava, por sí y por los otros solicitantes del proveído de referencia y le entrego copia autorizada del mismo, manifestando quedar notificado y enterado de su contenido y por recibida la copia simple del acuerdo en cuestión, por lo anterior, firma para constancia al calce y al margen de la presente acta en unión de la suscrita. Doy fe.

C. MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA
SOLICITANTE

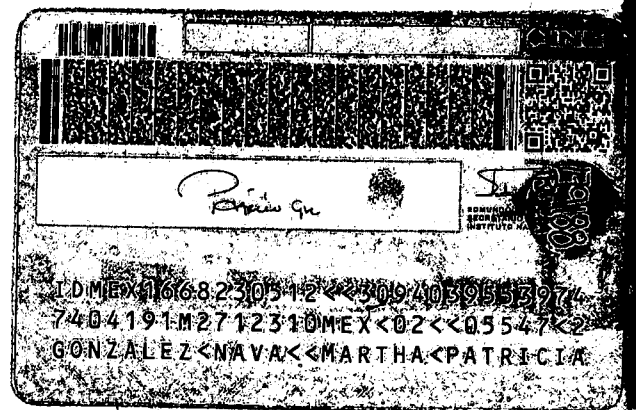
Del acuerdo
24/08/2018.

LIC. CLAUDIA FLORES DÍAZ.

ACTUARÍA JUDICIAL ADSCRITA A LA SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

1111

1111





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SOLICITANTES: CAROLINA GONZÁLEZ ✓
NAVA Y OTROS
SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN NÚMERO: ✓
479/2018
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Escrito de la parte solicitante al rubro mencionada, registrado con el folio 032267.	Original

La constancia anterior fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tres de agosto del año en curso. Conste.

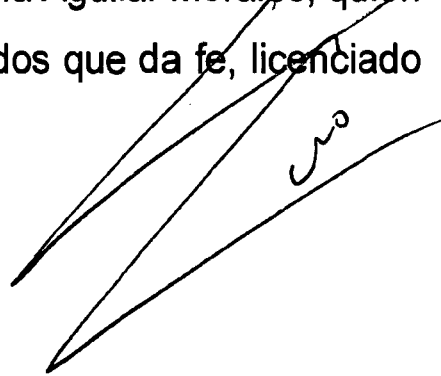
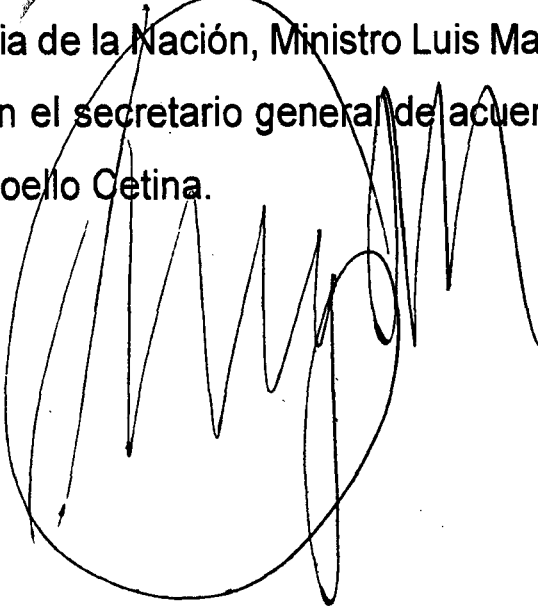
Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil dieciocho.

Agréguese para que surta sus efectos legales consiguientes el documento de cuenta. Ahora bien, toda vez que la parte solicitante al rubro mencionada, formula diversas manifestaciones en relación con la solicitud que dio origen al presente asunto, con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dígaselle que se esté a lo acordado en el proveído de Presidencia de diez de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó, por notoriamente


✓ improcedente, la petición del ejercicio de la facultad de atracción que se formuló, para conocer y resolver los juicios de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018, todos del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica.

✓ Notifíquese por lista.

✓ Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.



✓ RCC/DDVIGORA/MEEB

✓ En 21 AGO 2018 por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior al(os) interesado(s) de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe 

BOLETA DE RADICACIÓN Y TURNO**RECURSO DE RECLAMACIÓN****1734/2018****30/ago./18****1) TIPO DE TURNO.**DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL ASUNTO, ÉSTE DEBE TURNARSE EN¹:**PRIMERA SALA** ☒**SEGUNDA SALA** ☐

LOS RECURSO DE RECLAMACIÓN, SE TURNARÁN ATENDIENDO A LA MATERIA EN QUE INCIDE EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO DE ORIGEN. TOMANDO EN CUENTA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS QUE PARA EFECTO DEL TURNO ENTRE LAS SALAS DE ESTE ALTO TRIBUNAL DERIVA DE LO PREVISTO EN EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL 5/2013, DEL PLENO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL TRECE Y LOS ARTÍCULOS 37 Y 86 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:

1.1 TURNO CRONOLÓGICO (**X**)

1.2 TURNO RELACIONADO _____

1.3 TURNO POR DETERMINACIÓN DEL PLENO ()

1.4 EL ASUNTO PERTENECE A ALGUNA COMISIÓN ()

Tema de la Comisión: _____

OBSERVACIONES: _____

SECRETARIO AUXILIAR	SUPERVISOR
LIC. GERARDO OMAR RAMÍREZ ARANDA	LIC. DAVID DELGADILLO

2) TURNO.

TOMANDO EN CUENTA LO ANTES PRECISADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDICADOS, EL TURNO QUE CORRESPONDE AL PRESENTE ASUNTO, CONSIDERANDO EL QUE SE ASIGNÓ A LOS DOS ANTERIORES DEL MISMO TIPO DE ASUNTO, ES EL SIGUIENTE:

ANTERIORES	INSTANCIA	MINISTRO
1732/2018	1a. Sala	Piña
1733/2018	1a. Sala	Salazar
TURNO QUE SE OTORGA	INSTANCIA	MINISTRO
1734/2018	1a. Sala	Piña

LIC. MONICA FERNANDA ESTEVANÉ NÚÑEZ

¹ MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN SELECCIONADA.

San Francisco



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-54

RECURRENTES: CAROLINA GONZÁLEZ
NAVA Y OTROS
RECURSO DE RECLAMACIÓN NÚMERO:
1734/2018
EN LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN NÚMERO:
479/2018
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

En la Ciudad de México, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Escrito de expresión de agravios de Carolina González Nava, quien se ostenta como representante común de la parte quejosa, registrado con el folio 035333.	Original
2. Acuerdos de Presidencia de diez de julio y siete de agosto ambos de dos mil dieciocho, dictados en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 479/2018 y constancias de sus notificaciones.	Copia simple

La constancia descrita en el punto 1 se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de agosto del presente año. Conste.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho.

Visto lo señalado en la certificación de esta fecha, dictada en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción número 479/2018, con el original del escrito de expresión de agravios, copias simples de los acuerdos impugnados y de las constancias de su notificaciones, fórmense y regístrense con el

número 1734/2018, los expedientes impreso y electrónico correspondientes al **recurso de reclamación** que se interpone.

Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

Ahora bien, como en el caso Carolina González Nava, quien se ostenta como representante común de la parte quejosa, interpone recurso de reclamación en contra de los acuerdos de Presidencia de diez de julio y siete de agosto, ambos de dos mil dieciocho, **mediante los cuales por una parte, se desechó por notoriamente improcedente la petición del ejercicio de la facultad de atracción**, para conocer y resolver los juicios de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018, todos del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y por otro lado, se le indicó que se estuviera a lo acordado en el proveído de diez de julio antes mencionado; **y como el presente asunto se encuentra debidamente integrado, tórnese a la Primera Sala de este Alto Tribunal**, atendiendo a la materia en que incide el acto reclamado en el juicio de amparo de origen, tomando en cuenta la distribución de materias que para efecto del turno entre las Salas de este Alto Tribunal deriva de lo previsto en **el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, del Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece**, y el artículo 37 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Consecuentemente, con fundamento en los artículos 88 y 104 de la Ley de Amparo; y, 10, fracción V, y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

I. Con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie puedan existir, se tiene por interpuesto el recurso de reclamación que hace valer Carolina González Nava, quien se ostenta como representante común de la parte quejosa.

II. Pase el presente asunto, para su estudio, al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala, y radíquese en ésta, en virtud de que el presente expediente incide en la materia de su especialidad, y envíense los autos a dicha Sala, a fin de que su Presidenta dicte el acuerdo de radicación respectivo; en la inteligencia de que el expediente electrónico será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

IV. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los

recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

V. Notifíquese por lista. Asimismo, al Tribunal Colegiado del conocimiento, por medio del MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación, y en el expediente principal, glósese testimonio del presente proveído.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.

2018 SEP 24 PM 17:32

SECRETARÍA DE ACUERDOS

RCC/DDV/GOR/MEEB

En 19/SEP/2018 por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior al(os) interesado(s) de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

REFERENCIA
035333

19
FORMA A-54

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018
EN LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018

En veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el proveído de cinco de septiembre del año en curso, dictado por el Presidente de este Alto Tribunal. Conste. *el*

Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.

Visto el acuerdo del Presidente de este Alto Tribunal con el que se da cuenta, ténganse por recibidos los autos del recurso de reclamación citado al rubro. *○*

Con fundamento en el Punto Tercero del Acuerdo 5/2013, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como en los artículos 81, primer párrafo, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal, 24, fracción XI y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SE AVOCA al conocimiento del presente asunto; por ende, hágase el registro de ingreso del mismo como corresponda.

Envíense los autos a la Ponencia del **MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO**, a fin de que elabore el proyecto de resolución que corresponda y con él dé cuenta a esta Sala.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.

OACA.

El **28 SEP 2018** se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

REXTER

WILLIS

20

RECURRENTES: CAROLINA GONZÁLEZ NAVA Y OTROS.

MINISTRO: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA:
LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH.



DEPT. OF JUSTICE
RECORDS SECTION
SECRETARY OF
PRIME



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-54

SOLICITANTES: CAROLINA GONZÁLEZ
NAVA Y OTROS
SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN NÚMERO:
479/2018
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido	Presentado en:
1.- Escrito de la parte solicitante al rubro mencionada, registrado con el folio 032267	Original

La constancia anterior fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tres de agosto del año en curso. Conste.

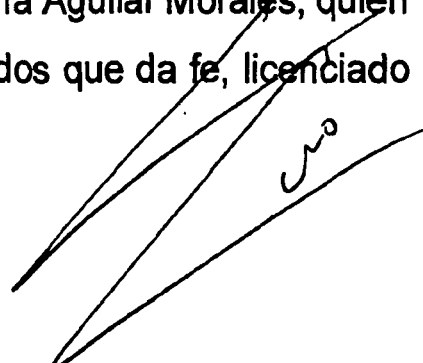
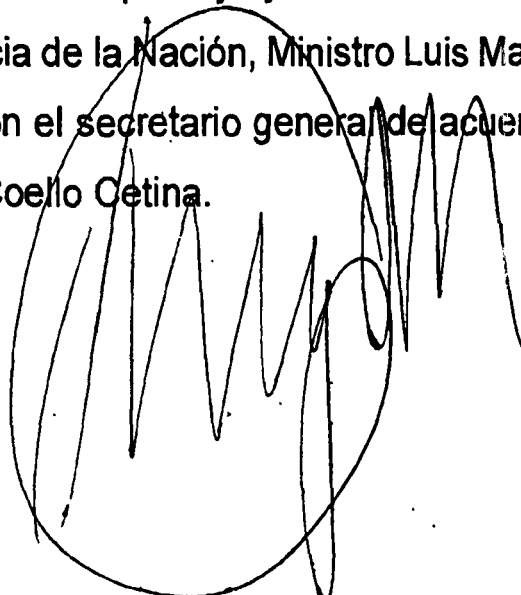
Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil dieciocho.

Agréguese para que surta sus efectos legales consiguientes el documento de cuenta. Ahora bien, toda vez que la parte solicitante al rubro mencionada, formula diversas manifestaciones en relación con la solicitud que dio origen al presente asunto, con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dígasale que se esté a lo acordado en el proveído de Presidencia de diez de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó, por notoriamente

improcedente, la petición del ejercicio de la facultad de atracción que se formuló, para conocer y resolver los juicios de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018, todos del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica.

Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.



RCC/MDV/GOF/AMEEB

En 21 AGO 2018 por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior al(os) interesado(s) de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SOLICITANTES: CAROLINA GONZÁLEZ
NAVA Y OTROS
SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN NÚMERO:
479/2018
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

En la Ciudad de México, a diez de julio de dos mil dieciocho, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Escrito de los solicitantes al rubro mencionados, registrado con el folio 029609.	Original
2. Diversas constancias que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto.	Un legajo en copias simples

Las constancias antes descritas fueron recibidas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el cinco de julio del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a diez de julio de dos mil dieciocho.

En términos de la normativa aplicable, con el escrito original de cuenta fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción respectivo. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

Ahora bien, como en el caso los promoventes al rubro mencionados solicitan a este Alto Tribunal ejerza su facultad de atracción para conocer y resolver los juicios de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018, todos del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; **procede desechar, por notoriamente improcedente, dicha petición, toda vez que no se surte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte final, y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se refieren expresamente a amparos directos y amparos en revisión.** Sirve de apoyo, por analogía, además, la tesis aislada de la Segunda Sala de este Alto Tribunal que se identifica con el número 2a. CLXV/2008, cuyo rubro es el siguiente: ***"FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA."***; consultable en la página setecientas ochenta y cuatro, Tomo XXIX, correspondiente al mes de enero de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.



En consecuencia, y con apoyo, además, en los artículos 10, fracción XII, y 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

I. **Se desecha, por notoriamente improcedente, la petición del ejercicio de la facultad de atracción que formulan los solicitantes al rubro mencionados.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

II. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

III. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

IV. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica.

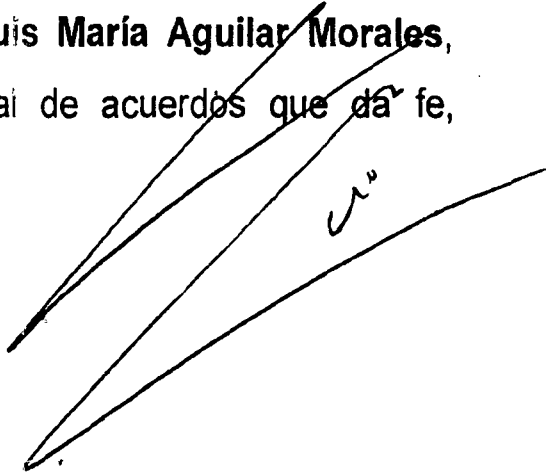
V. Notifíquese por lista y haciéndolo en forma personal a la parte solicitante en el domicilio señalado en el escrito de mérito, entregándole copia autorizada del presente proveído, en la inteligencia que deberá procederse, según sea el caso, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, por lo que si se dejó citatorio o se fijó aviso y el interesado no acude ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a notificarse dentro del plazo de dos días hábiles siguientes, se notificará por lista conforme a las reglas establecidas en el artículo 29 del mencionado ordenamiento. Ante la imposibilidad de realizar la notificación ordenada en el domicilio señalado, el Actuario Judicial respectivo deberá dar cuenta a la Presidencia de este Alto Tribunal con la respectiva razón circunstanciada, para que se acuerde lo que corresponda. Cumplido lo anterior, previa certificación que se elabore en la que se haga constar que este



SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

acuerdo causó estado, archívese el expediente como asunto concluido.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **Ministro Luis María Aguilar Morales**, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Goello Cetina.



RCC/DDV/GORA

En 09 AGO 2018

por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior al(os) interesado(s) de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

21

3.02

Asunto: suspensión de Estado de
Derecho y suspensión de derechos
fundamentales inderogables
Referencia: Recurso de reclamación
1734/2018, derivado de la solicitud de
ejercicio de la facultad de atracción
número 479/2018

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presente.

Carolina González Nava, Martha Patricia González Nava, Julio César González Nava e Israel González Nava, por propio derecho; designando como representante común a Carolina González Nava; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Tabaqueros número 43, Colonia San Nicolás Totolapan, Delegación La Magdalena Contreras en la Ciudad de México, C.P. 10900; autorizando a Martha Patricia y/o a Julio César, ambos de apellidos González Nava, para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal y/o revisar el expediente; ante Usted, con el debido respeto que se merece comparezco y expongo:

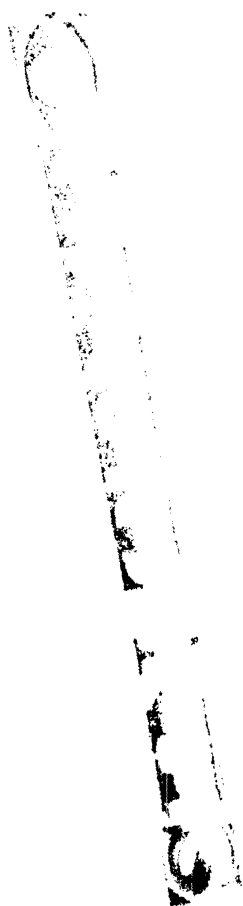
La proyección de la dignidad de toda persona, se ve reflejado en el reconocimiento al proyecto de vida sin discriminación o segregación alguna. Tomando en cuenta que el principio de no discriminación constituye un elemento fundamental inherente a los derechos humanos, es un principio de las normas imperativas de Derecho Internacional (*ius cogens*)¹.

Los derechos humanos tienen como base el derecho a la existencia, al reconocimiento integral de los derechos inherentes a toda persona, que requiere para su desarrollo condiciones de vida digna: certeza y seguridad jurídica, integridad física, psicológica y moral.

Por consiguiente, a toda persona le es inherente todos los derechos y libertades que corresponden al ser humano sin que sea admitida distinción o segregación alguna por razón de género, social, económico, o cualquier otra condición. La vulneración al principio de no discriminación constituye un caso del *ius cogens*, pues es un elemento constitutivo del concepto de los Derechos Humanos.

El respeto de los Derechos Humanos es un caso del *ius cogens*, de consiguiente, la violación sistemática a derechos fundamentales inderogables protegidos por Convenciones, Convenios, tratados en materia de Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, hace del presente caso una violación sistemática a normas imperativas de Derecho Internacional General (*ius cogens*).

Al violentar gravemente de forma sistemática los derechos fundamentales inderogables en el caso concreto se actualiza la negación del derecho a la existencia de una familia, la separación de derechos, segregación por discriminación basada en motivos económicos, sociales, de género, privando a la parte quejosa de la



garantía de un debido proceso en juicio de amparo, por consiguiente, la parte quejosa solicita atentamente, a Usted **Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, haga suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción del presente caso.

Las graves violaciones sistemáticas a derechos fundamentales inderogables que acontecen en el presente caso, tienen como objetivo la segregación de una familia a un Estado de Derecho, que tiene como principio de Supremacía Constitucional la Constitución y Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos², normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*).

La segregación en sí y por sí mismo, representa el objetivo de anular el derecho a la vida, la amenaza constante de volver a ser torturado, o detenido arbitrariamente sin certeza y seguridad jurídica, sin saber que delito se ha cometido y por consiguiente ser juzgado ante un Tribunal de delitos oficiosos (carpeta judicial 011/0384/2017, la Representación Social no hizo del conocimiento a la imputada por que se le estaba investigando³), juicio de amparo indirecto 627/2017, que derivó en recurso de revisión 157/2017, asimismo, en recurso de reclamación.

A la fecha, la Representación Social en conjunto con la juez a quo, sólo afirman que nos están investigando, acusándonos de delitos oficiosos, sin saber la parte quejosa cómo cometimos esos delitos oficiosos.

El respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin discriminación alguna, en el presente caso está muy lejos de ser reconocido.

La violación al principio de igualdad jurídica, las autoridades responsables lo han combatido con la violación al principio de no discriminación, que a su vez vulnera el principio de igualdad de derechos.

La violación de normas imperativas de Derecho Internacional, normas que, el Estado mexicano ha firmado y ratificado que le genera obligaciones erga omnes, pues las autoridades responsables en el presente caso pretenden, que aplicando la política de discriminación, despojándonos de derechos protegidos por normas del *ius cogens*, la parte quejosa sea segregada por todas las Instituciones del Estado mexicano, para seguir aplicando impunemente la técnica semejante a la tortura de la "gota de agua" con el objetivo de exterminio, y esto no produzca necesariamente consecuencias jurídicas, pues el Estado mexicano tiene deberes ineludibles e

² del artículo 133 Constitucional, se puede deducir los aspectos que caracterizan al principio de supremacía constitucional:

- a) La Constitución Federal es la Ley suprema y fundamental; y
- b) Los ordenamientos jurídicos derivados de ella, sean leyes federales, tratados internacionales o leyes locales, **inclusive los actos de autoridad**,
- c) deben estar acordes a lo preceptuado por la Constitución, para que resulten válidos.

³ Resolución de la Audiencia inicial del veintiuno de junio del dos mil dieciocho, última hoja, párrafo tercero, *in fine*

SIN TEXTIO

irrenunciables como sujeto de Derecho Internacional, que forma parte de la Comunidad Internacional.⁴

La persistente denegación del derecho a no ser objeto de tortura, de vejámenes, castigos prohibidos, penas infamantes, fabricación de delitos, discriminación, amenazas de pérdida de la libertad, entre otros, hacen del caso una vulneración sistemática a normas de Derecho Internacional, una radical negación a normas del *ius cogens*.

En este orden, no puede admitirse dentro de una lógica formal y jurídica el por qué la juez a quo en juicio 627/2017, legaliza⁵ la tortura, castigos, fabricación de delitos en una investigación penal, instaurada *ad infinitum*. Métodos que ni siquiera en conflictos armados están permitidos.

Lo que hace del presente caso una segregación que pretende el exterminio de la parte quejosa, ello es así, el caso concreto presenta métodos semejantes a la técnica de tortura de la gota de "agua" en violación a los artículos 1.1.2, 2.1.a).b).d)., 3, 5, párrafo primero, inciso a), b), e): iii), 6) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial⁶,

⁴ Estado Miembro de las Naciones Unidas.

⁵ Sobreseimiento en el juicio de amparo 627/2017.

6 Artículo 1

1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 2

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;

Artículo 3

Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.

Artículo 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;

b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:

iii) El derecho a la vivienda;

Artículo 6

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el



en consecuencia lógica en violación al artículo primero, 2 y 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales⁷

En el presente caso se ha vulnerado sistemáticamente y reiteradamente los principios y normas del *ius cogens*, por lo que no es legítimo que a la parte quejosa se le considere inferior, que en violación al proceso se actualice engaño.

Hechos inadmisibles, pues la protección de un Estado de Derecho, esta en proteger el principio de Supremacía Constitucional, que va unido al principio de no discriminación, considerando, que la segregación a la que se le somete a la parte quejosa hace del caso una violación reiterada a normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*), afectando la legitimidad como Estado Democrático.

En el presente caso la segregación en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que por consiguiente desconoce las condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos, en violación al artículo 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales.

En este orden de ideas la parte quejosa dirigió escrito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registrado con número de folio 037123 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, registrándose el expediente varios número: 950/2018, en el escrito, se denuncia la segregación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el caso concreto, alcanzando su plena realización en violaciones procesales, en que el engaño y discriminación es manifiesto. "El proceso ha sido "a modo" y la sentencia sirve a determinado designio, mejor que al objetivo de justicia", no se pretende hacer justicia sólo simularla, los juicios están viciados y, por consiguiente, a la fecha no existe un auténtico proceso, por lo que la sentencia que éste produce no es genuina, el escrito signado por Carolina González Nava, fue el de hacer ver que a la parte quejosa se le considera inferior, siendo esto objetivo, pues se puede probar de forma lógica y jurídica, que a las Instituciones que en este transcurso de cinco años, con diez meses, los suscritos hemos acudido a todas las Instancias en el Estado mexicano, un ejemplo de ellos es el Consejo de la Judicatura Federal, Instituto Federal de Defensoría Pública y que, la Licenciada Yasmín Rosales Muñoz y otros defensores públicos, propiciaron que las autoridades responsables hicieran del caso una segregación manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el caso concreto, después de haber elaborado un amparo a la parte quejosa, que

derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación.

7 Artículo primero

1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.
2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que constituye la forma extrema del racismo.

Artículo 2

1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.
3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento.

Artículo 6

1. El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por todos los individuos y todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.

12-1-1944

distó por mucho de ser un escrito efectivo, resultó, con condicionamientos dependientes hacia el Estado, en violación a los derechos humanos, deponiendo la justicia a la merced de la ficción.

Al acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública, la Licenciada Yasmín Rosales Muños y otros asesores jurídicos pertenecientes a ésta defensoría, en segregación manifiesta (afirmaban lo que ahora la juez a quo⁸ resuelve en juicio constitucional contrario al artículo 1 y 217 de la Ley de Amparo), que a la parte quejosa no se le ha vulnerado ningún derecho, a pesar de la tortura, que ha derivado en graves daños físicos, psicológicos. Con absoluta malicia, nos vejaba (juicio de amparo 627/2017), se burlaban que no podíamos hacer nada, que sólo se veía que había afectado a nuestra salud⁹, haciéndonos esperar cerca de cuatro horas, para después de ese tiempo, mencionar que no teníamos nada que hacer ahí, que ellos no podían hacer nada por nuestro caso, que acudiéramos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ahora Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.

Por todo lo anterior y el gravísimo agravio que causa total estado de indefensión el proveído del diez de septiembre de dos mil dieciocho en el cual, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luz María Aguilar Morales, resuelve en relación a las graves violaciones procesales que acontecen en juicio de amparo en el presente caso, que se remite el escrito del seis de septiembre de dos mil dieciocho signado por la quejosa Carolina González Nava al Instituto de Defensoría Pública.

Lo que fomenta la discriminación racial que han hecho del presente caso las autoridades responsables, sin que a la fecha se condene la segregación de derechos fundamentales inderogables y la destrucción del Estado de Derecho que han hecho del caso una vulneración a las normas imperativas de Derecho Internacional General (*ius cogens*).

En este orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis P.LXXXV/96, Tomo III, junio de 1996, pág. 459, registro 200110¹⁰,

⁸ Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, cabe traer a colación que el licenciado Héctor Molinero Orduña, Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, preguntó en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, si existía abogado, al responder la parte quejosa..., mencionó ***aun así, no se les ha negado el servicio***, prosiguiendo en actitud discriminatoria, que no entendíamos, mencionando, qué como nos explicaba, aquí es válido mencionar, que es por nuestra apariencia que consideran que no tenemos derechos que somos ignorantes, con absoluta malicia.

⁹ **Llegando a mencionar la suscrita Carolina González Nava, que seguiríamos solicitando acceso a la justicia, mencionando que existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que respondían burlones los asesores jurídicos pertenecientes al Instituto Federal de Defensoría Pública: "creo que apoyan con recursos, para transportarse", que al parecer se encontraba en Costa Rica (refiriéndose a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).**

¹⁰ **"GARANTÍAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.**

Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

SECRET

clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho.**

La definición del concepto de violaciones graves a derechos humanos se perfecciona con el **distanciamiento constitucional** que ha sido una constante en el presente caso.

En referencia a la tortura en este distanciamiento constitucional, la parte quejosa plantea, que el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ("Protocolo de Estambul"), menciona que no se presenta como un protocolo fijo, pues el informe médico ofertado por la parte quejosa es idóneo para demostrar que el Estado mexicano ha destruido deliberadamente no sólo el bienestar físico, psíquico y moral de la parte quejosa sino también, la dignidad y la voluntad, pues la víctima tuvo que acudir por atención especializada al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, derivado de los ataques sistemáticos altamente planificados a sangre fría, elaborados por las autoridades responsables, métodos de tortura semejantes a la técnica de la "gota de agua".¹¹

Ello es así, la parte quejosa hace planteamientos lógicos y jurídicos que versan sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ("Protocolo de Estambul") en relación a la idoneidad de la prueba especializada (informe médico) adecuada para probar la testimonial de tortura, vejaciones, humillaciones, de castigos que han derivado en daños físicos, psicológicos y morales, probanza que hace patente la segregación que acontecen en el presente caso en el que se busca que la vivienda que habitan los suscritos se derrumbe, llevando a cabo todos los actos para que este hecho suceda (juicio de amparo 651/2017).

En este orden de ideas, la segregación racial, dentro de una lógica formal, clarifica el presente caso, el por qué las autoridades responsables en abuso del derecho, con la intención de dañar a la parte quejosa, en violación a la función social del derecho, ha planificado graves violaciones sistemáticas, los motivos inaceptables que implica un abuso de las Instituciones como medio para destruir el proyecto de vida, con el objetivo de exterminio, la parte quejosa ha sido torturada, humillada, con la amenaza constante de pérdida de la libertad o de la vida, en violencia institucional y de la comunidad, precedente que solicitamos atentamente, sea analizado por este Alto Tribunal, con el objetivo de que no se vuelva a repetir estas graves violaciones sistemáticas a un caso similar, por un largo periodo de cinco años con diez meses que se advierte *ad infinitum*, a alguna persona por considerar que se encuentra en desigualdad estructural o discriminación estructural frente a las autoridades responsables, figuras políticas, conformando

Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis."

¹¹ la excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables son manifiestos, en el transcurso de cinco años con diez meses, las autoridades responsables en el presente caso actualizan día con día, atentados contra la vida, contra la integridad corporal y psicológica. Hechos que tienen relación con el juicio de amparo 627/2017, 651/2017, 260/2018 y 909/2018.

SIN

un grupo de poder que en conjunto con los habitantes del Andador Tabaqueros, con total impunidad han destruido el Estado de Derecho¹².

Considerando que a la fecha la parte quejosa ha sido segregada de derechos y garantías que son inherentes al ser humano. El derecho al pleno y efectivo ejercicio a las garantías judiciales han sido suspendidas.

Los innumerables juicios de amparo que en el presente caso ha resultado fallido, resoluciones contrarias a la intención de proteger, a un recurso sencillo, rápido y efectivo, derechos implícitos en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los resolutivos que engrosan los juicios de amparo indirecto son contradictorias a un Estado de Derecho, mas, nada se puede hacer, cuando la Juez a quo, simula juicio de amparo en el caso concreto, con sendas violaciones procesales, dilación en el proceso, es el pan de cada día, violaciones procesales que conforman un "engaño", es en sí mismo violencia en instancia constitucional, formalizando segregación de derechos fundamentales inderogables.

Las disposiciones que se han adoptado en juicio de amparo son ilegales, el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone límites al poder de los Estados Partes para suspender derechos y libertades, estableciendo que hay algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna circunstancia incluyendo en este grupo las "garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos".

La suspensión del Estado de Derecho a autorizado a las autoridades jurisdiccionales y responsables a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, en el que se han investido de poderes absolutos, se han extralimitado *ad infinitum* de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada.

¹² Teniendo en cuenta la situación la segregación en la que se enmarcan los hechos ocurridos por un periodo de cinco años con diez meses: graves violaciones sistemáticas, que conforma una historia de torturas, vejaciones humillaciones, fabricación de delitos, erigiéndose en un Tribunal que ha impuesto penas inusitadas, castigos. Hechos ocurridos en un lugar determinado. El Estado obligado a garantizar, las condiciones jurídicas para la no vulneración del Derecho imperativo, lo permite, destruyendo el Estado de Derecho, contraviniendo todo ordenamiento en materia de los Derechos Humanos, tratados, convenios, suspendiendo derechos fundamentales inderogables, sin garantías de debido proceso... en el caso concreto. Es válido mencionar el principio de la carga de la prueba es dependiente del acceso a la justicia en condiciones de igualdad, lo que obliga a los órganos jurisdiccionales del país a que está sea impartida con perspectiva de género, a observar la desigualdad estructural del actor frente al Estado, que al destruir el derecho, ha impuesto segregación racial, pues no importa las pruebas aportadas, la invocación de Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, es como si estos no existieran, pues la parte quejosa ha sido despojada de derechos fundamentales inderogables, sin garantías de debido proceso...

En el caso de la mujer al instar acceso a la justicia, obliga al juzgador a impartir justicia observando los intereses que están en juego, aplicar la herramienta de perspectiva de género, **pues las argumentaciones de la parte actora son ciertas, las probanzas públicas lo demuestran**, juicio de amparo 627/2017,651/2017,260/2018, el informe médico especializado, informes justificados...



La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en opinión consultiva OC-8/87, que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Que "los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia."¹³

La corte Interamericana de Derechos Humanos en ésta opinión consultiva, menciona que el artículo 25.1, es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, que debe ser un procedimiento judicial sencillo y breve que tiene como objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, máxime, lo son los que estén señalados de manera expresa en el artículo 27.2 como no susceptibles de suspensión¹⁴

Sigue diciendo que el recurso de amparo constituye el instrumento más idóneo no sólo para corregir con prontitud los abusos de la autoridad, siendo un medio eficaz para prevenir la tortura y otros apremios físicos y psicológicos. Es importante destacar que, en el presente caso, por un periodo de un año, con nueve meses, se han suspendido los medios y recursos legales efectivos para hacer valer sus derechos de la parte quejosa.

Las medidas adoptadas por el Estado en el presente caso es una desviación a la legalidad en abuso de poder desmedido, luego, la figura procesal del amparo es una garantía judicial indispensable para la protección de los derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado la violación al artículo 8.1 de la CADH, en los casos en los que no se ha respetado el debido proceso.

Los hechos notorios en el que no se ha respetado en debido proceso, lo conforman los innumerables juicios de amparo indirecto, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 651/2017, 627/2017¹⁵, 74/2018, 260/2018¹⁶, la Juez a quo y los recursos que han derivado de éstos, han sido substanciados en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que se han negado a tener las pruebas por vertidas, de amenazas, hostigamientos, por solicitar acceso a la justicia, no obstante, las probanzas de las penas de castigos prohibidos, en connivencia con las autoridades responsables: defensor público y particular

¹³ Párrafo 25, página 9.

¹⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 32, página 10.

¹⁵ Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

¹⁶ Sólo basta ver la resolución de la queja 61/2018, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dicta en violación a derechos inderogables protegidos por normas del *ius cogens*, engaño, cambiando el acto reclamado, negándose llanamente a tener probanzas, todo con aquiescencia de la autoridad responsable, Secretario de Gobernación, hechos notorios de una formalización de suspensión del Estado de Derecho, la nada jurídica. Dictando "Ahora, este Tribunal Colegiado no pasa inadvertido que el acto reclamado en el juicio de amparo se hace consistir en la violación al derecho de petición atribuido al Secretario de Gobernación, en su carácter de autoridad administrativa, por lo cual el juez A quo al momento de resolver deberá determinar lo que en derecho corresponda, respecto de la competencia que le asiste para conocer del asunto.", página 18 y 19 de la sentencia (versión pública)

SIN-TEN-LO

torturas¹⁷, coacción, penas infamantes, falsas acusaciones, procedimientos ilegales del Ministerio Público, de la fuerza pública, del Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (ahora el Ejecutivo lo permite, juicio de amparo 909/2018¹⁸) humillaciones públicas, vejaciones, etcétera) que las autoridades responsables han ejecutado con un alto grado de planificación, es notorio que el proyecto de vida ha sido destruido, sin certeza y seguridad jurídica ("habeas corpus"¹⁹)²⁰ atendidos a la nada jurídica²⁰.

Un ejemplo que clarifica la situación en el que permanece el presente caso en juicio de amparo es el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

"...que cualquier que sean las razones que hayan podido existir para interrumpir el proceso constitucional democrático, es inaceptable e inadmisibles la supresión y/o violación de ciertos derechos humanos que constituyen siempre el mínimo necesariamente vigente e inderogable y cuya existencia y respeto necesario en todo momento y en toda situación, sin que sea posible justificar su derogación, desconocimiento o violación. Este criterio de la inderogabilidad absoluta de ciertos derechos- en especial del derecho a la vida, del derecho a no ser sometido a la tortura o a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes y del derecho a no ser sometido a la esclavitud o a la servidumbre reconocido en el artículo 27 párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Bolivia en Parte y enunciado también en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la consecuencia de un principio general que se encuentra en el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos..."²¹

Asimismo, menciona:

^{17 24} Cfr. Artículo 1: "[l]os Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención". Artículo 6: "[d]e conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción". Artículo 8: "[l]os Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado". Caso *Gutiérrez Soler vs. Colombia*, nota 24, sentencia de doce de septiembre de dos mil cinco.

¹⁸ Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa.

¹⁹ En el sentido que el "habeas corpus" tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos

²⁰ Juicio de amparo indirecto 627/2017 sustanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito; asimismo el juicio de amparo 349/2017 sustanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del mismo circuito.

²¹ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

10

“Estos derechos inderogables –y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes –, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran”²²

Por lo anteriormente descrito, ~~la parte quejosa se permite anexar las~~ siguientes documentales, en copia simple:

1. Carnet del Consejo de la Judicatura Federal Instituto Federal de Defensoría Pública, con número de expediente interno 057/2015
2. Carnet de citas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (paciente Carolina González Nava)
3. Escrito de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, que derivo en el expediente varió número 950/2018.
4. Sentencia del treinta de abril de dos mil dieciocho, juicio de amparo 627/2017.
- 4.1 escrito del veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete, dirigido al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México autoridad responsable en el juicio de amparo 627/2017.
- 4.2 Recurso de reclamación del primero de octubre de dos mil dieciocho, derivado del juicio de amparo 627/2017
5. Solicitud de ampliación de demanda del veinticuatro de septiembre del dos mil dieciocho en el juicio de amparo 909/2018
6. Denuncia de repetición del acto reclamado del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, derivado del juicio de amparo 651/2017
7. Sentencia del juicio de nulidad V-76315/2015, substanciado en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, juicio que derivó en juicio de amparo 627/2017.
La parte actora de éste juicio de nulidad es el tercer interesado en el juicio de amparo 651/2017, hechos que también tienen que ver con el Instituto Federal de Defensoría Pública, cabe hacer mención que los suscritos no tuvimos conocimiento de este juicio de nulidad V-76315/2015.
8. Proveído de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, signado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luz María Aguilar Morales.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, A Usted Honorable **Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala** atentamente solicitamos:

Único. - ~~la parte quejosa solicita atentamente a Usted~~ **Ministro, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, haga suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción del presente caso.


²² Doc. E/CN.4/1981/1500, nota 76.

SIN TEXICO


Suspensión de Estado de Derecho y
suspensión de derechos
fundamentales inderogable
Referencia. Solicitud de
ejercicio de la facultad de
atracción número 479/2018

PROTESTO LO NECESARIO


Carolina González Nava


Marta Patricia González Nava


Julio César González Nava


Israel González Nava

Ciudad de México, a 02 de octubre de 2018

040997

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2018 OCT 2 PM 3 02

SECRETARIA DE
CERTIFICACION JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibido de en envase en (11) folios
con.

- Diversos anexos en Copias simples
sin foler

C. G. P. L.

2018 OCT 3 PM 12 44

SECRETARIA DE CERTIFICACION JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA



**INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE DEL SERVICIO
DATOS DEL ASESOR JURÍDICO**

(1) NOMBRE: LIC. YASMIN ROSALES MUÑOZ

(2) DIRECCIÓN: BUCARELI, NÚMEROS 22 Y 24 COL.
CENTRO DE CUAUHTÉMOC, C.P. 06040

(3) TELÉFONO: 51 30 0000 EXT. 1138

DATOS DEL ASUNTO

EL ORGANO JURISDICCIONAL O AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO
FEDERAL.

ENTIDAD FEDERATIVA DISTRITO FEDERAL.

(6) N.º EXP. INTERNO: 057/2015 (7) N.º EXP. DEL ASUNTO:

(8) MATERIA ADMINISTRATIVA

49) NOMBRE DEL ASESORADO: CAROLINA GONZALEZ NAVAS

[illegible]

AUDIENCIAS CON SU ASESOR JURÍDICO

[illegible]

CONFIDENTIAL

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA
Y NEUROCIRUGIA

MANUEL VELASCO SUAREZ
LIC. SANITARIA 04 AM 0913012

INSURGENTES SUR No. 3877, COL. LA FAMA C.P. 14269 MEXICO, D.F.
TEL. 5606-38-22 INTERNET: <http://www.innn.edu.mx>

230434

No. de Registro

Clave

27-02-137
[Signature]

CARNET



INNN
MANUEL VELASCO
SUAREZ

DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL

Nombre: GONZALEZ NAVA CAROLINA
Fecha de Nacimiento: 29/11/1968
Domicilio: CALLE TABAQUEROS NO. 43 LT.13, SAN
NICOLÁS TOTOLAPAN PUEBLO, LA
Colonia: MAGDALENA CONTRERAS
Teléfono: 70370139

**ACUDIR SIEMPRE A SU CITA CON UN FAMILIAR
FAVOR DE NO TRAER NIÑOS**



Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

P r e s e n t e.

Carolina González Nava, por propio derecho; en mi calidad de representante común de la parte quejosa; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Tabaqueros número 43, Colonia San Nicolás Totolapan, Delegación la Magdalena Contreras en la Ciudad de México, C.P. 10900; autorizando a Martha Patricia y/o a Julio César, ambos de apellidos González Nava, para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal y/o revisar el expediente; ante este Alto Tribunal del país, con el debido respeto que se merece comparezco y expongo:

La parte quejosa ha sido expropiada de derechos y garantías que son inherentes al ser humano. El derecho al pleno y efectivo ejercicio a las garantías judiciales han sido suspendidas.

Derechos inderogables que el Estado Mexicano ha reconocido de conformidad con el artículo 1, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicitando al Alto Tribunal, el reconocimiento al derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia, considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derechos a igual protección de la ley, sin exclusión alguna.

Los innumerables juicios de amparo que en el presente caso ha resultado fallido, resoluciones contrarias a la intención de proteger, a un recurso sencillo, rápido y efectivo, derechos implícitos en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los resolutivos que engrosan los juicios de amparo indirecto son contradictorias al comparativo de lo que ha resuelto el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el juicio 627/2017 (quejas 115/2017, 168/2017 y Recurso de Revisión 157/2018), mas, nada se puede hacer, cuando la Juez a quo, simula juicio de amparo en el caso concreto, con sendas violaciones procesales, dilación en el proceso, es el pan de cada día, violaciones procesales que conforman un "engaño", es en sí mismo violencia en instancia constitucional, formalizando suspensión de derechos fundamentales inderogables.

Conforme al artículo 10, fracción II, inciso c; fracción IV y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; artículos 27, párrafo primero y segundo (27.1.2) en relación al numeral 5, 8.1, 24 y 25, todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reforzado con el artículo 5 y 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la parte quejosa viene a decir:

Las disposiciones que se han adoptado en juicio de amparo son ilegales, el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone límites al poder de los Estados Partes para suspender derechos y libertades, estableciendo que hay algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna circunstancia incluyendo en este grupo las "garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos".

La suspensión del Estado de Derecho a autorizado a las autoridades jurisdiccionales y responsables a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, en el que se han investido de poderes absolutos, se han extralimitado más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en opinión consultiva OC-8/87, que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer

007123

2018 SEP 6 PM 3 00

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFIDENTIAL

la titularidad o el ejercicio de un derecho. Que "los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia."¹

La corte Interamericana de Derechos Humanos en esta opinión consultiva, menciona que el artículo 25.1, es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, que debe ser un procedimiento judicial sencillo y breve que tiene como objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, máxime, lo son los que estén señalados de manera expresa en el artículo 27.2 como no susceptibles de suspensión²

Sigue diciendo que el recurso de amparo constituye el instrumento más idóneo no sólo para corregir con prontitud los abusos de la autoridad, siendo un medio eficaz para prevenir la tortura y otros apremios físicos y psicológicos. Es importante destacar que en el presente caso, por un periodo de un año, con nueve meses, se han suspendido los medios y recursos legales efectivos para hacer valer sus derechos de la parte quejosa.

Las medidas adoptadas por el Estado en el presente caso es una desviación a la legalidad en abuso de poder desmedido, luego, la figura procesal del amparo es una garantía judicial indispensable para la protección de los derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En estos juicios en marcha en sí mismos y por sí mismos, demuestran que las resoluciones de la Jueza a quo han sido adoptadas con el propósito de sustraer a las autoridades responsables de su responsabilidad penal por delitos que pueden constituir de lesa humanidad, las demoras injustificadas en estos juicios son compatibles con la nula intención de hacer que se respete la Constitución, en una clara desviación a la legalidad, en el que no se ha acatado la jurisprudencia de carácter obligatorio; así mismo, los juicios de amparo no han sido ni son sustanciados de manera imparcial, es notorio que las decisiones conllevan la nula intención de que el estado de excepción de Derecho y de suspensión de derechos fundamentales no derogables cese, que sea reconocido el derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, que se reconozca el derecho violado, la sanción, reparación e indemnización a que tiene derecho toda víctima conforme al artículo 5, párrafo primero, inciso a), b), e). iii) y 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Los derechos fundamentales inderogables cuya suspensión está prohibida en toda circunstancia, regulados en los artículos 4.2 del Pacto Internacional, 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; Derecho a la Vida; Derecho a la Integridad Personal; Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre; Principio de Legalidad y de Retroactividad; Libertad de Conciencia y de Religión; Protección a la Familia; Derecho al Nombre; Derechos del Niño; Derecho a la Nacionalidad, y Derechos Políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos); y 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Derechos que tienen carácter de normas de *ius cogens*, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, **de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo**, que tienen su origen en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado; y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que

¹ Párrafo 25, página 9.

² Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 32, página 10.

están reconocidos en el artículo 1, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Aunado a la falta de independencia e imparcialidad, impiden que se configure la cosa juzgada pues el proceso no se ha llevado con las debidas formalidades del procedimiento, contenidas en el artículo 8.1³ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado la violación al artículo 8.1 de la CADH, en los casos en los que no se ha respetado el debido proceso.

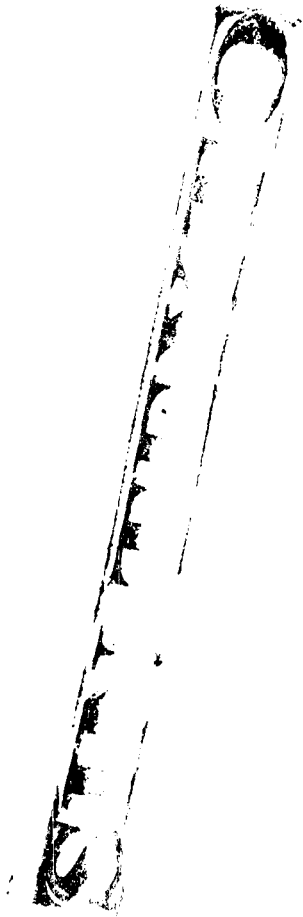
Los hechos notorios en el que no se ha respetado en debido proceso, lo conforman los innumerables juicios de amparo indirecto, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018⁴, la Juez a quo y los recursos que han derivado de éstos, han sido substanciados en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que se han negado a tener las pruebas por vertidas, de amenazas, hostigamientos, por solicitar acceso a la justicia, no obstante, las probanzas de las penas de castigos prohibidos, en connivencia con las autoridades responsables: defensor público y particular torturas⁵, coacción, penas infamantes, falsas acusaciones, procedimientos ilegales del Ministerio Público, de la fuerza pública, del Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, humillaciones públicas, vejaciones, etcétera) que las autoridades responsables han ejecutado con

³Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

⁴ Sólo basta ver la resolución de la queja 61/2018, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dicta en violación a derechos inderogables protegidos por normas del *ius cogens*, engaño, cambiando el acto reclamado, negándose llanamente a tener probanzas, todo con aquiescencia de la autoridad responsable, Secretario de Gobernación, hechos notorios de una formalización de suspensión del Estado de Derecho, la nada jurídica. Dictando *"Ahora, este Tribunal Colegiado no pasa inadvertido que el acto reclamado en el juicio de amparo se hace consistir en la violación al derecho de petición atribuido al Secretario de Gobernación, en su carácter de autoridad administrativa, por lo cual el juez A quo al momento de resolver deberá determinar lo que en derecho corresponda, respecto de la competencia que le asiste para conocer del asunto."*, página 18 y 19 de la sentencia (versión pública)

⁵ ²⁴ Cfr. Artículo 1: "[l]os Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención". Artículo 6: "[d]e conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción". Artículo 8: "[l]os Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado". Caso *Gutiérrez Soler vs. Colombia*, nota 24, sentencia de doce de septiembre de dos mil cinco.



un alto grado de planificación, es notorio que el proyecto de vida ha sido destruido, sin certeza y seguridad jurídica ("*habeas corpus*"⁶), atendidos a la nada jurídica⁷.

Un ejemplo que clarifica la situación en el que permanece el presente caso en juicio de amparo es el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

"...que cualquier que sean las razones que hayan podido existir para interrumpir el proceso constitucional democrático, es inaceptable e inadmisibles la supresión y/o violación de ciertos derechos humanos que constituyen siempre el mínimo necesariamente vigente e inderogable y cuya existencia y respeto necesario en todo momento y en toda situación, sin que sea posible justificar su derogación, desconocimiento o violación. Este criterio de la inderogabilidad absoluta de ciertos derechos- en especial del derecho a la vida, del derecho a no ser sometido a la tortura o a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes y del derecho a no ser sometido a la esclavitud o a la servidumbre reconocido en el artículo 27 párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Bolivia es Parte y enunciado también en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la consecuencia de un principio general que se encuentra en el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos..."⁸

Asimismo, menciona:

"Estos derechos inderogables -y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes -, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran"⁹

Ello es así, la restricción indebida de la parte quejosa al derecho de acceso a la justicia ha sido formalizada en juicio constitucional, y no como se afirma en la queja administrativa 1022/2018-II, en el que se acota razonamientos tendenciosos si se considera que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales son inatacables en todos los casos, en sí mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que "Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Dificilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos. La improcedencia o impertinencia de la resolución judicial interna que pone fin a una contienda puede advertirse a partir de diversos datos: error en el que incurre quien la emite, sin que se añada otro motivo de injusticia; o bien, ilegalidad o ilegitimidad con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones

⁶ En el sentido que el "*habeas corpus*" tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos

⁷ Juicio de amparo indirecto 627/2017 sustanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito; asimismo el juicio de amparo 349/2017 sustanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del mismo circuito.

⁸ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

⁹ Doc. E/CN.4/1981/1500, nota 76.

COLXTHINS

procesales que destruyen el debido proceso), sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la sentencia. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia -- formalmente-- atiende a la seguridad jurídica.”¹⁰

El “engaño” que se pretende dar como cosa juzgada es inadmisibles pues el proceso ha sido “a modo” y la sentencia sirve a determinado designio, mejor que al objetivo de justicia.¹¹

Para considerar en el presente caso la legitimidad de cosa juzgada que solo se justifica por la autoridad que le transmite la regularidad del proceso y la legitimidad en la actuación del juzgador, en el que en el proceso no importa las pruebas presentadas, estas no han sido admitidas o bien no han sido tomadas en cuenta, o bien resolver contrario al caso concreto, cambiando lo verdaderamente expuesto y probado, en la inaplicación de jurisprudencia de carácter obligatorio, lo que hace que la sentencia o resoluciones pronunciadas no sean genuinas, no basta simular un juicio de amparo y emitir una sentencia que contiene vicios, luego no se desatiende el principio *ne bis in idem*, pues no se han observado los preceptos Constitucionales.

Un ejemplo de ello es el juicio de amparo 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 651/2017, que versan sobre los mismos hechos en el que sólo basta para tener un “engaño procesal” y atender a la cosa “juzgada fraudulenta” la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de queja 138/2018, convertido a inconformidad 53/2018, en la que se decreta que la sentencia ha sido cumplimentada a cabalidad, por supuesto, sin llevar a cabo la autoridad responsable lo mandado, tal como ocurrió en el juicio de amparo indirecto 288/2017. La nada jurídica, la impunidad en su más burda presentación.

Otro ejemplo de la nada jurídica, se desprende de la resolución en que de nueva vez no se permitió la instauración del Estado de Derecho en el presente caso, se formalizó el estado de excepción de Derecho en juicio de amparo indirecto 74/2018, en que el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió en conjunto con el Sexto Tribunal Colegiado (queja 28/2018), no tener por presentada la solicitud de demanda de amparo, a pesar de que existía como uno de los actos reclamados la omisión de dar contestación al derecho de petición, en el que los actos reclamados conllevaba la causa y efecto del estado de excepción de Derecho y la suspensión de derechos fundamentales inderogables, no obstante que se señaló a las autoridades que tienen responsabilidad ineludible en el presente caso, autoridades responsables locales y federales.

Volviendo a reiterar, la impunidad en relación a la suspensión del Estado de Derecho, en el que con aquiescencia se ha desarrollado en juicio de amparo el artículo 17, párrafo 2, inciso a, b y c del Estatuto de la Corte Penal Internacional¹²

¹⁰ Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia*, Sentencia De 12 de septiembre De 2005.

¹¹ Párrafo 17, *idem*.

¹² **Artículo 17**

2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;



La no disposición a no actuar en el presente caso, que tienen el propósito de sustraer a las autoridades responsables que han perpetrado delitos de lesa humanidad con total impunidad. La gravedad de la violación procesal que permea el presente caso no se puede ocultar.

Es propicio traer a colación lo resuelto en la queja administrativa 1022/2018-II, misma que es en sí y por sí misma es contraria a la causa de la justicia en el que se expuso que los procesos que tienen que ver en el presente caso están viciados, es imperativo citar textualmente el párrafo segundo de la página 11 de ésta queja:

“También debe decirse, que partiendo de que la finalidad de la función jurisdiccional implica decir el derecho, ante dos partes contendientes, es consecuencia natural que aquella que no alcanzó sus pretensiones trate de revertir o modificar el fallo correspondiente; sin embargo, la queja administrativa no es el medio para hacerlo, aun cuando el sustento del reclamo, fuera en su caso, castigue a quien se estima, no resolvió como se pretendía. Lo cual escapa a las atribuciones que constitucionalmente tiene el Consejo de la Judicatura Federal.”

El engaño y discriminación es manifiesto. “El proceso ha sido “a modo” y la sentencia sirve a determinado designio, mejor que al objetivo de justicia”, no se pretende hacer justicia sólo simularla, el juicio está viciado y por lo tanto a la fecha no existe un auténtico proceso, por lo que la sentencia que éste produce no es genuina. Así es dable manifestar a este Alto Tribunal, el enjuiciamiento posterior, efectivo, libre de condicionamientos (independiente), imparcial, toral, que sea justo, es decir, que resulte consecuente con la necesaria preservación de los derechos humanos, en general y particular; que se sustente en la realidad de los hechos, claramente establecidos, y no en una “versión formal” que de forma manifiesta deponga a la justicia a merced de la ficción; por los mismos hechos y en contra de las mismas autoridades responsables no sería un nuevo juicio ni se desatendería el principio *ne bis in idem*.¹³

Ello es, la institución de la cosa juzgada, su regulación es un tanto especial,¹⁴ resultando afines a los derechos humanos consagrados en la Constitución, pues el Estado Mexicano ha reconocido ante la comunidad internacional las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Con apoyo en lo anterior, en la especie, el artículo 29 constitucional se encuentra ubicado en la parte dogmática de la Constitución y se refiere a un catálogo de derechos que no se pueden suspender mismos que son coherentes con las Obligaciones Internacionales del Estado Mexicano ha firmado y ratificado, en relación con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que genera obligaciones erga omnes; luego actuar en contrario hace del presente caso una flagrante y sistemática violación al debido proceso con las debidas garantías.

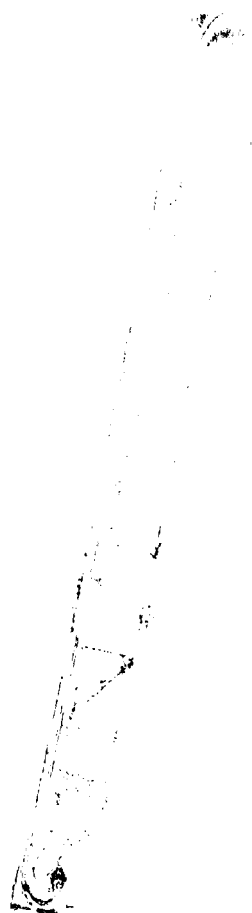
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado la institución de la “cosa juzgada fraudulenta” utilizada en el caso *Carpio Nicolle y otros Vs Guatemala*¹⁵ y en el caso *Gutiérrez Soler Vs Colombia*. En éste último caso, el juez Sergio García Ramírez, en voto razonado, refiere a **sentencias que fueron dictadas de manera engañosa y que en realidad no pretenden hacer justicia sino simularla**. En la “cosa fraudulenta”, **el juicio está viciado y por lo tanto no existe un auténtico proceso**. Así, el enjuiciamiento posterior “por los mismos hechos y

c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

¹³ Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia*. Sentencia de 12 de septiembre de 2005.

¹⁴ *Ibid.*, párr. 19

¹⁵ párr. 131 y 132.



en contra de las mismas personas no sería un nuevo juicio ni se desatendería el principio *ne bis in idem*”:

“Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Dificilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos. La improcedencia o impertinencia de la resolución judicial interna que pone fin a una contienda puede advertirse a partir de diversos datos: error en el que incurre quien la emite, sin que se añada otro motivo de injusticia; o bien, ilegalidad o ilegitimidad con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones procesales que destruyen el debido proceso), sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la sentencia. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia --formalmente-- atiende a la seguridad jurídica.”¹⁶

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expresado¹⁷ que si el juicio ha sido anticonstitucional queda expedita la jurisdicción del Juez competente para hacer la reposición del proceso, hecho notorio que es acorde con el artículo 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:

"NON BIS IN IDEM", CASOS EN QUE NO OPERA EL PRINCIPIO.

La Constitución establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, consagrando así el antiguo principio "non bis in idem"; mas ello debe entenderse de acuerdo con el régimen federal marcado por la propia Ley Fundamental, la cual señala a los Estados miembros las facultades no conferidas en forma expresa a la Federación; por ende, la cosa juzgada sólo puede operar cuando se pronuncia por una entidad federativa, o por la autoridad judicial federal competente, una resolución irrevocable; pero si la sentencia definitiva dictada por un Estado adolece de nulidad, no existe impedimento alguno para que los tribunales federales competentes, juzguen al inculpado. Ya esta Suprema Corte de Justicia ha expresado que si bien la Constitución previene que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, **esto se entiende cuando el primer juicio es válido y no anticonstitucional y nulo, porque en este caso hay que volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, quedando expedita la jurisdicción del Juez competente para hacer la reposición del proceso.** Lo resaltado es propio.”

Ello es, la parte quejosa no acude a este Alto Tribunal con razonamientos sórdidos, el Estado nos ha despojado de derechos fundamentales inderogables, arrastrándonos a sufrimientos ignominiosos, los juicios de amparo indirecto por un periodo de un año, con diez meses, la Juez a quo y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, han llevado a cabo **resoluciones anticonstitucionales, con una gravosa dilación dolosa.**

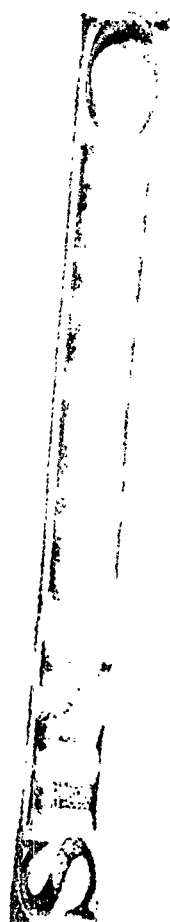
Los derechos fundamentales no derogables forman parte de normas del *ius cogens*, que no pueden ser trastocados ni siquiera en conflictos armados.

Los Convenios de Ginebra, el artículo 3¹⁸, prohíbe en cualquier tiempo y lugar los atentados en contra la vida, y la integridad corporal, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

¹⁶ *Ibid.*, párr. 19

¹⁷ Tesis aislada penal, Volumen LXI, Segunda Parte, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, pág. 33, registro 260202, con el rubro: **"NON BIS IN IDEM", CASOS EN QUE NO OPERA EL PRINCIPIO.**

¹⁸ Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra



Luego, las medidas adoptadas han sido dirigidas a la parte quejosa para su exterminio, ensimisma es ilícita toda suspensión de derechos humanos que afecte solamente a un sector de la población por razones de anular el derecho humano a la existencia.

Al haberse decretado en el presente caso la suspensión de derechos fundamentales, y no regularse ejecutivamente nada al respecto, ello abrió de forma sistemática de forma ilimitada a la ilegalidad de los funcionarios, figuras políticas, particulares, en conjunto y/o "pacto criminoso" han actualizado delitos que pueden constituir de lesa humanidad. Nada se ha decretado, nada se ha regulado, nada se ha dicho, y las autoridades han hecho lo que les ha parecido, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día. Condenable (ilegal) desde cualquier punto de vista.

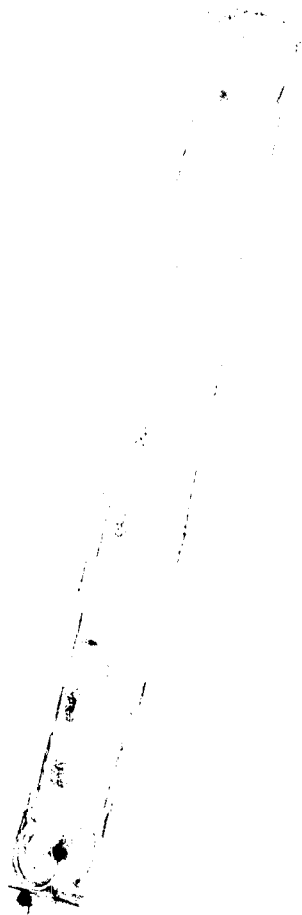
Informalidad jurídica insólita, han suspendido el orden jurídico en el presente caso, con resoluciones clandestinas, fantasmas y/o, llevadas de facto (no formales) o formales; basta ver las resoluciones que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha hecho del presente caso, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Distrito Federal, ahora, Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México¹⁹; de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ahora del Secretario de Gobernación que viene a formalizar el Estado de suspensión de Derecho y la suspensión de derechos fundamentales inderogables.

El atropello en el presente caso de derechos fundamentales y al orden constitucional que han hecho de éste las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, el Secretario de Gobernación, autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto 260/2018²⁰, pues éste alto funcionario, no ha hecho otra cosa que propugnar en el presente caso por el Estado de excepción de Derecho, la impunidad jurídica de la arbitrariedad.

Sin el menor respeto al Estado Constitucional, la parte quejosa ha sido arrastrada a sufrimientos ignominiosos por un periodo de cinco años, con nueve

¹⁹ Un ejemplo claro del estado de excepción de Derecho, que da cabida al absurdo jurídico y a la arbitrariedad, es la resolución que el **Magistrado Presidente e Instructor de la Quinta Sala Ordinaria, Ponencia Quince, Doctor Rubén Minutti Zanatta, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal**, ahora Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, en la que simuló juicio de nulidad V-76315/2015, que a claras vistas violó dolosamente el sistema de impartición de justicia, si éste Magistrado, hubiese aplicado los preceptos constitucionales, el Estado de Derecho, la parte quejosa no hubiese sido torturada a sangre fría, por segunda ocasión, en las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pues la Representación Social, reclama a la parte quejosa la vía pública denominada Andador Tabaqueros, como un delito oficioso (Unidad de Gestión 11 del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México), sin saber qué delito se nos acusa, dio lugar a una reacción del Gobierno de la Ciudad de México que no tiene precedentes a un "estado de excepción" de los más mínimos derechos fundamentales: la vida, la libertad, la dignidad humana, el derecho a no ser vejado, torturado, incriminado, el derecho a una vivienda digna, a la propiedad, en el que se deduce de forma lógica que figuras políticas, autoridades a los más altos niveles han **"recomendado"** el presente caso, tal como lo manifestó el Agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán, en el año de dos mil quince en las instalaciones pertenecientes a la Representación Social, que le había pedido "oportunidad" al Fiscal para arreglar **"amigablemente"** el presente caso, dando cabida a una espiral de impunidad. Cabe aclarar que, a éste juicio de nulidad, la parte quejosa nunca tuvo acceso, ni conocimiento. Otro ejemplo y prueba de "recomendación" y de arreglo "amigable", es la tortura psicológica, llevada a cabo en las Instalaciones pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el que, a la suscrita, el agente del Ministerio Público, gritaba: "no me han dado un peso por este caso", aventando papeles en su escritorio de cara a la quejosa, hechos ocurridos con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

²⁰ substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito



meses, hechos que no han cesado, en que se nos ha denegado la protección judicial en los términos que mandata el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La previsión y mandato del artículo 1; 29; 103, 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el presente caso, que son en sí mismos la regulación de derechos fundamentales en la pertinencia de las garantías que regulan el estado de excepción han sido inobservados en el presente caso.

El estado de excepción reconocido en el artículo 29 del Derecho Constitucional Mexicano que observa como ley el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (1 y 133 de la Constitución), no incluyen los efectos de solicitud de acceso a la justicia, en oposición con el poder del Estado arbitrario que en "pacto criminoso" y connivencia con el poder particular en acciones incompatibles con la intención de someter a persona alguna a la acción de la justicia por delitos que pueden constituir de lesa humanidad como circunstancias excepcionales que autorizan la puesta en vigor de medidas de "emergencia" en el presente caso.

Causales que son ilegítimas, el estado de excepción en el presente caso obedece a razones espúreas en violación a los preceptos constitucionales y de los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos pertinentes que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado (sistema convencional).

Así tenemos, que los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos en relación al artículo 29 de la Constitución, permiten clarificar y diferenciar las causales que autorizan la suspensión de ciertos derechos humanos, de aquellas situaciones que no permiten o no prevén suspensión alguna.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las observaciones generales que de él han derivado por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Para el efecto, estos instrumentos genera obligaciones *erga omnes*, inmerso en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

En efecto, la obligación principal que el Estado Mexicano ha asumido como Estado Parte de los instrumentos mencionados en párrafos anteriores, es la respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en los mismos, entre estos instrumentos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4o.²¹); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27²²), prevén la

²¹ Artículo 4

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación.

²² Artículo 27. Suspensión de Garantías

CONFIDENTIAL

posibilidad que por circunstancias de hecho excepcionales, los Estados Partes pueden suspender las obligaciones contraídas, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional, sin discriminación alguna.

En concreto el estado de excepción que acontece es un asombroso desprecio y rechazo al orden jurídico; suspendido el Estado de Derecho, ateniéndonos la parte quejosa a la informalidad y la inseguridad jurídica; la aplicación informal (que esté vacío jurídico se ha formalizado en juicio constitucional) del estado de excepción de derechos fundamentales ha derivado en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, en el que existe denegación de control judicial (hecho nulo) que hace preciso un control judicial efectivo.

Se ha violado el principio de notificación, de proclamación inmerso en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Las garantías de fondo: principio que debe tratarse de una amenaza excepcional, principio de proporcionalidad; principio de no discriminación; principio de intangibilidad de derechos humanos fundamentales y principio de compatibilidad con las obligaciones impuestas por el Derecho Internacional.

Principio de proclamación. Establece la necesidad que la existencia del estado de excepción debe ser oficialmente proclamado oficialmente. Su propósito es evitar reducir las garantías de excepción de facto, mediante una norma de publicidad en el Derecho Interno.

Principio de notificación. Este principio establece la obligatoriedad a todo Estado Parte que haga uso del estado de excepción, de informar inmediatamente al Secretario General de la ONU, quien a su vez deberá comunicar a los demás Estados Partes los siguientes extremos (artículo 4.3):

- I. Las razones o motivos alegados
- II. La naturaleza de las medidas adoptadas
- III. Las disposiciones contenidas en el Pacto suspendidas

El presente caso tristemente es una "patología" de un estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales no derogables.

Se han vulnerado las Garantías de fondo:

Debe tratarse de una amenaza excepcional (artículo 4.1)

Principio de Proporcionalidad en relación al principio de estricta necesidad - principio basado en la teoría de la legítima defensa-, la relación entre las medidas adoptadas debe ser proporcional a la amenaza.

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

CHICKEN

Luego, el Estado, en el caso concreto debe demostrar que su actuación es legítima.

Principio de No Discriminación (artículo 4.1 *in fine*), las medidas adoptadas no deben ser dirigidas a un grupo para su exterminio como en el caso acontece, lo que hace ilícita toda suspensión de derechos humanos que afecte solamente a un sector de la población por razones de anular el derecho humano a la existencia.

Principio de Intangibilidad de derecho fundamentales:

Bajo este principio los Estados Parte les está restringida la suspensión de derechos humanos intangibles o inalienables, (artículo 4.2), pues revisten carácter de normas del *ius cogens*, pues se trata de normas imperativas de Derecho Internacional que no admiten acuerdo en contrario (artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados)

En el presente caso se han vulnerado de forma sistemática derechos de carácter imperativo en el que prevalece el principio de no suspensión bajo ninguna circunstancia que pudiera alegar el Estado Mexicano. Ello es así, durante las situaciones excepcionales, los derechos humanos fundamentales de toda persona no son materia de suspensión.

Por tanto, las actuaciones y omisiones que se han realizado en el presente caso son ilícitas (que no están permitidas no siquiera en conflictos armados, Convenios de Ginebra), actos que se han ejecutado con la intención de destruir, total o parcialmente la integridad física, psíquica y moral de los quejosos. Aunado a la persecución objetiva por un grupo de poder público y privado que incluye figuras políticas que han hecho del presente caso una espiral de impunidad derivando en denegación de justicia en violación flagrante y sistemática de las garantías del debido proceso en juicio constitucional.

Los expedientes de los juicios de amparo señalados en párrafos anteriores son hechos notorios de castigos y penas prohibidas por normas del *ius cogens*, que ni siquiera en conflictos armados está permitido, los Convenios de Ginebra en el numeral 3²³, prohíbe en cualquier tiempo y lugar los atentados en contra la vida, y la integridad corporal, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

En este entendido, no existe justificación alguna para la suspensión de los derechos no derogables, amparados en el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego el presente caso es una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos. La inderogabilidad de derechos humanos fundamentales, aun durante situaciones de excepción de hecho, pueden constituir delitos de lesa humanidad

Lo que representa un cuadro grave, persistente y manifiesto de violaciones a los derechos humanos. en el que se ha violentado, el artículo 29 de la Constitución. Un ejemplo son los múltiples juicios de amparo indirecto interpuestos por la parte quejosa que son hechos notorios de inaccesso a la justicia y violación flagrante y sistemática a las garantías del debido proceso, en la que la parte quejosa solicita el respeto y vigencia real de los derechos y libertades fundamentales sin discriminación; que conlleva reparación integral, indemnización y sanción a los perpetradores de las graves violaciones flagrante y sistemática de los derechos humanos que acontecen en el presente caso.

Un ejemplo que clarifica la situación de esta inderogabilidad de derechos fundamentales es el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

²³ Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra

185

"...que cualquier que sean las razones que hayan podido existir para interrumpir el proceso constitucional democrático, es inaceptable e inadmisible la supresión y/o violación de ciertos derechos humanos que constituyen siempre el mínimo necesariamente vigente e inderogable y cuya existencia y respeto necesario en todo momento y en toda situación, sin que sea posible justificar su derogación, desconocimiento o violación. Este criterio de la inderogabilidad absoluta de ciertos derechos- en especial del derecho a la vida, del derecho a no ser sometido a la tortura o a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes y del derecho a no ser sometido a la esclavitud o a la servidumbre reconocido en el artículo 27 párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Bolivia es Parte y enunciado también en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la consecuencia de un principio general que se encuentra en el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos..."²⁴

Asimismo, menciona:

"Estos derechos inderogables, y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes -, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran"²⁵

Ahora bien, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 27, prevé que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, podrá adoptar disposiciones limitadas de suspensión de determinados derechos

Más, igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no autoriza la suspensión de derechos inderogables de la persona humana, entre las que se cuentan las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos (artículo 27.2 *in fine*).

La Garantías de forma prevista en el artículo 27.3 del Pacto de San José de Costa Rica, expresamente obliga al Estado Parte el principio de notificación el uso del derecho de suspensión en el que deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes de la Convención, por Conducto del Secretario de Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Las garantías de fondo previstas en el artículo 27.1 de la Convención, en cuanto a las situaciones que pueden ameritar la adopción de un Estado de emergencia o excepción son la "guerra", "peligro público" u "otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado"

A este tenor, cabe citar a Harry E. Groves:

"...la importante distinción entre emergencias que no alcanzan a llegar a la guerra no puede ser desestimada. En el primer caso, las condiciones externas imponen cambios rápidos y con frecuencia totales, en la sociedad y en las instituciones. En el último caso, el tiempo está fundamentalmente del lado de la forma existente de gobierno; y ese

²⁴ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

²⁵ Doc. E/CN.4/1981/1500, nota 76.

1

gobierno, si es democrático, debería operar dentro del marco democrático prevaleciente por la razón, entre otras, de que el sacrificio de las garantías constitucionales es un precio muy alto a pagar por la supuesta seguridad que supone comprar²⁶

Asimismo, las causales de "peligro público" u "otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en su estudio al Anteproyecto de Convención Americana:

"...esta expresión cubre exclusivamente las siguientes situaciones: un peligro real e inminente para la existencia del país como nación; para la sobrevivencia del Estado como entidad política soberana e independiente; para la integridad del territorio; para el respeto por la constitución política vigente; para el ejercicio de poderes legítimos por las autoridades constitucionales. También incluye la situación de peligro serio e inminente de alteración profunda de la paz social o del orden público de tal carácter que ponga en peligro la seguridad interna del Estado."

El análisis jurídico del citado artículo 27 y de la función que cumple debe partir de la consideración de que es un precepto concebido sólo para situaciones excepcionales. Se aplica únicamente " en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte ". Aun entonces, autoriza solamente la suspensión de ciertos derechos y libertades, y ello " en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación ". Las disposiciones que se adopten, además, no deben violar otras obligaciones internacionales del Estado Parte, ni deben entrañar " discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social ".
Párrafo 19²⁷

Luego, el estado de excepción solo es autorizado y permisible en ciertos derechos que no son derogables, ante situaciones excepcionales que se aplica en caso de guerra, de peligro público que amenace la independencia o seguridad del Estado. Las medidas que se adopten para ser lícitas, no deben violar obligaciones internacionales, ni entrañar discriminación alguna, no como acontece, que son "medidas" que conllevan exterminio en contra de la parte quejosa.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos distingue tres tipos de derechos humanos:

- i. Derechos que pueden ser objeto de limitaciones o restricciones, siempre y cuando se cumplan condiciones que exige la propia Convención
- ii. Derechos que pueden ser suspendidos en la medida que se dé el cumplimiento a los requisitos de forma y de fondo que exige el numeral 27 de la Convención
- iii. Derechos inderogables que de ninguna manera pueden ser objeto de suspensión (artículo 27.2)

Por otra parte, la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales, que no son objeto de suspensión, enumerados en el artículo 15 son:

- i. Derecho a la vida
- ii. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratamientos inhumanos o degradantes
- iii. Derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre
- iv. Principio de irretroactividad de la ley y de la pena más favorable.

La Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-8/87 del treinta de enero de mil novecientos ochenta y siete, menciona: "que los procedimientos jurídicos

²⁶ Harry E. Groves, "Emergency Powers", Journal of the International Commission of Jurist. Vol. III. N. 2. P.2

²⁷ La Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-8/87

SIN TEXIO

consagrados en los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 de la misma, porque constituyen garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma disposición”:

El artículo 27 contiene determinadas locuciones que merecen ser destacadas a los fines de la presente consulta. Así, el título es "Suspensión de Garantías"; el párrafo primero habla de "suspend(er) las obligaciones contraídas "; el párrafo segundo de " suspensión de los derechos "; y el párrafo tercero de " derecho de suspensión ". Cuando la palabra "garantías" se utiliza en el párrafo segundo, es precisamente para prohibir la suspensión de las " garantías judiciales indispensables ". Del análisis de los términos de la Convención en el contexto de éstos, resulta que no se trata de una " suspensión de garantías " en sentido absoluto, ni de la " suspensión de los derechos " ya que siendo éstos consustanciales con la persona lo único que podría suspenderse o impedirse sería su pleno y efectivo ejercicio. La Corte estima útil tener presente esas diferencias terminológicas a fin de esclarecer los fundamentos conceptuales sobre los cuales responde la presente consulta, sin perjuicio de las cuales la Corte utilizará la expresión empleada por la Convención de " suspensión de garantías ". Párrafo 18

Resulta claro que ningún derecho reconocido por la Convención puede ser suspendido a menos que se cumplan las condiciones estrictas señaladas en el artículo 27.1. Además, aun cuando estas condiciones sean satisfechas, el artículo 27.2 dispone que cierta categoría de derechos no se puede suspender en ningún caso. Por consiguiente, lejos de adoptar un criterio favorable a la suspensión de los derechos, la Convención establece el principio contrario, es decir, que todos los derechos deben ser respetados y garantizados a menos que circunstancias muy especiales justifiquen la suspensión de algunos, en tanto que otros nunca pueden ser suspendidos por grave que sea la emergencia. Párrafo 21

El artículo 27.2 dispone, como se ha dicho, límites al poder del Estado Parte para suspender derechos y libertades, al establecer que hay algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna circunstancia y al incluir " las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos ". Algunos de estos derechos se refieren a la integridad de la persona, como son el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 3); el derecho a la vida (art. 4); el derecho a la integridad personal (art. 5); la prohibición de la esclavitud y servidumbre (art. 6) y el principio de legalidad y de retroactividad (art. 9). Está, además, prohibida la suspensión de la libertad de conciencia y de religión (art. 12); de la protección a la familia (art. 17); del derecho al nombre (art. 18); de los derechos del niño (art. 19); del derecho a la nacionalidad (art. 20) y de los derechos políticos (art. 23). Párrafo 23

La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables (cf. La expresión " leyes " en el artículo



30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32).²⁸

Ahora bien, el principio de temporalidad, previsto en el artículo 27.1, menciona que las suspensiones son válidas "por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación," por tanto, en el presente caso, es la suspensión del Estado de Derecho que se ha prolongado *ad infinitum*, por un tiempo de cinco años, con ocho meses, en violación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 29, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El principio de proporcionalidad, regulado en el artículo 27.1 de la Convención Americana, establece que las disposiciones que suspendan las obligaciones contraídas, deben ser sólo en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación. Por tanto, es ilegal todos aquellos actos que representan una respuesta excesiva por parte del gobierno, el presente caso es un ejemplo de ello, en el que se ha suspendido derechos inderogables por un tiempo *ad infinitum* injustificadamente, que de forma objetiva, en absurdo jurídico, el Estado de Derecho ha desaparecido, para dar paso a la anticonstitucionalidad.

Por tanto, la suspensión de un derecho si y solo si es justificable en ausencia de otra alternativa para resolver una emergencia que ponga en peligro al Estado de Derecho, de ahí que estas medidas no pueden tomarse en abstracto, debe ser un hecho real que está viviendo un Estado Parte en un momento concreto; el Estado Parte debe demostrar que las medidas ordinarias no son suficientes para hacer frente a la situación.

Aunado, a que el principio de no discriminación (artículo 27.1), dispone que las medidas de excepción o de emergencia no deben entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

En el presente caso la restricción de derechos inderogables de la persona humana entraña discriminación contrayéndose a la parte quejosa.

A la parte quejosa se le ha negado la protección judicial sencilla y efectiva, en vía de amparo, esto es, invocando el derecho imperativo de acceso a la justicia²⁹ y en la institución procesal del amparo contenido en el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en que éste estado de excepción deviene clarifica la vulneración al debido proceso legal en juicio constitucional que acontece en el presente caso.

El caso concreto se encuentra un absurdo jurídico, de informalidad, sin soporte *de iure*, sólo de facto, existe plena inseguridad jurídica ("*habeas corpus*"³⁰)

²⁸ Párrafo 24.

²⁹ A la parte quejosa nos han sometido a castigos prohibidos, pagando un costo muy alto: por haber solicitado acceso a la justicia: incriminaron a las quejas, daño a la propiedad, de una edificación que ésta asentada en la vía pública denominada Andador Tabaqueros²⁹. Siguiendo un proceso en la que torturaron en interrogatorio por segunda ocasión a la quejosa Carolina González Nava, con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dando lugar, a que en días posteriores tuviera que acudir por atención médica, que culminó con atención especializada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud, presentando cuadro de ansiedad, con daños físicos y un eminente riesgo que puedan agravarse derivado de éste estado de excepción de Derecho y de violación flagrante y sistemática de derechos inderogables, que derivan en persecución objetiva y la amenaza en la que vuelvan a torturar no sólo a ésta; de incriminación...

³⁰ En el sentido que el "*habeas corpus*" tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos



AMERICAN
COURT
SECRETARY
FROM

que ha afectado el Estado de Derecho, lo cual configura un cuadro sistematizado de delitos de lesa humanidad. Dando una informalidad jurídica de estado de excepción de Derecho, suspensión de derechos fundamentales no derogables por un periodo de cinco años con nueve meses (enero de dos mil trece al mes de septiembre de dos mil dieciocho), sin garantías judiciales efectivas, en el que se ha simulado que la parte quejosa tenemos acceso a juicio de amparo³¹, a la fecha no se ha dado de forma mínima un establecimiento al orden jurídico, limitación a la ilegalidad o régimen relativo al ejercicio de los derechos que han sido suspendido. En un asombroso desprecio y rechazo al orden jurídico, en el presente caso, se ha “suspendido el Estado de Derecho, ateniéndonos la parte quejosa a la informalidad y la inseguridad jurídica.

Los actos que se reclaman en juicio constitucional, comenzaron con hostigamientos, atentados en contra la vida y la integridad corporal, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, las amenazas, intimidación, los atentados contra la dignidad personal, discriminación, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, comenzaron con amenazas de intervención de figuras políticas familiares y amigos de los habitantes del Andador Tabaqueros, hechos que en posterior fecha fueron incentivados y con aquiescencia de las autoridades responsables, hechos que tienen un pleno objetivo que por grado de planificación cometido a sangre fría, intencionalmente nos arrastró a grandes sufrimientos que vulneraron gravemente la integridad física, la salud mental y física en que la parte quejosa se ha visto superada, nuestra resistencia física y psicológica, fue quebrantada, los interrogatorios elaborados en las instalaciones pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, son prueba de los castigos ejecutados por haber solicitado acceso a la justicia. Ahora inculcadas la parte quejosa se atiene a la inconstitucionalidad, sin seguridad jurídica en cualquier momento podemos perder la vida o libertad, las amenazas son constantes y objetivas, tal como se puede probar, los hechos notorios contenidos en los anexos de los juicios de amparo citados en párrafos anteriores, no obstante es válido traer a colación el juicio de amparo 627/2017 y 349/2017, éste último, sustanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito en el que la parte quejosa nos vimos en la necesidad de resguardarnos, pues policía de investigación acudió a intimidarnos, las amenazas de pérdida de la libertad y de la vida son constantes, objetivas; buscándonos ésta policía por toda la calle, sin saber a la fecha de qué delito se nos acusa, o bien de acudir en días pasados en conjunto con seguridad pública a bordo de patrullas, servidores públicos pertenecientes al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras (autoridades pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México), que en compañía con un habitante del Andador Tabaqueros (María Dolores Espinoza Bassoco), golpearon con marros los muros de la vivienda que habitan las quejas, mencionando que en cuanto saliéramos nos detuvieran.

En este orden de ideas, el presente caso encierra una afectación exorbitante, vulnera el artículo 5 y 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación al artículo 109 de la ley de Amparo, pues los juicios de amparo descritos en párrafos anteriores substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, tienen nexos causal derivado de la solicitud de acceso a la justicia, los voluminosos anexos de los juicios tales como, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018³², 260/2018.

Los juicios que invoca la parte quejosa son los juicios 651/2017, 627/2017, 260/2018, se encuentran a la fecha de este escrito en recursos de inconformidad y queja, más estos juicios, están permeados de engaño, con sendas violaciones procesales, en la que se simula que la parte quejosa tiene “acceso al servicio³³” la

³¹ 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 651/2017, 260/2018, 74/2018 (éste último substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito)

³² Solicitud de juicio de amparo indirecto, substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito, es claro ejemplo del artículo 17, párrafo 2, inciso a, b y c del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

³³ El licenciado Héctor Molinero Orduña, Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, preguntando en fecha dieciocho

1



sentencia del juicio 651/2017, es un hecho notorio de que el Andador Tabaqueros es una vía pública, que asimismo existen dictámenes periciales, probanzas científicas de que los habitantes de éste andador en comento entre los que se encuentra la tercera interesada en el juicio 627/2017 en el presente caso llevan a cabo conductas que están ocasionando que la vivienda de la parte quejosa se derrumbe con aquiescencia de las autoridades responsables y en violación procesal en juicio de amparo, en vulneración a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5^o y 6, asimismo, los anexos de este juicio de amparo indirecto 627/2017 y 651/2017, contiene innumerables denuncias elevadas al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el que consta múltiples delitos, perpetrados por un periodo de cinco años con nueve meses.

Pruebas públicas del actuar planificado de la autoridad responsable, pues con fecha 27 de noviembre de dos mil trece, la Representación Social tiene pleno conocimiento que la edificación por la que ejerció acción penal ante un Tribunal de delitos oficiosos, carpeta judicial 011/0384/2017 (juicio de amparo indirecto 627/2017), es una vía pública; claro ejemplo de la determinación ilegal de Estado de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, pues han torturado, amenazado, intimidado, humillado, etcétera, como forma de penas anticipadas, imponiendo castigos altamente planificados para causar graves daños físicos, psicológicos, morales, que conllevan el dolo manifiesto de exterminio, comparable a la tortura de la "gota de agua".

Luego, estas documentales públicas demuestran que las medidas adoptadas han sido dirigidas a la parte quejosa para su exterminio, luego, es ilícita toda suspensión de derechos humanos que afecte solamente a un sector de la población por razones de anular el derecho humano a la existencia.

Por lo que la parte quejosa invoca la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.), Décima Época, libro 55, Tomo I, junio 2018, pág. 10, registro 2017123, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: **"HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)."**:

En este punto es necesario resaltar el juicio de amparo indirecto 627/2017, en el que la parte quejosa interpuso recurso de queja, ya que, si no es violentado el procedimiento debería de ser allegado este recurso al Quinto Tribunal Colegiado en

de agosto de dos mil diecisiete, si existía abogado, al responder la parte quejosa, mencionó **"aun así, no se les ha negado el servicio"**

Artículo 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

- a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;
- b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;
- d) Otros derechos civiles, en particular:
 - i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado;
 - v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros;
- e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
 - iii) El derecho a la vivienda;

Artículo 6

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación.

CONFIDENTIAL



Materia Penal del Primer Circuito, queja, en la que se detalla los graves agravios que causa no tener como idónea la probanza de los graves daños psicológicos y físicos que han derivado de éste Estado de suspensión de Derecho y suspensión de derechos inderogables, mismo escrito que la parte quejosa anexa en copia simple, asimismo se anexa escrito de requerimiento en el que dio cumplimiento la suscrita para la obtención de documentales, probanzas que demuestran los graves daños a que refiere la queja antes mencionada, asimismo se anexa la solicitud de amparo que recayó en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito con número de expediente 74/2018.

No obstante, se hace referencia que el juicio de amparo indirecto 260/2018, se encuentra en la vía procesal de recurso de queja con sendas violaciones con número de expediente 145/2018 y el juicio de amparo 651/2017, la sentencia a la fecha no ha sido cumplimentada, misma que se encuentra paralizado el procedimiento, sin esperanzas de acceso a la justicia con número de recurso de inconformidad 53/2018, ambos recursos están siendo conocidos por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del primer Circuito.

Suplencia de la queja, a la luz del artículo primero de la Constitución y del numeral 1o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicitamos a este Órgano de Control Constitucional la suplencia de la queja, esto, con fundamento en el artículo 79, fracción III, *in fine*, de la Ley de Amparo, que menciona:

“...la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio”

Figura procesal, que contrasta el grado de vulnerabilidad, a una interpretación *pro homine*, intensificado al derecho del debido proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos³⁵, en aras de la protección de los más débiles (*favor debilis*), el daño al proyecto de vida: el derecho a la existencia comprende condiciones mínimas de una vida digna, de seguridad, certeza jurídica e integridad de la persona humana.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en pronunciamiento en el *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala*, es clarificador del presente caso, la comprensión del principio de interdependencia de los derechos humanos: el proyecto de vida es consustancial del derecho de la existencia, que requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad, e integridad de la persona humana³⁶:

El proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a la libertad, como derecho de cada persona a elegir su propio destino. (...) El proyecto de vida envuelve plenamente el ideal de la Declaración Americana [de los Derechos y Deberes del Hombre] de 1948 de exaltar el espíritu como finalidad suprema y categoría máxima de la existencia humana⁴.

En este orden de ideas manifiesto a este Tribunal: la suspensión de derechos inderogables, y la inefectiva igualdad ante la ley, en el que se ha simulado por periodo de un año, con nueve meses, innumerables juicios de amparo, que de forma sistemática y flagrante están plagados de sendas violaciones procesales, luego, no pueden considerarse sus resoluciones constitucionales.

Son hechos notorios innegables, que pueden determinar relevancia, que atribuya competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el presente caso ha derivado en innumerables juicios de amparo indirecto que da cabida a la formalidad de excepción de estado de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables. El juicio de amparo indirecto 260/2018, la autoridad responsable, a pesar de tener las atribuciones legales, derivadas de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar nuestros derechos fundamentales inderogables, omitió ejercer actividades tendientes a lograr garantizar el ejercicio de

³⁵ Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 70, y Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, párr. 115

³⁶ Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala



tales derechos fundamentales, estableciendo de manera formal este estado de excepción de Derecho.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos³⁷, con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad³⁸.

La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana.

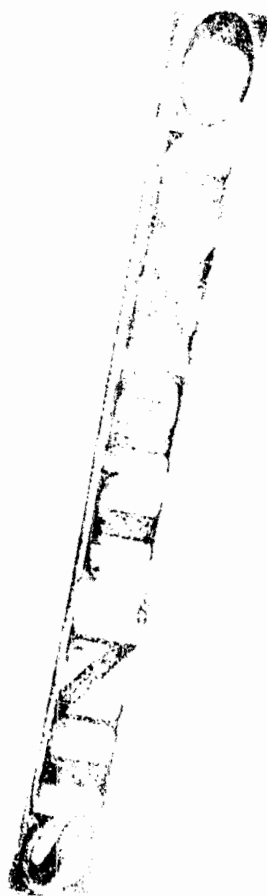
No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la —adopción de medidas positivas—, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre³⁹.

Por lo tanto, existen derechos fundamentales inderogables cuya suspensión está prohibida en toda circunstancia, regulados en los artículos 4.2 del Pacto Internacional, 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; Derecho a la Vida; Derecho a la Integridad Personal; Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre; Principio de Legalidad y de Retroactividad; Libertad de Conciencia y de Religión; Protección a la Familia; Derecho al Nombre; Derechos del Niño; Derecho a la Nacionalidad, y Derechos Políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos); y 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Los cuales son normas de *ius cogens*, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo,

³⁷ Sobre la obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las autoridades mexicanas vale la pena ver el criterio jurisprudencial siguiente: **JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.** Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

³⁸ Cfr. CoIDH. Caso *Tribunal Constitucional vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71; Caso *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Caso *Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso *de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37

³⁹ Cfr. CoIDH. Caso *González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205



100
100
100

que tienen su origen en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado; y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que están reconocidos en el artículo 1, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convenciones Internacionales que no admiten ninguna posibilidad de suspensión de los derechos fundamentales que protegen, Instrumentos que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado, que le exigen obligaciones erga omnes: Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo, que tienen su origen en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado; y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que están reconocidos en el artículo 1, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, la obligación principal que el Estado Mexicano ha asumido como Estado Parte de los instrumentos mencionados en párrafos anteriores, es la respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en los mismos, entre estos instrumentos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4o.); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27), prevén la posibilidad que por circunstancias de hecho excepcionales, los estados partes pueden suspender las obligaciones contraídas, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional, sin discriminación alguna.

En este sentido es importante señalar que ninguna de las disposiciones aludidas y que han sido incumplidas, imponen una carga de solicitud o excitativa a nuestra parte, ya que al tratarse de obligaciones Constitucionales y legales de carácter general no necesitan de una acción primigenia para poder ser invocada, **esa conducta vulnera los derechos fundamentales inderogables y el derecho al acceso a la justicia⁴⁰, y las garantías para su protección, lo que se sitúa en la tensión entre la máxima efectividad que debe atribuirse a un texto constitucional y la realidad, que pasa por el núcleo de los poderes del Estado.**

El inaccesso a la justicia carece de justificación objetiva y razonable de conformidad con el actual marco constitucional de protección, el Estado tiene obligaciones específicas en materia de derechos humanos; protección y garantía, noción de igualdad que es inseparable de la dignidad de la persona, la omisión de la autoridad responsable es contraria al principio de igualdad y no discriminación, respecto al ejercicio y reconocimiento de los derechos inderogables, omisión que es incompatible con los derechos reconocidos en la Constitución, ya que, a la parte quejosa se nos considera inferiores, hecho, que ha afectado el reconocimiento y goce a los derechos inderogables.

⁴⁰ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido la categoría de norma del *ius cogens* al derecho al acceso a la justicia "...El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes...". Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, serie, C, núm. 153, numeral 131. Cfr. Voto razonado del juez A. A. Cancado Trindade, p. 22, numeral 64. Cfr. Corte I.D.H., Almonacid y Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, voto razonado del juez A.A. Cancado Trindade, serie C, núm. 154, p. 7, numeral 22

100-111111



AS OF 1971
100-111111
100-111111
100-111111

Por lo anteriormente, expuesto y fundado **ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**; actualmente Ocurro y pido:

Único.- El reconocimiento a las garantías judiciales para la protección de los derechos fundamentales inderogables, que ilegalmente el Estado Mexicano nos ha despojado; instando acceso a la verdad y a la justicia, "hasta que la justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa corriente"³⁷.

PROTESTO LO NECESARIO

Carolina González Nava
Ciudad de México a 06 de septiembre de 2018

³⁷ Discurso de Martin Luther King, "I have a dream"

SECRET

SECRET



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO INDIRECTO

Mesa **

Princ. ***/**

Quejoso:

.....

...

Vistos, para resolver el juicio de amparo 627-2017, promovido por Carolina González Nava y Martha Patricia González Nava, por propio derecho, contra los actos que reclaman del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades, y.

RESULTANDO

PRIMERO. Presentación de la demanda.

Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, turnado el día siguiente a este Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Carolina González Nava y Martha Patricia González Nava, por propio derecho solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamaron del Procurador Fiscal Desconcentrado de Investigación en Magdalena Contreras, y agente del Ministerio Público (.....) de la agencia investigadora MC-1, Unidad de Investigación, número 1 Sin Detenido, de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Magdalena Contreras, todas ellas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Tramitación de la demanda.

Mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se registró la demanda con el consecutivo 627-2017, se admitió a trámite únicamente respecto de la falta de contestación al escrito de catorce de junio de dos mil diecisiete, atribuido al **Procurador General de Justicia de la Ciudad de México**, se desechó en lo que concierne a la investigación realizada contra las quejas por el **agente del Ministerio Público (.....) de la agencia investigadora MC-1, Unidad de Investigación, número 1 Sin Detenido, de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Magdalena Contreras**, así como por la participación en la investigación llevada a cabo contra las amparistas, por el **Fiscal Desconcentrado de Investigación en Magdalena Contreras**, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, siendo la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y, se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional.

En auto de diez de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por interpuesto el recurso de queja de las quejas contra el proveído que desechó la demanda por los actos y autoridades mencionadas.

En acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó dar vista a las amparistas con el contenido del informe justificado, siendo por el **Procurador General de Justicia de la Ciudad de México** y se previno si era su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto de las autoridades que intervinieron en la respuesta a su escrito de catorce de junio de dos mil diecisiete, la cual no fue desahogada, por lo que el veintisiete de septiembre siguiente se tuvo por precluido dicho derecho.

En proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se recibió el testimonio de la queja penal 115-2017, enviado por el Secretario de Acuerdos del **Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito**, la cual fue declarada fundada, por lo que se admitió la demanda de amparo respecto de los actos que fueron desechados en acuerdo de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, por lo que se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables.

En auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, se desechó la ampliación de la demanda de amparo de las quejas, por lo que hace a los actos y autoridades siguientes:

I. C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal –autoridad ya señalada como responsable-

Se reclama hacer caso omiso para que cesaran y cesen las violaciones graves a derechos humanos tales como, tortura, humillaciones, discriminación, violencia de género, violencia institucional, fabricación de pruebas, amenazas, obstrucción a una defensa adecuada en contra de las quejas y de nuestra familia, ello en virtud que en su carácter de Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Agente del Ministerio Público y autoridad responsable para efectos de juicio de amparo, evade realizar y ordenar las acciones legales necesarias aptas y suficientes para que los métodos sistemáticos perpetrados en contra de las quejas no siga perpetuando el daño y solidifique la impunidad de la aceptación social del fenómeno de violencia contra las mujeres, su sentimiento de inseguridad y una profunda desconfianza en el sistema de impartición de justicia. Siendo omiso en responder de porqué se están llevando a cabo en contra de las quejas hechos tales como fabricación de pruebas y ocultamiento de expediente.

II. C. Fiscal Desconcentrado de Investigación en Magdalena Contreras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Se reclama como superior jerárquico que a pesar de tener ya conocimiento de las violaciones graves a derechos humanos en contra de las quejas no realice las acciones necesarias para esclarecer los hechos tal como lo mandata el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y denunciar conforme a sus atribuciones las actuaciones de sus inferiores jerárquicos, mencionando que las actuaciones en la carpeta de investigación violan derechos conculcados en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Siendo omiso en responder de porqué se están llevando a cabo en contra de las quejas hechos como son fabricación de pruebas y ocultamiento de expediente.

III. Lic. C. Agente del Ministerio Público.

Se le reclama no dar razón suficiente sobre las violaciones graves a derechos humanos perpetrados en contra de las quejas en relación a la carpeta de investigación CI-FMC MC-2 UI-1 CEBUT53 17-2015, resaltando que la investigación citada tiene que ver con una vía pública –andador Tabaqueros- y si al solicitar la recuperación de esta vía pública sea un hecho delictuoso que diera lugar a que el ministerio público violente los derechos irrenunciables de toda persona sometida a una acusación en relación al artículo 1, 14, 16, 19, 20 Apartados A y B; 22, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siendo omisa en responder de porqué se están llevando a cabo en contra de las quejas hechos tales como fabricación de pruebas.

IV. Lic. C. Agente del Ministerio Público.

Se le reclama la inconstitucional violación a derechos humanos: violencia institucional, fabricación de pruebas, ocultamiento del expediente, tortura psicológica, discriminación, la obstrucción a la defensa adecuada, violencia de género, vejaciones, castigos, y así dentro de sus atribuciones que le confiere el artículo 21 Constitucional le está permitido hacer investigaciones que se traducen en ilegales métodos sistemáticos en contra de las quejas.

En auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por interpuesto el recurso de queja de las amparistas contra el proveído anterior.

El dos de febrero de dos mil dieciocho, se recibió el testimonio de la **queja penal 163-2017**, enviada por el Secretario de Acuerdos del **Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito**, la cual fue declarada fundada, razón por la cual se admitió la ampliación de demanda señalada, por lo que se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables.

El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia.

Este **Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México**, es legalmente competente por cuestión de materia, territorio y turno para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VII, todos de la Ley de Amparo; 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Segundo, fracción I, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo en materia penal que corresponde a la competencia territorial de este órgano de control constitucional.

SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados.

En términos del artículo 74, fracción I, en relación con el diverso 76 de la Ley de Amparo en vigor, con la finalidad de dilucidar la cuestión efectivamente planteada, se procede a fijar la litis en este juicio de garantías, para ello, se armonizan los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente de este juicio de amparo, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la parte inconforme.

Fijación de la litis que se sustenta en la jurisprudencia P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya tenor literal es el siguiente:

"ACTOS RECLAMADOS REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"

El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.

Del mismo modo, es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual señala:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."

Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.

En ese orden de ideas, del análisis integral de la demanda y constancias de autos, se advierte que los actos efectivamente reclamados son:

1) Procurador General de Justicia de la Ciudad de México

- + Falta de contestación al escrito de catorce de junio de dos mil diecisiete, presentado el quince siguiente, en la Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Control de Bienes, Subdirección de Archivos y Correspondencia, Departamento de Correspondencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

- + Hacer caso omiso para que cesaran y cesen las violaciones graves a derechos humanos tales como, tortura, humillaciones, discriminación, violencia de género, violencia institucional, fabricación de pruebas, amenazas, obstrucción a una defensa adecuada en contra de las quejas y de nuestra familia.

2) Fiscal Desconcentrado de Investigación en Magdalena Contreras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México

- + La participación en la investigación de las quejas.

- + A pesar de tener ya conocimiento de las violaciones graves a derechos humanos en contra de las quejas no realice las acciones necesarias para esclarecer los hechos tal como lo mandata el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y denunciar conforme a sus atribuciones las actuaciones de sus inferiores jerárquicos, mencionando que las actuaciones en la carpeta de investigación violan derechos conculcados en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Siendo omiso en responder de porqué se están llevando a cabo en contra de las quejas hechos como son fabricación de pruebas, ocultamiento de expediente.

3) Agente del Ministerio Público (Procurador General de Justicia de la Ciudad de México) de la agencia investigadora MC-1, Unidad de Investigación, número 1 Sin Detenido, de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Magdalena Contreras

- + La investigación realizada contra las quejas.

- + Violación a derechos humanos, violencia institucional, fabricación de pruebas, ocultamiento del expediente, tortura psicológica, discriminación, la obstrucción a la defensa adecuada, violencia de género, vejaciones, castigos, y así dentro de sus atribuciones que le confiere el artículo 21 Constitucional le está permitido hacer investigaciones que se traducen en ilegales métodos sistemáticos en contra de las quejas.

4) Agente del Ministerio Público (Procurador General de Justicia de la Ciudad de México)

- + No dar razón suficiente sobre las violaciones graves a derechos humanos perpetrados en contra de las quejas en relación a la carpeta de investigación CI-FMC/MC-2 UI-1 CI-10755-12-2015, resaltando que la investigación citada tiene que ver con una vía pública -andador Tabaqueros-, y si al solicitar la recuperación de esta vía pública sea un hecho delictuoso que diera lugar a que el ministerio público violente los derechos irrenunciables de toda persona sometida a una acusación en relación al artículo 1, 14, 16, 19, 20 Apartados Ay B, 22, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siendo omisa en responder de porqué se están llevando a cabo en contra de las quejas hechos tales como fabricación de pruebas.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

AMPARO INDIRECTO

Mesa **

Princ. **/**

Quejoso:

.....

...

TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados.

Por técnica jurídica procede el estudio de la existencia o inexistencia del acto reclamado, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia XVIII/2º J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice

"ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omite, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia del acto reclamado, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento."

La Directora de Amparos (Alejandra Patricia Rodríguez Martínez) por ausencia del **Procurador General de Justicia del Distrito Federal** al rendir su informe justificado (foja 96), negó el acto consistente en la falta de contestación al escrito de catorce de junio de dos mil diecisiete, pues señaló que fue remitido mediante acuerdo de correspondencia con folio 19401, al **Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas** para su atención y que éste a su vez lo retornó mediante folio 19401A a la **Visitadora Ministerial** para su atención, agregó que el escrito estaba signado únicamente por la quejosa Carolina González Nolasco.

Mientras que el Director General Jurídico Consultivo (Antonio Manuel de la Cruz) por ausencia del **Procurador General de Justicia** al rendir su informe justificado (foja 416), negó los actos consistentes en violaciones graves a derechos humanos, como tortura, humillaciones, discriminación, violencia de género, violencia institucional, fabricación de pruebas, amenazas, obstrucción a una defensa adecuada.

En tanto la **Fiscal Desconcentrado de Investigación** (Gonzalo Rodríguez) de la **Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México**, al rendir su informe justificado (fojas 258 a 259), negó el acto consistente en la investigación llevada a cabo contra las quejas, pues indicó que dicha circunstancia no se encuentra dentro sus facultades, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ya que ello le corresponde al agente del Ministerio Público investigador.

Por su parte la **Fiscal Desconcentrado de Investigación** (Gonzalo Rodríguez) de la **Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México**, al rendir su informe justificado (fojas 418 a 419), negó los actos consistentes en que a pesar de tener ya conocimiento de las violaciones graves a derechos humanos en contra de las quejas no realizó las acciones necesarias para esclarecer los hechos tal como lo mandata el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y denunciar conforme a sus atribuciones las actuaciones de sus inferiores jerárquicos, mencionando que las actuaciones en la carpeta de investigación violan derechos conculcados en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Siendo omiso en responder de porqué se están llevando a cabo en contra de las quejas hechos como son fabricación de pruebas, ocultamiento de expediente.

Lo anterior porque afirma que ello es facultad de la **Visitaduría Ministerial**, de conformidad con el ordinal 36 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Por último, el agente del Ministerio Público (Gonzalo Rodríguez) Titular de la Unidad de Investigación, Tres Sin Detenido, Sistema Acusatorio, en la Coordinación Territorial MC-1, de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación Magdalena Contreras, al rendir su informe justificado (fojas 403 a 410), negó los actos consistentes en la violación a derechos humanos: violencia institucional, fabricación de pruebas, ocultamiento del expediente, tortura psicológica, discriminación, la obstrucción a la defensa adecuada, violencia de género, vejaciones, castigos, pues indicó que la tramitación de la carpeta de investigación FMC MC-2 UI-1 C.D. 753 12-2015, la llevó apegada a derecho.

Ahora bien, la parte quejosa no desvirtúa dichas negativas de las autoridades responsables mencionadas, lo cual era importante que lo hiciera, pues todas ellas coinciden en negar los actos que se les reclaman.

En consecuencia, al no estar desvirtuados los informes justificados, es procedente **sobreseer en el presente juicio de amparo** respecto a los actos que se mencionan, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia VI/2º J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Número 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:

"ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a

justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque incluso las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados".

Igualmente tiene aplicación al caso la Jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 305, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Comun Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Sexta Época, que dice

"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.

CUARTO. Certeza del acto reclamado.

La agente del Ministerio Público () de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Magdalena Contreras, Coordinación Territorial MC-1, Unidad de Investigación Uno Sin Detenido, al rendir su informe justificado (fojas 249 a 250), reconoció que en dicha Unidad de Investigación se tramitó la carpeta de investigación FMC MC-2 UI-1 C.D. 753 12-2015, y que esta fue enviada a la Coordinación del Área de Judicialización el cuatro de agosto de dos mil dieciséis.

En diverso informe justificado (foja 394) la agente del Ministerio Público () expresó que el encargado de la referida carpeta de investigación fue el diverso agente investigador ()

En tanto, el agente del Ministerio Público () Titular de la Unidad de Investigación Tres Sin Detenido, Sistema Acusatorio, en la Coordinación Territorial MC-1, de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación Magdalena Contreras, al rendir su informe justificado (fojas 403 a 410), aceptó el acto consistente en la tramitación de la carpeta de investigación FMC MC-2 UI-1 C.D. 753 12-2015.

Manifestaciones que hacen prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que resultan suficientes para tener por demostrada la existencia de dichos actos reclamados.

Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 749, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Comun Primera Parte-SCJN Sexta Sección-Procedimiento de amparo indirecto, Apéndice 2011, que dice

"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."

Certeza que además se corrobora con las copias certificadas que se enviaron (anexos I a II), que por tratarse de documentos públicos, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que fueron expedidas por funcionarios públicos en el ámbito de su ejercicio.

Sustenta lo anterior la jurisprudencia número 226 publicada, en la página 153 del Tomo VI, Materia Común registro 394182, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, la cual es del tenor literal siguiente

"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena."

QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar las causales de improcedencia, toda vez que su estudio es previo y de oficio por ser una cuestión de orden público, ya sea que las partes las hagan valer o no, ya que procede su análisis de manera oficiosa de conformidad con lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia II, 1o. J/5 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página noventa y cinco, Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra señala

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.

En el caso, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en

a) La tramitación de la carpeta de investigación FMC MC-2 UI-1 C.D. 753 12-2015

Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el ordinal 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ()

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente ley...

Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una **afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico**

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO INDIRECTO

Mesa **

Princ. ***/**

Quejoso:

...

Del contenido de los citados preceptos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclama, por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación.

Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que de la demanda de garantías informes justificadas y pruebas aportadas en el juicio se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones, correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio.

Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225. del Tomo XXVII, Enero de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente establece:

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.

Además, es importante tomar en cuenta el momento en que se resuelve el juicio, lo anterior en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos.

Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías.

En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate.

Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación.

En el caso que nos ocupa, la pretensión consiste en impugnar la tramitación del inicio de la carpeta de investigación FMC/IC-2/11-1 C/D 753.12-2015, por parte de los citados agentes del Ministerio Público, sin embargo, los amparistas no cuentan con interés jurídico para reclamar dicha actuación, pues no se afectó ningún derecho sustantivo.

Al respecto, cabe precisar que la carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional, con el objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables, por tanto como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite generalmente no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional.

En ese sentido, la indagatoria en sí misma no es un acto que vulnere la esfera de derechos de los quejosos ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, por ser la investigación de los delitos de orden público conforme al citado precepto constitucional, al estar interesada la sociedad en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social.

Lo mismo acontece, respecto al acto consistente en:

b) No dar razón sobre las violaciones graves a derechos humanos y del porqué se están llevando fabricación de pruebas.

Ello porque aún no ha culminado la investigación en la carpeta de investigación FMC/IC-2/11-1 C/D 753.12-2015, porque sería hasta ese momento en que podría analizarse dichas violaciones, en aras de poder resarcir a las amparistas de las citadas violaciones, ello en caso de que existieran, sin embargo, como no ha acontecido dicha circunstancia, no existe una afectación legítima a los intereses jurídicos de las quejosas.

Por tanto, como en la especie se reclama el inicio y ejercicio de las facultades de investigación del Ministerio Público, para la obtención de los datos de prueba que permitan arrojar los elementos suficientes para justificar, racionalmente, un hecho con apariencia de delito y la presunta intervención de los detenidos, el juicio de amparo en su contra deviene improcedente, ya que las quejosas no tienen ningún derecho reconocido por la Constitución o por alguna ley secundaria, que los faculte a oponerse al inicio del trámite de una carpeta de investigación.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la página 2592, libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios

para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 50, fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular.

SEXTO. Protección de datos personales.

Con base en lo dispuesto por los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuentan los amparistas, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales.

Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se

RESUELVE

PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carolina Gonzalez Nava y Martha [illegible] contra los actos que reclamaron de las autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo y por las razones expuestas en los diversos tercero y quinto de esta sentencia.

SEGUNDO. Se ordena proteger el nombre, los datos personales de las partes y demás intervinientes, en los términos del considerando último de la propia sentencia.

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE, y con fundamento en los artículos 191 y 192, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, captúrese esta resolución en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

Así lo resolvió y firma **Rosa María Cervantes Mejía**, Juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistida del Secretario Martín Gilberto Ávila Lechuga, que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de abril de dos mil dieciocho en que las labores del juzgado así lo permitieron. **Doy fe**

Martín Gilberto Ávila Lechuga, Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, hace constar que la presente copia autorizada constante de ocho fojas es fiel reproducción de su original que obra en los autos del juicio de amparo **627/2017**.
CONSTE.

1

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

P R E S E N T E

34419

Asunto: Petición de información.

Carolina González Nava, Martha Patricia González Nava y Julio César González Nava, por nuestro propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Tabaqueros número 43, Colonia San Nicolás Totolapan, Delegación Magdalena Contreras, Código postal 10900, en esta Ciudad de México.

Ante, Usted comparecemos para solicitar copia de las audiencias públicas, en la que los suscritos éramos atendidos por la Licenciada Fabiola Hernández Espíndola, Secretaría Auxiliar del C. Procurador, en el domicilio ubicado en calle Gabriel Hernández, número 56 - 5º piso, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal ahora Ciudad de México.

En estas audiencias públicas que nos ocupan, le informábamos a la licenciada Fabiola Hernández Espíndola, **las actuaciones y omisiones irregulares fuera de todo cause constitucional, de los servidores públicos** adscritos a las Fiscalías Desconcentradas de Investigación en Magdalena Contreras y Álvaro Obregón: en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01; en la Carpeta de Investigación CI-FMC/MC-2/UI-1 C/D/00753/12-2015 y en la Carpeta de Investigación CI-FMC/MC-2/UI-2/C/D/00772/121-2015.

Asimismo, solicitamos copia de las audiencias, acuerdos y reportes de las audiencias en las que fuimos atendidos por los Fiscales adscritos a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Magdalena Contreras y la Fiscalía Desconcentrada de investigación en Álvaro Obregón, en las que **comparecíamos para solicitar se actuara conforme a derecho** en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01; en la Carpeta de Investigación CI-FMC/MC-2/UI-1 C/D/00753/12-2015 así como en la Carpeta de Investigación CI-FMC/MC-2/UI-2/C/D/00772/121-2015.

Es de suma importancia señalar que la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón, para ser atendida Carolina González Nava y/o Martha Patricia González Nava, llenaban un formato los servidores adscritos a esta Fiscalía, por lo que, para ser recibidas por el Fiscal, firmábamos de antemano, éste formato, que posteriormente era llenado por un servidor público, el cual a su decir, se lo enviaría a la licenciada Fabiola Hernández Espíndola, luego entonces, este reporte **es unilateral**, afirmación que encuentra sustento en el expediente de la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01, indagatoria que hace prueba plena de las actuaciones irregulares de los servidores públicos en las que ha estado radicada la Averiguación Previa en comento.

Ahora bien, no es ocioso mencionar que con fecha 13 de enero de 2016 al acudir, Carolina González Nava y Julio Cesar González Nava, a audiencia con la Fiscal Maribel Bojorges Beltrán y ratificación de escrito; con la finalidad de solicitar se investigara y se actuara conforme a derecho, la denuncia de atentado en contra de la vida de Julio Cesar González Nava, hechos denunciados en la Carpeta de Investigación CI-FMC/MC-2/UI-2/C/D/00772/121-2015, misma audiencia en **la Fiscal Desconcentrada de investigación en Magdalena Contreras Maribel Bojorges Beltrán y el Responsable de Agencia en la Coordinación Territorial MC-2 Licenciado Jorge Ángel Santiago Reyes**, dándole éste, instrucciones a el

¹ Es importante señalar que la primera audiencia pública fuimos escuchados los suscritos: Julio Cesar González Nava y Carolina González Nava por la licenciada Fabiola Hernández Espíndola en fecha siete de agosto de 2014, relatándole los hechos fuera de todo cause constitucional, ocurridos en fecha 23 de mayo de 2014 en la oficina del Fiscal Desconcentrado de Investigación en Magdalena Contreras.



— 2001 OF
— 1995 DE K
— 1990 DE AC
— 1985 DE AC

1995 DE K
1990 DE AC
1985 DE AC
1980 DE AC
1975 DE AC
1970 DE AC
1965 DE AC
1960 DE AC
1955 DE AC
1950 DE AC
1945 DE AC
1940 DE AC
1935 DE AC
1930 DE AC
1925 DE AC
1920 DE AC
1915 DE AC
1910 DE AC
1905 DE AC
1900 DE AC
1895 DE AC
1890 DE AC
1885 DE AC
1880 DE AC
1875 DE AC
1870 DE AC
1865 DE AC
1860 DE AC
1855 DE AC
1850 DE AC
1845 DE AC
1840 DE AC
1835 DE AC
1830 DE AC
1825 DE AC
1820 DE AC
1815 DE AC
1810 DE AC
1805 DE AC
1800 DE AC
1795 DE AC
1790 DE AC
1785 DE AC
1780 DE AC
1775 DE AC
1770 DE AC
1765 DE AC
1760 DE AC
1755 DE AC
1750 DE AC
1745 DE AC
1740 DE AC
1735 DE AC
1730 DE AC
1725 DE AC
1720 DE AC
1715 DE AC
1710 DE AC
1705 DE AC
1700 DE AC
1695 DE AC
1690 DE AC
1685 DE AC
1680 DE AC
1675 DE AC
1670 DE AC
1665 DE AC
1660 DE AC
1655 DE AC
1650 DE AC
1645 DE AC
1640 DE AC
1635 DE AC
1630 DE AC
1625 DE AC
1620 DE AC
1615 DE AC
1610 DE AC
1605 DE AC
1600 DE AC
1595 DE AC
1590 DE AC
1585 DE AC
1580 DE AC
1575 DE AC
1570 DE AC
1565 DE AC
1560 DE AC
1555 DE AC
1550 DE AC
1545 DE AC
1540 DE AC
1535 DE AC
1530 DE AC
1525 DE AC
1520 DE AC
1515 DE AC
1510 DE AC
1505 DE AC
1500 DE AC
1495 DE AC
1490 DE AC
1485 DE AC
1480 DE AC
1475 DE AC
1470 DE AC
1465 DE AC
1460 DE AC
1455 DE AC
1450 DE AC
1445 DE AC
1440 DE AC
1435 DE AC
1430 DE AC
1425 DE AC
1420 DE AC
1415 DE AC
1410 DE AC
1405 DE AC
1400 DE AC
1395 DE AC
1390 DE AC
1385 DE AC
1380 DE AC
1375 DE AC
1370 DE AC
1365 DE AC
1360 DE AC
1355 DE AC
1350 DE AC
1345 DE AC
1340 DE AC
1335 DE AC
1330 DE AC
1325 DE AC
1320 DE AC
1315 DE AC
1310 DE AC
1305 DE AC
1300 DE AC
1295 DE AC
1290 DE AC
1285 DE AC
1280 DE AC
1275 DE AC
1270 DE AC
1265 DE AC
1260 DE AC
1255 DE AC
1250 DE AC
1245 DE AC
1240 DE AC
1235 DE AC
1230 DE AC
1225 DE AC
1220 DE AC
1215 DE AC
1210 DE AC
1205 DE AC
1200 DE AC
1195 DE AC
1190 DE AC
1185 DE AC
1180 DE AC
1175 DE AC
1170 DE AC
1165 DE AC
1160 DE AC
1155 DE AC
1150 DE AC
1145 DE AC
1140 DE AC
1135 DE AC
1130 DE AC
1125 DE AC
1120 DE AC
1115 DE AC
1110 DE AC
1105 DE AC
1100 DE AC
1095 DE AC
1090 DE AC
1085 DE AC
1080 DE AC
1075 DE AC
1070 DE AC
1065 DE AC
1060 DE AC
1055 DE AC
1050 DE AC
1045 DE AC
1040 DE AC
1035 DE AC
1030 DE AC
1025 DE AC
1020 DE AC
1015 DE AC
1010 DE AC
1005 DE AC
1000 DE AC
995 DE AC
990 DE AC
985 DE AC
980 DE AC
975 DE AC
970 DE AC
965 DE AC
960 DE AC
955 DE AC
950 DE AC
945 DE AC
940 DE AC
935 DE AC
930 DE AC
925 DE AC
920 DE AC
915 DE AC
910 DE AC
905 DE AC
900 DE AC
895 DE AC
890 DE AC
885 DE AC
880 DE AC
875 DE AC
870 DE AC
865 DE AC
860 DE AC
855 DE AC
850 DE AC
845 DE AC
840 DE AC
835 DE AC
830 DE AC
825 DE AC
820 DE AC
815 DE AC
810 DE AC
805 DE AC
800 DE AC
795 DE AC
790 DE AC
785 DE AC
780 DE AC
775 DE AC
770 DE AC
765 DE AC
760 DE AC
755 DE AC
750 DE AC
745 DE AC
740 DE AC
735 DE AC
730 DE AC
725 DE AC
720 DE AC
715 DE AC
710 DE AC
705 DE AC
700 DE AC
695 DE AC
690 DE AC
685 DE AC
680 DE AC
675 DE AC
670 DE AC
665 DE AC
660 DE AC
655 DE AC
650 DE AC
645 DE AC
640 DE AC
635 DE AC
630 DE AC
625 DE AC
620 DE AC
615 DE AC
610 DE AC
605 DE AC
600 DE AC
595 DE AC
590 DE AC
585 DE AC
580 DE AC
575 DE AC
570 DE AC
565 DE AC
560 DE AC
555 DE AC
550 DE AC
545 DE AC
540 DE AC
535 DE AC
530 DE AC
525 DE AC
520 DE AC
515 DE AC
510 DE AC
505 DE AC
500 DE AC
495 DE AC
490 DE AC
485 DE AC
480 DE AC
475 DE AC
470 DE AC
465 DE AC
460 DE AC
455 DE AC
450 DE AC
445 DE AC
440 DE AC
435 DE AC
430 DE AC
425 DE AC
420 DE AC
415 DE AC
410 DE AC
405 DE AC
400 DE AC
395 DE AC
390 DE AC
385 DE AC
380 DE AC
375 DE AC
370 DE AC
365 DE AC
360 DE AC
355 DE AC
350 DE AC
345 DE AC
340 DE AC
335 DE AC
330 DE AC
325 DE AC
320 DE AC
315 DE AC
310 DE AC
305 DE AC
300 DE AC
295 DE AC
290 DE AC
285 DE AC
280 DE AC
275 DE AC
270 DE AC
265 DE AC
260 DE AC
255 DE AC
250 DE AC
245 DE AC
240 DE AC
235 DE AC
230 DE AC
225 DE AC
220 DE AC
215 DE AC
210 DE AC
205 DE AC
200 DE AC
195 DE AC
190 DE AC
185 DE AC
180 DE AC
175 DE AC
170 DE AC
165 DE AC
160 DE AC
155 DE AC
150 DE AC
145 DE AC
140 DE AC
135 DE AC
130 DE AC
125 DE AC
120 DE AC
115 DE AC
110 DE AC
105 DE AC
100 DE AC
95 DE AC
90 DE AC
85 DE AC
80 DE AC
75 DE AC
70 DE AC
65 DE AC
60 DE AC
55 DE AC
50 DE AC
45 DE AC
40 DE AC
35 DE AC
30 DE AC
25 DE AC
20 DE AC
15 DE AC
10 DE AC
5 DE AC
0 DE AC

C. Agente del Ministerio Público Galindo Ramírez Jorge Adrián, que cabe decir, atacó verbalmente a Julio Cesar González Nava al decirle que si el señor Alfredo Nava Gallegos "lo había intentado matar porque no lo había ya hecho", redactando en la comparecencia lo que él quería, siendo unilateral lo que este servidor público escribió -declaró- en esta misma comparecencia; estos servidores públicos, como lo es la Fiscal, el Responsable de Agencia y el C. Agente del Ministerio Público, defendieron y protegieron al señor Alfredo Nava Gallegos de hechos posiblemente constitutivos de delito de atentado en contra del bien jurídico como lo es la vida de Julio César González Nava.

En este contexto solicitamos a su vez copia certificada de la Indagatoria FPMPP/AEAM/T1/00700/15-10, y Carpeta de investigación CI-FMC/MC-2/UI-1 C/D/00255/03-2016, en la que Carolina González Nava y Martha Patricia González Nava, así como nuestra familia, hemos sido incriminados con fabricación de pruebas, mismas que pueden ser constatadas en actuaciones fuera de todo cause constitucional, de servidores públicos que han integrado las investigaciones de estas Carpetas de Investigación.

En las que incriminan a los suscritos éstos servidores públicos a cargo de las investigaciones en las Carpetas referidas en el párrafo anterior, mismos servidores públicos que están adscritos a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en conjunto con el Jefe Delegacional en Magdalena Contreras; el Director General de Jurídico y de Gobierno en la Delegación la Magdalena Contreras, el Subdirector de Atención a Emergencias y Riesgos Jonathan Román Rosas Cosío, adscrito en la Delegación Magdalena Contreras, la C. Beatriz Trejo Cruz Jefa de la Unidad Departamental de Concertación Vecinal en la Delegación La Magdalena Contreras; el ING. EDGAR A. LOPEZ HUERTA adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y de abogados particulares, Leopoldo Guijosa Salas² con número de cédula profesional 6964949; José Máximo Pérez Romero, con cédula profesional 2623836. Por lo que los Servidores Públicos y abogados particulares en comento, nos imputan hechos falsos de homicidio culposo por otras causas, lesiones,..., siendo interminables sus acusaciones, luego entonces, se actualiza persecución política, que ha implicado tortura en contra de Martha Patricia González Nava, Julio Cesar González Nava, Israel González Nava, Carolina González Nava, así como en contra de dos niños de seis y dos años de edad.

Las anteriores peticiones encuentran la fundamentación en el artículo 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos que establecen que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que en consecuencia, el Estado investigará, sancionará y reparará las violaciones a los derechos humanos; así, como el derecho a la información pública; asimismo, el artículo 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, menciona:

"Artículo 8. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte."

Familiar de él ex Delegado en Magdalena Contreras Héctor Guijosa Mora. Siendo este abogado, amigo del actual Delegado en Magdalena Contreras Fernando Mercado Guaida. También cuenta con Familiares en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; en el Gobierno de la Ciudad de México, y amigos en la Procuraduría General de la República, entre otras Instituciones no menos importantes.



"Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa por el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos."

En concatenación con lo anterior, es indispensable esta información, ya que los suscritos, tenemos el derecho de que se conozca la verdad de los hechos acontecidos en nuestro caso concreto, tal como tortura, vejaciones, humillaciones, violencia de género, intimidación, amenazas, persecución política...; por ello, es necesario que se conozca el motivo que dio origen a las conductas fuera de todo cause constitucional, violatorias de derechos humanos, desplegadas por servidores públicos que han estado implicados en estas "conductas especialmente gravosas".

Es importante mencionar que no solo estas conductas desplegadas de los servidores públicos implicados en graves violaciones a derechos humanos en contra de los suscritos; servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Delegación en Magdalena Contreras, ha derivado en afectación al principio del interés superior de la niñez.

Por lo expuesto y fundado a Usted C. **PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL**, respetuosamente:

Solicitamos:

PRIMERO. - Tenernos en los términos de este escrito.

SEGUNDO. - Solicitamos encarecidamente, que la petición de copias solicitadas en el presente escrito, sean remitidas al Juzgado Décimo Segundo en Materia Penal del Primer Circuito, para la sustanciación del Juicio de amparo número 627/2017.

TERCERO. - Encarecidamente solicitamos a Usted Ciudadano Procurador General de Justicia del Distrito Federal, de parte de esta persecución política y tortura, al Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, debido que en el caso concreto se ha actualizado delitos en términos de lo prescrito en el artículo 7º. Del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, norma reconocida en el ordenamiento jurídico del Estado mexicano en el artículo 21 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROTESTO LO NECESARIO

México, D.F. a 28 de diciembre de 2017

Atentamente


Martha Patricia González Nava


Carolina González Nava


Julio César González Nava.

SECRET



Magistrada Silvia Carrasco Corona, Presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

Presente.

Carolina González Nava y Martha Patricia González Nava, por propio derecho, en calidad de parte quejosa, ante usted, con el debido respeto, comparezco, y expongo:

Con fundamento en el artículo 104 de la Ley de Amparo, vengo a formular graves agravios que le causa a la parte quejosa el proveído dictado en el recurso de queja 162/2018, por medio del cual fue desechado por su Señoría en auto notificado el veinticinco y veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho¹, a la parte quejosa.

La parte quejosa acude en forma y tiempo ante este Tribunal Colegiado en Materia Penal a interponer Recurso de Reclamación. El proveído de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, fue suscrito y dictado por la Magistrada Silvia Carrasco Corona, Presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Retomando el artículo 104, segundo párrafo de la Ley de Amparo, mandata que el Recurso de Reclamación se interpondrá por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresaran los agravios, dentro del término de tres días al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. En este fundamento vengo a decir:

El acuerdo de trámite en el recurso de queja 162/2018 dictado por la Presidenta Magistrada, le causa graves agravios a la parte quejosa.

1. El acuerdo recurrido viola el artículo 74, 97, fracción I, inciso e), y 217 de la Ley de Amparo.

Para sustentar lo anterior la parte quejosa invoca la Tesis jurisprudencial: 1a. CXXXIX/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2012, página 494, al resolver el recurso de reclamación 126/2012, bajo el rubro y texto:

“RECLAMACIÓN. ES INOPERANTE EL AGRAVIO EN EL QUE SE ALEGA QUE EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO DEBIÓ SER PROCEDENTE ATENDIENDO A UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN UN ESCRITO DE ALEGATOS.

Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley de Amparo, las partes pueden ofrecer por escrito sus alegatos con la intención de fortalecer su punto de vista en el juicio, también lo es que aquéllos no forman parte de la litis constitucional, toda vez que la controversia se conforma con lo expresado en la demanda, su aclaración o ampliación, en su caso, con el acto reclamado y los informes justificados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. En esta lógica, resultan inoperantes

¹ El proveído materia de impugnación fue notificado de manera personal y por medio de listas a la parte quejosa, Martha Patricia González Nava y Carolina González Nava, el veinticinco y veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, respectivamente.



aquellos agravios hechos valer en el recurso de reclamación contra el auto de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que el recurrente argumenta que su recurso de revisión en amparo directo debió ser procedente atendiendo al tema de constitucionalidad planteado en su escrito de alegatos, ya que se refieren a una cuestión ajena a la litis constitucional, por lo que no combaten el auto recurrido ni demuestran que el análisis de la sentencia de amparo directo, a través del recurso de revisión, pudiera entrañar el estudio de un tema de constitucionalidad que justificara su procedencia.

Reclamación 126/2012. Félix Darío de la O Villanueva. 20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González". Lo resaltado es propio

Tesis jurisprudencial que dispone lo contrario al proveído materia de impugnación el cual menciona:

*"...la juzgadora de amparo proveyó de conformidad lo solicitado por la parte recurrente, ya que en torno a los alegatos esgrimidos señaló que tales manifestaciones se tomarán en consideración al momento de resolver el juicio en comento; asimismo, tocante a las pruebas documentales que adjuntó la parte quejosa al escrito presentado ante la A quo, se proveyó que se tenían por ofrecidas dichas probanzas, ello sin perjuicio de que pueda relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva."*²

Contrario a lo sostenido en el párrafo anterior, la parte quejosa ofreció su testimonial de forma escrita denominándola pruebas, la juez *a quo* lo calificó de alegatos.

El escrito fue ofertado como pruebas, pues la documental informe médico, expedido por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, demuestra que la suscrita se sometió a estudios científicos, elaborados por especialistas para determinar los daños físicos y psicológicos, esto hace a ésta documental prueba idónea, y un elemento de convicción, que bajo las reglas de la lógica y la sana crítica aporta evidencia al caso concreto, hechos notorios o públicos de la verdad de los hechos, invocando el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ("Protocolo de Estambul")⁴, debido a que las directrices que contiene este manual no se presenta como un protocolo fijo, estableciendo que deben utilizarse teniendo en cuenta los recursos disponibles, máxime que es probanza fidedigna.

Así tenemos que la parte quejosa plantea, que el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ("Protocolo de Estambul"), menciona que no se presenta como un protocolo fijo, asimismo el informe médico ofertado por la parte quejosa es idóneo para demostrar que el Estado mexicano a destruido deliberadamente no sólo el bienestar físico, psíquico y moral de la parte quejosa sino también, la dignidad y la voluntad, pues la víctima tuvo que acudir por atención especializada al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, derivado de los ataques sistemáticos altamente planificados a sangre fría, elaborados por la autoridad responsable, métodos de tortura semejantes a la técnica de la "gota de agua".⁵

² Antepenúltima hoja anverso y reverso, último párrafo y primer párrafo, respectivamente, del proveído materia de impugnación.

³ La parte quejosa anexa Carnet de consulta, en copia simple, para robustecer su dicho.

⁴ **Instrumento adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos**

⁵ la excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables son manifiestos, en el transcurso de cinco años con diez meses, la autoridad responsable en el presente caso actualiza día con día los atentados contra la vida, contra la integridad corporal y psicológica. Hechos que tienen relación con el juicio de amparo 651/2017

SECRET



DEPARTMENT OF
DEFENSE
OFFICE OF THE
SECRETARY

1

Ello es así, la parte quejosa en el escrito de pruebas, hace planteamientos lógicos y jurídicos que versan sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ("Protocolo de Estambul") en relación a la idoneidad de la prueba especializada (informe médico) adecuada para probar la testimonial de tortura, vejaciones, humillaciones, de castigos que han derivado en daños físicos, psicológicos y morales, actos reclamados a la autoridad responsable, esto hace, que en ningún momento, la parte quejosa haya manifestado y/o denominado en la demanda, ampliación, en el acto reclamado, en los conceptos de violación, designándolos alegatos. Máxime que la juez a quo, resolvió de forma idéntica el juicio de amparo 288/2017⁶, hecho notorio página 31 y 32, último párrafo y primer párrafo, respectivamente, de la Sentencia: "...Por otra parte, en relación con los alegatos presentados por la parte quejosa, debe decirse que no forman parte de la litis no serán tomados en consideración; al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1315 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1480, Tomo II, Apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, ..."

Por consiguiente la parte quejosa no ha presentado en el juicio de amparo citado al rubro alegatos.⁷

Así tenemos que, con apoyo a la tesis jurisprudencial citada en párrafos anteriores (punto 1), los alegatos no forman parte de la litis constitucional, toda vez que la controversia se conforma con lo expresado en la demanda, su aclaración, ampliación, con el acto reclamado y los informes justificados, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación, esto con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo.

En consecuencia, lógica y jurídica los alegatos son ajenos a la litis constitucional, por lo que genera un gravoso agravio el proveído materia de impugnación.

2. el auto recurrido causa un gravoso agravio a la parte quejosa, al resolver:

*"Luego, por lo que se refiere a la solicitud formulada en el sentido de que al momento de resolver el juicio de amparo, génesis del presente recurso, se tuviera a la vista como hecho notorio el diverso juicio de amparo 651/2017, la juzgadora federal señaló que en caso de estimar necesarias tales constancias para resolver, las tendría a la vista como hecho notorio."*⁸

El párrafo anterior causa grave agravio a la parte quejosa. El juicio de amparo indirecto citado al rubro es consecuencia lógica y jurídica inmediata del juicio de amparo 651/2017 (Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-019). Máxime que versan sobre la vía pública denominada Andador Tabaqueros, en la cual está asentada la vivienda de la tercera interesada (carpeta judicial 011/0384/2017), la fabricación de pruebas que descansa en la misma ilegalidad.

⁶ Quejosa Martha Patricia González Nava.

⁷ también es de decirse que el juicio de amparo 288/2017, la sentencia a pesar de ser de orden público no se le dio cumplimiento, en violación al proceso.

⁸ Hoja 2 reverso, párrafo 2, de la resolución materia de impugnación.

⁹ Ello es así, el juicio de amparo indirecto 651/2017, la tercera interesada, sus familiares, abogados particulares, figuras políticas, la autoridad responsable llevan a cabo todos los actos, día con día, con el objetivo de que **la vivienda que habita la parte quejosa se derrumbe con la consabida pérdida de vidas.**

1944

1944

Ello es así, fuera de toda constitucionalidad la parte quejosa se ha visto superada, pues la destrucción del Estado de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables es manifiesto, prueba de ello, es la Carpeta de Investigación CI-FMC/MC-2/UI-1 C/D/00753/12-2015, la fabricación de delitos oficiosos de la tercera interesada, sus familiares, abogados particulares de ésta y figuras políticas en conjunto con la autoridad responsable y otras autoridades han planificado graves violaciones sistemáticas, hechos que tienen correlación con juicio de amparo citado anteriormente.

En este orden de ideas, sin el juicio de amparo 651/2017 no puede explicarse dentro de una lógica formal, el por qué la autoridad responsable en abuso del derecho, con la intención de dañar a la parte quejosa, en violación a la función social del derecho, ha planificado graves violaciones sistemáticas en el presente caso, los motivos inaceptables que implica un abuso de la institución del Ministerio Público como medio para destruir el proyecto de vida, con el objetivo de exterminio, la parte quejosa ha sido torturada, humillada, con la amenaza constante de pérdida de la libertad o de la vida, en violencia institucional y de la comunidad, precedente que debe ser analizado en instancia constitucional, con el objetivo de que no se vuelva a repetir estas graves violaciones sistemáticas a un caso similar, por un largo periodo de cinco años con diez meses que se advierte *ad infinitum*, a alguna persona por considerar que se encuentra en desigualdad estructural o discriminación estructural frente a la autoridad responsable, figuras políticas, conformando un grupo de poder que en conjunto con los habitantes del Andador Tabaqueros, con total impunidad han destruido el Estado de Derecho¹⁰.

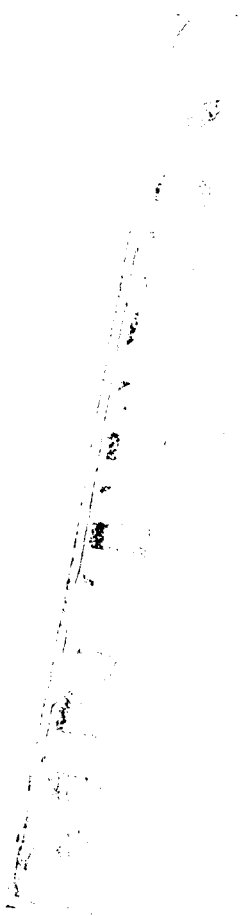
El juicio de amparo 651/2017 representa la notoriedad de la certeza del hecho, de la permisión y aquiescencia de graves violaciones a derechos humanos de la autoridad responsable Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, de la fabricación de delitos en contra de las suscritas, pues el individuo no puede ser usado como medio en beneficio de otros, desconociendo el respeto a la dignidad humana, pues el Derecho y las instituciones son instrumentos del orden social por ende no puede ser usado con la intención de dañar.

3. Acorde con estas razones, el proveído materia de impugnación causa un gravoso agravio que irroga total estado de indefensión, al tener por desechada por improcedente el recurso de queja citado al rubro, pues se resuelve:

“En este sentido, se pone de manifiesto que el auto recurrido no reúne los requisitos de procedencia contenidos en el precitado inciso e) del numeral señalado, de la ley especial de la materia, pues se insiste, no es de

¹⁰ Teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos por un periodo de cinco años con diez meses, graves violaciones sistemáticas, que conforma una historia de torturas, vejaciones humillaciones, fabricación de delitos, erigiéndose en un Tribunal que ha impuesto penas inusitadas, castigos. Hechos ocurridos en un lugar determinado. El Estado obligado a garantizar, las condiciones jurídicas para la no vulneración del Derecho imperativo, lo permite, destruyendo el Estado de Derecho, contraviniendo todo ordenamiento en materia de los Derechos Humanos, tratados, convenios, suspendiendo derechos fundamentales inderogables, sin garantías de debido proceso... en el caso concreto. Es válido mencionar el principio de la carga de la prueba es dependiente del acceso a la justicia en condiciones de igualdad, lo que obliga a los órganos jurisdiccionales del país a que está sea impartida con perspectiva de género, a observar la desigualdad estructural del actor frente al Estado, que al destruir el derecho, ha impuesto discriminación estructural de iure, pues no importa las pruebas aportadas, la invocación de Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, es como si estos no existieran, pues la parte quejosa ha sido despojada de derechos fundamentales inderogables, sin garantías de debido proceso.

En el caso de la mujer al instar acceso a la justicia, obliga al juzgador a impartir justicia observando los intereses que están en juego, aplicar la herramienta de perspectiva de género, **pues las argumentaciones de la parte actora son ciertas, las probanzas públicas lo demuestran**, juicio de amparo 651/2017, el informe médico especializado, informes justificados...



naturaleza trascendental y grave, porque como se vio, la jueza federal proveyó de conformidad con lo solicitado por la parte quejosa; y si bien pudiera darse el caso de que al momento de dictar la sentencia correspondiente en dicho juicio, el resultado no fuera satisfactorio para la parte quejosa, queda expedito su derecho para interponer el medio de impugnación que en derecho proceda.” Párrafo tercero, hoja 2 reverso, del Proveído materia de impugnación.

Contrario a lo anterior es de naturaleza trascendental y grave, conduce a considerar en el caso el impacto que la decisión que se arribe no es reparable en medio de impugnación que en derecho proceda, pues los alegatos no forman parte de la litis constitucional, hecho notorio la tesis jurisprudencial citada en párrafos anteriores de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo.

Jurisprudencia que es válido volver a reiterar por lo gravoso del agravio que causa el proveído materia de impugnación:

Tesis, 1a. CXXXIX/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2012, página 494, al resolver el recurso de reclamación 126/2012, bajo el rubro:

“RECLAMACIÓN. ES INOPERANTE EL AGRAVIO EN EL QUE SE ALEGA QUE EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO DEBIÓ SER PROCEDENTE ATENDIENDO A UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN UN ESCRITO DE ALEGATOS.”

Acorde con los razonamientos anteriores la parte quejosa no tiene certeza jurídica si la juez A quo tendrá este juicio de amparo (651/2017) como hecho notorio. Máxime que la jurisprudencia citada anteriormente robustece que los alegatos no forman parte de la litis constitucional, y en consecuencia lo acordado por la juez a quo, impugnado en el recurso de queja 162/2018 no es reparable en recurso de revisión.

Luego, el proveído materia de impugnación, causa un gravoso agravio a la parte quejosa, de tal forma que nos deja en un ilegal estado de indefensión e inseguridad jurídica.

Suplencia de la queja

A la luz del artículo primero de la Constitución y del numeral 1o. de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, solicitamos a este órgano de control constitucional, la suplencia de la queja, esto, con fundamento en el artículo 79, fracción III, *in fine*, de la Ley de Amparo, que menciona:

“...la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio”

Figura procesal, que contrarresta el grado de vulnerabilidad, a una interpretación *pro homine*, intensificado al derecho del debido proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹², en aras de la protección de los más débiles (*favor debilis*), el daño al proyecto de vida: el derecho a la existencia comprende condiciones mínimas de una vida digna, de seguridad, certeza jurídica e integridad de la persona humana.

¹¹La notoriedad de la certeza del hecho, que conforma este juicio de amparo, de la permisión de graves violaciones a derechos humanos de la autoridad responsable Procurador General de Justicia de la Ciudad de México.

¹² Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 70, y Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, párr. 115



Asimismo, intensifica el principio de progresividad, el deber de aplicar el Derecho Internacional en materia de derechos humanos, pues el estado de excepción de derechos fundamentales no es permitido ni siquiera en conflictos armados (Convenios de Ginebra)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en pronunciamiento en el *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala*, es clarificador del presente caso, la comprensión del principio de interdependencia de los derechos humanos: el proyecto de vida es consustancial del derecho de la existencia, que requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad, e integridad de la persona humana¹³:

El proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a la libertad, como derecho de cada persona a elegir su propio destino. (...) El proyecto de vida envuelve plenamente el ídeal de la Declaración Americana [de los Derechos y Deberes del Hombre] de 1948 de exaltar el espíritu como finalidad suprema y categoría máxima de la existencia humana⁴.

Por lo anteriormente, expuesto y fundado a Usted **Magistrada Silvia Carrasco Corona, Presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal**; actualmente Ocurro y pido:

Único. - Tener por presentado el presente recurso de reclamación.

PROTESTO LO NECESARIO

Carolina González Nava

Martha Patricia González Nava

Ciudad de México a 01 de octubre de 2018

³ *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala*

1947



1947

**LICENCIADA ANA LUISA HORTENSIA PRIEGO ENRÍQUEZ, JUEZA
DECIMOTERCERA DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.**

Presente.

000302

Carolina González Nava, por propio derecho, en mi calidad de representante común de la parte quejosa, en el amparo al rubro citado, ante usted, con el debido respeto, comparezco, y expongo:

Mediante el presente escrito vengo a formular ampliación de demanda de amparo, que resulta del informe justificado y las documentales que se anexan al mismo y las causales de improcedencia que menciona la autoridad responsable¹, informe rendido ante su Señoría en el juicio de amparo citado al rubro.

En este orden de ideas, estando en el plazo de quince días, en referencia en auto notificado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, a efecto de solicitar a su Señoría, tenga a bien, tener por esta parte quejosa, solicitud de ampliación de demanda de amparo.

En esta guisa, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 108 de la Ley de Amparo, que menciona que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito, en la que se expresará:

I. El nombre y domicilio del quejoso: Carolina González Nava, Martha Patricia González Nava, Julio César González Nava, quedando establecido el domicilio en el escrito inicial de demanda.

II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad: Bajo protesta de decir verdad no lo conozco.

III. La autoridad responsable: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. acto u omisión que de la autoridad se reclame:

- a) La carta ciudadano, con número de identificación 20180313GONCM1.
- b) La violación indirecta administrativa de incumplir con sus obligaciones y facultades de naturaleza "erga omnes" de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna en el caso concreto.

Al respecto, Héctor Gros Espiell, define el "respeto" como "la obligación del Estado y de todos sus agentes, cualquiera que sea su carácter o condición, de no violar, directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, los derechos y libertades reconocidos en la Convención".²

¹ Con apoyo en la Tesis: P./J. 8/2018 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno, Libro 53, abril de 2018, Tomo I, pág. 10, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro 2016652, bajo el rubro: "**DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO.**"

² Héctor Gros Espiell, *La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Análisis comparativo*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1991, p. 65.

STANTONS

STANTONS

El inejercicio de las facultades de la autoridad responsable y su conducta omisiva refleja una actitud de indiferencia ante el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución le impone, pues abandona sus obligaciones *erga omnes* y soslaya el bienestar social que supone observar ese deber, máxime si con ello se pretende evitar un daño al orden público o al interés social, ocasionado precisamente por el incumplimiento a su obligación. Afirmar lo contrario, es secundar una conducta ilegal y contribuir a la impunidad³, sin que sea justificable afirmar, que las graves violaciones a derechos humanos sean comparables a la recuperación del bien del dominio público Andador Tabaqueros.

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación:

La conducta ilegal de la autoridad responsable es incongruente con el acto reclamado, viola indirectamente por omisión los derechos humanos de la parte quejosa, en la medida que permite el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos inderogables en el caso concreto.

Asimismo, el acto de autoridad, La carta ciudadano, con número de identificación 20180313GONCM1, viola derechos humanos, mismas que ha incumplido la autoridad responsable Presidente de la República para la restauración de la legalidad en el presente caso que le garantiza la Constitución y diversos Tratados Internacionales celebrados por México, la responsabilidad que tiene de vigilar y promover el respeto a los tratados internacionales en materia de los Derechos Humanos contempladas en la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos por la Organización de la Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos⁴

VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame:

Artículos 1, 14, párrafo segundo, 16, 17, párrafo segundo, 22, párrafo primero, 29, párrafo primero, segundo y tercero, 89, fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII. Si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo 1o de la Ley de Amparo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida:

Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIII. Los conceptos de violación:

³ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la falta de debida diligencia ante actos de violencia genera impunidad, y que ésta a su vez propende nuevos incidentes de la misma violencia que debía ser eliminada⁸¹ En particular, cuando los delitos de violencia, tanto aquéllos cometidos por particulares como por agentes del Estado, quedan impunes, se perpetúa la violencia, ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos y se crea una espiral de impunidad. También se ha corroborado que la impunidad que rodea la mayor parte de los actos de violencia contribuye a su repetición.⁸² **Esta impunidad es en sí misma una forma de discriminación en el acceso a la justicia**⁸³. Lo subrayado es propio. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de derechos humanos en México, 2015, página 47, párrafo, 63.

⁴ **Carta de la Organización de los Estados Americanos**

Capítulo II
PRINCIPIOS

Artículo 3

Los Estados americanos reafirman los siguientes principios:

1) Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.



LOCALITE DE
DIXEIL, 5513
CARRA DE DIXEIL
P. 1000-5A

100

Según se desprende de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas reconocidos por el ordenamiento constitucional y los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, se prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Entonces, en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico, tiene dos fuentes primigenias: (i) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; y (ii) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República.

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Formalizando que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación.

Pues los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Presidente de la República que estén de acuerdo con la Constitución, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Luego si el Gobierno de la Ciudad de México ha impuesto un Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables en el presente caso, este es ilegal, a pesar de cualquier Ley, Reglamento o Constitución Local que se pueda invocar.

En el ordenamiento interno el artículo 29 de la Constitución regula la Suspensión de Garantías, confiriéndole obligaciones y facultades solamente al "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona."

Asimismo, "En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos."

"La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación."

El Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos que sólo pueden ser trastocados por actos ejecutivos formales, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.

El estado de excepción de derechos fundamentales inderogables es severamente inaceptable a la luz de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, derechos fundamentales que tienen calidad de normas de derecho imperativo, instrumentos internacionales.

UNIT NIS



Al respecto, el artículo 89 fracción X⁵ de la Constitución, se desprende que son facultades y obligaciones del Presidente de la República **denunciar**, suspender, **retirar reservas**, en el que observará en lo concerniente la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos

En esta medida el artículo 89 fracción X de la Carta Magna en relación al artículo 26 y 27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados, la necesidad del respeto, la protección y promoción a los derechos humanos inderogables, derechos que existen con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado mexicano que imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional, los Estados Partes “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”⁶, hecho que se clarifica en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

“Estos derechos inderogables –y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes –, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran”⁷

Asimismo, se desprende que el artículo 89 fracción X de la constitución, menciona que es el Presidente de la Republica observará los principios normativos de denunciar y retirar reservas, tal como lo señaló Hernán Montealegre:

“...por ser los derechos humanos una materia de carácter internacional, sustrayendo a la sola jurisdicción doméstica del Estado, es de legítimo interés de la Comunidad de Naciones la eventualidad de su suspensión, de la que es elemento integrante la causal que la justifique. Esto significa que la determinación objetiva de la existencia o inexistencia de un peligro nacional como circunstancia que un gobierno invoque para suspender el ejercicio de los derechos humanos es también una materia de competencia internacional”⁸

⁵ Artículo 89. “Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
[...]

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; **el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos** y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;”

⁶ Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados.

Artículo 27 El derecho Interno y la observancia de los Tratados

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46

⁷ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981, nota 76 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

⁸ Hernán Montealegre Klenner. La Seguridad de los Estados y los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Editorial: Edición Academia de Humanismo Cristiano, 1979.

1941

APR 1941
1941
1941
1941

1941

Luego es procedente el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pues de conformidad con el ordenamiento interno y convencional que le impone imperativamente por ser los derechos humanos una materia de carácter internacional, **obligaciones, siendo parte de sus funciones, velar que el Estado Mexicano respete, proteja y promueva los derechos humanos de las personas**, en el que el Gobierno de la Ciudad de México ha invadido y sobrepasado sus funciones, en relación al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte quejosa ha acudido a instancia constitucional por un periodo de un año con diez meses con las autoridades locales, a excepción del juicio de amparo 260/2018 la autoridad responsable es el Secretario de Gobernación, juicios que son hechos notorios de un Estado formal de excepción de Derecho, y suspensión de derechos fundamentales inderogables con graves violaciones procesales.

Le genera obligaciones mismas que ha incumplido a la autoridad responsable Presidente de la República para la restauración de la legalidad en el presente caso que le garantiza la Constitución y diversos Tratados Internacionales celebrados por México, la responsabilidad que tiene de vigilar y promover el respeto a los tratados internacionales en materia de los Derechos Humanos contempladas en la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos de la Organización de la Naciones Unidas.

El presente caso no se acude a juicio constitucional con razones absurdas, tal como la autoridad responsable pretende minimizar este Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables al declarar que el caso concreto se constriñe a la recuperación de la vía pública denominada Andador Tabaquero.

Es lógico afirmar que las graves violaciones a derechos humanos no van a cesar, si la autoridad responsable afirma que la parte quejosa acude a juicio de amparo con éste razonamiento ilógico y antijurídico que no da luz al presente caso, los juicios de amparo 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 260/2018 substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito son hechos notorios (inusitado y vergonzoso) que tienen relación, no sólo a esta vía pública, la detonante para que el Gobierno de la Ciudad de México decretara de forma ilegal, Estado de excepción de Derechos y suspensión de derechos fundamentales inderogables **fue el escrito de seis de mayo de dos mil catorce dirigido al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por analogía** vale traer a colación, la autoridad responsable pretende de forma sistemática que la parte quejosa acuda a que se le torture, o quizá al perfeccionar estos métodos exista una desaparición forzada al acudir a solicitar *ad infinitum* acceso a la Justicia ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cabe recordar que con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce la parte quejosa le fueron aplicados castigos prohibidos por normas imperativas de derecho internacional, tortura, humillación, intimidación, coacción, hechos denunciados al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, más una y otra vez al acudir a las agencias del Ministerio Público de forma sistemática las humillaciones, interrogatorios, amenazas eran manifiestas, poco a poco (semejante a la tortura de la “gota de agua”) fueron perfeccionando su técnica hasta que con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis en interrogatorio en la agencia del Ministerio Público la suscrita fue torturada con aquiescencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México⁹, del Procurador General de Justicia de la

⁹ Ataques sistemáticos y flagrantes que pueden constituir delitos de lesa humanidad, pues la parte quejosa no es el único caso en que el Ministerio Público como práctica “normal en interrogatorio”, haciendo imputaciones falsas aplica tortura, veja, humilla, coacciona, amenaza como forma de castigo para que la víctima pierda su libertad, le sea destruido su proyecto de vida, la salud física y psicológica, por motivos políticos, por “ordenes” de figuras políticas, por odio manifiesto, por motivos de género, por discriminación (persecución objetiva), se violenta el derecho de defensa, el debido proceso..., que concluyendo se busca

STENNIS

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Ciudad de México¹⁰, sin que a la fecha se restaure el Estado de Derecho y cese la aplicación ilegal del estado de excepción de derechos fundamentales inderogables.

Es válido preguntar a la autoridad responsable qué trasfondo tiene la ilegal respuesta violatoria de derechos humanos inderogables:

"le brindamos información de la oficina a la que deberá acudir"

Coordinación General de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México...

Cabe traer a colación el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ("Protocolo de Estambul")¹¹, menciona que no se presenta como un protocolo fijo, asimismo el informe médico ofertado por la parte quejosa es idóneo para demostrar que el Estado mexicano a destruido deliberadamente no sólo el bienestar físico y emocional de la persona sino también, la dignidad y la voluntad, pues la víctima tuvo que acudir por atención especializada al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, por los ataques altamente planificados a sangre fría, que son similares a la tortura de la "gota de agua", la excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables son manifiestos, en el transcurso de un año con nueve meses en juicio constitucional, no se ha establecido el orden jurídico en el presente caso, en el que se actualiza día con día los atentados en contra la vida, y la integridad corporal y psicológica.

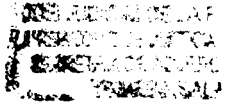
La probanza de informe médico demuestra que la suscrita se sometió a estudios científicos, elaborados por especialistas para determinar los daños, esto hace a ésta documental prueba idónea, y un elemento de convicción, que bajo las reglas de la lógica y la sana crítica aporta evidencia al caso concreto, hechos notorios o públicos de la verdad de los hechos, esto con apoyo del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ("Protocolo de Estambul"), debido a que las directrices que contiene este manual no se presenta como un protocolo fijo, estableciendo que deben utilizarse teniendo en cuenta los recursos disponibles, máxime que es probanza fidedigna.

Ello es así, el acto de la autoridad responsable destruye el Estado de Derecho, no conforme con los graves daños físicos y psicológicos que han derivado de estos ataques flagrantes y sistemáticos a derechos fundamentales inderogables del Estado mexicano, declara que acudamos de nueva vez con la misma autoridad, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo que es análogo a permitir, la tortura de la "gota de agua", por la semejanza con el presente caso.

el exterminio de la parte quejosa. En sí mismo el Ministerio Público, sus agentes en el caso concreto son un medio idóneo de represión, de exterminio. Es prueba de esta afirmación que en el año de dos mil trece la parte quejosa acudió a denunciar ante el Ministerio Público que la vivienda que habitamos presentaba daños en su estructura, a un año de obstrucción a la justicia, seis de mayo de dos mil catorce, la suscrita dirigió escrito de denuncia al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para castigar a la parte quejosa por seguir insistiendo en estas denuncias, con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se decretó suspensión de derechos fundamentales inderogables ad infinitum....

¹⁰ Sin dejar de mencionar que con fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete ante un Tribunal de delitos oficiosos (Unidad de Gestión número 11, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, preparo un representación de un juicio oral, en la que imputan delitos a una edificación que se encuentran de forma ilegal sobre la vía pública Andador Tabaqueros, por un monto de seis mil ochocientos pesos, juicio al que asistieron, personas y autoridades que actualizan día con día delitos de lesa humanidad, pues buscan el exterminio de la parte quejosa, prueba de ello es el delito de tracto sucesivo que el Estado mexicano permite, pues se puede derrumbar la vivienda de la parte quejosa.

¹¹ Instrumento adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. fuente: http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=290



2

La aplicación ilegal de los estados de excepción trae aparejadas graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, en el caso concreto la excepción de un Estado Constitucional, ha sido la "normalidad":

Cuando acontece violación sistemática de derechos humanos por un periodo de cinco años, con nueve meses, en la que los juicios de amparo 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018, han sido substanciados con graves violaciones procesales, hechos que han sido denunciados a la autoridad responsable en el presente juicio tal como acontece en el juicio de amparo 260/2018, la autoridad responsable (Secretario de Gobernación), tiene pleno conocimiento de estas violaciones procesales, pues propugna de que ello sea así, al contrario de manifestarse como Garante de un Estado Constitucional, se ha conducido con ilegalidad. La ilegalidad deviene en el presente caso con falsos argumentos, discriminatorios, hasta leer el informe justificado de la autoridad responsable, pues permite la suspensión de un Estado de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, ilegalmente pretende conformar un "engaño", en juicio constitucional, el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone límites al poder de los Estados Partes para suspender derechos y libertades, estableciendo que hay algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna circunstancia incluyendo en este grupo las "garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos", esto con fundamento en el artículo 8.1 y 25¹² de la misma Convención.

La autoridad responsable aparta su conducta de la legalidad a la que en todo momento debe ceñirse.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en opinión consultiva OC-8/87, que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Que "los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia."¹³

La corte Interamericana de Derechos Humanos en ésta opinión consultiva, menciona que el artículo 25.1, es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, que debe ser un procedimiento judicial sencillo y breve que tiene como objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, máxime, lo son los que estén señalados de manera expresa en el artículo 27.2 como no susceptibles de suspensión¹⁴

Sigue diciendo que el recurso de amparo constituye el instrumento más idóneo no sólo para corregir con prontitud los abusos de la autoridad, siendo un medio eficaz para prevenir la tortura y otros apremios físicos y psicológicos. Es importante destacar que en el presente caso, por un periodo de un año, con diez meses, se han suspendido los medios y recursos legales efectivos para hacer valer sus derechos de la parte quejosa.

Las medidas adoptadas por el Estado en el presente caso es una desviación a la legalidad en abuso de poder desmedido, luego, la figura procesal del amparo es una garantía judicial indispensable para la protección de los derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Luego la autoridad responsable vulnera los artículos 1.1, 8.1, 25 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 4 del Pacto

12

¹³ Párrafo 25, página 9.

¹⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 32, página 10.

SIN TEXIO

111

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 1, 14, 16, 17¹⁵, 29, 89, fracción X, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. pues declara que debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa:

El Estado tiene límites a su actuar pues La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano expresaba en su artículo 4 que:

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley.

Esto es, "el sentido de la palabra **leyes** dentro del contexto de un régimen de protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y del origen de tal régimen. En efecto, la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal."

En este contexto, sigue diciendo la Corte que, "no es posible interpretar la expresión **leyes**, utilizada en el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual " los derechos esenciales del hombre... tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos ".¹⁶

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la obligación que está a cargo de todo Estado Parte en la Convención de " respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y (de) garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción " (art. 1.1). De esa obligación general se deriva el derecho de toda persona, prescrito en el artículo 25.1, " a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención ".¹⁷

Pues la institución procesal del amparo contenido en el artículo 25 de la Convención, lo establece como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales, que igualmente, en términos amplios, menciona la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas

¹⁵ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido la categoría de norma del *ius cogens* al derecho al acceso a la justicia "...El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes...". Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, serie, C, núm. 153, numeral 131. Cfr. Voto razonado del juez A. A. Cancado Trindade, p. 22, numeral 64. Cfr. Corte I.D.H., Almonacid y Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, voto razonado del juez A.A. Cancado Trindade, serie C, núm. 154, p. 7, numeral 22.

¹⁶ Opinión Consultiva OC-6/86, Corte interamericana de Derechos Humanos, "La expresión "Leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", párrafo 26

¹⁷ Opinión Consultiva OC-9/87, "Garantías Judiciales en Estados de emergencia (arts. 27.2, 25 Y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos) párrafo 22.

12-1-1964

12-1-1964

sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. De donde concluye, **a fortiori**, que el régimen de protección judicial dispuesto por el artículo 25 de la Convención es aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia¹⁸

La invocación de los preceptos Constitucionales y los tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos en el presente caso, han sido insuficientes para evitar las violaciones a derechos humanos, luego el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables ha sido impuesto *ad infinitum*, estas medidas en el presente caso han sido exitosas, el estado de represión es abrumador, la parte quejosa ha sido torturada, intimidada, coaccionada, incriminada, amenazada con pérdida de la vida y de la libertad, vejada, humillada, en innumerables ocasiones. Con aquiescencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de la Contraloría General de la Ciudad de México, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Federal de Defensoría Pública (Licenciada Yasmín Rosales Muñoz) que en conjunto con figuras políticas,¹⁹ y ahora con la autoridad responsable hacen del presente caso un Estado de excepción de Derecho y suspensión de Derechos Fundamentales inderogables.

De manera lógica, de manera alguna, esta excepción de Estado de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables ha sido local, las Instituciones y las autoridades federales han coadyuvado a ésta excepción con aquiescencia hacia las autoridades locales que se han conducido con total ilegalidad (destruyendo el Estado de Derecho) e impunidad en el caso concreto, es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Federal de Electricidad²⁰, el Instituto Federal de Defensoría Pública....

Luego, la autoridad responsable en acto discriminatorio declara que, "...los quejosos...en su caso deben acudir con las autoridades correspondientes en la Ciudad de México, para el efecto de plantear su problemática y se les pueda orientar sobre los medios de defensa que resulten procedentes."

Los quejosos a lo largo de cinco años, con nueve meses, hemos acudido con las autoridades correspondientes en la Ciudad de México²¹, tal como aparece en el

¹⁸ Párrafo 23, *idem*

¹⁹ La ex Delegada Leticia Omezada Contreras en la Magdalena Contreras y el actual delegado José Fernando Mercado Guaida, asimismo del titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de abogados particulares con nexos políticos tales como José Máximo Pérez Romero, Leopoldo Guijosa Salas, Javier Guijosa Rubio (familiares estos dos últimos abogados de ex delegado periodo 2006-2009 en Magdalena Contreras Héctor Guijosa Mora.

Asimismo, cabe hacer mención que según información de Acceso a la información Pública con No. de folio 0109000020318, con fecha 29 de enero de 2018, el Licenciado Javier Guijosa Rubio con cédula profesional 7623998, expedida por la Secretaría de Educación Pública en el año de 2012, es Policía en activo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Información que viene a colación, misma que está relacionada con el juicio de amparo 627/201, Anexo I, fojas 205-245, hechos que derivaron en delitos de lesa humanidad: tortura, persecución objetiva, etc.

²⁰ En escrito de fecha 13 de marzo de dos mil dieciocho, la parte quejosa declara que no sólo las autoridades pretenden que se derrumben nuestra vivienda, los habitantes del multicitado Andador Tabaqueros, específicamente el empleado federal de la Comisión Federal de Electricidad Diego Arturo Lara Nava (juicio de amparo 288/2017 y 651/2017, 627/2017, 260/2018), con connivencia de esta Empresa del Estado mexicano pretenden privarnos de energía de luz.

²¹ Un ejemplo de ello de discriminación, de suspensión de Estado de Derecho en la que supuestamente nos asesoraron diciendo que la tortura de fecha veintitrés de mayo de dos

CONTENTS

escrito de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, asimismo en juicio de amparo por un periodo de un año, con diez meses, un ejemplo de ello es el juicio de amparo 74/2018, que el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito inexplicablemente, después de conceder a la parte quejosa la suspensión de plano, tuvo por no interpuesta la demanda de amparo con las autoridades siguientes, Secretario de Gobernación, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, luego son hechos notorios de este Estado de excepción de derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables. Lo que hace al acto de la autoridad responsable discriminatorio y vulnera el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no basta declarar de forma indirecta²² que la parte quejosa es ignorante que no tiene derecho a instar un juicio de amparo, tal como pretende la autoridad responsable: suspender de forma formal las garantías judiciales para la protección y terminación del Estado de suspensión de derecho y el reconocimiento, cesación, sanción, indemnización y reparación de los derechos fundamentales conculcados.

Ahora bien, el principio de temporalidad, previsto en el artículo 27.1, menciona que las suspensiones son válidas “por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación,” por tanto en el presente caso, es la suspensión del Estado de Derecho que se ha prolongado *ad infinitum*, por un tiempo de cinco años, con nueve meses, en violación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4.2 y 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 29, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, es necesario mencionar probanzas idóneas de este “pacto criminoso”, con la finalidad de reseñar a groso modo las violaciones graves a derechos humanos, acaecidos en un “pueblo²³”, en la que acontecido hechos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, no se han controlado por la actitud del Gobierno de la Ciudad de México, y ahora de la autoridad responsable produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales inderogables de la parte quejosa. **Las propias autoridades que gobiernan, son la que han actualizado de forma directa e indirecta estas graves violaciones a derechos humanos que pueden constituir delitos de lesa humanidad.**

La afirmación del agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán, en fecha veintiséis de marzo de dos mil quince en las instalaciones pertenecientes a la Representación Social, que los habitantes del Andador Tabaqueros, *tenían el conecte en la Delegación, y que esto lo hacía primero, porque este caso lo había*

mil catorce que, *“el fiscal torturó porque había tenido un mal día”*, versión que volvió a declarar la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, expediente CDHDF/I/121/MC/14/D3673, tortura ejecutada por cinco autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en contra de la parte quejosa.

²² **Afirmación que se demuestra mediante una lógica formal, se declara en juicio de amparo que la parte quejosa que, “deben acudir con las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, para efecto de plantear su problemática y se les pueda orientar sobre los medios de defensa que resulten procedentes”. Ello es así, Esta parte quejosa debe acudir con las autoridades que han planificado delitos que pueden constituir de lesa humanidad, debido, a que en su caso se ha decretado Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, luego por deducción del absurdo, la autoridad responsable pretende que la parte quejosa pierda la vida, sin tener acceso al derecho humano de acceso a la justicia, mediante un recurso efectivo consagrado en el artículo 25 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.**

²³ Como lo denomina el agente del Ministerio Público, al dirigirse en forma despectiva a la suscrita en fecha veintiséis de marzo de dos mil quince



LIBRARY
DEPT. OF STATE
WASHINGTON, D.C.

1954

encargado el Procurador, después por su trabajo y por último porque nos conocía²⁴, denuncia dirigida al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México con fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince. (fojas 758 a 761 del Anexo I del juicio de amparo 288/2017, substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito.)

Siguiendo en este orden de ideas, con fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, en hechos que tienen conexión con el juicio de amparo 627/2017, substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, personal adscrito del Órgano Político en la Magdalena Contreras del Gobierno de la Ciudad de México²⁵, se presentó en la vivienda de la parte quejosa para amenazarnos con la finalidad de que acudiéramos a las instalaciones de éste Órgano Político, en la que según terceras personas afirmaron que seríamos detenidos por Policía de Investigación, hechos que se corroboran en el juicio de amparo anteriormente citado, pues los días 9, 10 y 11 de diciembre acudieron a tratar de detenernos al "pueblo²⁶" arbitrariamente, por lo que tuvimos que resguardarnos como en múltiples ocasiones han tratado de detenernos en las inmediaciones de nuestro domicilio²⁷ (hecho notorio es el juicio de amparo 349/2017, substanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito.)

En contexto con el párrafo anterior, el juicio de nulidad V-76315/2015 sustanciado en la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, constante de 409 (cuatrocientas nueve) fojas, es un hecho notorio de Estado de suspensión de derecho y de suspensión de derechos fundamentales inderogables, pues a éste juicio la parte quejosa tuvo acceso a las actuaciones²⁸ por medio de solicitud de acceso a la información pública, en la que se proporcionó copia simple con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, en consecuencia la parte quejosa intentó tener acceso a la justicia mediante juicio de amparo indirecto 74/2018, en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, más, se nos denegó este acceso, está probanza

²⁴ Negándose llanamente a llevar a cabo diligencias.

²⁵ En días posteriores (sábado veinticinco de agosto de dos mil dieciocho) a este escrito los habitantes del Andador Tabaqueros, golpearon los muros y estructura de la vivienda de la parte quejosa, subiendo a las azoas para gravar con una cámara al interior de la vivienda de la parte quejosa, al reportar estos hechos al número telefónico 911, el operador contestó que acudiera al Ministerio Público, cortando la llamada, hechos que se han repetido una y otra vez, otro ejemplo de ello las autoridades pertenecientes a seguridad pública (policías auxiliares abordó de patrullas) y al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras en conjunto con particulares, María Dolores Espinoza Bassoco (habitante de Andador Tabaqueros), acudieron al domicilio de la parte quejosa golpeando sus muros con mazos (dañándolos, a su vez, rompiendo tubería de drenaje), "mencionado que en cuanto salgan los detienen", observando la quejosa Carolina González Nava, que estos servidores públicos (del Órgano Político) y particulares con herramientas (mazos) llegaron al lugar de los hechos a bordo de un automotor con número de unidad ECO 366, hechos que se denunciaron a seguridad pública con número de folio 518962. Asimismo, los anexos del juicio de amparo 651/2017, demuestran que la parte quejosa denunció ante el Gobierno de la Ciudad de México, detonaciones de armas de fuego provenientes del Andador Tabaqueros. Asimismo, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Hechos que sólo son un ejemplo, mas, demuestra el estado de excepción de Derecho en el presente caso.

²⁶ Tal como es denominado por el Agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán, para dirigirse a la suscrita de forma peyorativa, al relatarle de viva voz la tentativa de homicidio que el señor Alfredo Nava Gallegos (habitante del Andador Tabaqueros), planeo en contra de uno de los quejosos, tratándolo de arrollar con el vehículo que conducía, burlándose, "en el pueblo no pasa nada".

²⁷ En días pasados en conjunto con seguridad pública a bordo de patrullas, servidores públicos pertenecientes al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras (autoridades pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México), que en compañía con un habitante del Andador Tabaqueros (María Dolores Espinoza Bassoco), golpearon con marros los muros de la vivienda que habita la parte quejosa, mencionando que en cuanto saliéramos nos detuvieran.

SINTEXLO

1000

es certeza plena del Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables.

En este juicio altamente planificado por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, juicio de nulidad²⁹ de recuperación del bien del dominio público Andador Tabaqueros en el que se tachó de ilegal el procedimiento administrativo PARA/LMC/DGJG/010/2015 (hojas 259 a 264 de este juicio de nulidad V-76315/2015) que ilegalmente nunca pretendió la autoridad demandada³⁰ llevar a cabo, pero sirvió para tener los motivos suficientes para planificar castigos que ni siquiera en conflictos armados está permitido (Convenios de Ginebra)³¹, hechos notorios del juicio de amparo indirecto 627/2017.

Es propicio en este punto, traer a colación el juicio de amparo indirecto 74/2018, substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, uno de los actos reclamados fue el juicio de nulidad en comento, del que se tuvo acceso a los autos por medio de solicitud de información pública con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, más el Juez a quo, resolvió en conjunto con el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (queja 28/2018), no tener por presentada la solicitud de demanda de amparo a pesar de que existía como uno de los actos reclamados la omisión de dar contestación al derecho de petición³².

Luego poco a poco, tal como acontece en la tortura de la "gota de agua", hasta que sobreviene la muerte de la víctima, es como el Estado Mexicano ha despojado a la parte quejosa de derechos fundamentales inderogables, que se cuenta entre uno de estos derechos al juicio de amparo por un periodo de un año con diez meses.

Las hojas enumeradas como 97 a 373 del juicio de nulidad V-76315/2015, fue entregado, previo pago de copias simples a la suscrita por la Oficina de

²⁹ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado la institución de la "cosa juzgada fraudulenta" utilizada en el caso *Carpio Nicolle y otros Vs Guatemala*²⁹ y en el caso *Gutiérrez Soler Vs Colombia*. En este último caso, el juez Sergio García Ramírez, en voto razonado, refiere a **sentencias que fueron dictadas de manera engañosa y que en realidad no pretenden hacer justicia sino simularla.**

³⁰ Jefe Delegacional en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida, y Director General Jurídico y de Gobierno en la Magdalena Contreras.

³¹ Castigos altamente planificados, tortura, denigración, humillación, incriminación, amenazas que en cualquier momento podemos perder la vida o la libertad, ejercieron acción penal ante un Tribunal de delitos oficiosos en el que con toda impunidad la Representación Social le mencionaba al Jefe de Control que vinculara a proceso por un daño a ésta vía pública en comento, presentándola en juicio como propiedad privada³¹, diciéndole que presentaba daños por filtración de agua, por un monto de seis mil ocho cientos pesos, entre otras violaciones procesales graves, pretendían que el Juez le arrebatara la libertad a los quejosos (pues han amenazado que al entrar a nuestro domicilio van a encontrar (fabricar) delitos graves), tal como la suscrita fue torturada en interrogatorio que le denominaron "preguntas especiales de esta Representación Social³¹", con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis en la que me interrogaban "que personas más habitan con usted el inmueble materia de los hechos...", a sabiendas que en todo momento los habitantes del Andador Tabaqueros nos gravan con cámaras de video al interior del domicilio de la parte quejosa,³¹, diciéndome que me declarara culpable, que pagara o declaraba culpable a la quejosa Martha Patricia González Nava, iban a entrar a nuestro domicilio....(juicio de amparo 627/2017)

³² Los actos reclamados conllevaban la causa y efecto del estado de excepción de Derecho y la suspensión de derechos fundamentales inderogables, no obstante que se señaló a las autoridades que tienen responsabilidad ineludible en el presente caso, autoridades responsables locales y federales, siendo una de ellas el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Uno de los actos reclamados En derecho de petición se le solicitó al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad responsable en el juicio de amparo 627/2017), que diera parte al Presidente de la República, la persecución política, tortura, actos preconcebidos, que buscan el exterminio de la parte quejosa, actualizando el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.



Información pública del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, conforman el expediente administrativo PARA/LMC/DGJG/010/2015, en la que se emitió Resolución Administrativa y Orden de Ejecución Para la Recuperación de Vía Pública del Distrito Federal (Andador Tabaqueros), prueba idónea de la destrucción del Estado de Derecho.

Es de resaltar las hojas con número 103 a 115; 121 a 122; 137 a 138; 160 a 165 169 a 175 del juicio de nulidad en comento, escritos de denuncia dirigidos al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el que en conjunto con los autos que conforman, Anexos I y V de los juicios de amparo indirecto 288/2017 y 651/2017³³, son hechos notorios de la responsabilidad del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el presente caso, luego causa un gravoso agravio que la autoridad responsable Presidente de la República firme que el presente caso sea de la competencia del Gobierno de la Ciudad de México, pues la actitud de éste Gobierno dista *ad infinitum* a un Estado de Derecho, pues ha planificado con un rotundo éxito graves violaciones a derechos humanos que conllevan exterminio de la parte quejosa, hechos notorios de la ilegalidad en su más puro vertiente son los innumerables juicios de amparo. Acudir de nueva vez a las Instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, aun cuando se niegan rotundamente a observar un Estado de Derecho, daría como resultado, aceptar que a la parte quejosa la vuelvan a torturar, privar de la vida o de la libertad, asimismo al acudir a estas Instituciones, entre las que se cuentan al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, es colaborar la propia víctima, a que en esta ocasión se de una desaparición forzada, lo cual de ninguna manera pasará, si la autoridad responsable tiene ese decreto, es de considerar que el presente caso sea expuesto a nivel Internacional, **de conformidad con el artículo 89 fracción X de la Constitución, bajo el Principio de notificación, inmerso en el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se expongan los hechos del presente caso, tomando en cuenta que el Estado de excepción aplicado a la parte quejosa, no es justificado**, obedece a razones espúreas, con la finalidad de **exterminio**, que hace del presente caso un precedente que debe ser analizado en instancia constitucional, tal como lo señaló Hernán Montealegre:

“...por ser los derechos humanos una materia de carácter internacional, sustraída a la sola jurisdicción doméstica del Estado, es de legítimo interés de la Comunidad de Naciones la eventualidad de su suspensión, de la que este elemento integrante la causal que la justifique. Esto significa que la determinación objetiva de la existencia o inexistencia de un peligro nacional como circunstancia que un gobierno invoque para suspender el ejercicio de los derechos humanos es también una materia de competencia internacional”³⁴

El Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos que sólo pueden verse trastocados por actos ejecutivos formales, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.

Resaltando que los derechos fundamentales no forman parte de la suspensión o restricción, mas existe plena inseguridad jurídica (“*habeas corpus*”³⁵).

Las amenazas de tortura, incriminación y por consiguiente pérdida de la libertad o de la vida son el pan de cada día, sin derechos la parte quejosa se atiene a la nada jurídica.

³³ el expediente de la averiguación previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01

³⁴ Hernán Montealegre Klenner. La Seguridad de los Estados y los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Editorial, Edición Academia de Humanismo Cristiano, 1979.

³⁵ En el sentido que el “*habeas corpus*” tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos



La gravedad de la violación sistemática a los derechos humanos consiste en los acuerdos entre órganos de gobierno, mediante los cuales comprometen el ejercicio de sus obligaciones y facultades jurídicas para afectar a la parte quejosa.

Las probanzas prueban que el origen de suspensión de derechos fundamentales inderogables, derivaron del escrito dirigido al Jefe de Gobierno de fecha, seis de mayo de dos mil catorce, con número de folio 023636.

En este orden de ideas, respecto a las graves violaciones a derechos humanos, la parte quejosa acude como hecho notorio a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado, en ejercicio de la facultad de investigación prevista, en el artículo 97 constitucional antes de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011. Cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el presente caso, ha ratificado la misma violación al derecho humano de acceso a la justicia, en el que se ha formalizado el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables; prueba de ello, como ahora acontece, es la denuncia de las graves violaciones a esta Institución en fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis; asimismo, existen múltiples denuncias de estas violaciones graves a derechos humanos, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la que en comparecencia directa y vía telefónica, a la suscrita se le informó, que no pasaba nada, en insólita respuesta el Director de Quejas, se burla: *"sólo están enojados porque no les hacen caso"*.

Las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos no han sido controlados y encauzados por los órganos del Estado, a través de los procedimientos ordinarios establecidos en la Constitución y en las normas secundarias para proteger los derechos fundamentales de la parte quejosa, hecho que prueba el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables.

En este orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis P.LXXXVI/96, Tomo II, junio de 1996, pág. 459, registro 200110³⁶, clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho.**

La definición del concepto de violaciones graves a derechos humanos se perfecciona con el **distanciamiento constitucional** que ha sido una constante en el presente caso.

El propio Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien haciendo caso omiso de su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución, ha violentado a la parte quejosa, pues su gobierno ha planificado graves agresiones sistemáticas en el presente caso, por un periodo de cinco años, con nueve meses.

³⁶ **"GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.**

Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis."

El Tribunal Pleno en la solicitud de ejercicio de facultad de investigación 2/2006, fallada en sesión de dieciocho de abril de dos mil seis, que clarifica los hechos antes expuestos, en la que se adujo lo siguiente:

“1) Que se trate de hechos generalizados, consecuentes a un estado de cosas, acaecidos en una entidad o región determinados.

2) Que se trate de acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas no se logren controlar por la actitud de la propia autoridad.

3) Que las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, sean las que producen o propician actos violentos, pretendiendo obtener de ellos una respuesta disciplinada.

4) Que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encausar las relaciones pacíficas de la comunidad o que sean indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

5) Que se intenta lograr la impunidad de las autoridades a través de la cultura del engaño, la maquinación y el ocultamiento que propicia la propia autoridad. Es preciso enfatizar que estos criterios son de orden estrictamente orientadores, pues se han venido definiendo casuísticamente con base en la problemática que ha atendido el tribunal y, como también puede apreciarse de lo descrito páginas atrás, los casos no han sido muchos en número, de manera que no podrían fungir como parangón abstracto y rígido para todo caso futuro.”

“Especificar cuándo se está ante una situación grave, al ser una cuestión de orden valorativa y sujeta a innumerables e indefinidas variables, no podría darse a priori o en abstracto, sino que habría de realizarse en función de los casos puestos a consideración del propio tribunal. Por ello la insistencia de que los criterios que en los últimos años ha sentado el Pleno de este tribunal son, más que hipótesis exactas a las que los casos futuros deban encuadrarse, referentes orientadores de lo que puede o ha sido considerado grave, en un momento histórico determinado. Junto a los supuestos de violaciones graves sobre los que las tesis de este tribunal bordan, mismas que fueron apuntadas en el capítulo considerativo anterior, cabría agregar, o puntualizar otras hipótesis, también de orden referencial u orientador, como serían:

1) La violación perpetrada por la autoridad estatal a las garantías individuales de un grupo de individuos;

2) La violación a garantías individuales, sin atender al número de personas a las que se les profirió directamente tal violación, sino a la manera sistemática en que la violación se realizó, mediando la existencia de un plan o intención específica de las autoridades; y

3) Una violación a garantías individuales de una persona en particular, a través de una acción concertada de las autoridades estatales, encaminada a romper los principios del federalismo, división de poderes, o estructura democrática, rectores de nuestro sistema jurídico constitucional.

4) Hechos que, generalizados o no, por sí mismos impliquen una amenaza al orden social al estado de derecho, a la convivencia misma de la sociedad”

Por consiguiente, en el caso concreto, las violaciones graves a derechos humanos inderogables, en el contexto de una denuncia de fecha seis de mayo de dos mil catorce ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México³⁷, de obstrucción de acceso a la justicia, allanamiento y daños que presenta muros y cimentación de la vivienda que habitan los quejosos provocada por un otrora andador peatonal reconvertido ilegalmente a un paso vehicular (vía cerrada ilegalmente al libre paso)

³⁷ Hoja 103 del juicio de nulidad V-76315/2015 Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; Anexo V juicio de amparo 651/2017; Anexo I, foja 578 a 585 juicio de amparo 288/2017.

CONTINUED

11

que no cumple con las mínimas normas de construcción para el uso que se le está dando.³⁸

Denuncia que con fecha seis de mayo de dos mil catorce la suscrita le dirigió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que fue la justificación perfecta para formalizar un Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables por un periodo de cinco años, con nueve meses, que ilegalmente la autoridad responsable pretende que sea *ad infinitum*, hasta que en seguimiento al plan preconcebido se extermine a la parte quejosa, hechos que ni siquiera en conflictos armados está permitido.

El estado de excepción reconocido en el artículo 29 del Derecho Constitucional Mexicano observa como ley el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (artículos 1 y 133 de la Constitución), no incluyen los efectos de solicitud de acceso a la justicia, en oposición con el poder del Estado arbitrario que en aquiescencia y connivencia con el poder particular en acciones incompatibles con la intención de someter a persona alguna a la acción de la justicia por delitos que pueden constituir de lesa humanidad, como circunstancias excepcionales que autorizan la puesta en vigor de medidas de "emergencia" en el presente caso.

En el presente caso en seguimiento a un plan preconcebido realizaron torturas psíquicas, vejaciones, humillaciones públicas, amenazas, incriminaciones, el cuadro clínico lo demuestra, informe médico, la suspensión de derechos fundamentales inderogables no está sujeto a control legal alguno, la indefensión es *ad infinitum*, en vulneración a los mínimos establecidos en la legislación interna, así como los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por México.

En este contexto la autoridad responsable pretende que la parte quejosa acuda ante el perpetrador que ha actualizado graves violaciones a derechos humanos en el presente caso, a solicita *ad infinitum* acceso a la justicia, que se reconozca el derecho vulnerado, que cese, que se restablezca el Estado de Derecho.

Al encontrarnos en el presente caso en un Estado de suspensión de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, no importan las pruebas aportadas, las denuncias, o procesos iniciados, el derecho que no es materia de probanza, el acto de la autoridad responsable Presidente de la República son contestes al vacío jurídico³⁹.

³⁸ Los tratos crueles, la tortura y los suplicios, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, sin garantías judiciales reconocidas como indispensables no se han establecido, hasta el día de hoy las denuncias de tortura, tentativa de privación ilegal de la libertad, incriminación (denuncias de hechos falsos), ante el Gobierno de la Ciudad de México, ante el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, entre otras denuncias, tales como tentativa de homicidio, violación al derecho a una vivienda digna, atentado en contra de la integridad física y psíquica; en este punto, vale la pena traer a colación a los habitantes del Andador Tabaqueros³⁸, día con día ejecutan la misma conducta antijurídica³⁸ que los dictámenes en materia de Ingeniería y Arquitectura, elaborados por perito oficial, demuestran de forma científica, el modo, tiempo y lugar de los hechos delictuosos, juicios de amparo indirecto, hechos notorios en lo expedientes, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 651/2017, en el que buscan que la vivienda de la parte quejosa se derrumbe, aun a pesar que éste Andador es una vía pública reconvertido ilegalmente de andador peatonal, a paso vehicular, vía que permanece cerrada por una puerta y una edificación que prohíben el libre paso, por **esta edificación ilegal el Gobierno de la Ciudad de México construyó delitos falsos a la parte quejosa, ante un Tribunal de Delitos officiosos**, siendo uno de los motivos para demostrar odio manifiesto e instaurar suspensión de derechos fundamentales inderogables, imponiendo castigos prohibidos, penas infamantes e inusitadas, violación flagrantes y sistemáticas a normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos; actos que busca por todos los medios el exterminio de la parte quejosa.

³⁹ Comparable a la tortura a la que fue sometida la suscrita por el agente del Ministerio Público y el defensor de oficio, con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, en interrogatorio, el defensor atacaba verbalmente diciendo "**el término fabricación de pruebas, ni siquiera lo he escuchado en Estados Unidos...**"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



BOOK
ACQUISITION
SECTION
OR

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que pueden actuar a petición de parte o de oficio, han tenido una intervención nula lo que configura aquiescencia del Estado de la tortura, vejaciones, humillaciones, incriminación, violación al debido proceso, violación a un Estado Constitucional, a pesar de haber constatado las vulneraciones anteriormente reseñadas, de las que han tenido constancia indirecta (por las denuncias y peticiones) y directa pues simplemente con tener conocimiento y certeza que el Gobierno de la Ciudad de México en "pacto criminoso" y discriminación pretende y lleva a cabo todas las acciones conducentes para que se derrumbe la vivienda de la parte quejosa con la consabida pérdida de vidas, lo que prueba que se busca el exterminio de la parte quejosa, afectando deliberadamente y de forma sistemática derechos fundamentales inderogables.

La parte quejosa se encuentra oprimida a la incertidumbre jurídica, así, este juicio de amparo es representativo del alivio para el reconocimiento del derecho vulnerado ilegalmente nulificado, de indefensión, de pérdida del control sobre la situación y sobre la propia vida, las violaciones procesales son del conocimiento de la autoridad responsable, la nada jurídica se plasma de forma idónea en el acto de la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hecho notorio lo conforma el juicio de amparo 260/2018.

El alto grado de violencia y discriminación institucional y en la comunidad imperante hacia las mujeres por su condición de género, es en sí mismo denigrante, insultos, discriminación, tratos vejatorios, persecución política, hostigamientos, las graves situaciones sistemáticas de tortura, tentativa de homicidio, intimidación, la existencia de señalamientos y acusaciones falsas, denegación en la procuración de justicia, con campañas de odio en la comunidad e institucional, violación constatada al derecho a la vida, la impunidad con la que se actúa en los hechos descritos, la incitación a la violencia se ejemplifica en el Gobierno de la Ciudad de México, obstáculos jurídicos, dilación administrativa en los juicios jurisdiccionales, los juicios de amparo son hechos notorios que la autoridad responsable no puede negar⁴⁰, son prueba a la ausencia de legalidad⁴¹.

La parte quejosa ha visto violados sus derechos humanos a la seguridad jurídica, mismos que está obligado a garantizar la autoridad responsable.

⁴⁰ Juicios de Amparo Indirecto 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 260/2018 substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito; 74/2018 substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de la misma Materia y Circuito

⁴¹ Ello es así, los hostigamientos, atentados en contra la vida, y la integridad corporal, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, las amenazas, intimidación, los atentados contra la dignidad personal, discriminación, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, comenzaron con amenazas de intervención de figuras políticas de los habitantes del Andador Tabaqueros, hechos que en posterior fecha fueron incentivados y con aquiescencia del Gobierno de la Ciudad de México, hechos que tienen un pleno objetivo que por grado de planificación cometido a sangre fría, intencionalmente nos arrastró a grandes sufrimientos que vulneraron gravemente la integridad física, la salud mental y física en que la parte quejosa se ha visto superada, nuestra resistencia física y psicológica, fue quebrantada, los interrogatorios elaborados en las instalaciones pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, son prueba de los castigos ejecutados por haber solicitado acceso a la justicia. Ahora incriminadas la parte quejosa se atiene a la arbitrariedad, sin seguridad jurídica en cualquier momento podemos perder la vida o la libertad, las amenazas son constantes y objetivas, tal como se puede probar, los hechos notorios contenidos en los anexos de los juicios de amparo citados en párrafos anteriores, no obstante es válido traer a colación el juicio de amparo 349/2017, sustanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito en el que la parte quejosa y nuestra familia nos vimos en la necesidad de resguardarnos, pues policía de investigación acudió a intimidarnos sin saber a la fecha de qué delito se nos acusa, o bien de acudir en días pasados en conjunto con seguridad pública a bordo de patrullas, servidores públicos pertenecientes al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras (autoridades pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México), que en compañía con un habitante del Andador Tabaqueros (Maria Dolores Espinoza Bassoco), golpearon con marros los muros de la vivienda que habita la suscrita y mi familia, mencionando que en cuanto saliéramos nos detuvieran.

SIN TEN

19

Violación sistemática de derechos humanos, específicamente el derecho a la libertad, a la propiedad y a la posesión, a la integridad y seguridad personal, a la vida, a la legalidad y seguridad jurídica; Las violaciones acreditadas en este rubro comprenden atentados en contra de la integridad corporal y tortura.

La autoridad responsable viola en detrimento de la parte quejosa La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1, 14, párrafo segundo, 16, 17, párrafo segundo, tercero, octavo, 22, párrafo primero, 29, párrafo primero, segundo y tercero, 89, fracción X y 133 establecen:

“Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.”

“Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.”

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”

“Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.”

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas."

Así tenemos que el artículo 29 constitucional se encuentra ubicado en la parte dogmática de la Constitución y se refiere a un catálogo de derechos que no se pueden suspender mismos que son coherentes con las Obligaciones Internacionales del Estado Mexicano ha firmado y ratificado, en relación con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que genera obligaciones erga omnes; luego actuar en contrario hace del presente caso una flagrante y sistemática violación al debido proceso con las debidas garantías.

Como se advierte, nuestra Constitución Federal contempla derechos humanos, que constituyen límites de actuación para las autoridades, el derecho a no ser afectado en sus personas, a fundamentar y motivar la causa, por la que busca que a la parte quejosa *ad infinitum* le sean aplicados "castigos prohibidos, que ni siquiera en conflictos armados están permitidos" hasta que sobrevenga el exterminio de ésta, hechos que deben ser expuestos mediante un juicio que justifique la causa del procedimiento; y, sobre todo, prohíbe expresamente que autoridad alguna actualice penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

También prohíbe el Estado de excepción de Derecho, y la suspensión de derechos inderogables, sin la debida fundamentación y motivación, pues el artículo 29 sólo le da facultades al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para suspender derechos y garantías en un Estado de emergencia, sin que la restricción se contraiga a determinada persona, más no podrán restringirse derechos fundamentales inderogables, el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La restricción de derechos debe estar fundada y motivada observando "en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación."

Pero, además de lo anterior, la autoridad responsable ha ratificado instrumentos internacionales que protegen derechos fundamentales, el derecho a la integridad personal que prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y establecen obligaciones específicas a los Estados Parte, en cuanto a un estado de excepción, que prohíbe la inderogabilidad a un recurso efectivo ante las autoridades jurisdiccionales, recurso, que es indispensable para hacer valer los derechos no susceptibles de derogación como son el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas, el derecho de acceso a la justicia, etcétera (derechos que revisten carácter de *ius cogens*), **luego el acto de la autoridad responsable, violenta normas del *ius cogens*.**

En efecto, el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, México ratificó tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y seis, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y tres, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la formas de Discriminación Racial, el dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, la Convención sobre los Derechos del Niño, veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para", instrumentos que, en la parte que interesa al caso concreto, disponen lo siguiente:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que:

Artículo 2.1. "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio

SIN TEXIS

1940

y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Artículo 2.3.a). “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;”

Artículo 4.1. “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.”

Artículo 4.2. “La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.”

Artículo 4.3. “Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación.”

Artículo 7. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

Artículo 14.1. “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...”

Artículo 17.1.” Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Artículo 17.2. “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

Artículo 26. “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, resalta lo siguiente:

Artículo 1.1. “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra



persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas."

Artículo 2.1. "Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción."

Artículo 2.2. "En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura."

Artículo 2.3. "No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura."

Artículo 4.1. "Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura."

Artículo 4.2. "Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad."

Artículo 12. "Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial."

Artículo 13. "Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronto e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado."

Artículo 14.1. "Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. ..."

Artículo 16.1. "Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes."

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, menciona que:

Artículo 1.1. "En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública."

Artículo 5. "En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:"

Artículo 5.a) "El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;"

SHIN TEXTILES

SHIN TEXTILES

SHIN TEXTILES

Artículo 5.b) "El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;"

Artículo 5.e). iii) "El derecho a la vivienda;"

Artículo 6. "Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación."

Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 3.1. "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño."

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refiere lo siguiente:

Artículo 1.1. "Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."

Artículo 2. "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades."

Artículo 4.1. "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente."

Artículo 5.1. "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral."

Artículo 5. 2. "Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano."

Artículo 7.1. "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales."

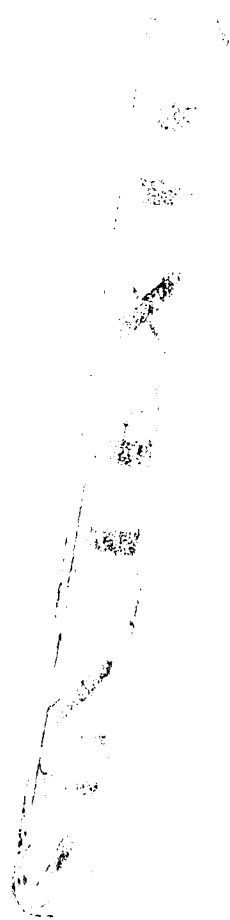
Artículo 8. 1. "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

Artículo 11.1. "Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad."

Artículo 11.2. "Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación."

Artículo 11.3. "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."

Artículo 19. "Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado."



Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes...”

Artículo 24. “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”

Artículo 25.1. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

Artículo 25.2. “Los Estados Partes se comprometen a:

Artículo 25.2.a) “a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;”

Artículo 25.2. b) “a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y”

Artículo 25.2. c) “a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

Artículo 27.1. “En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.”

Artículo 27.2. “La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad); y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.”

Artículo 25.3. “Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.”

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

Artículo 1. “Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención.”

Artículo 2. “Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica ...”

Artículo 3. “Serán responsables del delito de tortura:

Artículo 3.a. “los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

Artículo 3.b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

SINTEXCO

100

Artículo 8. "Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal."

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado."

Artículo 9. "Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura..."

Artículo 9.4. "El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente."

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para", dispone en sus artículos:

Artículo 1. "Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado."

Artículo 2. "Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:"

Artículo 2. b. "que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y"

Artículo 2.c. "que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra."

Artículo 3. "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado."

Artículo 4. "Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:"

Artículo 4. a. "el derecho a que se respete su vida;"

Artículo 4.b. "el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;"

Artículo 4. c. "el derecho a la libertad y a la seguridad personales;"

Artículo 4.d. "el derecho a no ser sometida a torturas;"

Artículo 4.e. "el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;"

Artículo 4. f. "el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;"

Artículo 4.g. "el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;"

Artículo 6. "El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:"

Artículo 6.a. "el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y ..."

Artículo 7. "Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:"



100-443887-1
 100-443887-2
 100-443887-3
 100-443887-4
 100-443887-5
 100-443887-6
 100-443887-7
 100-443887-8
 100-443887-9
 100-443887-10
 100-443887-11
 100-443887-12
 100-443887-13
 100-443887-14
 100-443887-15
 100-443887-16
 100-443887-17
 100-443887-18
 100-443887-19
 100-443887-20
 100-443887-21
 100-443887-22
 100-443887-23
 100-443887-24
 100-443887-25
 100-443887-26
 100-443887-27
 100-443887-28
 100-443887-29
 100-443887-30
 100-443887-31
 100-443887-32
 100-443887-33
 100-443887-34
 100-443887-35
 100-443887-36
 100-443887-37
 100-443887-38
 100-443887-39
 100-443887-40
 100-443887-41
 100-443887-42
 100-443887-43
 100-443887-44
 100-443887-45
 100-443887-46
 100-443887-47
 100-443887-48
 100-443887-49
 100-443887-50
 100-443887-51
 100-443887-52
 100-443887-53
 100-443887-54
 100-443887-55
 100-443887-56
 100-443887-57
 100-443887-58
 100-443887-59
 100-443887-60
 100-443887-61
 100-443887-62
 100-443887-63
 100-443887-64
 100-443887-65
 100-443887-66
 100-443887-67
 100-443887-68
 100-443887-69
 100-443887-70
 100-443887-71
 100-443887-72
 100-443887-73
 100-443887-74
 100-443887-75
 100-443887-76
 100-443887-77
 100-443887-78
 100-443887-79
 100-443887-80
 100-443887-81
 100-443887-82
 100-443887-83
 100-443887-84
 100-443887-85
 100-443887-86
 100-443887-87
 100-443887-88
 100-443887-89
 100-443887-90
 100-443887-91
 100-443887-92
 100-443887-93
 100-443887-94
 100-443887-95
 100-443887-96
 100-443887-97
 100-443887-98
 100-443887-99
 100-443887-100

Artículo 7.a. "abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;"

Artículo 7.b. "actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;"

Artículo 7. c. "incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;"

Artículo 7.d. "adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;"

Artículo 7. e. "tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;"

Artículo 7. f. "establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;"

Artículo 7. g. "establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y"

Artículo 7.h. "adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención."

Como se advierte, los instrumentos internacionales citados, que constituyen norma interna en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, prevén el derecho absoluto que tiene toda persona a que se respete su integridad personal, su libertad, su vida, su dignidad, su vivienda, derechos básicos, lo que implica una protección contra la tortura y cualquier otra pena o trato cruel, inhumano o degradante, el de no suspensión de derechos fundamentales inderogables.

Así, la autoridad responsable, al suscribir y ratificar los instrumentos internacionales en cita, asumió un conjunto de obligaciones tendentes a garantizar cada uno de los derechos humanos contenidos en dichos instrumentos; lo que implica el deber de abstenerse de conculcar esos derechos. Es decir, nuestro Estado tiene el deber de garantía, el cual implica obligaciones de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos recogidos en los instrumentos internacionales

Convenios de Ginebra, el artículo 3⁴², prohíbe en cualquier tiempo y lugar los atentados en contra la vida, y la integridad corporal, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

La suspensión de los derechos fundamentales, ha incidido sobre diversos derechos fundamentales a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia; los derechos de la niñez; la inviolabilidad del hogar doméstico (vivienda); el derecho de acceso a la justicia; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición y la tortura; las garantías judiciales efectivas indispensables para la protección de tales derechos.

⁴² Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra

SIN TEXIO

1950

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, menciona (artículo 4) que los Estados Parte podrán adoptar en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente disposiciones que, en la medida estrictamente limitada sin discriminación alguna suspender ciertos derechos, más no autoriza suspensión alguna a derechos fundamentales inderogables.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone (artículo 27) que, en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, suspender obligaciones en virtud de esta Convención y no entrañen discriminación alguna, ésta disposición no autoriza suspensión de derechos inderogables, más al hacer uso del derecho suspensión deberá informar, de las disposiciones, los motivos que haya suscitado la excepción de los derechos a los demás Estados Partes de la Convención, inmediatamente por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Así tenemos que las causales de "peligro público" u "otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en su estudio al Anteproyecto de Convención Americana:

"...esta expresión cubre exclusivamente las siguientes situaciones: un peligro real e inminente para la existencia del país como nación; para la sobrevivencia del Estado como entidad política soberana e independiente; para la integridad del territorio; para el respeto por la constitución política vigente; para el ejercicio de poderes legítimos por las autoridades constitucionales. También incluye la situación de peligro serio e inminente de alteración profunda de la paz social o del orden público de tal carácter que ponga en peligro la seguridad interna del Estado."

El análisis jurídico del citado artículo 27 y de la función que cumple debe partir de la consideración de que es un precepto concebido sólo para situaciones excepcionales. Se aplica únicamente " en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte ". Aun entonces, autoriza solamente la suspensión de ciertos derechos y libertades, y ello " en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación ". Las disposiciones que se adopten, además, no deben violar otras obligaciones internacionales del Estado Parte, ni deben entrañar " discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social ".
Párrafo 19⁴³

Y no es el caso de estimar que ésta afectación de derechos humanos inderogables obedece al derecho de reacción de un Estado que conforma un Pacto Federal ante un ataque, pues el propio Convenio Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, dispone que los Estados parte no podrán invocar circunstancias excepcionales como justificación de actos que impliquen tortura, así como también, establece su obligación de observar los derechos de libertad y seguridad personales, el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral, el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administren justicia, el derecho sin discriminación a igual protección ante la ley, el derecho al reconocimiento de la dignidad, el derecho a ser oída con las debidas garantías, el derecho a que se respete nuestra vida, el derecho a que se informe a los demás Estados Partes, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas y/o al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, que el presente caso se ha hecho uso del derecho de suspensión de conformidad con el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, y el artículo 27. 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derechos que han sido vulnerados por acción directa e indirecta la permitir la suspensión del Estado de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables en el caso concreto.

Ello es así, por consecuencia lógica jurídica la autoridad responsable vulnera los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos, sus obligaciones y funciones erga omnes de respeto, protección y promoción de los

⁴³ La Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-8/87

1944

1944

derechos humanos observando la gravedad de los hechos, esta afirmación lógica jurídica es la naturaleza *erga omnes* de las obligaciones de la autoridad responsable que nacen de los tratados internacionales de derechos humanos, que deberán ser aplicadas sin discriminación alguna, las mismas Convenciones lo prohíben. Además, el artículo 89 fracción X de la Constitución reconoce la obligación de cumplirlas y la de denunciar si otros Estados Partes no lo hacen, reconociendo el compromiso de la lucha por la vigencia universal de los derechos humanos, que enfatiza la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la dimensión ética que estos instrumentos han incorporado a las relaciones internacionales, luego la autoridad responsable viola las obligaciones que en materia de derechos humanos lo obligan en el presente caso.

Pues, como se dijo anteriormente, invocando la Tesis P.LXXXVI/96, Tomo III, junio de 1996, pág. 459, registro 200110⁴⁴ que, clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho.** Pues se considera que una violación de (garantías individuales) es grave cuando tiene un impacto trascendente en la forma de vida de una comunidad, alterándola, ya sea que la violación se presente en perjuicio de una persona o de un grupo de personas

No se puede dar visos legalidad a lo que es arbitrario, la aplicación lisa y llana de un estado de excepción ilegal de estas medidas.

La autoridad responsable emplea argumentos falaces de decir y sostener, *que para que exista una omisión, debe existir una obligación o un deber fijado previamente fijado en alguna norma*, que de manera lógica y jurídica al mencionar que esta parte quejosa deberá acudir al Gobierno de la Ciudad de México, está afirmando, que todo está permitido, incluso los comportamientos más crueles y aberrantes, las violaciones más graves de los derechos humanos, que el Estado mexicano no ha firmado y ratificado Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos que le generan obligaciones *erga omnes* con la comunidad internacional de Estados, que es nulo todo Tratado (artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) que, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (*ius cogens*), que el artículo 89, fracción X de la Constitución no existe. Luego, la definición del concepto de violaciones graves a derechos humanos se perfecciona con el **distanciamiento constitucional** de la autoridad responsable que ha sido una constante en el presente caso.

El estado de excepción es una institución del Estado de Derecho, como tal, debe reunir determinadas condiciones y requisitos, garantías jurídicas para preservar los derechos humanos, luego este estado de excepción de derecho es una

⁴⁴ "GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.

Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis."

SIN TEXIO

RECEIVED
FEB 10 1964
FBI - NEW YORK

patología en el que ha desaparecido el Estado de Derecho, luego es ilegal que la autoridad responsable en la afirmación que no puede explicarse dentro de una lógica y jurídica de *“que para que exista una omisión, debe existir una obligación o un deber fijado previamente fijado en alguna norma”*, alejado de toda lógica formal omita mencionar se ha desdibujado y carece de legitimidad cuando lo que está en juego son derechos fundamentales inderogables. **La prueba de esta afirmación es la naturaleza erga omnes de las obligaciones que nacen de los tratados internacionales de derechos humanos, que deberán ser aplicadas sin discriminación alguna, las mismas Convenciones lo prohíben. Además, el artículo 89 fracción X de la Constitución reconoce la obligación de cumplirlas y la de denunciar si otros Estados Partes no lo hacen, reconociendo el compromiso de la lucha por la vigencia universal de los derechos humanos, que enfatiza la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la dimensión ética que estos instrumentos han incorporado a las relaciones internacionales, luego la autoridad responsable viola las obligaciones que en materia de derechos humanos lo obligan en el presente caso.**

Resaltando que los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos no regulan relaciones entre los Estados Partes, el centro de la protección es la persona humana que crea un “orden público internacional”

El estado de excepción en el presente caso responde a la causa de un exterminio (violación al derecho a la vida) a favor de intereses de figuras políticas, particulares, el Estado con aquiescencia demotan odio manifiesto (juicio de amparo 627/2017, 651/2017), luego es loable solicitar a la autoridad responsable, la denuncia de estos actos ante la comunidad internacional de Estados de conformidad con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas y del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

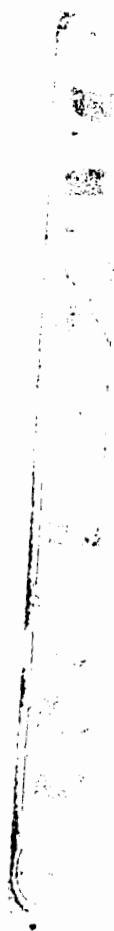
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opinión consultiva OC-9/87, ha establecido que la suspensión de garantías constituye una excepción, más no significa que la misma “comporte la supresión temporal del Estado de derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad, a la que en todo momento deben ceñirse”. Asimismo, menciona que “el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el estado de derecho son inseparables”

Las violaciones graves a derechos humanos trascienden a la vida, el proyecto de vida queda destruido, la autoridad responsable sin cumplir el mandato constitucional y el compromiso internacional de respetar los derechos así como la integridad física y emocional de las personas un estado de incertidumbre emocional y jurídica, con la consecuente afectación a su forma de vida, ya que resulta lógico que la parte quejosa viva en la zozobra ante un Estado, que desconoce los derechos humanos que reconoce nuestro marco jurídico. luego si la autoridad responsable considera que no puede intervenir en el presente caso, que de forma sistemática se han violado derechos humanos inderogables, máxime cuando las Instituciones Federales se han conducido con ilegalidad, es loable afirmar, que la autoridad responsable también, viola el Derecho Internacional en materia de los Derechos Humanos en relación a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículos 26, 27, 29, 53 y 64.

Luego con apoyo del artículo 53 y 64 de esta Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que a la letra menciona:

Artículo 53. “Es nulo todo Tratado que, en el momento de su celebración, este en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (“jus cogens”) ...”

Artículo 64. “Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo Tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.”



9

Ello es así, las normas imperativas de derecho internacional ("*ius cogens*") se oponen a cualquier norma que la autoridad responsable pueda anteponer ante estas graves violaciones sistemáticas a derechos humanos, pues el acto de la autoridad responsable niega sus obligaciones y facultades en materia de derechos humanos.

Luego el acto de la autoridad responsable es ilegal desde cualquier punto de vista.

La autoridad responsable viola el artículo 133 de la Constitución, pues establece la llamada supremacía constitucional y una escala jerárquica de las diversas disposiciones que deben regir al país.

De acuerdo este precepto constitucional, los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, en los términos del artículo 76, fracción I, y 89, fracción X, "serán la Ley Suprema de toda la Unión".

Las leyes emanadas del Congreso de la Unión son fundamentalmente las leyes federales. El párrafo *in fine* del 133, dispone que los jueces de cada estado se conformarán a la Constitución, leyes y tratados, consigna el principio de la supremacía de derecho federal sobre el derecho local.

El problema de competencia que la autoridad responsable le atribuye a la autoridad local es ilegal pues el precepto constitucional que incluye a los tratados dentro de la Ley Suprema de la Nación, **le genera obligaciones erga omnes en relación al artículo 89, fracción X de la Constitución.**

Así la autoridad responsable tiene el monopolio constitucional en relación al desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, efecto que se dilucida perfectamente en el artículo 1o. de la Constitución. Luego la autoridad responsable viola en su acto el artículo 1, 89, fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Gobierno de la Ciudad de México en el presente caso ha abrogado derechos universales reconocidos en la Constitución Federal, este hecho lo constituye en un acto tiránico sin justificación y sin legitimación alguna, un estado que no respeta las disposiciones por las que fue creado, en el caso concreto ha detenido el funcionamiento de los derechos reconocidos por la Constitución, destruyendo cualquier posibilidad de certeza jurídica.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México dentro de una lógica formal, en abuso del derecho⁴⁵ han empleado a las instituciones como medio para dañar a la parte quejosa.

En este orden, no puede explicarse dentro de una lógica formal, el por qué la autoridad responsable declara "*mediante el cual solicita apoyo para la recuperación del bien del dominio público andador Tabaqueros ubicado en la Ciudad*

⁴⁵ Al respecto, se citan las consideraciones sobre el tema realizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Diccionario Jurídico Mexicano, página 39, tomo I, el cual señala: "ABUSO DEL DERECHO. I. La voz abuso del derecho no tiene una raíz etimológica propia. Sin embargo, algunas frases del derecho romano recogen la idea: *summum jus summa injuria*: la aplicación ciega de la regla de derecho conduce a consecuencias injustas; o bien a contrario se puede citar la frase del Digesto "*neminem leedit qui suo iure utitur*": aquel que usa de un derecho no perjudica a nadie. La teoría del abuso del derecho tiene como problema central el considerar que el ejercicio sin control del derecho, representa una amenaza para la justicia que es el fin esencial del sistema jurídico. - II. El instrumento de control por excelencia es la teoría del abuso del derecho. El tema más discutido en esta teoría es la determinación del límite que establezca que más allá de él, el ejercicio del derecho es abusivo y por tanto reprochable. El sistema para la determinación del límite varía según algunos autores: unos opinan que lo determinante es la intención de dañar a otro; otros afirman que lo importante es la desviación del derecho de su función social. Los elementos que se señalan como constitutivos de la teoría del abuso de derecho son: a) Culpen el ejercicio del derecho; b) Intención de causar un daño; c) El desconocimiento de la función social del derecho

SIN TERN



La autoridad responsable conoce el derecho, lo que evidencia un abuso del derecho, en violación al derecho humano al acceso a la justicia⁴⁶, pretende un engaño en desviación a la legalidad; el escrito de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho es clarificado de un Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, en el que se solicita de forma pacífica y respetuosa se revindique el derecho al acceso a la justicia con el fin de obtener el reconocimiento de la violación a derechos humanos, la cesación de la violación y una reparación adecuada del daño físico y mental (psíquico), cesen los ataques sistemáticos en contra de la parte quejosa, que se respete el derecho humano a la vida, exponiendo que con fecha seis de mayo de dos mil catorce, la suscrita dirigió el seis de mayo de dos mil catorce, escrito de denuncia al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hecho que detonó el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables en el presente caso.

Luego es patente que el acto de la autoridad responsable en abuso del derecho en igual magnitud y desviación del derecho de su función social, hace uso abusivo del derecho, dando como resultado, actos ilegales por consecuencia lógica y jurídica.

Por otra parte, debe señalarse que el retardo, omisión o incumplimiento de los deberes de la autoridad responsable también constituyen un hecho que da lugar a la existencia de violaciones graves a derechos humanos.

El ejercicio oportuno de las obligaciones de la autoridad responsable para mantener el Estado de Derecho constituye una garantía de democracia de los gobernados por lo que la omisión de tal ejercicio, **en condiciones extremas, implica una violación grave de derechos humanos.**

Es obligación de los órganos del Estado velar por la seguridad pública y por la protección del orden público, los cuales son fundamentales para la vigencia de los derechos humanos, derechos que se consagran claramente en el artículo 10., 29, 89, Fracción X y 133 de la Constitución Federal.

Las garantías judiciales instituidas para las personas no pueden defenderse sino por mandato constitucional, pues ninguna persona puede tomarse la justicia por su propia mano ni ejercer la violencia para reclamar su derecho, como lo señala el artículo 17 constitucional. Por tanto, nadie tiene legitimidad para usar su propia fuerza en contra de los demás, de manera que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el único que puede utilizar el estado de excepción cuando es necesario para mantener el Estado de Derecho, por ende, conservar las condiciones necesarias para la vigencia de los derechos humanos que establece la Constitución, por lo que la protección de los derechos humanos se encuentra a cargo principalmente de la autoridad responsable.

En ese orden de ideas, los derechos de protección son derechos constitucionales encaminados a que el Estado organice y maneje el orden social de una determinada manera por lo que respecta a la relación de sujetos jurídicos con el poder público; por ende, si el Estado no evita los decretos en casos concretos de suspensión de derechos fundamentales inderogables de gobiernos locales y/o particulares sin sustento legal en bienes protegidos, **entonces las permite.**

La autoridad responsable permite el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamental, lo que prueba la violación a derechos humanos inderogables en el caso concreto.

⁴⁶ "...El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes...". Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, serie, C, núm. 153, numeral 131. Cfr. Voto razonado del juez A. A. Cancado Trindade, p. 22, numeral 64. Cfr. Corte I.D.H., Almonacid y Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, voto razonado del juez A.A. Cancado Trindade, serie C, núm. 154, p. 7, numeral 22



EX JUDICIAL
SECRETARIA
DEPARTAMENTO
DE JUSTICIA

De forma discriminatoria y vale decir, que de forma de burla la autoridad responsable compara estas graves violaciones sistemáticas a derechos fundamentales equiparándolos a éste multicitado Andador Tabaqueros, bien público, que no puede explicarse dentro de una lógica formal, que en sí y por sí mismo ejecute tortura de forma sistemática, imputaciones falsas, atentados en contra de la vida, detonaciones de arma de fuego, persecución de figuras políticas, tentativa de detenciones arbitrarias, humillaciones, vejaciones, violencia de género, violencia institucional, violencia de un Estado mexicano que discrimina a ciertos grupos como en el caso acontece⁴⁷.

Ello es así, de forma absurda, la autoridad responsable le da vida jurídica a un bien público, en el que sus habitantes perpetran delitos apoyados en un "pacto criminoso", con un Estado mexicano que permite sistemáticamente la violación a instrumentos internacionales firmados y ratificados por la autoridad responsable.

La autoridad responsable viola el derecho de acceso a la justicia, pues no permite que las autoridades que han perpetrado graves violaciones a derechos humanos sean investigadas por estas graves conductas, hechos que se clarifican en el artículo 17.2.a) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que a la letra dice:

"17.2.a) ... o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;"

La autoridad responsable viola el artículo 89 fracción X de la Carta Magna y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al artículo 26 y 27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados, la necesidad del respeto, la protección y promoción a los derechos humanos inderogables, derechos que existen con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado mexicano que imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional, los Estados Partes "no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado"⁴⁸, hecho que se clarifica en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

"Estos derechos inderogables -y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes -, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran"⁴⁹

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en opinión consultiva OC-8/87, que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Que "los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías

⁴⁷Que formaliza un Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables

⁴⁸ Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados.

Artículo 27 El derecho Interno y la observancia de los Tratados

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46

⁴⁹ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981, nota 76 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

1944

(art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia.”⁵⁰

Luego, con fundamento en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4.3⁵¹, el artículo 27.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el numeral 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere al Presidente de la República facultades y obligaciones, tales como, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos en consecuencia lógica y jurídica la autoridad responsable está obligada a informar este estado de excepción, no hacerlo, vulnera sus obligaciones que le impone imperativamente *erga omnes* a la comunidad internacional de los Estados Partes, que **implica una violación grave de derechos humanos**.

Por lo que existe un mandato normativo expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales en materia de los Derechos Humanos, luego de declarar la norma "programática" que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiere de complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes;

El incumplimiento de las obligaciones expuestas en las normas citadas, recae en la autoridad señalada como responsable quien al haber omitido acatar dichas disposiciones y teniendo competencia para ello, han provocado una afectación a nuestro interés legítimo y a nuestra esfera de derechos, como se señala en los conceptos de violación.

En este sentido es importante señalar que ninguna de las disposiciones citadas y que han sido incumplidas, imponen una carga de solicitud o excitativa a nuestra parte, ya que al tratarse de obligaciones Constitucionales y legales de carácter general no necesitan de una acción primigenia para poder ser invocada, **esa conducta vulnera los derechos fundamentales inderogables y el derecho al acceso a la justicia⁵², y las garantías para su protección, lo que se sitúa en la tensión entre la máxima efectividad que debe atribuirse a un texto constitucional, a un tratado o convenio y la realidad, que pasa por el núcleo de los poderes del Estado.**

Suplencia de la queja. A la luz del artículo primero de la Constitución y del numeral 1o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta parte quejosa solicita a su Señoría, la suplencia de la queja, esto, con fundamento en el artículo 79, fracción VII⁵³, y párrafo antepenúltimo de la Ley de Amparo, que menciona:

⁵⁰ Párrafo 25, página 9.

⁵¹ **Artículo 4.3.** "Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación

⁵² La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido la categoría de norma del *ius cogens* al derecho al acceso a la justicia "...El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes...". Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, serie, C, núm. 153, numeral 131. Cfr. Voto razonado del juez A. A. Cancado Trindade, p. 22, numeral 64. Cfr. Corte I.D.H., Almonacid y Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, voto razonado del juez A.A. Cancado Trindade, serie C, núm. 154, p. 7, numeral 22

⁵³ Con apoyo en la Tesis I.18o.A.15 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, Tomo III, pág. 2788, registro 2016969, Decima Época, bajo el rubro **"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE**

COXETER'S



"...la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio"

Figura procesal, que contrarresta el grado de vulnerabilidad, a una interpretación *pro homine*, intensificado al derecho del debido proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁵⁴, en aras de la protección de los más débiles (*favor debilis*), el daño al proyecto de vida: el derecho a la existencia comprende condiciones mínimas de una vida digna, de seguridad, certeza jurídica e integridad de la persona humana.

Asimismo, intensifica el principio de progresividad, el deber de aplicar el Derecho Internacional en materia de derechos humanos, pues el estado de excepción de derechos fundamentales no es permitido ni siquiera en conflictos armados (Convenios de Ginebra)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en pronunciamiento en el Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala, es clarificador del presente caso, la comprensión del principio de interdependencia de los derechos humanos: el proyecto de vida es consustancial del derecho de la existencia, que requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad, e integridad de la persona humana⁵⁵:

El proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a la libertad, como derecho de cada persona a elegir su propio destino. (...) El proyecto de vida envuelve plenamente el ideal de la Declaración Americana [de los Derechos y Deberes del Hombre] de 1948 de exaltar el espíritu como finalidad suprema y categoría máxima de la existencia humana⁴.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, A Usted Honorable **JUEZA DE DISTRITO**, atentamente solicitamos:

PRIMERO. Admitir a trámite la solicitud de ampliación de demanda de amparo del juicio en que se actúa.

SEGUNDO. Conceder a la parte quejosa la suplencia de la queja.

TERCERO. En su oportunidad conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

PROTESTO LO NECESARIO

Carolina González Nava

Ciudad de México a 24 de septiembre de 2018

AMPARO NO DEBE INTERPRETARSE LITERALMENTE, SINO EN ATENCIÓN A LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PUEDA PRESENTAR QUIEN ACUDE AL JUICIO, A FIN DE REMOVER OBSTÁCULOS PARA DARLE UN ACCESO A LA JUSTICIA Y UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVOS."

⁵⁴ Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 70, y Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, párr. 115

⁵⁵ Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala

CONSTITUTIONS



AMPARO INDIRECTO: 651/2017
QUEJOSA: Martha Patricia González Nava
Asunto: denuncia de repetición
del acto reclamado

Das
Ch

C. JUEZ ROSA MARÍA CERVANTES MEJÍA
JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.

Presente.

Martha Patricia González Nava; de generales conocidas, en el expediente citado al rubro que promoví ante Usted con el debido respeto que se merece comparezco y expongo:

Con fundamento en el artículo 199 de la ley de Amparo, vengo a denunciar mediante el presente escrito, la repetición del acto reclamado, "misma que podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días".

En este orden de ideas la autoridad responsable, rindió ante su Señoría **"INFORME JUSTIFICADO"**, en auto publicado por medio de listas el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho¹, solicitando en el último párrafo del escrito que suscribe la agente del Ministerio Público Lic. Edith Guadalupe Ortiz Valencia (autoridad responsable), a la letra dice:

"Por lo anterior y con fundamento en el artículo 74 Fracción IV de la Ley de Amparo, solicito a usted por lo que hace a la suscrita sobresea el juicio de Garantías en virtud de no existir el acto reclamado"

En este punto, de forma lógica, cabe señalar, el escrito signado por la autoridad responsable es una probanza idónea del Estado de excepción de Derecho que ha sido decretado en el presente caso, éste escrito y sus anexos son un abuso del derecho en sus funciones de la dolosa dilación procesal que la autoridad ha hecho del caso concreto.

En un Estado de Derecho en todo momento las autoridades deben ceñir su conducta a la legalidad, en el caso concreto se han extralimitado más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada.

El "engaño" (violación al proceso) que se pretende, es inadmisibles, en este juicio de amparo (proceso), la autoridad responsable es parte, en el que no toma en cuenta que existen probanzas científicas, desconociéndolas tal como desconoce el Estado de Derecho, hechos notorios en instancia constitucional, los juicios de amparo 1118/2016, 288/2017 y 651/2017, son los medios idóneos para afirmar el Estado de excepción de Derecho.

¹ "Núm. de Expediente: **651/2017**
Fecha del Auto: **30/08/2018**
Fecha de publicación: **31/08/2018**

Síntesis:

AGRÉGUESE A LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN UNO (SISTEMA TRADICIONAL), DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL AO-3, DE LA FISCALÍA DESCONCENTRADA DE INVESTIGACIÓN EN ÁLVARO OBREGÓN, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA LAS GESTIONES TENDENTES A DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. EN CONSECUENCIA, SE REQUIERE A LA AUTORIDAD MINISTERIAL OFICIANTE, PARA QUE ADOpte LAS MEDIDAS CONDUCENTES A FIN DE QUE SE RECABE EN FORMA EXPEDITA LOS MEDIOS PROBATORIOS ORDENADOS POR LA JUEZ CUARTO PENAL DE DELITOS NO GRAVES DE LA CIUDAD DE MÉXICO."

10

CONTENTS

la autoridad responsable se burla de lo mandatado en la ejecutoria de amparo del juicio en que se actúa, lo verdaderamente expuesto y probado, el escrito signado por la autoridad responsable, sólo prueba la repetición del acto reclamado, la dilación dolosa, la ilegalidad resalta a la vista de cualquier observador, el "pacto criminoso" entre autoridades responsables y probables responsables.

las fojas 155 y 156 suscritas por el tercer interesado en este juicio, describen:

"... que el andador que colinda con la casa de ellas les ocasionaba daños a su propiedad por el paso de vehículos que transitan en el andador.

Lo cual fue verificado por personal técnico de la Delegación de nuestra demarcación, no encontrando daño alguno que haya propiciado el uso del andador según indicó el personal que acudió a la inspección técnica. Ya que los carros que ingresan lo hacen a una velocidad máxima de 5 a 10 km/hr. ya que sólo es utilizado por los familiares que ingresan a sus domicilios."

Ello es así, las Ampliaciones de Dictamen de perito Oficial en Ingeniería y Arquitectura Julio Eduardo Cabrera Godínez, que constan en autos de la Indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01 (Anexo V) demuestran de forma técnica y científica que el pasar de los automóviles por este Andador Tabaqueros, al carecer de muros de contención hace presión sobre la cimentación y estructura de la casa habitación habitada por la quejosa y mi familia, misma que puede derrumbarse por la conducta dolosa de los probables responsables y de las autoridades que tienen responsabilidad en el presente caso, entre las que se incluye a la responsable. Probanzas que resalta este Estado de excepción de Derecho.

Las fojas citadas que constan en autos del juicio de amparo citado al rubro anteriormente, son del pleno conocimiento de la autoridad responsable, los probables responsables circulan día con día con sus automóviles por el Andador Tabaqueros, en esta vía pública.

La autoridad responsable actualiza día con día la repetición del acto reclamado, de forma lógica jurídica prueba, el Estado de excepción de Derecho que acontece en el presente caso.

En la foja 156, se hace mención del "Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México", por lo que la quejosa se ve en la imperiosa necesidad de mostrar el juicio de nulidad V-76315/2015, substanciado y fallado² en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, juicio que tiene estrecha relación lógica jurídica con el juicio de amparo 627/2017, en el que se prosigue con el Estado de excepción de derechos fundamentales inderogables formalizado por las autoridades responsables en este juicio.

Tristemente la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01 que nos ocupa, fue uno de los hechos notorios que han dado origen a actos que formalizan un Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables en contra de la quejosa y de mi familia, en el que las autoridades responsables en estos innumerables juicios de amparo que han sido sustanciados en este Juzgado de Distrito, tienen un "pacto criminoso", asimismo innumerables abogados que tienen nexos con figuras políticas tienen que ver en el presente caso (juicio de amparo 627/2017 y juicio de nulidad V-76315/2015), amigos y familiares de los

² La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado la institución de la "cosa juzgada fraudulenta" utilizada en el caso *Carpio Nicolle y otros Vs Guatemala*² y en el caso *Gutiérrez Soler Vs Colombia*. En éste último caso, el juez Sergio García Ramírez, en voto razonado, refiere a **sentencias que fueron dictadas de manera engañosa y que en realidad no pretenden hacer justicia sino simularla**. En la "cosa fraudulenta", **el juicio está viciado y por tanto no existe un auténtico proceso**. Así, el enjuiciamiento posterior "por los mismos hechos y en contra de las mismas personas no sería un nuevo juicio ni se desatendería el principio *ne bis in idem*":



probables responsables que han actualizado todos los actos a su alcance en este Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01 fue uno de los motivos para detonar hechos que ni siquiera en conflictos armados están permitidos en los que se busca que la parte quejosa pierda la libertad y la vida, los demás derechos fundamentales nos han sido suspendidos *ad infinitum*; el exterminio de la quejosa y de mi familia, que pretende llevar el Estado es manifiesto en la vulneración al debido proceso legal en juicio de amparo.

Es un hecho notorio los juicios de amparo que han derivado del presente caso la ejecutoria de amparo debe ser cumplida por todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, mismas que están sujetos a las mismas responsabilidades que la autoridad responsable³.

En este orden de ideas, es un hecho notorio que el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México tiene pleno conocimiento del acontecer del presente caso, siendo autoridad responsable en juicio de amparo indirecto 627/2017, juicio que está unido a la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01, y del juicio de nulidad con número de expediente **V-76315/2015⁴**, del procedimiento administrativo PARA/LMC/DGJG/010/2015, sustanciado en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, tal como se menciona en la foja 156 de autos "...que esta situación fue resuelta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México", ello es así, fue resuelta con aquiescencia del Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, destruyendo el Estado de Derecho y ejecutando suspensión de derechos fundamentales inderogables.

Juicio de nulidad que viene al caso pues es probanza idónea de los motivos antijurídicos que conlleva a que actualice día con día la repetición del acto reclamado.

En este orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis P.LXXXVI/96, Tomo III, junio de 1996, pág. 459, registro 200110⁵, clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho.**

De forma manifiesta se ha depuesto a la justicia a merced de la ficción; los anexos al escrito signado por la autoridad responsable que denominó "*Informe Justificado*", declara (actos que resaltan por lo ilógico y antijurídico) que, **"...DESDE QUE FECHA INICIÓ EL PROBABLE RESPONSABLE A CONSTRUIR LA REJILLA QUE**

³ **Artículo 197 de la Ley de Amparo a la letra dice:** "Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo".

⁴ Autoridades demandadas: Jefe delegacional en Magdalena Contreras (**José Fernando Mercado Gualda**) y Director General Jurídico y de Gobierno en Magdalena Contreras; actor Odilón Nava de la Rosa.

⁵ **"GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.**

Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

2000

1000

CONSTRUYO EL PROBABLE RESPONSABLE", luego la repetición del acto reclamado es manifiesto e indudable, la declaración de la autoridad responsable es contraria a los autos de la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01, específicamente a los Dictámenes signados por el perito Julio Eduardo Cabrera Godínez, Ingeniero Arquitecto, probanzas científicas que son hechos notorios que constan en el considerando séptimo de la sentencia que ahora nos ocupa, asimismo en esta magnitud las fojas 155 y 156 de los autos del juicio de amparo citado al rubro.

En este punto con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo cabe anexar a este escrito la denuncia hecha al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México de veintitrés de diciembre de dos mil quince, con número de folio 31629, misma que consta en autos de la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01, que clarifica los motivos por los cuales la autoridad responsable actualiza la repetición del acto reclamado.

Al haberse decretado en el presente caso la suspensión de derechos fundamentales, y no regularse ejecutivamente nada al respecto, ello abrió de forma sistemática de forma ilimitada a la ilegalidad de los funcionarios, figuras políticas, particulares, en conjunto y/o "pacto criminoso", han actualizado delitos que pueden constituir de lesa humanidad. Nada se ha decretado, nada se ha regulado, nada se ha dicho, y las autoridades han hecho lo que les ha parecido, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día. Condenable (ilegal) desde cualquier punto de vista.

Ello es así, la repetición del acto reclamado de forma lógica y jurídica es indudable, la dilación dolosa se actualiza día con día, es un hecho notorio la tesis I.140.64 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo IV, pág. 2215, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, menciona que cuando en el juicio de amparo se advierte una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que clarifica el presente caso, la autoridad responsable no actúa en los términos y plazos que establece la ley, es claro que el acto reclamado es de carácter negativo, lo que a su vez, obliga a la responsable a cumplir la ejecutoria de amparo, respetar el derecho de que se trate y cumplir con lo que éste exija, de acuerdo con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, el artículo 199 de la ley citada prevé que la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada dentro del plazo de quince días:

"INCIDENTE DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. TRATÁNDOSE DE ACTOS DE CARÁCTER NEGATIVO QUE IMPLICAN OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESPETAR LOS PLAZOS LEGALES, SU PROMOCIÓN PUEDE HACERSE HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE

Cuando en el juicio de amparo se advierte una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Juez responsable no actúa en los términos y plazos que establece la ley y, en consecuencia, se otorga la protección constitucional para el efecto de dar celeridad al procedimiento de origen y respetar los términos y plazos establecidos en la ley; es claro que el acto reclamado es de carácter negativo (omisión de la autoridad de respetar los plazos legales) lo que, a su vez, obliga a la responsable a cumplir la ejecutoria de amparo, respetar el derecho de que se trate y cumplir con lo que éste exija, de acuerdo con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si bien es cierto que el artículo 199 de la ley citada prevé que la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada dentro del plazo de quince días (se entiende a partir de que conozca el cumplimiento de la ejecutoria), no menos lo es que tratándose de estos casos, en que el acto reclamado es de carácter negativo, dicho plazo debe empezar a computarse hasta que la autoridad haya respetado los plazos legales o cuando no lo haga porque ya han transcurrido. DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO."

SIN TITIO



En concordancia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó en la Tesis P./J. 10/2018 (10a.), Libro 53, abril de 2018, Tomo I, pág. 12, registro 2016694, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que la denuncia de repetición del acto reclamado su procedencia no está condicionada a que previamente exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto al cumplimiento del fallo protector, bajo el rubro y texto: **"DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR."**

Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considere que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo."

Por lo que es dable mencionar que los considerandos son la parte medular de la sentencia y que derivaron a los puntos resolutivos, en el entendido que su Señoría le mandató a la autoridad responsable, realizará dentro del plazo de treinta días siguientes a que causará ejecutoria la sentencia todas las diligencias necesarias a efecto de poder determinar la averiguación previa, hecho que conlleva una dilación dolosa de seis meses:

Considerando que el artículo 193, 194 y 197 de la Ley de Amparo mandata que si la sentencia de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, a su vez las autoridades que tengan o deban tener intervención con el cumplimiento de la sentencia, seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo, a su vez están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento.

Es de resaltar el párrafo segundo del artículo 193 de la Ley adjetiva, "Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo"

Ergo, la quejosa acudió el primero de agosto de dos mil diecisiete a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, hecho que recayó en el juicio de amparo indirecto citado al rubro, denunciando las mismas evasivas en las que de nueva vez está recayendo la autoridad responsable y su superior jerárquico, Responsable de Agencia (Alejandro Rangel Arenas) que es importante mencionar, que también tiene calidad de autoridad responsable en esta denuncia de repetición del acto reclamado.

Ahora bien, el considerando séptimo de la sentencia, en la antepenúltima hoja, párrafo veintitrés, inciso a) y b) a la letra dice:

1120

1120

"En vista de lo expuesto a lo largo de este fallo, procede conceder a Martha Patricia González Nava el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la agente del Ministerio Público (Edith Guadalupe Ortiz Valencia) Titular de la Unidad de Investigación Sin Detenido Unidad Dos de la Coordinación Territorial AO-3 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, realice lo siguiente:

- a) Dentro del plazo de treinta días siguientes a que cause ejecutoria este fallo, lleve a cabo todas las diligencias necesarias a efecto de poder determinar la averiguación previa FMC/MC-2/T2/42/13-01
- b) Recabados los medios de prueba respectivos y que le fueron ordenados por la Juez Cuarto de Delitos No Graves de la Ciudad de México, determine la indagatoria de donde emana el acto reclamado"

Así mismo, el considerando **SÉPTIMO** del fallo protector que nos ocupa se desprende que la autoridad responsable actualiza la repetición del acto reclamado en desacato a lo ordenado.

En ese sentido es relevante mencionar que la autoridad responsable, no ha ordenado algunas de la totalidad de las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa tales como:

1. La clausura del lugar de los hechos, paso vehicular, que tiene cabida en Andador Tabaqueros, con la finalidad de preservar los indicios que día con día, perpetran el "pacto criminoso" y no se consume el injusto de que se derrumbe mi casa habitación
2. La citación del Jefe Delegacional en la Magdalena Contreras y del Director General Jurídica y de Gobierno, del Órgano Político Administrativo en Magdalena Contreras, ambas autoridades pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México, para que respondan sobre el injusto que tiene cabida en la vía pública Andador Tabaqueros, autoridades que tienen conocimiento de los hechos, y que tienen responsabilidad, asimismo simularon el juicio de nulidad con número de expediente **V-76315/2015**, del procedimiento administrativo PARA/LMC/DGJG/010/2015 objeto de este juicio de nulidad, expediente que derivó de la denuncia de obstrucción de justicia en la Averiguación previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01, ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México el seis de mayo de dos mil catorce; denuncia que inició de manera formal la suspensión de derechos fundamentales inderogables en el presente caso: el veintitrés de mayo de dos mil catorce, un representante de Jurídico y de Seguridad Pública, autoridades del Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras del Gobierno de la Ciudad de México, torturaron en conjunto con el Fiscal Desconcentrado de Investigación en Magdalena Contreras y el Responsable de Agencia de MC-2, a mis testigos de los hechos (juicio de amparo 627/2017)
3. La diligencia de perito en fotografía del lugar de los hechos, en donde se sigue perpetrando día con día el "pacto criminoso", Andador Tabaqueros.
4. La diligencia de perito en fotografías, de los automóviles que conducen los habitantes del Andador Tabaqueros, que día con día circulan por el paso vehicular que tiene cabida en el andador en comento, que hacen presión sobre los muros y estructura de mi casa habitación habitada, misma que está en riesgo alto de derrumbarse, tal como consta en autos de la indagatoria.

SIN TETRO



5. La diligencia de perito en fotografía forense del allanamiento de morada

Ahora bien, en referencia al inciso E1, del considerando séptimo de la sentencia, a la letra dice:

E1) El diez de noviembre de dos mil dieciséis la agente del Ministerio Público (Edith Guadalupe Ortiz Valencia) Titular de la Unidad de Investigación Sin Detenido Unidad Dos de la Coordinación Territorial AO-3 de la Fiscalía Desconcentrada de investigación en Álvaro Obregón, de la Procuraduría de General de Justicia de la Ciudad de México, remitió la indagatoria al Fiscal Desconcentrado de investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección urbana B, para su continuación y perfeccionamiento legal; sin embargo, fue devuelta el dieciséis siguiente por diversas inconsistencias (fojas 750 y 752)

Luego, la autoridad responsable, simuló que remitió la indagatoria al Fiscal Desconcentrado de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, tal como ahora simula que lleva a cabo citatorios, es probanza del grado de malicia que la autoridad responsable, pues esta vez, no anexó **fotografías de la puerta del domicilio** en donde declara que se hizo llegar citatorio en "DOMICILIO CALLE TABAQUEROS MANZANA 45, LOTE 11" (Andador Tabaqueros) que adjunta a su oficio que designo "INFORME JUSTIFICADO" en la documental que dice:

CITATORIO PROBABLE RESPONSABLE

AV. PREVIA	FMC/MC-2/T2/00042/13-01
DESTINATARIO	ODILON NAVA DE LAROSA
DOMICILIO	CALLE TABAQUEROS MANZANA 45, LOTE 11
COLONIA	SAN NICOLAS TOTOLAPAN
CODIGO POSTAL	
DELE/MUNI	MAGDALENA CONTRERAS

Atentamente se le solicita comparecer ante el suscrito, Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad Dos sin detenido en AO-3, con domicilio en Avenida Toluca esquina Avenida México, segundo piso, Colonia Tizapan, Delegación Álvaro Obregón, a las 12:00 horas del DÍA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, para que en calidad de PROBABLE RESPONSABLE, DEBERÁ...

Por lo que la vulneración al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza día con día. (Considerando séptimo párrafo, tres, al catorce, de la Sentencia); hechos que conllevan cinco años con nueve meses, sin que la hoy quejosa tenga acceso a la justicia, sin que ésta derive en persecución objetiva, tortura, incriminación, por tratar de que mi casa habitación no se derrumbe.

Es preciso mencionar que la quejosa se está dando por enterada de estos citatorios emitidos por la autoridad responsable en instancia constitucional.

Ello es así, la autoridad responsable destruye el Estado de derecho.

En esta guisa, el artículo 197 de la Ley de Amparo en correlación a lo que mandata el artículo 107, fracción XVI de la Constitución, en la que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia (superiores jerárquicos), están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley de Amparo.

109

En virtud, que les es exigible que cumplan, en sus términos, la sentencia que otorgó la protección federal, es decir, están sometidos al requerimiento y escrutinio que exige la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales para el cumplimiento irrestricto de las ejecutorias protectoras de derechos fundamentales en lo tocante al artículo 192, primer párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, puesto que esta autoridad responsable no actúa de forma autónoma, tiene superiores jerárquicos que tienen conocimiento de su actuar contumaz, el nuevo acto de autoridad está viciado con el que pretende prohibir el acceso a la justicia y no dar cumplimiento cabal a la sentencia protectora, con el objeto de que no se acaten en sus términos los efectos por los que se concedió el amparo a la suscrita quejosa, esto con fundamento en el artículo 193 y 197 de la Ley de Amparo.

Porque es lógico, que si la autoridad responsable en conjunto con sus superiores jerárquicos, en cumplimiento a la ejecutoria, emitiera un acto repetitivo de las violaciones, como acontece en el caso, por las cuales se otorgó la protección constitucional, sería razonable y necesario que el Juzgado de Distrito, considere que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento por la autoridad responsable, puesto que esta autoridad, ha demostrado en instancia constitucional, la malicia con la que se conduce, la conducta de la autoridad deriva en una espiral de impunidad; los innumerables juicios de amparo indirecto con número de expediente 1118/2016, 288/2017, 545/2017 que han tenido como origen está indagatoria, son hechos notorios para el Juzgado de Distrito, puesto que como se ha venido diciendo, han llegado incluso a torturar a sangre fría, como plan preconcebido y esmeradamente planificar incriminación, humillaciones, inacceso a la justicia, malos tratos, castigos infamantes, ... en contra de la suscrita y de mi familia, para exonerar arbitrariamente a los probables responsables de su responsabilidad penal y a otras autoridades; aun y cuando existen pruebas en contra de la autoridad responsable de su actuar doloso, ésta, sigue destruyendo el Estado de Derecho.

En este empalme se hace necesario transcribir un resumen del considerando séptimo de la sentencia:

La amparista se duele de dos incumplimientos: el primero, relativo a la supervisión del Responsable de Agencia; y el segundo, concerniente a la formulación del pliego de consignación por parte del Ministerio Público responsable, ambos actos vinculados con la dilación en la integración y determinación de la averiguación previa FMC/MC-2/T2/42/13-01.

Al respecto, es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional el razonamiento de la amparista encaminado a evidenciar que el atraso en la indagatoria de donde emana el acto reclamado, ha impedido que se determine, aunque para arribar a esa conclusión este Juzgado de distrito supla la deficiencia de la queja, al tenor de las razones siguientes:

De inicio es pertinente atender al contenido del primer párrafo del numeral 17, de la Carta Magna, que establece:

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibida las costas judiciales.

[...]

El derecho fundamental de acceso a la justicia cobra aplicación a la integración y determinación de la averiguación previa, ya que, por disposición de la Carta magna, el Agente del Ministerio Público debe proceder a la investigación del delito, lo cual, en modo alguno ha de

SIN TERN O



realizar en forma irracional sino ajustándose a los plazos que norman su actuar, caso contrario, su proceder trasgrede derechos fundamentales del justiciable.

Así las cosas, es factible considerar que el trámite y resolución de los asuntos en la etapa de averiguación previa está sujeto al principio de expeditéz, razón por la cual, cuando en un juicio constitucional se considera vulnerado el numeral 17 de la Carta Magna, el juez de amparo deberá considerar:

- a) Cuál es el término con que cuenta la fiscalía para agotar la investigación
- b) Si se han llevado a cabo las diligencias ordenadas por el órgano técnico, -sin que esto entrañe la posibilidad de estudiar el fondo de la denuncia a querella planteada por el gobernado-
- c) Sin han transcurrido un plazo razonable para que la Representación Social dicte la determinación que conforme a derecho corresponda.

[...]

j) Declaraciones ministeriales de Lucrecia Nava Gallegos, Marcos Nava Gallegos, Rosa Gallegos Caballero, José Luis Nava Gallegos, y Diego Arturo Lara Nava, rendidas el veintiséis de noviembre de dos mil trece, en las que expresaron que el andador que refiere la querellante en la que colocaron las rejillas de aguas pluviales, es parte de la vía pública de acuerdo al plano de urbanización de la Delegación Magdalena Contreras, y tampoco las vibraciones que refiere pudieron causar un daño a su vivienda (fojas 160 a 236, Anexo V)

es necesario resaltar en este punto, que los probables responsables citados en el inciso j de ésta sentencia, declararon su participación en el "pacto criminoso", jactándose que es una vía pública (misma que ésta cerrada ilegalmente al libre paso), autos de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, ello es así:

Los probables responsables, de nombre Lucrecia Nava Gallegos; Marcos Nava Gallegos; Rosa Gallegos Caballero (tercera interesada en juicio de amparo 627/2017); José Luis Nava Gallegos; Diego Arturo Lara Nava en compañía de su abogado José Máximo Pérez Romero, realizaron su declaración de forma escrita en compañía de su abogado de nombre José Máximo Pérez Romero, (fojas 187 a 236 del Anexo I del juicio de amparo 288/2017):

"...Debo manifestar, que el acceso al inmueble del suscrito, lo es por andador tabaqueros..., también debo mencionar que el andador que da acceso..., es un andador público porque este andador de acuerdo con los planos de urbanización de la delegación magdalena contreras, se contempla como vía pública...

Asimismo...la querellante pretenda hacer valer que son las vibraciones que dice se causan por la circulación de los vehículos sobre dicho andador las que causaron los daños a su propiedad..."

k) Ampliación de declaración de la querellante Martha Patricia González Nava de doce de diciembre de dos mil trece, en la que manifestó: que el diecinueve de enero de la citada anualidad sorprendió a su vecino Marcos Nava Gallegos en la azotea de su domicilio en compañía de un desconocido, sin autorización...

l) Declaración de Carolina González Nava rendida el doce de diciembre de dos mil trece, en la que expreso que el diecinueve de enero se encontraba con su hermana Martha Patricia en su domicilio y



escucharon diversos golpes como si ranuraran la pared, al salir al patio se dieron cuenta que en la azotea se encontraba Marcos Nava Gallegos en compañía de otro sujeto con herramientas y al verlas se retiraron...

m) Oficio de seis de mayo de dos mil catorce, suscrito por el agente del Ministerio Público Investigador (Ofelia García Monroy), dirigido al Director Jurídico y de Gobierno de la Delegación Magdalena Contreras en el que solicitó informara si el andador vehicular que se encuentra en la calle Tabaqueros, 45, Colonia San Nicolás Totolapan, es vía pública (foja 251 Anexo V)

n) Oficio de tres de junio de dos mil catorce, suscrito por la Directora Jurídica (Dolores Hernández García) de la Delegación Magdalena Contreras y dirigido al agente del Ministerio Público investigador (Ofelia García Monroy) con el que le informa que el andador de la calle Tabaqueros, 45, es de dominio público, ello de acuerdo al plano 1363-a/45 de la Dirección General de Colonias Y tenencia de la Tierra (foja 254, Anexo V).

ñ) Oficio de doce de junio de dos mil catorce, suscrito por el agente del Ministerio Público Investigador (Ofelia García Monroy), dirigido al Director General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en el que solicitó informara si el andador vehicular que se encuentra en la calle Tabaqueros, 45, colonia San Nicolás Totolapan, es vía pública (foja 260, Anexo V)

o) Oficio de dos de julio de dos mil catorce, suscrito por el Director General de Administración Urbana de la Ciudad de México y dirigido al agente del ministerio público investigador (Ofelia García Monroy), con el que le informa que el andador de tabaqueros, ubicado entre la cerrada Tabaqueros y calle Tepetates de la Manzana 45, del pueblo de San Nicolás Totolapan, es considerado como vía pública de conformidad con lo señalado por el artículo 55 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito federal (foja 266, Anexo V)

x) El veinticinco de marzo de dos mil quince, compareció la querellante Martha Patricia González Nava y expresó que se exhibían diversos oficios suscritos por la Subdirección de licencias y alineamientos de la delegación magdalena Contreras (foja 431, Anexo V)

z) el doce de mayo de dos mil quince, compareció Martha Patricia González Nava ante la Agente del ministerio Público investigador para ratificar dos escritos que suscribió, asimismo tuvo conocimiento de diversos oficios suscritos por autoridades de la Delegación Magdalena Contreras, relacionadas con el permiso para una rampa de acceso a los lotes 6 a 11 de la Manzana 45, de la calle Tabaqueros, colonia San Nicolás Totolapan, así como la identificación del Andador tabaqueros como vía pública (fojas 441 a 442, Anexo V)

A.1) Ampliación de dictamen en materia de arquitectura de veintiséis de junio de dos mil quince, rendido por el perito Julio Eduardo Cabrera Godínez (foja 478 a 483, Anexo V)

ii. Ampliación de Dictamen, oficio: I-13597-2015, que a la letra dice:

"No se fabricó un muro de contención que absorba las presiones que ejerce dicha circulación, debido a la diferencia de niveles de desplante en ambos predios (de mayor altura el de circulación vehicular), para evitar que el muro y cimentación del predio que nos ocupa, reciba presiones, lo anterior toda vez que se aprecia por medio de calas, que el terreno natural está en contacto directo con el muro y cimentación del inmueble que nos ocupa, muro y cimentación que por sus características constructivas, no fueron diseñados para tal fin, generando con esas

SECRET

SECRET

presiones movimientos en el inmueble que nos ocupa, y como consecuencia fisuras en sus elementos, los detalles citados se consideran de tracto sucesivo..."

Por lo que, en ese momento, se estableció la tipicidad de tiempo, modo y lugar, y la antijuridicidad: La conducta que, día con día se actualiza (fojas 155 y 156 de los autos del juicio citado al rubro), las declaraciones (rendidas, acompañados de su abogado de nombre José Máximo Pérez Romero) de los probables responsables de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece (inciso j) rendidas ante el ministerio público, fueron demostradas con pruebas científicas; luego, cabe resaltar; que la autoridad responsable se niega a acatar su fallo protector, resaltando que se actualiza día con día la repetición del acto reclamado haciéndose parte del injusto, que no sólo conlleva daño a la propiedad doloso, sino que estos probables responsables en conjunto con autoridades pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México, planificaron graves violaciones a derechos humanos en contra de la suscrita quejosa y mi familia (juicio de nulidad V-76315/2015, juicio de amparo indirecto 627/2015).

B.1) ampliación de dictamen en materia de arquitectura de treinta de septiembre de dos mil quince, suscrito por el perito Julio Eduardo Cabrera Godínez (foja 498 y 500, Anexo V)

E1) El diez de noviembre de dos mil dieciséis la agente del Ministerio Público (Edith Guadalupe Ortiz Valencia) Titular de la Unidad de Investigación Sin Detenido Unidad Dos de la Coordinación Territorial AO-3 de la Fiscalía Desconcentrada de investigación en Álvaro Obregón, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, remitió la indagatoria al Fiscal Desconcentrado de investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana B, para su continuación y perfeccionamiento legal; sin embargo, fue devuelta el dieciséis siguiente por diversas inconsistencias (fojas 750 y 752)

[...]

De esa relatoría, es factible concluir que desde el doce de enero de dos mil trece, cuando la ofendida Martha Patricia González Nava presentó su denuncia ante diversa agente del ministerio Público (Elvia Liliana Preciado Copado) titular de la Unidad de Investigación Dos Sin Detenido, de la agencia investigadora MC-2, de la Fiscalía Desconcentrada en Magdalena Contreras quien radicó la indagatoria bajo el registro FMC/MC-2/T2/42/13-01, y en veintiséis de febrero de dos mil quince, fue enviada a la Fiscalía desconcentrada de investigación en Álvaro Obregón a solicitud de la querellante para ser turnada a la agente del Ministerio Público (Edith Guadalupe Ortiz Valencia) Titular de la Unidad de investigación Sin Detenido Unidad Dos de la Coordinación Territorial AO-3, al uno de agosto de dos mil diecisiete, momento en que se presentó la demanda de amparo, transcurrieron aproximadamente cuatro años, siete meses, sin que se hubiera determinado la averiguación previa, lo cual es contrario a derecho, a pesar de ser consignada en tres ocasiones, sin corregirse los errores señalados por la Juez Penal de delitos No Graves que conoció de ésta.

Lo cual impacta directamente en la prerrogativa reconocida a favor de la quejosa en el numeral 17 de la Carta Magna, en su vertiente de que se administre justicia dentro de los plazos y términos que fije la ley.⁶

Máxime, debe recordarse que el Ministerio Público cuenta con herramientas que el legislador estableció en la ley para hacer cumplir

⁶ Nota. Lo resaltado es propio.



TRIBUNAL DE LA CORTE DE
APELACIONES DE SANTIAGO
CHILE

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

sus determinaciones-medios de apremio- cuyo empleo se justifica a partir del hecho de administrar justicia pronta, lo cual permite constreñir a cualquier ente obligado a observar las peticiones que el Fiscal formule, en aras de una pronta obtención

Siendo estos limites de la cosa juzgada material fueron los objetos y cuestiones que se decidieron y definieron en la sentencia.

Por lo anteriormente, expuesto y fundado a Usted **C. Juez Rosa María Cervantes Mejía Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal**; actualmente Ocurro y pido:

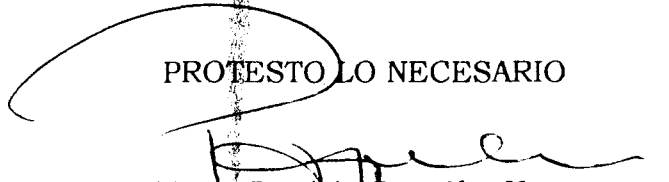
Primero. Con fundamento en el artículo 213 de la Ley de Amparo suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por la quejosa.

Segundo. Me tenga por presente con este escrito, para que se sirva resolver conforme al texto del mismo.

Tercero. Tener en consideración las documentales que la suscrita acompaña a este ocuro en copia simple:

- a) Hojas 63, 97, 259 a 264 (que conforma el expediente PARA/LMC/DGJG/010/2015), y copia se la audiencia-sentencia, todas del juicio de nulidad V-76315/2015 (es importante mencionar, que la quejosa no cuenta con copias certificadas de éste juicio, pues le fueron negadas por la Oficina de información pública, otorgando copias simples por un total de 409 hojas, por lo que exhibo copia simple del recibo de pago de éstas)
- b) Documental del veintitres de diciembre de dos mil quince, dirigido al Procurador General de Justicia de la Ciudad De México.

PROTESTO LO NECESARIO


Marta Patricia González Nava

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2018

SIN TERS

DER JOURNAL
FRAZONET
KRENN
1. 10. 12



Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Distrito Federal
Oficialía de Partes



(V-76315/2015)

DS

Actor:

Autoridad
Demandada:

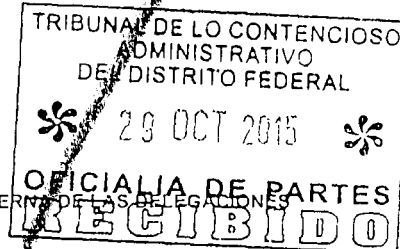
JEFE DELEGACIONAL EN MAGDALENA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO EN MAGDALENA CONTRERAS

Fecha: 29/10/2015 14:56:50
No. de Juicio: V-76315/2015
No. de Folio: 80190

Sala: QUINTA SALA ORDINARIA
Ponencia: PONENCIA QUINCE
Magistrado: DR. RUBÉN MINUTTI ZANATTA

Acto impugnado: RESOLUCIONES DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LAS DELEGACIONES
Concepto: DEMANDA - SUSPENSIÓN
Tipo demanda: ORDINARIO / SUMARIO
Procedencia: PARTICULAR
Materia: ADMINISTRATIVA
Observaciones:

Copias del Original: 2



Anexos						
No.	Tipo de anexo	Fecha	Cantidad	Copias	Tipo de documento	Observaciones
1	TESTIMONIO NOTARIAL		1	0	COPIA CERTIFICADA	
2	LEGAJO DE PRUEBAS		1	0	COPIA SIMPLE	
3	ACUSE		1	0	ORIGINAL	
4	LEGAJO CANTIDAD EN FOJAS		2	0	COPIA SIMPLE	

DIGITALIZADO

10



Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Distrito Federal
Oficina de Partes



(V-76315/2015)

1371

Actor:

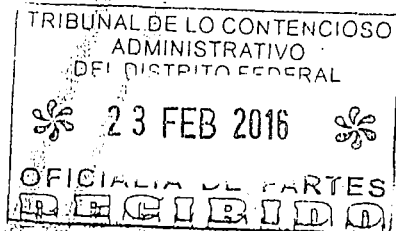
Autoridad Demandada: JEFE DELEGACIONAL EN MAGDALENA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO EN MAGDALENA CONTRERAS

Presentó: AUTORIDAD - JEFE DELEGACIONAL EN MAGDALENA CONTRERAS

Fecha:	23/02/2016 09:56:16
No. de Juicio:	V-76315/2015
No. de Folio:	18709

Dirigido a: QUINTA SALA ORDINARIA PONENCIA QUINCE
Sala: QUINTA SALA ORDINARIA
Potencia: PONENCIA QUINCE
Magistrado: DR. RUBÉN MINUTTI ZANATTA
Acto impugnado: OTROS
Concepto: PROMOCIÓN
Procedencia: PARTICULAR
Materia: ADMINISTRATIVA
Observaciones:

Copias del Original: 0



Anexos						
No.	Tipo de anexo	Fecha	Cantidad	Copias	Tipo de documento	Observaciones
1	LEGAJO DE PRUEBAS		1	0	COPIA SIMPLE	

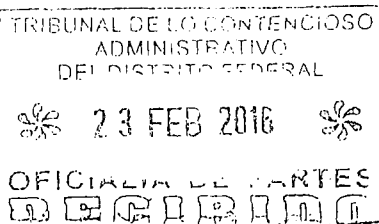
DE
ISO
DEL
FEDERAL
ORDINARIA
QUINCE

DIGITALIZADO

CONTENTS



372



MACO08-10-100/000142 /2016

ASUNTO: Se desahoga requerimiento solicitado mediante oficio 699/LGB.
JUICIO DE NULIDAD: V-76315/15
PROMOVENTE:

La Magdalena Contreras, Ciudad de México, a 19 de febrero de 2016

**CC. MAGISTRADOS DE LA QUINTA SALA
ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL**

C. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, Director General Jurídico y de Gobierno en el Órgano Político Administrativo en La Magdalena Contreras, **FIRMANDO EN SI Y EN SUPLENCIA POR AUSENCIA TEMPORAL DEL C. JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracción I en relación con los artículos 122 fracción I y 122 Bis fracción X inciso A, todos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; autoridades señaladas como demandadas en el Juicio de Nulidad al rubro en cita, con el debido respeto, comparezco para exponer lo siguiente:

En atención al oficio 699/LGB de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, notificado en la oficina de partes de la Jefatura Delegacional en La Magdalena Contreras, el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contiene el Acuerdo de fecha veintisiete de enero del año en curso mediante el cual se refiere a que, esta autoridad no exhibió copias de traslado a la parte actora, de las documentales exhibidas como prueba; motivo por el cual REQUIERE a ésta Autoridad Demandada, para que en el término de cinco días hábiles exhiba un juego de copias de traslado a la parte actora de las documentales exhibidas como pruebas, consistente en el expediente administrativo PRA/LMC/DGJG/010/2015.

A efecto de dar cabal cumplimiento a lo determinado por el Órgano Jurisdiccional de conocimiento, para mejor proveer, envió en **UN JUEGO DE COPIAS consistente en el expediente administrativo PRA/LMC/DGJG/010/2015**; lo anterior a efecto de que las mismas sean trasladadas a la parte actora en el Juicio de Nulidad al rubro en cita.

Por lo antes expuesto y fundado, **A USTEDES, CC. MAGISTRADOS**, atentamente les solicito:

PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con el ocurso de cuenta, y por cumplimentado lo determinado en el requerimiento solicitado mediante oficio 699/LGB de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis.

SEGUNDO. Previo estudio de lo expresado en este libelo y analizadas las probanzas ofrecidas por esta autoridad demandada, es procedente declarar la improcedencia, el sobreseimiento del presente juicio o en su defecto la validez de los actos impugnados en el juicio de nulidad en el que se actúa.

ATENTAMENTE

C. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Director General Jurídico y de Gobierno

MACO08-10-100





100-443887-100

100

10



TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DEL DISTRITO
FEDERAL

DESAHOGO DE REQUERIMIENTO

Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.- **POR RECIBIDO** el escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal el día veintitrés de los corrientes, suscrito por el **C. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN MAGDALENA CONTRERAS**, firmando en sí y en suplencia por ausencia temporal del **C. JEFE DELEGACIONAL EN MAGDALENA CONTRERAS**, mediante el cual exhibe un juego de copias simples del expediente administrativo PARA/LMC/DGJG/010/2015, lo anterior, a efecto de que las mismas sean trasladadas a la parte actora en el juicio de nulidad citado al rubro.- Al respecto **SE ACUERDA:** Agréguese a sus autos el oficio de referencia; se deja insubsistente el requerimiento formulado mediante proveído de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia, con copia de los anexos exhibidos y del oficio de merito, **CORRASE TRASLADO A LA PARTE ACTORA**, para que en el término de **QUINCE DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, **AMPLÍE SU DEMANDA.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR LISTA AUTORIZADA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA PONENCIA A LAS DEMAS PARTES.-** Así lo proveyó y firma el Magistrado Instructor de la Ponencia Quince de la Quinta Sala Ordinaria, **Doctor RUBÉN MINUTTI ZANATTA**, ante el Secretario de Acuerdos, **Licenciado Octavio Ruiz Toral**, que da fe.-----

RMZ/ORT/earf

SECRET

1



158

259

158

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PRA/LMC/DGJG/010/2015

**ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y
ORDEN DE EJECUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE
VIA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los **tres días del mes de agosto de dos mil quince**. **VISTO** el contenido el contenido del oficio MACO08-80-800/0553/2015 y del Expediente Técnico de fecha tres de julio de dos mil quince, realizado por la Dirección General de Colonias y Tenencia de la Tierra de esta desconcentrada, y derivado de los escritos de fechas seis de mayo, ocho de octubre, doce de diciembre, todos del año dos mil catorce, veintitrés de enero, tres de febrero, treinta de abril, cinco y trece de mayo, todos del año dos mil quince, además de las solicitudes ciudadanas con folios 2014/18734, 2014/18734, ambos de fecha once de diciembre de dos mil catorce, e ingresados mediante del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, a través del cual se hizo del conocimiento de este Órgano Político Administrativo, que de manera irregular existe obstrucción sobre la vía pública, ubicada en Andador Tabaqueros, Manzana 45, Lotes 6, 7, 8, 9, 10 y 11, Colonia San Nicolás Totolapan, en la Delegación La Magdalena Contreras; con fundamento en lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 104 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 párrafo tercero, 7, 10 fracción X, 11 párrafos primero y décimo primero, 37, 38, 39 fracciones VIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 3 fracción III, 120 y 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2 fracciones I, VI, VIII y XXII, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 14 BIS fracción I, 15, 16, 17, 19 Bis, 30, 31, 32, 39 fracciones I, III, IX y XI, 50, 53, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82 fracción I, 84, 87 fracción I, 88 y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 2 fracción I, 4 fracción I, 5, 6 fracción III, fracciones I y V, 16 fracción I, 17 párrafo primero, 19, 20, 21, 30 y 112 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; y 1 y 55 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Autoridad **ACUERDA** iniciar el presente Procedimiento Administrativo de Oficio, a efecto de determinar si en el caso planteado, se violan disposiciones de orden público que atentan contra las disposiciones legales aplicables al caso; y

RESULTANDO

1. Mediante el contenido del oficio MACO08-80-800/0553/2015 y del Expediente Técnico de fecha tres de julio de dos mil quince, realizado por la Dirección General de Colonias y Tenencia de la Tierra de esta desconcentrada, y derivado de los escritos de fechas seis de mayo, ocho de octubre, once de diciembre, todos del año dos mil catorce, veintitrés de enero, tres de febrero, treinta de abril, cinco y trece de mayo, todos del año dos mil quince, además de las solicitudes ciudadanas con folios 2014/18734, 2014/18734, ambos de fecha once de diciembre de dos mil catorce, e ingresados mediante del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, a través del cual se hizo del conocimiento de este Órgano Político Administrativo, que de manera irregular existe obstrucción sobre la vía pública, ubicada en Andador Tabaqueros, Manzana 45, Lotes 6, 7, 8, 9, 10 y 11, Colonia San Nicolás Totolapan, en la Delegación La Magdalena Contreras.
2. Derivado de lo anterior, el Director General Jurídico y de Gobierno, solicitó al Director General de Colonias y Tenencia de la Tierra, ambos de esta desconcentrada, mediante los diversos MACO08-10-110/0583/2014, MACO08-10-110/1207/2014, MACO08-10-110/1405/2014, MACO08-10-110/187/2015, MACO08-10-110/352/2015 y MACO08-10-110/524/2015, comisionará personal de su adscripción para que se constituyera en la vialidad antes citada, con la finalidad de realizar la integración del expediente técnico correspondiente.
3. Posteriormente, mediante el oficio MACO08-80-800/555/2015, el Director General de Colonias y Tenencia de la Tierra de esta desconcentrada, remitió el expediente técnico, en el que informó lo siguiente:



158

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PRA/LMC/DGJG/010/2015

"...personal adscrito a esta Dirección General a mi cargo, acudieron al lugar antes señalado para realizar la inspección correspondiente, la cual consistente en la colocación de un portón de herrería así como sección de una casa habitación graficada en el plano oficial con número de lote 11 y construida con materiales definitivos, por lo que se integró el expediente técnico..."

El expediente técnico se integra de lo siguiente:

- Memoria Fotográfica.
- Croquis de ubicación.
- Memoria Técnica.
- Levantamiento Topográfico planimétrico, elaborado en esta Dirección General.
- Copia de la fracción del plano oficial No. 1363-A/45, de fecha marzo 1993, escala 1:500, elaborado por la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).

La Memoria Técnica que forma parte integrante del Dictamen Técnico informa lo siguiente:

"COLOCACIÓN DE PORTÓN CONSTITUIDO DE HERRERÍA CON DOS HOJAS ABATIBLES, UNA LONGITUD DE 2.85M Y UNA ALTURA DE 1.93M, ASÍ COMO LA SECCIÓN DE UNA CASA HABITACIÓN CONSTRUIDA CON MATERIALES DEFINITIVOS LOS QUE EN CONJUNTO IMPIDEN EL LIBRE TRÁNSITO POR EL ANDADOR TABAQUEROS, SEGÚN LO DISPUESTO POR EL PLANO OFICIAL REGULADOR No. 1363-A/45, DE FECHA MARZO/1993, ESCALA 1:500, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL (DGRT)."

En vista de lo anterior y una vez allegados todos y cada uno de los elementos de prueba pertinentes para poder dictar resolución respecto de la situación que prevalece en el Andador Tabaqueros, Manzana 45, Lotes 6, 7, 8, 9, 10 y 11, Colonia San Nicolás Totolapan, en la Delegación La Magdalena Contreras, Distrito Federal, esta Autoridad procede al estudio del problema planteado, y

CONSIDERANDO

I. Que el C. Jefe Delegacional en Magdalena Contreras, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 104 y 117 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 párrafo tercero, 7, 10 fracción X, 11 párrafos primero y décimo primero, 37, 38 y 39 fracciones VIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 3 fracción III, 120 y 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2 fracciones I, VI, VIII y XXII, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 14 BIS fracción I, 15, 16, 17, 19 Bis, 30, 31, 32, 39 fracciones I, III, IX y XI, 50, 53, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82 fracción I, 84, 87, fracción I, 88 y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 2 fracción I, 4 fracción I, 5, 6 fracción III, 8 fracciones I, 9, 10, 11 fracciones I, 17 párrafo primero, 19, 20, 21, 30 y 112 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; y 1 y 55 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, firmando la Directora General Jurídica y de Gobierno en esta Delegación, de conformidad con el Acuerdo Delegatorio emitido por el C. Jefe Delegacional, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 10, Décima Octava Época, de fecha quince de enero del año dos mil quince, mediante el cual le delega en el numeral "**DÉCIMO. Considerando el contenido del artículo 39 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se delega en el Director General referido la facultad de substanciar los procedimientos administrativos, dictar y suscribir las resoluciones de recuperación administrativa de la vía pública y de los predios bienes del dominio público y privado del Distrito Federal que detente de manera irregular los particulares, de acuerdo con los artículos 4, 13, 13 bis fracción III, 16, 17, 19, 20, 23, 30 y 112 párrafos primero y segundo y fracciones I, II, y III de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, podrá ordenar el retiro de obstáculos que impidan**



df. amx
lamagdalenacontreras.amx

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PRA/LMC/DGJG/010/2015

el uso adecuado y todos los actos jurídicos para retener la posesión y ejecutar o realizar todos los actos tendientes a dicha recuperación."

II. Esta Autoridad procede a valorar las pruebas documentales que obran dentro del expediente en que se actúa, mismas que son:

a) **LA DOCUMENTAL PÚBLICA** consistente en los **ORIGINALES** del oficio MACO08-80-800/0553/2015 y del Expediente Técnico de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, realizado por la Dirección General de Colonias y Tenencia de la Tierra de esta desconcentrada, y derivado de los escritos de fechas seis de mayo, ocho de octubre, once de diciembre, todos del año dos mil catorce, veintitrés de enero, tres de febrero, treinta de abril, cinco y trece de mayo, todos del año dos mil quince, además de las solicitudes ciudadanas con folios 2014/18734, 2014/18734, ambos de fecha once de diciembre de dos mil catorce, e ingresados mediante del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, a través del cual se hizo del conocimiento de este Órgano Político Administrativo, que de manera irregular existe obstrucción sobre la vía pública, ubicada en Andador Tabaqueros, Manzana 45, Lotes 6, 7, 8, 9, 10 y 11, Colonia San Nicolás Totolapan, en la Delegación La Magdalena Contreras.

b) **LA DOCUMENTAL PÚBLICA** consistente en los oficios MACO08-10-110/0583/2014, MACO08-10-110/1207/2014, MACO08-10-110/1405/2014, MACO08-10-110/187/2015, MACO08-10-110/352/2015 y MACO08-10-110/524/2015, suscritos por el Director General Jurídico y de Gobierno, mediante los cuales solicito a la Dirección General de Colonias y Tenencia de la Tierra de esta desconcentrada, comisionara personal de su adscripción y se constituyera en la vialidad, a fin de realizar la integración del expediente técnico correspondiente.

c) **LA DOCUMENTAL PÚBLICA** consistente en el oficio MACO08-80-800/0553/2015, mediante el cual el Director General de Colonias y Tenencia de la Tierra, remitió el expediente técnico, en el que informó lo siguiente:

personal adscrito a esta Dirección General a mi cargo, acudieron al lugar antes señalado para realizar la inspección correspondiente, la cual consistente en la colocación de un portón de herrería así como sección de una casa habitación graficada en el plano oficial con número de lote 11 y construida con materiales definitivos, por lo que se integró el expediente técnico..."

El expediente técnico se integra de lo siguiente:

- Memoria Fotográfica.
- Croquis de ubicación.
- Memoria Técnica.
- Levantamiento Topográfico planimétrico, elaborado en esta Dirección General.
- Copia de la fracción del plano oficial No. 1363-A/45, de fecha marzo 1993, escala 1:500, elaborado por la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).

La Memoria Técnica que forma parte integrante del Dictamen Técnico informa lo siguiente:

"COLOCACIÓN DE PORTÓN CONSTITUIDO DE HERRERÍA CON DOS HOJAS ABATIBLES, UNA LONGITUD DE 2.85M Y UNA ALTURA DE 1.93M, ASÍ COMO LA SECCIÓN DE UNA CASA HABITACIÓN CONSTRUIDA CON MATERIALES DEFINITIVOS LOS QUE EN CONJUNTO IMPIDEN EL LIBRE TRÁNSITO POR EL ANDADOR TABAQUEROS, SEGÚN LO DISPUESTO POR EL PLANO OFICIAL REGULADOR No. 1363-A/45, DE FECHA MARZO/1993, ESCALA 1:500, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL (DGRT)."

Por lo que atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, resulta procedente determinar que las pruebas marcadas con los incisos **a**, **b** y **c**, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, en cuanto hace al alcance y valor probatorio, por tratarse de



DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PRA/LMC/DGJG/010/2015

documentales e informes expedidos por funcionarios que desempeñan cargos públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, resulta procedente otorgarles **VALOR PROBATORIO PLENO**, lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 327 fracción II y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, numerales que a la letra indican:

"Artículo 327. Son documentos públicos:

II. Los documentos auténticos e informes expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones..."

"Artículo 403.- Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la pretensión que en ellos se funde."

Es procedente sustentar por analogía el anterior argumento, con la siguiente Jurisprudencia:

"Localización: Quinta Época

Instancia: Pleno

Fuente: Apéndice de 1995

Tomo VI, Parte SCJN

Páginas: 157

Tesis: 226

Carácter: Obligatoria

Materia(s): Común

DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.-

Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.

Quinta Época:

Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917.

Unanimidad de once votos.

Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Caño José. 6 de septiembre de

1918. Unanimidad de once votos.

Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos.

Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 10 de mayo de 1919. Mayoría de siete votos.

Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos.

Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS".

Genealogía:

APÉNDICE AL TOMO XXXVI 306 PG. 555

APÉNDICE AL TOMO L 82 PG. 96

APÉNDICE AL TOMO LXIV 90 PG. 94

APÉNDICE AL TOMO LXXVI 340 PG. 560

APÉNDICE AL TOMO XCVII 392 PG. 730

APÉNDICE '54: TESIS 389 PG. 723

APÉNDICE '65: TESIS 93 PG. 166

APÉNDICE '75: TESIS 91 PG. 148



DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PRA/LMC/DGJG/010/2015

En atención a los argumentos anteriormente vertidos, esta Autoridad considera procedente ordenar la Recuperación del Bien de Dominio Público en el Andador Tabaqueros, Manzana 45, Lote 11, Colonia San Nicolás Totolapan, en esta demarcación; existiendo de manera irregular una invasión a la vía pública, debido a que existe la colocación de un portón constituido de herrería, así como sección de una casa habitación construida con materiales definitivos, que utilizan, usan y aprovechan a su favor los particulares y/o posesionario y/o propietario y/o responsable, en esta Ciudad de México Distrito Federal, en vía de Ejecución Directa lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 112 de la Ley del Régimen de Patrimonial y del Servicio Público y 13 y 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, mismos que a la letra indican:

LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO

"Artículo 112. El Distrito Federal está facultado para retener administrativamente los bienes que posea.

Quando se trate de recuperar la posesión provisional o definitiva de bienes del dominio público, podrá seguirse el procedimiento administrativo que se señala más adelante, o, podrán deducirse, a elección del Distrito Federal, ante los Tribunales del Fuero Común las acciones que correspondan, mismas que se tramitarán en la vía ordinaria de conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

El procedimiento de recuperación administrativa de la posesión provisional o definitiva de los bienes del dominio público, se sujetará a las reglas siguientes:

I. La orden de recuperación deberá ser emitida por el Delegado correspondiente, en la que se especificarán las medidas administrativas necesarias que se ejecutarán para la recuperación de los bienes;

II. La Delegación procederá a ejecutar las medidas administrativas dictadas en la orden de recuperación y a recobrar los inmuebles que detentan los particulares, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la orden de recuperación administrativa, y

III. Si hay oposición por parte del interesado, o si éste impugna la resolución administrativa a que se refiere la Fracción I de este artículo, por tratarse de bienes del dominio público, cuya posesión por parte del Distrito Federal es de interés social y de interés público, NO PROCEDERÁ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO y, por lo tanto, el Distrito Federal por conducto de la Delegación podrá tomar de inmediato la posesión del bien.

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

"Artículo 13. El acto administrativo válido es ejecutorio cuando el ordenamiento jurídico aplicable, reconoce a la Administración Pública del Distrito Federal, la facultad de obtener su cumplimiento mediante el uso de medios de ejecución forzosa."

"Artículo 17. La ejecución directa del acto por la Administración Pública del Distrito Federal, será admisible cuando se trate de retirar obstáculos, vehículos o cualesquiera otros efectos o bienes irregularmente colocados, ubicados o asentados en bienes del dominio público del Distrito Federal.

En estos casos deberá hacerse un previo apercibimiento al propietario, poseedor o tenedor de la cosa, si éste estuviere presente en el lugar en tal momento, para que lo retire con sus propios medios; si éste no estuviere presente, o si estándolo se negara a cumplir el acto o no lo cumpliera dentro de un plazo razonable que se le fijará al efecto, podrá procederse a la ejecución del acto que ordena su remoción quedando obligado el propietario, poseedor o tenedor a pagar los gastos



DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PRA/LMC/DGJG/010/2015

de ejecución en que hubiere incurrido la Administración Pública del Distrito Federal.

Cuando el acto que se ejecute directamente fuere invalidado por autoridad competente, corresponderá a la Administración Pública del Distrito Federal restituir lo que hubiere cobrado de gastos de ejecución en los términos previstos por el Código Financiero del Distrito Federal."

Sirva de apoyo al argumento anteriormente expuesto por analogía, la siguiente Tesis Jurisprudencial que a la letra señala:

Localización: Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Septiembre de 2004

Página: 1729

Tesis: I.7o.A.305.A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. LOS ARTÍCULOS 17 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y 112 DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, QUE PREVEN LA RECUPERACIÓN DIRECTA DE AQUELLOS, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.- Los artículos 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y 112 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, que permiten la "ejecución directa" por la administración pública del Distrito Federal para retirar objetos colocados irregularmente en bienes del dominio público del Distrito Federal, sin oír previamente al interesado, no vulneran la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la actuación del Estado, en esos casos, no tiene por objeto primordial afectar bienes de los particulares, sino proteger los bienes de uso común del Distrito Federal en beneficio de la colectividad, consagrados y reconocidos en el numeral 122, base primera, fracción V, inciso j), de la Carta Magna. Finalmente, de conformidad con el precepto 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, los afectados por los actos de autoridades administrativas podrán intentar el recurso de inconformidad en sede administrativa o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, lo cual es suficiente para considerar que se respeta el derecho de audiencia, aunque éste sea otorgado con posterioridad al acto de autoridad.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1597/2004. Víctor Miguel Romero Paredes. 19 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

Tomando en consideración que de la simple lectura del Dictamen Técnico que obra en el presente expediente, realizado por la Dirección General de Colonias y Tenencia de la Tierra de esta desconcentrada, se faculta a los funcionarios públicos que sean habilitados para ejecutar en sus términos la presente Resolución Administrativa, para que a su consideración, soliciten el apoyo de la Fuerza Pública y procedan al retiro del portón constituido de herrería, así como sección de una casa habitación construida con materiales definitivos, que nos ocupan, para lo





162
2013

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PRA/LMC/DGJG/010/2015

cual se instruye al Director General de Colonias y Tenencia de la Tierra, así como al Director General de Obras y Desarrollo Urbano, ambos de esta desconcentrada, a efecto de que designen personal suficiente y debidamente equipado para que realice labores de deslinde y levantamiento topográfico para determinar la vía pública, el retiro de obstáculos, demolición de estructuras de construcción y limpieza que se deriven de la ejecución de la Recuperación Administrativa ordenada, lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 112 fracciones I, II y III de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público y 73 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, éste último dispositivo a la letra dice:

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

"Artículo 73. Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala:

I.- La multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 62, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia..."

Con fundamento en lo establecido en el artículo 112 fracciones I y II de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, el cual ha sido transcrito con anterioridad y que en obvio de repeticiones innecesarias se tiene por reproducido como si se encontrara inserto a la letra, se instruye a la Directora General Jurídica y de Gobierno de esta desconcentrada, para emitir y/o suscribir cualquier acto tendiente a dar cumplimiento a la presente Recuperación Administrativa y desde este momento se habilita al Director General de Colonias y Tenencia de la Tierra, así como al Director General de Obras y Desarrollo Urbano, todos de esta desconcentrada, así como al personal que se considere necesario, para ejecutar en sus dependencias la presente Resolución Administrativa y levantando las actas circunstanciadas correspondientes a dichos actos, valiéndose para ello del personal Delegacional que consideren necesario, quienes una vez recuperado el inmueble de referencia, deberán cerciorarse que se le ha restituido su calidad de vía pública, con libre acceso a los particulares y vehículos que transitan por el lugar.

En virtud de lo anterior y toda vez que de la inspección ocular realizada por la Dirección General de Colonias y Tenencia de la Tierra de esta desconcentrada, en la vía pública propiedad del Gobierno del Distrito Federal que nos ocupa, se desprende que los mismos son ocupados, utilizados y aprovechados por particular, sin que se haya emitido por parte de ésta desconcentrada autorización para ello ni que exista determinación para su cambio de situación jurídica, motivo por el que se impone al posesionario y/o propietario y/o responsable, en esta Ciudad de México Distrito Federal, del Bien del Dominio Público multicitado, una sanción económica equivalente a **TRECIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL**, equivalente a **\$20,187.00 (VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)**, por ocupar y aprovechar un Bien de Dominio Público del Distrito Federal sin haber obtenido previamente la autorización correspondiente, o celebrado contrato o convenio alguno con la autoridad competente, para lo cual se deberá remitir a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal copia certificada de la Presente Resolución así como los datos de la o las personas que durante la diligencia de Recuperación, manifiesten tener en posesión la Vía Pública a que se hace referencia.

"Artículo 133.- Se sancionará con multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal a quien explote, use, o aproveche un bien del dominio público o privado sin haber obtenido previamente la autorización correspondiente, o celebrado contrato alguno con la autoridad competente."

Asimismo y con fundamento en lo establecido en el artículo 136 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, se debe hacer del conocimiento al o bien a la persona que



162

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PRA/LMC/DGJG/010/2015

se ostente como Poseedor, Administrador u Ocupante de la fracción de vía pública que ocupan las obstrucciones, ubicada en el Andador Tabaqueros, Manzana 45, Lote 11, Colonia San Nicolás Totolapan, en esta demarcación, en ésta Ciudad de México, Distrito Federal, que toda obra o instalación que haya realizado dentro de dicho Bien se perderá en beneficio del Distrito Federal, y en su caso, si la Oficialía Mayor del Distrito Federal, determina el retiro de la misma, los gastos que de esta se genere, correrán a cargo del infractor, sin que por alguna de las hipótesis antes citadas, proceda indemnización o compensación alguna, para lo cual se deberá remitir a la Oficialía Mayor del Distrito Federal, copia certificada de la presente Resolución, así como los datos correspondientes de la o las personas que durante la Diligencia de Recuperación, manifiesten tener en posesión la Vía Pública a que se hace referencia.

"Artículo 136. Las obras e instalaciones que sin la autorización correspondiente se realicen en los bienes del Distrito Federal, se perderán en beneficio del mismo. La Oficialía ordenará que las obras o instalaciones sean demolidas por cuenta del infractor, sin que proceda indemnización o compensación alguna."

En razón a lo anterior, esta Autoridad procede a resolver y

RESUELVE

PRIMERO. El C. Jefe Delegacional en La Magdalena Contreras, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 104 y 117 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 párrafo tercero, 7, 10 fracción I, 11 párrafo primero, 37, 38 y 39 fracciones VIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 3 fracción III, 120 y 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2 párrafo primero, 1, VI, VII y XXII, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 14 BIS fracción I, 15, 16, 17, 19 Bis, 30, 31, 32, 39 fracciones I, III, IX y XI, 50, 53, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82 fracciones I, 84, 85, fracción I, 88 y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 2 fracción I, 4 fracción I, 5, 6 fracción III, 8 fracciones I y V, 13, 16 fracciones I y II, 17 párrafo primero, 19, 20 fracción III, 21, 24, 25, 27, 29, 30 párrafo primero, 112, 134, 135 y 136 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, y 1 y 55 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, firmando la presente resolución por duplicado, la Directora General Jurídica y de Gobierno en esta Delegación, de conformidad con el Acuerdo Delegatorio emitido por el C. Jefe Delegacional, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 10, Décima Octava Época, de fecha quince de enero del año dos mil quince, mediante el cual le delega en el numeral **"DÉCIMO. Considerando el contenido del artículo 39 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se delega en el Director General referido la facultad de substanciar los procedimientos administrativos, dictar y suscribir las resoluciones de recuperación administrativa de la vía pública y de los predios bienes del dominio público y privado del Distrito Federal que detente de manera irregular los particulares, de acuerdo con los artículos 4, 13, 13 bis fracción III, 16, 17, 19, 20, 23, 30 y 112 párrafos primero y segundo y fracciones I, II, y III de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, podrá ordenar el retiro de obstáculos que impidan el uso adecuado y todos los actos jurídicos para retener la posesión y ejecutar o realizar todos los actos tendientes a dicha recuperación."**

SEGUNDO. De conformidad con los Considerandos II y III de la presente Resolución se determina que la vía pública aledaña al inmueble ubicado en el Andador Tabaqueros, Manzana 45, Lote 11, Colonia San Nicolás Totolapan, en esta demarcación, se encuentra invadida por existe la colocación de un portón constituido de herrería, así como sección de una casa habitación construida con materiales definitivos, sobre la vía pública, área que es utilizada, usada y aprovechada a su favor el posesionario y/o propietario y/o responsable, en esta Ciudad de México Distrito Federal.

TERCERO. De conformidad con los Considerandos II y III de la presente Resolución se



La Magdalena Contreras, a 15 de enero de 2015.

df.gob.mx
lamagdalenacontreras.gob.mx

163
264

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PRA/LMC/DGJG/010/2015

ordena al Poseedor, Administrador u Ocupante del inmueble ubicado en el Andador Tabaqueros, Manzana 45, Lote 11, Colonia San Nicolás Totolapan, en esta demarcación, retire de manera voluntaria el portón constituido de herrería, así como sección de una casa habitación construida con materiales definitivos, que invaden la misma, dentro de un término de **24 (VEINTICUATRO) HORAS siguientes a la notificación de la presente resolución y en caso de negativa u omisión se realizara la EJECUCIÓN DIRECTA en los términos en que se indican en los siguientes resolutivos.**

CUARTO. De conformidad con los Considerandos **II** y **III** de la presente Resolución y con fundamento en lo establecido en el artículo 112 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, es procedente **ORDENAR LA RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN VÍA DE EJECUCIÓN DIRECTA** de los espacios públicos señalados en el resolutivo que antecede, a efecto de restablecer la condición de dicho inmueble como un Bien del Dominio Público del Distrito Federal.

QUINTO. Se instruye al Director General de Colonias y Tenencia de la Tierra de este Órgano Político Administrativo, para que designe personal suficiente y debidamente equipado a efecto de que se constituya en el Andador Tabaqueros, Manzana 45, Lote 11, Colonia San Nicolás Totolapan, en esta demarcación, para que realice labores de deslinde y levantamiento topográfico para determinar la vía pública, e indique claramente y sin lugar a duda alguna al personal que instruya el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de esta desconcentrada, cual es la poligonal de la vía pública que debe recuperarse, debiendo levantar al momento una Acta Circunstanciada en la que se asienten las condiciones en que se ejecuta la presente resolución.

SEXTO. Una vez que se haya determinado la poligonal de la vía pública, el Director General de Colonias y Tenencia de la Tierra de esta desconcentrada, encabezará los trabajos de ejecución de recuperación, coordinando al personal que haya comisionado el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de este Órgano Político Administrativo, instruyendo a este último, para que designe personal adscrito a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta desconcentrada, para que se constituya en el Andador Tabaqueros, Manzana 45, Lote 11, Colonia San Nicolás Totolapan, en esta demarcación, en la Delegación La Magdalena Contreras, y que de acuerdo con el levantamiento topográfico que haya emitido la Dirección General de Colonias y Tenencia de la Tierra, coordinada con esa Unidad Técnica realice los trabajos de ejecución en términos de la presente Resolución Administrativa, es decir, lleve a cabo el retiro del portón constituido de herrería, así como sección de una casa habitación construida con materiales definitivos, que invaden la vía pública, debiendo levantar de manera conjunta las Direcciones Generales citadas, al momento un Acta Circunstanciada en la que se asienten las condiciones en que se ejecuta la presente resolución.

SEPTIMO. Se impone a quien durante la diligencia de recuperación administrativa se ostente como Poseedor, Administrador u Ocupante del Bien inmueble mencionado en el Resolutivo Segundo, una sanción económica de **TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL** equivalente a **\$20,187.00 (VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)**, por usar y aprovechar un Bien Inmueble del Dominio Público del Distrito Federal, sin haber obtenido previamente la autorización correspondiente o celebrado contrato alguno con la autoridad competente, con fundamento en el artículo 133 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.

OCTAVO. Una vez que se realice la notificación personal al posesionario y/o propietario y/o responsable del inmueble ubicado en el Andador Tabaqueros, Manzana 45, Lote 11, Colonia San Nicolás Totolapan, en esta demarcación, la Directora General Jurídica y de Gobierno, emitirá los oficios a los Titulares de las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano y Colonias y Tenencia de la Tierra, todos de esta desconcentrada, a efecto de que procedan a dar cumplimiento en **VIA DE EJECUCIÓN DIRECTA en los términos de los resolutivos**



163

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

PRA/LMC/DGJG/010/2015

que anteceden.

NOVENO. En términos de la parte final del Considerando **III**, remítanse copias debidamente certificadas de todas y cada una de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, a la Directora Jurídica dependiente de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de esta desconcentrada, a efecto de que, dentro del ámbito de su respectiva competencia, inicie las acciones penales que en derecho procedan por la posible comisión de hechos constitutivos de delito, por el uso y aprovechamiento de recursos y espacios públicos, sin haber obtenido previamente las autorizaciones y/o cubierto el pago de derechos y/o haber reportado a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, el monto al que ascienden los recursos públicos obtenidos por el uso y aprovechamiento de la vía pública.

DÉCIMO. Notifíquese Personalmente la presente Resolución a quien durante la diligencia de recuperación administrativa se ostente como poseedor y/o propietario y/o responsable del Bien inmueble de marras, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 78 fracción I inciso c) y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, haciendo de su conocimiento que cuenta con un término de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación personal, para impugnar la presente Resolución, a través del Juicio de Nulidad ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y en su oportunidad archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido.

Notifíquese Personalmente. En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los **tres días del mes de agosto de dos mil quince**, así lo acordó el C. Jefe Delegacional en La Magdalena Contreras, firmando por duplicado en suplencia por ausencia temporal de este, la Licenciada Ely Cruz Pérez, Directora General Jurídica y de Gobierno en La Magdalena Contreras, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y de conformidad con el Acuerdo Delegatorio emitido por el C. Jefe Delegacional, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 10, Décima Octava Época, de fecha quince de enero del año dos mil quince, mediante el cual le delega en el numeral "**DÉCIMO. Considerando el contenido del artículo 39 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se delega en el Director General referido la facultad de substanciar los procedimientos administrativos, dictar y suscribir las resoluciones de recuperación administrativa de la vía pública y de los predios bienes del dominio público y privado del Distrito Federal que detente de manera irregular los particulares, de acuerdo con los artículos 4, 13, 13 bis fracción III, 16, 17, 19, 20, 23, 30 y 112 párrafos primero y segundo y fracciones I, II, y III de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, podrá ordenar el retiro de obstáculos que impidan el uso adecuado y todos los actos jurídicos para retener la posesión y ejecutar o realizar todos los actos tendientes a dicha recuperación.**" Aclarándose que con un juego original se realizará la notificación personal y el segundo juego se glosará al expediente del procedimiento administrativo

PRA/LMC/DGJG/010/2015.

LIC. ELY CRUZ PÉREZ

DIRECTORA GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
EN LA MAGDALENA CONTRERAS.

DHG/ELB*





TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DEL DISTRITO
FEDERAL

QUINTA SALA ORDINARIA

JUICIO NÚMERO: V-76815/2015

ACTOR:

AUTORIDAD DEMANDADA:

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA
CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
GOBIERNO EN LA DELEGACIÓN LA
MAGDALENA CONTRERAS.

MAGISTRADO INSTRUCTOR:

DOCTOR RUBÉN MINUTTI ZANATTA

SECRETARIO DE ACUERDOS:

LICENCIADO OCTAVIO RUIZ TORAL

AUDIENCIA-SENTENCIA

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, día y hora señalados para la celebración de la audiencia de ley, encontrándose debidamente integrada la Quinta Sala Ordinaria por los Magistrados: Doctor **RUBÉN MINUTTI ZANATTA**, Presidente e Instructor; Licenciada **MARÍA EUGENIA MEZA ARCEO**, Integrante; y Licenciado **HUGO CARRASCO IRIARTE**, Integrante; ante el Secretario de Acuerdos Licenciado **Octavio Ruiz Toral**, que da fe.- **SE INICIA LA AUDIENCIA DE LEY**, sin la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente.- Se abre el periodo de **DESAHOGO DE PRUEBAS**.- Con fundamento en los artículos 107, 109, 119, 146, 147 primer párrafo y fracción II, 150 y 157, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se tiene por ofrecidas las pruebas que obran en autos, que se desahogan por su propia y especial naturaleza; consistentes en documental pública, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana; no habiendo más pruebas pendientes por desahogar se declara cerrado dicho periodo y se pasa al de **ALEGATOS**, los cuales, dada la inasistencia de las partes, no se producen, ni por escrito, ni en



TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL
DISTRITO FEDERAL
QUINTA SALA ORDINARIA
DÍA QUINCE

23

23



TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DEL DISTRITO
FEDERAL

II. Previo al estudio del fondo del asunto, esta Sala procede al estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento que hacen valer las autoridades demandadas o bien de oficio, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente.

Respecto de la primera y segunda causales de improcedencia que hace valer la autoridad demandada, a juicio de esta Sala deben desestimarse, ya que en la primera propiamente no se formula ninguna causal de improcedencia, en virtud de que se limita a mencionar que su estudio es de orden público, y respecto de la segunda se refiere a la suspensión de la ejecución del acto impugnado, pero no genera ningún causal de improcedencia, respecto de los actos impugnados.

En ese sentido, como única causal de improcedencia en contra de la resolución impugnada la autoridad demandada señala que la resolución impugnada no afecta el interés legítimo de la parte actora.

Al respecto, esta Sala considera que los anteriores argumentos no constituyen propiamente una causal de improcedencia, ya que introduce cuestiones que atañen al fondo de la controversia, razón por la que se desestima. Sirve de apoyo al caso, la Jurisprudencia P./J. 92/99, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo X, de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjectables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio,

SECRET



NO. 1000
SERIAL 100
COPYRIGHT
1946

forma verbal. Se cierra esta etapa procesal.- Con fundamento en los artículos 156 y 158 de la ley **SE DECLARAN VISTOS** para resolver en definitiva los autos del juicio en que se actúa procediéndose a dictar sentencia y;

RESULTANDO:

1. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día veintinueve de octubre de dos mil quince, , por su propio derecho, promovió juicio de nulidad en contra de las autoridades citadas al rubro, señalando como actos impugnados:

"1.- La constituye ORDEN DE RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN VÍA DE EJECUCIÓN DIRECTA de fecha 03 de Agosto del 2015, emitida en el expediente PARA/LMC/DGJG/010/2015 por el DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS, [...]"

2.- Lo establece, la violación a los artículos 8, 14 y 16 de la carta Magna, al hallarse en la omisión por parte de las Autoridades Demandadas, al no acordar ni contestar el escrito de RECURSO DE INCONFORMIDAD que interpuso el suscrito [...]"

2. Mediante acuerdo de fecha treinta de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda interpuesta por el hoy actor, emplazándose a las autoridades señaladas como demandadas, para que produjeran su contestación, carga procesal que fue cumplimentada en tiempo y forma mediante oficio presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día tres de diciembre de dos mil quince.

CONSIDERANDO:

I. Este Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1 y 31 fracción I y XII de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

12-1-1964

12-1-1964



TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DEL DISTRITO
FEDERAL

decretar su nulidad. Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes Jurisprudencias:

Jurisprudencia

Materia(s): Común

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
VIII, Noviembre de 1998

Tesis: I.3o.A. J/29

GARANTÍA DE AUDIENCIA. SE INTEGRA NO SÓLO CON LA ADMISIÓN DE PRUEBAS SINO TAMBIÉN CON SU ESTUDIO Y VALORACIÓN.- La garantía de audiencia a que se refiere el texto del artículo 14 constitucional se integra, no sólo admitiendo pruebas de las partes sino, además, expresando las razones concretas por las cuales, en su caso, dichas probanzas resultan ineficaces a juicio de la responsable.

Por ello, si la resolución que puso fin a un procedimiento fue totalmente omisa en hacer referencia alguna a las pruebas aportadas por la hoy quejosa, es claro que se ha cometido una violación al precepto constitucional invocado, lo que da motivo a conceder el amparo solicitado, independientemente de si el contenido de tales probanzas habrá o no de influir en la resolución final por pronunciarse. Tal criterio, que se armoniza con los principios jurídicos que dan a la autoridad administrativa la facultad de otorgarle a las pruebas el valor que crea prudente, es congruente, además, con la tendencia jurisprudencial que busca evitar la sustitución material del órgano de control constitucional, sobre las autoridades responsables, en una materia que exclusivamente les corresponde como lo es, sin duda, la de apreciación de las pruebas que les sean ofrecidas durante la sustanciación del procedimiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 103/90. Tittinger Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise, S.A. 20 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán.

Amparo directo 2003/94. Sergio Eduardo Vega de la Torre. 20 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo directo 1403/95. Servicio de Autotransporte de la Mixteca, S.A. de C.V. 15 de junio 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo directo 4233/95. Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. 18 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:

SECRETARÍA
DE
JUSTICIA

OPTICS





TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

QUINTA SALA ORDINARIA

PONENCIA QUINCE

JUICIO NÚMERO: V-76315/2015

ACTOR:

**DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE Y EJECUTORIA
POR MINISTERIO DE LEY**

Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete.- Por recibido el oficio presentado ante esta Ponencia firmado por la Licenciada María Juana López Briones, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual, devuelve el expediente original del juicio al rubro citado como asunto concluido, el cual fue remitido para tramitar la apelación interpuesta en el presente juicio, anexando copia de la resolución de la que se advierte que se confirma la sentencia dictada por esta Sala; así mismo anexa copia del acuerdo de dos de junio de dos mil diecisiete firmado por la Presidente de este Tribunal y de su Sala Superior, a través del cual tuvo por recibido el testimonio del recurso de revisión, en el que se desecha por improcedente el citado recurso; al respecto **SE ACUERDA:** Agréguese a sus autos el oficio de cuenta y la carpeta provisional integrada, respecto del recurso de apelación antes mencionado y en consecuencia dígaselo a las partes que las sentencias de segunda instancia causan **EJECUTORIA POR MINISTERIO DE LEY**, en términos del artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: - - - - -

No. Registro: 174,116

Jurisprudencia

Materia(s): Civil

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIV, Octubre de 2006

Tesis: 1a./J. 51/2006

Página: 60

**COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA
EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN
ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO
(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE
JALISCO).**



THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN
LIBRARY

1924



TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DEL DISTRITO
FEDERAL

fallo, resultando aplicable la tesis de jurisprudencia número trece de la Sala Superior de este Tribunal, Tercera Época, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que dispone:

Época: Tercera
Instancia: Sala Superior, TCADE
Tesis: S.S./J. 13

CAUSALES DE NULIDAD. SI RESULTA FUNDADO UNO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD NO ES NECESARIO EL ANALISIS DE TODOS LOS DEMAS.-

En los casos en que el actor haga valer varias causales de nulidad en la demanda, y al estudiarlas, la Sala del conocimiento considere que una es fundada y suficiente para declarar la nulidad de la resolución o acto impugnado, y para satisfacer la pretensión del demandante, no está obligada a analizar en el juicio las demás causales.

R.A. 1561/97-II-3366/96.- Parte Actora: Instituto Mexicano del Seguro Social.- Sesión del 13 de enero, 1998.- Unanimidad de cinco votos.- Ponente: Mag. Lic. Victoria Eugenia Quiroz de Carrillo.- Secretaria de Acuerdos, Lic. Eduardo Fortis Garduño.

R.A. 2032/97-III-1839/97.- Parte Actora: Alberto Jimeno López.- Sesión del 4 de febrero, 1998.- Unanimidad de cinco votos.- Ponente: Mag. Lic. Jaime Araiza Velázquez.- Secretaria de Acuerdos, Lic. Socorro Diaz Mora.

R.A. 12/98-I-3802/97.- Parte Actora: María Magdalena Barranco.- Sesión del 12 de marzo, 1998.- Unanimidad de cinco votos.- Ponente: Mag. Lic. Jaime Araiza Velázquez.- Secretaria de Acuerdos, Lic. Socorro Diaz Mora.

R.A. 93/98-II-3105/97.- Parte Actora: Alvaro Molina Castañeda.- Sesión del 26 de marzo, 1998.- Unanimidad de cinco votos.- Ponente: Mag. Lic. Antonio Casas Cadena.- Secretario de Acuerdos, Lic. Raúl Domínguez Domínguez.

R.A. 2273/97-I-3463/97.- Parte Actora: Universidad Nacional Autónoma de México.- Sesión del 6 de mayo, 1998.- Unanimidad de cinco votos.- Ponente: Mag. Lic. Antonio Casas Cadena.- Secretario de Acuerdos, Lic. J.A. Clemente Zayas Domínguez.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 127 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, procede declarar la nulidad de la resolución administrativa PAPA/LMC/DGIG/010/2015 de fecha

SINTEXCO



tres de agosto de dos mil quince, y en consecuencia, quedan obligadas las autoridades demandadas a restituir a la parte actora en el pleno goce de los derechos que indebidamente le fueron afectados, **debiendo emitir una resolución al recurso de inconformidad que le fue planteado,** y reponga el procedimiento administrativo, para lo cual se le otorga un plazo de **DIEZ DÍAS** hábiles contados a partir del día siguiente al en que quede firme el presente fallo.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, 31, 39, 50, 124, 125 fracción IV, 127 fracción II, 128 fracción II y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es de resolver y se:

RESUELVE:

PRIMERO. Esta Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es competente para substanciar y resolver el presente juicio de nulidad, con fundamento en lo expuesto en el Considerando I de esta sentencia.

SEGUNDO. No se **SOBRESSE** el presente juicio en atención a los razonamientos expuestos en el considerando II de esta sentencia.

TERCERO. Se declara la nulidad de los actos impugnados que han quedado debidamente precisados en el considerando III del presente fallo, debiendo la autoridad demandada cumplimentar este fallo en los términos indicados en la parte final del IV considerando del mismo.

CUARTO. Se hace saber a las partes que en contra de la presente sentencia pueden interponer el recurso de apelación, dentro de los diez días siguientes al que surta efectos la notificación.





TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DEL DISTRITO
FEDERAL

QUINTO. Asimismo, se hace saber a las partes que para mayor comprensión de lo resuelto, el expediente se encuentra a su disposición en esta Ponencia a fin de que lo puedan consultar y si así lo solicitan, serán atendidos por los Secretarios de Acuerdos ó el Magistrado Instructor.

SEXTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron y firmaron los Magistrados integrantes de la Quinta Sala Ordinaria; ante el Secretario de Acuerdos, que da fe.

Magistrado Presidente e Instructor
DOCTOR RUBÉN MINUTTI ZANATTA

Magistrada Integrante
LICENCIADA MARIA EUGENIA MEZA ARCEO

Magistrada Integrante
LICENCIADO HUGO CARRASCO IRIARTE

Secretario de Acuerdos
LICENCIADO OCTAVIO RUIZ TORAL

AL DE
NGIOSC
IVO DE
FEDERAL
ORDINARIA
A QUINCE

SIN TEXTIO



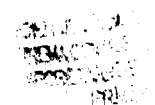
debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."

III. La controversia en el presente asunto se constriñe en resolver sobre la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados que han quedado debidamente precisados en el resultando primero de este fallo.

IV. Entrando al estudio del fondo del asunto, previo análisis de las pruebas que han quedado debidamente desahogadas, dándoles el valor probatorio que en derecho les corresponde, de conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, esta Juzgadora estima que le asiste la razón a la parte actora, cuando aduce que no fue debidamente citado al procedimiento de recuperación administrativa y que no se resolvió el recurso de inconformidad que se interpuso en su contra.

Por su parte, la autoridad demandada, se limitó a señalar que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada.

En efecto, de las constancias de autos se desprende las demandadas fueron totalmente omisas en acreditar que habían notificado al hoy actor del inicio del procedimiento administrativo y también omitieron acreditar que habían acordado la promoción referente a la interposición del recurso de inconformidad, violentando con ello lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, toda vez que, ante la negativa de la parte actora, la autoridad demandada estaba obligada a acreditar que respetó la garantía de audiencia de la parte actora, por lo que resulta evidente que se le dejó en estado de indefensión, en consecuencia, es procedente



1944

Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Jacinto Juárez Rosas."

Octava Época

Registro: 225717

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990

Materia(s): Constitucional, Administrativa, Común

Tesis:

Página: 224

GARANTIA DE AUDIENCIA. LA CARGA DE LA PRUEBA DE QUE SE RESPETO, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Cuando el quejoso afirma que no se le citó ni se le oyó en defensa de sus intereses, obliga a las autoridades responsables a demostrar lo contrario para desvirtuar la violación del artículo 14 constitucional que se reclama, pues de no ser así se le dejaría en estado de indefensión al quejoso, dada la imposibilidad de demostrar las omisiones o hechos negativos determinantes de la inconstitucionalidad de los actos reclamados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 300/89. Aurora Alba Reyes. 17 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa.

En este sentido, procede a declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada respete la garantía de audiencia de la parte actora, **resuelva el recurso de inconformidad que le fue planteado**, y reponga el procedimiento administrativo.

Toda vez que resultó ser fundado el concepto de nulidad analizado y que éste es suficiente para declarar la nulidad de la resolución controvertida, se hace innecesario el estudio de los restantes conceptos de nulidad planteados, toda vez que cualquiera que fuese el contenido de ellos, en nada variaría el sentido de este

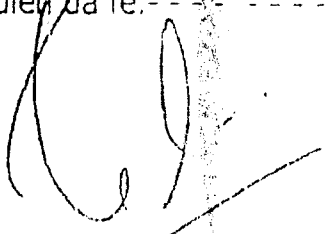
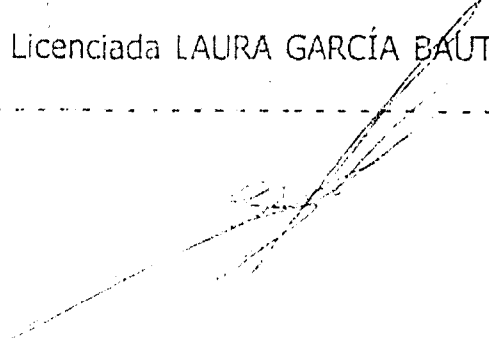
SEXTON

Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario, por el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación.

Contradicción de tesis 14/2005-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 21 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Ramos Denetrio.

Tesis de jurisprudencia 51/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha nueve de agosto de dos mil seis.

NOTIFÍQUESE POR LISTA AUTORIZADA A LAS PARTES.- Así lo acuerda y firma el Magistrado Presidente e Instructor de la Quinta Sala Ordinaria, Ponencia Quince, Doctor **RUBÉN MINUTTI ZANATTA**; ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada LAURA GARCÍA BAUTISTA, quien da fe.

1 DE LA FOLIA
2 DE LA FOLIA
3 DE LA FOLIA
4 DE LA FOLIA





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOVENTE: CAROLINA GONZÁLEZ NAVA

VARIOS NÚMERO: 950/2018-VIAJ

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
Escrito suscrito por la promovente citada al rubro, registrado con el número de folio 037123 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, presentado en veintiún fojas, al que acompaña:	Original
a) Diversos anexos en copias simples, ciento quince fojas.	Copias simples

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el seis de septiembre de dos mil dieciocho. Conste.

Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil dieciocho.

Con el escrito original citado en la cuenta fórmese y regístrese el expediente citado al rubro. **Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar,** al que deberá agregarse las copias simples señaladas en la cuenta, así como los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. Ahora bien, del análisis del referido escrito se advierte que **CAROLINA GONZÁLEZ NAVA**, realiza diversas manifestaciones y solicita al Presidente de este Alto Tribunal su apoyo ya al señalar: "...**Solicitando al Alto Tribunal, el reconocimiento al derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia, considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derechos a igual protección de la ley, sin exclusión alguna... El reconocimiento a las garantías judiciales para la protección de derechos fundamentales inderogables, que ilegalmente el Estado Mexicano nos ha despojado; instando acceso a la verdad y a la justicia...**", lo anterior, dado que señala han existido diversas violaciones en sus procesos; ante ello, hágase del conocimiento del citado promovente que **el Presidente de este Alto Tribunal carece de atribuciones, conforme a lo previsto en el marco normativo que las regula, para actuar en el sentido que se pretende**, sin embargo atendiendo al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XII, 14 fracción II, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3 y 12 de la Ley Federal de Defensoría Pública, se acuerda:

EXHIBITS

I. Remítase la versión digitalizada de este acuerdo y del escrito citado en la cuenta al Instituto Federal de Defensoría Pública, por conducto del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014.

II. Notifíquese por lista; y personalmente a la promovente citada al rubro en el domicilio que señala para tal efecto en su escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído sin menoscabo que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se deberá actuar conforme a lo dispuesto en el referido artículo 27 de la Ley de Amparo; es decir, se notificará por lista atendiendo a lo previsto en el diverso 29 de dicho ordenamiento. **Cumplido lo anterior, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.**

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.

STANDARD

DER JOURNAL
STANDARD
STANDARD



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN
040997

134
FORMA A-54
CUADERNILLO DERIVADO DEL
RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018
EN LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018

En ocho de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el escrito y anexos de los recurrentes, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia. Conste.

Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil dieciocho.

Por encontrarse en estudio el recurso de reclamación 1734/2018, fórmese cuadernillo y agréguese a éste el escrito y anexos de los recurrentes.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ténganse por hechas manifestaciones; por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; por autorizadas para dichos efectos e imponerse de autos, a las personas referidas en el escrito de cuenta; así como por exhibidas copias simples de documentales.

Entréguese el presente cuadernillo a la Ponencia del Señor **MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO**, y en su oportunidad, agréguese al expediente principal del recurso de reclamación en comento.

Notifíquese.

CUADERNILLO DERIVADO DEL
RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018
EN LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018

2

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA**
HERNÁNDEZ, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez
Gatica.

OACA.

El _____, se notificó el acuerdo anterior a los interesados
por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26,
fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presente.

Carolina González Nava, Martha Patricia González Nava, Julio César González Nava e Israel González Nava, por propio derecho; designando como representante común a Carolina González Nava; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Tabaqueros número 43, Colonia San Nicolás Totolapan, Delegación la Magdalena Contreras en la Ciudad de México, C.P.10900; autorizando a Martha Patricia y/o a Julio César, ambos de apellidos González Nava, para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal y/o revisar el expediente; ante Usted, con el debido respeto que se merece comparezco y expongo:

Con fundamento en el principio de dignidad de la persona humana y el principio de no discriminación, principios básicos del artículo 29, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos que a la letra dice:

“Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”

En relación a estas garantías judiciales indispensables a que alude el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos en relación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción ¹.

La parte quejosa solicita atentamente al Máximo Tribunal del país, que sea revisado el Estado de Excepción de facto en el caso concreto:

La violación a la dignidad, hace del presente caso, que los actos o decretos dictados *de facto* o bien derivados de resoluciones, sean hechos nulos que ilegitiman tales actos o resoluciones.

La naturaleza *erga omnes* de las obligaciones que engendran los tratados y convenios de derechos humanos, sus normas deben aplicarse sin discriminación alguna. Derechos que contienen una doble dimensión la obligación del Estado de cumplirlas y el derecho de reclamar su violación, máxime si ésta es sistemática y flagrante.

El estado de excepción de Derecho y de violaciones a derechos humanos fundamentales, derechos protegidos por normas del *ius cogens*²; en relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad³ han sido expuestos ante el Presidente de la Republica, representado por la Secretaria de Gobernación en

¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86

² artículo 53 de la Convención de Viena de fecha 23 de mayo de 1969, ratificándola el Estado Mexicano en misma fecha, menciona que “es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario, y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general que tenga el mismo carácter.

³Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

juicio de amparo indirecto 909/2018, solicitando ésta responsable, se le niegue a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Esta negativa perenniza el Estado de Excepción *de facto* que obedece a factores políticos que ha implicado la permisión a la supresión del Estado de Derecho, autorizando a los Gobernantes a apartar su conducta de la legalidad. Pues la noción de un Estado Democrático es inherente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Ello es así, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables.

Las normas y principios que regulan los Estados de Excepción se han inobservado en el presente caso, los requisitos que los estados de excepción deben reunir para que su regulación se ajuste a las exigencias de las normas internacionales, la parte quejosa solicita atentamente a este alto Tribunal su revisión, por las razones siguientes:

El principio de legalidad es consustancial a la naturaleza de la institución del Estado de Derecho, la inexistencia de normas y control, tanto internos como internacionales que lo regulen.

El principio de proclamación, la inexistencia de este principio, hace de éste Estado de excepción *de facto*.

Hecho que ha redundado en la permisión a la supresión del Estado de Derecho, autorizando a los Gobernantes, instituciones a apartar su conducta de la legalidad.

El impacto directo e ilegal a la en el presente caso ha derivado en la nulidad al derecho al principio de dignidad y no discriminación, la suspensión de derechos fundamentales inderogables, situación que *de facto* vive la parte quejosa, obedece a razones ilegales.

La vulneración al principio de proclamación del estado de excepción apunta a la condición indispensable para su validez, aun cuando ha sido proclamado en juicio constitucional, su temporalidad es incierta, pues a la fecha conlleva un periodo de cinco años con diez meses, que comprende una temporalidad de un año con once meses en juicio de amparo en el que existe la proclamación *de facto*. Más las responsables, la juez A quo, o el Tribunal de Circuito han omitido con la debida formalidad de proclamación del estado de excepción:

La circunstancia que lo justifica, el periodo por el cual se implanta, las medidas que autoriza, los mandatos de la Constitución, los tratados y convenios que se han de desaplicado en el presente caso por las medidas de excepción.

El no cumplimiento de la comunicación oficial, que cabe decir, debe ser inmediata ante el Secretario General de las Naciones Unidas en lo que respecta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en cuanto a las Convenciones regionales, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y el Secretario General del Consejo de Europa, respectivamente, debe señalar expresamente las medidas que autoriza, las razones que motivaron este largo periodo de suspensión.

La notificación formal juega un papel sumamente importante, en tanto prerequisite cuyo cumplimiento habilita a los Estados Parte a prevalerse de las cláusulas de derogación.

La parte quejosa siendo la afectada por las medidas de suspensión que el Estado mexicano ha impuesto, aunque lo haya hecho de conformidad a alguna norma nacional que la parte quejosa desconoce, como bien nos lo han comunicado en juicio de amparo, el Ministerio Público, la Secretaria de Gobernación, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, actuando en Pleno, la juez

A quo (Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal) o bien, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura Federal Instituto Federal de Defensoría Pública, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Contraloría General de la Ciudad de México, que, *somos ignorantes, que no tenemos para el pasaje, que no entendemos*, que no es competencia de las Instituciones, que la tortura, vejaciones, humillaciones, intimidación, amenazas de pérdida de la libertad, atentado en contra de la vida... no causa daño a nuestra esfera jurídica, más, no han mostrado la comunicación y/o notificación oficial de la excepción frente al orden internacional, cuyo cumplimiento habilita a los Estados a prevalerse de las cláusulas de derogación, máxime si se han desaplicado tratados y convenios en materia de los Derechos Humanos que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado. Por consiguiente, los suscritos presumimos que éste Estado de excepción de derechos es *de facto*.

La información jurídica que sustenta lo anterior son los juicios de amparo indirecto siguientes: 1082/2016, 1118/2019, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018, todos substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, a excepción de los juicios 349/2017 y 74/2018 que fueron substanciados en el Juzgado Quinto y Tercero de Distrito, respectivamente.

No obstante, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió encarecidamente la solicitud de juicio de amparo con número de expediente 909/2018, en éste estado de suspensión *de facto*, la responsable Secretaría de Gobernación en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó se nos negara el amparo y protección de la Justicia de la Unión, hecho que hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera oficiosa manifieste lo conducente, al ser consecuencia lógica y jurídica de los amparos promovidos y las resoluciones que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito han hecho del presente caso. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que *Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Difícilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos. La improcedencia o impertinencia de la resolución judicial interna que pone fin a una contienda puede advertirse a partir de diversos datos: error en el que incurre quien la emite, **sin que se añada otro motivo de injusticia**; o bien, **ilegalidad o ilegitimidad** con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones procesales que destruyen el debido proceso), **sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la sentencia**. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia -- formalmente-- atiende a la seguridad jurídica*⁴

Pues sin justificación objetiva, se persiste en el mantenimiento del estado de urgencia en restricción institucionales en el caso concreto por un tiempo indeterminado, con causales subyacentes que no se han proclamado, que vale traer a colación, pues en días anteriores a este escrito, la oficial de seguridad Elvia Camacho Martínez adscrita a la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación en conjunto con su hermana María de la Luz Camacho Martínez⁵,

⁴ Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia*, Sentencia De 12 de septiembre De 2005.

⁵ Juicio de amparo indirecto 74/2018, substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del primer Circuito y 260/2018 substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de la misma Materia y Circuito

volvieron a agredir⁶ a la parte quejosa, amenazando con el Presidente de la Republica electo, Ciudadano Manuel López Obrador, mencionando que nos van a *desaparecer*. Hecho que hace presumir⁷ la **perennización** del estado de excepción.

Luego, las autoridades responsables y jurisdiccionales no han dado razones jurídicas sobre los presupuestos de hecho que los ha llevado a la perennización del estado de excepción del presente caso. **Lo que hace hecho notorio, que está suspensión se debe a motivos de odio, económicos, sociales, de género, destrucción de un grupo, las agresiones han sido constantes tal como la aplicación de castigos prohibidos, incriminación, tortura, humillación, penas infamantes, intimidación, entre otros motivos ilegales. Hecho que sólo tienen cabida en un decreto *de facto* de genocidio.**

El principio de proporcionalidad que debe imperar en el estado de excepción, éstos deben ser en relación de adecuación entre éste y los medios utilizados para repelerlo, ya que, se han desaplicado los Convenios y tratados, siguientes: la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Por consiguiente, las restricciones impuestas en el presente caso, están encaminadas a la destrucción de los derechos reconocidos en los Tratados y Convenios en materia de los Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, pues en esta perennización de suspensión de derechos, han sido desaplicados éstos. Lo que implica la perpetuación de la suspensión de derechos fundamentales inderogables. Se ha desvinculado del artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, excluyendo derechos que son inherentes al ser humano.

Las normas de excepción impuestas en el presente caso han reemplazado al principio de Supremacía Constitucional, cuya complejidad en esta desviación se pretende legitimar en juicio constitucional. En consecuencia lógica y jurídica, se hace necesario la intervención de este Alto Tribunal del país:

La discriminación en la impartición de justicia, la intolerancia en la protección de los derechos humanos en relación a la violación al principio de no discriminación, principio vinculado con el derecho de toda persona a la existencia sin distinción de origen social, posición económica, política.

El principio de no discriminación su elemento material es la protección del individuo, su pertenencia a un determinado grupo humano, derecho que protege la diferencia tanto económica, social, política, de género, o de cualquier otra índole.

La vulneración al principio de no discriminación por condiciones sociales, económicas, o por razones de odio, de género o de cualquier otra condición como el de no contar o pertenecer a la clase política, son distinciones que versan sobre el goce y ejercicio de los derechos fundamentales.

La destrucción física, psíquica o moral, total o parcial en relación a la tipificación de la destrucción de un grupo como tal, en relación al derecho a no ser discriminado que se relaciona de manera directa a la Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio, convención que protege el derecho a la existencia.

⁶ Empleando otros conceptos para dirigirse a la parte quejosa y al señor Presidente electo.

⁷ Pues sus agresiones y amenazas se han cumplimentado a cabalidad, los juicios de amparo y sus anexos son pruebas plenas de esta afirmación.



El presente caso es un ejemplo claro y extremo de discriminación, de la formalización de este estado de excepción en juicio de amparo.

Los juicios de amparo indirecto, 1082/2016, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018. Por sí y en sí mismos, representan segregación manifiesta, desconociendo el principio de la igualdad en dignidad y derechos, en consiguiente la denegación del derecho a la vida y a la libertad, la negación de la igualdad en dignidad, la imposición deliberada a condiciones de existencia que por consecuencia lógica acarreará la destrucción física, psicológica y moral, total.

La discriminación en la aplicación de la ley es manifiesta e indudable la denegación a los derechos de igualdad ante la ley y de protección de la ley sin ningún tipo de distinción.

Los actos o las prácticas que a la fecha el Estado mexicano ha impuesto en el presente caso, sus efectos se explican en los juicios de amparo citados anteriormente, la discriminación en la aplicación de la ley.

Las resoluciones de suspensión de derechos fundamentales que en juicio de amparo se han dictado, se ha anulado el reconocimiento a los derechos humanos y libertades fundamentales.

La segregación de derechos fundamentales es manifiesta e indudable, promueve el odio manifiesto. Basta ver los autos de los innumerables juicios de amparo que versan sobre los mismos hechos, los expedientes que en conjunto con sus anexos son pruebas indudables de lo ahora afirmado, el derecho al acceso a la administración de justicia ha sido vedado, el derecho a la seguridad e integridad personal ha desaparecido.

La vulneración al principio de igualdad, la ausencia de una razón aceptable que sustente la distinción en la aplicación de la ley, negar el derecho a su ejercicio, por consiguiente, en juicio constitucional no se da razón lógica y jurídica suficiente para fundar el derecho a distinguir a la parte quejosa.

Pues no se puede invocar razonamientos jurídicos que no estén ajustados al caso concreto, para que estos resulten validos tendría que resolverse el presente caso ajustado a derecho.

Más en consecuencia lógica y jurídica inmediata, la destrucción del Estado de Derecho es manifiesta e indudable, basta leer la última resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que resuelve contrario al principio de Supremacía constitucional en relación al principio de no discriminación, por consiguiente, destruye la seguridad y certeza jurídica.

Por un periodo de un año, con cuatro meses, los recursos que han derivado del presente caso, han recaído una y otra vez en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito⁸, los argumentos de corte despectivo resaltan a la ausencia de una razón aceptable que sustente la distinción en la aplicación de la ley.

Las resoluciones en el presente caso por sus consecuencias concretas deponen el acceso a la justicia a la discriminación, la imposición deliberada a condiciones de existencia que por consecuencia lógica acarreará la destrucción física, psicológica y moral, total de la parte quejosa.

Los derechos fundamentales inderogables constituyen un derecho, la autorización otorgada por una norma imperativa de Derecho Internacional a las personas para exigir la realización de una conducta o su abstención.

⁸ Comparables a la resolución del juicio de nulidad con número de expediente V-76315/2015 substanciado en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que versó sobre el dominio particular de una vía pública, la destrucción del Estado de derecho es patente.



La justificación de las decisiones jurídicas en el presente caso, no están ajustadas al principio de Supremacía Constitucional, por consiguiente, existe una clara segregación a derechos fundamentales inderogables.

La igualdad ante la ley cuando la ley no distingue, se sustenta en la dignidad, fundamento de los derechos humanos, la dignidad es inherente a la vida y a la forma en que ésta se verifica. Por consiguiente, la segregación degrada a la persona,

El principio de no discriminación constituye un elemento fundamental inherente a los derechos humanos protegidos mediante el juicio de amparo, derecho subjetivo público que faculta al gobernado para reclamar una acción u abstención frente al Estado que tiene la obligación correlativa, derecho absoluto oponible *erga omnes*, puesto que respecto del Estado significa un deber de abstención.

La limitación de derechos contraviene el derecho humano de acceso a la justicia, el daño que produce, sus consecuencias reales se manifiestan en relación a la anulación de derechos fundamentales.

El principio de no discriminación se presenta como el derecho de acceso a la justicia el derecho a tener derechos, las condiciones de igualdad han sido vedadas, los derechos humanos en el caso concreto han sido nulificados, un ejemplo de ello es el derecho a la vivienda (juicio de amparo 651/2017) en relación al derecho a la libertad, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la vida, el derecho a no ser intimidado, amenazado, humillado, el derecho a no ser juzgado y condenado por autoridades no jurisdiccionales, sin derechos a que el Ministerio Público con toda impunidad fabrique delitos falsos ante un Tribunal de Delitos oficiosos, en el que no se tiene derecho a un debido proceso, sin derechos a no ser torturado, sin derechos a una defensa adecuada⁹, sin derecho a saber el por qué se investiga, o los motivos subyacentes por los que se nos acusa penalmente *ad infinitum* a la parte quejosa, sin derecho a no ser amenazado que en cualquier momento perderemos la libertad arbitrariamente o la vida, sin derecho a presentar una denuncia o querrela aun cuando han atentado en contra de la vida de los suscritos, sin derecho a no ser objeto de violencia institucional, sin derecho a no ser intimidado en juicio constitucional, sin derecho al proyecto de vida,... La negación de éstos derechos es implícita en juicio constitucional, la denegación de derechos fundamentales, alimentan la vulnerabilidad y el estigma, la legalización de la impunidad. La restricción ilegal al reconocimiento de derechos fundamentales inderogables, derechos que están protegidos por normas convencionales.

La persecución sistemática y flagrante de la parte quejosa, la amenaza de volver a ser torturado, la amenaza de perder la libertad arbitrariamente, es la persecución y destrucción del plan de vida, por consiguiente, la destrucción física, psicológica y moral, total (juicio de amparo indirecto 627/2017, 260/2018)

La destrucción de la vivienda que habita la parte quejosa, en los extremos de utilizar marros y cinces para que se derrumbe ésta (juicio de amparo 651/2017).

El Estado de Derecho ha sido destruido totalmente, sin garantías judiciales para el restablecimiento del cauce constitucional, sin la posibilidad legal de exigir el establecimiento de derechos fundamentales, clarificando los extremos de un genocidio aplicado al caso concreto.

La destrucción al proyecto de vida en el caso concreto en relación a los sufrimientos ignominiosos que el Estado mexicano ha arrastrado a la parte quejosa en un transcurso de cinco años, con diez meses, en la destrucción física, psicológica y moral, como plan preconcebido, se clarifica en las siguientes notas periodísticas extraídas del libro *La Lucha por la dignidad. Teoría de la felicidad*

⁹ Tomando en cuenta que el defensor de oficio en el presente caso en interrogatorio "participó" en la aplicación del método de tortura, o el defensor particular en connivencia con el Ministerio Público, en violación flagrante al debido proceso ante el Tribunal de Delitos oficiosos (juicio de amparo 627/2017)

política, de José Antonio Marina y María de Válgoma, página 11, en la que traen a colación un par de notas publicadas en el *The New York Times*:

“En Sierra Leona, los guerrilleros cortan la mano derecha de los habitantes de una aldea antes de retirarse. Una niña, que está muy contenta porque ha aprendido a escribir, pide que le corten la izquierda para poder seguir haciéndolo. En respuesta, un guerrillero le amputa las dos. En Bosnia, unos soldados detienen a una muchacha con su hijo. La llevan al centro del salón. Le ordenan que se desnude. “Puso al bebé en el suelo, a su lado. Cuatro chetniks la violaron. Ella miraba en silencio a su hijo, que lloraba. Cuando terminó la violación, la joven preguntó si podía amamantar al bebé. Entonces, un chetnik decapitó al niño con un cuchillo y dio la cabeza ensangrentada a la madre. La pobre mujer gritó. La sacaron del edificio y no se volvió a ver más.”

La cita del párrafo anterior dimensiona el desprecio por la dignidad de la persona, permite comprender los métodos aplicados con el objetivo de destruir a la persona, ya sea física, mental o moralmente, los métodos de tortura que han corrido a cargo del Ministerio Público, hechos legalizados en juicio de amparo indirecto 627/2017 y 260/2018, sentencia que habla en sí y por sí misma, ello es así, la dignidad humana, es la base de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más en el presente caso han sido destruidos.

La destrucción del Estado de Derecho de los principios más básicos, como es el reconocimiento de la dignidad que es inherente al principio de no discriminación, fundamento de las normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*), aunado a la destrucción de la vivienda de la parte quejosa juicio de amparo indirecto 651/2017 y 260/2018.

Por lo anteriormente descrito, la parte quejosa se permite anexar las siguientes documentales, en copia simple:

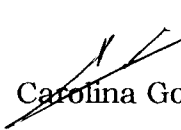
1. Escrito de recurso de queja derivada del juicio de amparo indirecto 260/2018, con sello de recibido por el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito del diez de agosto de dos mil dieciocho.
2. Resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por Unanimidad de votos, confirman este estado de excepción por medio del recurso de queja con número de expediente 145/2017. Resolución que no resuelve lo planteado por la parte quejosa, de lo que acontece en el presente caso. Por consiguiente, el “engaño” que se pretende dar como cosa juzgada es inadmisibles pues el proceso ha sido “a modo” y la sentencia sirve a determinado designio, mejor que al objetivo de justicia.¹⁰
3. Escrito de desahogo de prevención en el juicio de amparo indirecto 909/2018 con sello de ocho de octubre de dos mil dieciocho del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual fue aceptada la solicitud de ampliación de demanda de amparo
4. Escrito de desahogo de vista y denuncia de repetición del acto reclamado derivado del juicio de amparo 651/2017, con sello del diez de octubre de dos mil dieciocho del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito.


Por lo anteriormente expuesto y fundado, A Usted Honorable **Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala** atentamente solicitamos:

Único. - la parte quejosa solicita atentamente a Usted **Ministro, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, haga suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción del presente caso.


¹⁰ Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia*, Sentencia De 12 de septiembre De 2005

PROTESTO LO NECESARIO


Carolina González Nava


Marta Patricia González Nava


Julio César González Nava


Israel González Nava

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2018

044248

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2018 OCT 19 PM 3 45

SECRETARIA DE
CERTIFICACION JUDICIAL
Y CONTROL DOCUMENTAL

Reubel de en encaja (8/17/2018)

- Obras en encaja en la parte
del flet

3/17/18

AMPARO INDIRECTO: 260/2018
QUEJOSOS: Carolina González Nava,
Martha Patricia González Nava,
Julio César González Nava,
Israel González Nava
Asunto: Recurso de Queja

C. JUEZ ROSA MARÍA CERVANTES MEJÍA
JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Presente.

Carolina González Nava, por propio derecho; en mi calidad de representante común de la parte quejosa; señalando como domicilio para oír notificaciones el ubicado en Calle Tabaqueros número 43, Colonia San Nicolás Totolapan, Delegación la Magdalena Contreras en la Ciudad de México, C.P.10900; autorizando a Martha Patricia y/o a Julio César, ambos de apellidos González Nava, para oír notificaciones, aun las de carácter personal; ante Usted con el debido respeto que se merece comparezco y expongo:

El artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, mandata que el recurso de queja procede, en amparo indirecto, contra la resolución que tenga por no presentada la ampliación de una demanda de amparo.

Asimismo, el plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, tal como lo marca el numeral 98 de la Ley que nos ocupa, en este mismo contexto el artículo 22 de la Ley adjetiva, menciona que los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el de vencimiento:

En esta guisa, con fecha seis de agosto de dos mil dieciocho en lo tocante por medio de lista, se notificó a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho².

Por consiguiente, el artículo 99 y 100 de la Ley de Amparo, mandata, el recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, en el que se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida.

Así tenemos que está parte quejosa, para dar cumplimiento al artículo 100 de la Ley de Amparo, es menester mencionar lo siguiente.

La autoridad responsable es garante del Estado Constitucional Mexicano, tiene mandatos Constitucionales y legales expresos, siendo uno de ellos el Artículo 5, fracción I, XII y XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación³, mismos que ha

¹ Artículo 97. El recurso de queja procede:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;

(...)

² Núm. de Expediente: 260/2018

Fecha del Acuerdo: 31/07/2018

Síntesis: --- AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA AL NO HABER ACUDIDO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL TÉRMINO DE DOS DÍAS A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA NUEVA LEY DE AMPARO, EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCTENTE DICE: "...AGRÉGUENSE A LOS AUTOS., EL ESCRITO DE CUENTA SIGNADO POR EL QUEJOSO., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA., DÍGASE AL PROMOVENTE QUE NO HA LUGAR A AMPLIAR LA DEMANDA, TODA VEZ QUE EL TRES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, TUVO VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN DICHO JUICIO DE AMPARO.,

³ Artículo 5, fracción I, XII y XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, menciona: Son facultades indelegables del Secretario:



vulnerado en juicio constitucional, tal conducta, ha redundado en el estado de excepción de Derecho que acontece en el presente caso.

En esta guisa, el artículo 1 de la Constitución mandata que el Estado tiene como obligación prevenir, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación; asimismo, el numeral 1o., fracción I y III de la Ley de Amparo, menciona que el juicio de amparo resolverá toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este estado de excepción de Derecho, se clarifica en la resolución que la parte quejosa viene a combatir, pues en juicio constitucional, las leyes en justa medida no son aplicadas, **no basta tener acceso a un juicio de amparo ilusorio, que conlleva inaccesibilidad a un recurso efectivo**, resolución que deriva en vulneración en instancia constitucional al derecho al acceso a la justicia, derecho humano que está vinculado al proyecto de vida⁴, pues tiene una finalidad, ya que el Estado Mexicano, ha declarado en Conferencias Internacionales Americanas que el "fin del Estado es la felicidad del hombre dentro de la sociedad. Deben armonizarse los intereses de la colectividad con los derechos del individuo. El hombre americano no concibe vivir sin justicia. Tampoco concibe vivir sin libertad"⁵; ya que, "en ningún caso puede postergarse un derecho, ya que quien tiene derecho merece protección"

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido la categoría de norma del *ius cogens* al derecho al acceso a la justicia "...El acceso a la justicia constituye una

I. Acordar con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el despacho de los asuntos que correspondan a la competencia de la Secretaría, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales de su sector coordinado

XII. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos, dictando al efecto las medidas administrativas procedentes;

XXIII. Acordar con el Presidente de la República conforme a lo previsto por el artículo 6o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y ser el conducto para convocar a los secretarios de Estado y al Procurador General de la República para conocer de los asuntos a que se refiere el **artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, velando por la ejecución de las medidas que se adopten;

⁴ En el presente caso las normas imperativas, relativas a los derechos del hombre, al reconocimiento del derecho humano a un proyecto de vida, a la dignidad humana, base de los demás derechos: a la no impunidad, a la justicia, al derecho de no ser torturado, al derecho de no ser discriminado, el derecho a no ser amenazado con pena privativa de la libertad y de la vida, el derecho de que no se imponga a los quejosos castigos como penas anticipadas, el derecho a que no se soslaye el interés superior de la niñez, el derecho a la propiedad, el derecho a una vida libre de violencia de género, el derecho a una defensa técnica adecuada, el derecho a no vivir con zozobra, que en cualquier momento el Ministerio Público nos imputará hechos falsos con toda impunidad, en los que no se permita conocer a los quejosos de que se nos acusa,⁴ el derecho a no ser privados de seguridad jurídica, a no ser vejado, **el derecho de acudir a instancia constitucional y que no se simule un juicio de amparo**, a no recibir castigos infamantes, actualizando persecución basada en motivos políticos y sociales cometida por autoridades y un grupo que ejerce un poder sobre un territorio determinado con objeto de someter a los quejosos a una forma de vida en la que se ha negado y se sigue negando de forma permanente el goce de derechos fundamentales de los quejosos, entre otras violaciones graves a derechos humanos, denunciando una y otra vez inaccesso a la justicia; solicitando en el transcurso de cinco años ante diferentes autoridades que cesaran estas graves violaciones, máxime si en el presente caso la sistemática y planificada violación a de derechos humanos de los quejosos han sido denunciados: al Procurador General de Justicia del Distrito Federal⁴, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, asimismo, presentamos escrito de denuncia y petición en el que solicitamos se reivindique el derecho de los quejosos de justicia, con el fin de obtener el reconocimiento de la violación a derechos humanos, la cesación de la violación y una reparación adecuada del daño físico y mental; asimismo solicitamos cesaran los ataques sistemáticos en contra de los suscritos; que se respetaran nuestra vida, petición y denuncia dirigida respetuosamente mediante escrito al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en fecha 6 de septiembre de 2017 en atención Ciudadana de la Presidencia, quien a su vez se lo turnó a la Secretaría de Gobernación, en fecha 7 de septiembre de 2017.

⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86, párrafo 33



12

norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes...".⁶

El Estado tiene límites a su actuar pues La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano expresaba en su artículo 4 que:

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley.

Esto es, "el sentido de la palabra **leyes** dentro del contexto de un régimen de protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y del origen de tal régimen. En efecto, la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal."

En este contexto, sigue diciendo la Corte que, "no es posible interpretar la expresión **leyes**, utilizada en el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual "los derechos esenciales del hombre... tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos".⁷

Ello es así, a la parte quejosa el Juzgado de Distrito le ha restringido por un periodo de un año, con ocho meses, un recurso sencillo y efectivo, pues no es legal un juicio ilusorio, la presente resolución recurrida es un hecho notorio, que clarifica el absurdo jurídico en que permanece este juicio con número de expediente 260/2018, privando ésta resolución la oportunidad de argumentar en torno a lo que la autoridad responsable expuso en su informe justificado, así como de ofrecer pruebas, coartando el derecho a formular nuevos conceptos de violación para plantear una litis constitucional completa.

En esta guisa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la obligación que está a cargo de todo Estado Parte en la Convención de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y (de) garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción" (art. 1.1). De esa obligación general se deriva el derecho de toda persona, prescrito en el artículo 25.1, "a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención".⁸

La resolución recurrida violenta el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Pues la institución procesal del amparo contenido en el artículo 25 de la Convención, lo establece como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los

⁶ Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, serie, C, núm. 153, numeral 131. Cfr. Voto razonado del juez A. A. Cancado Trindade, p. 22, numeral 64. Cfr. Corte I.D.H., Almonacid y Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, voto razonado del juez A.A. Cancado Trindade, serie C, núm. 154, p. 7, numeral 22

⁷ párrafo 26, *ídem*

⁸ Párrafo 22, *ídem*

derechos fundamentales, que igualmente, en términos amplios, menciona la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. De donde concluye, **a fortiori**, que el régimen de protección judicial dispuesto por el artículo 25 de la Convención es aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia⁹

La resolución combativa agravia el Principio de No Discriminación, éste (artículo 4.1 *in fine*¹⁰) proclama que las medidas adoptadas no deben ser dirigidas a un grupo para su exterminio como en el caso acontece, lo que hace inaceptable toda suspensión de derechos humanos que afecte solamente a un sector de la población por razones de anular el derecho humano a la existencia.

Este estado de excepción de Derecho y de derechos fundamentales no derogables, derivó en el presente juicio de amparo indirecto, como autoridad responsable, Secretario de Gobernación, autoridad que inobserva el Estado de Derecho, que redundo en actuaciones que refuerzan éste estado de suspensión.

Las denuncias de las graves violaciones a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el caso concreto, apoyó la persistencia de estas violaciones, haciéndonos más vulnerables a los quejosos; excepción del estado de Derecho, en el que se observa la cadena de mando, con grado de participación: Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Jefe Delegacional en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida¹¹; Director de lo Jurídico y de Gobierno del Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras del Gobierno de la Ciudad de México; y demás autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, y ahora el presente caso es del conocimiento del Secretario de Gobernación, autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto citado al rubro; autoridad que en juicio constitucional incumple con las obligaciones que le confiere un Estado de Derecho, como garante del Estado Constitucional Mexicano, perpetuando el estado de indefensión, que deriva en una espiral de impunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la falta de debida diligencia ante actos de violencia genera impunidad, y que ésta a su vez propende nuevos incidentes de la misma violencia que debía ser eliminada⁸¹. En particular, cuando los delitos de violencia, tanto aquéllos cometidos por particulares como por agentes del Estado, quedan impunes, se perpetúa la violencia, ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos y se crea una espiral de impunidad. También se ha corroborado que la impunidad que rodea la mayor parte de los actos de violencia

⁹ Párrafo 23, ídem

¹⁰ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

¹¹ Un ejemplo de ello, los agentes del Ministerio Público y el Jefe Delegacional en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida, éste último, con fecha 4 de diciembre de dos mil quince, amenazó por medio de dos subordinados (servidores públicos del Órgano Político Administrativo): que si no acudíamos a una concertación vecinal, con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, en la que seríamos detenidos arbitrariamente por Agentes del Ministerio Público, "que habría problemas", de forma lógica, no acudimos a ésta "concertación vecinal", más, policía de investigación, en misma fecha, acudió en busca de los quejosos a nuestro domicilio, **hecho, que hizo que nos "resguardarnos"; tal como acontece a la fecha**; no obstante, acudimos a denunciar estos hechos ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ante el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, al contrario de proteger los derechos humanos de toda persona, obligación consagrada en el párrafo tercero del numeral primero de la Constitución, éstas violaciones, fueron alentadas, la persistencia sistemática de estas vulneraciones, deviene a comprobarlo, robusteciendo esta afirmación, con los anexos e informes justificados de los juicios de amparo indirecto: 651/2017, 627/2017 y 260/2018; un ejemplo de ello, con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis: infligieron, de nueva vez a la quejosa Carolina González Nava, en la Agencia del Ministerio Público, tortura psicológica, derivando, que su resistencia física y psicológica, fuera quebrantada por el largo periodo en que a los quejosos nos han privado de derechos fundamentales no derogables.

contribuye a su repetición.⁸² Esta impunidad es en sí misma una forma de discriminación en el acceso a la justicia⁸³.¹² Lo subrayado es propio.

El presente caso, es un estado de excepción de Derecho y de violación sistemática y flagrante de derechos fundamentales no derogables, por lo que si el agraviado (autoridad responsable¹³) con estos actos es la autoridad federal y/o ejecutivo, estaría en aptitud de promover controversia constitucional, pero si con motivo de esa invasión de competencias el afectado es un particular procederá, en su caso, el juicio de amparo, como acontece en el presente caso.

Pues con apoyo de la contradicción de tesis 69/2007 SS en el que se resolvió que, "En los casos examinados fueron particulares quienes se ostentaron afectados con motivo de la invasión de competencias, razón por la que se encuentran en aptitud de promover el juicio de garantías."

Basándose esta suscrita en la causa de pedir acceso a la justicia, como derecho fundamental no derogable, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que conocerá de actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a sus artículos, 1; 29, 107, fracción VIII, inciso b).

Invocando el derecho imperativo de acceso a la justicia¹⁴ y en la institución procesal del amparo contenido en el artículo 25 de la Convención, lo establece como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales, que igualmente, en términos amplios, menciona la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. De donde concluye, **a fortiori**, que el régimen de protección judicial dispuesto por el artículo 25 de la Convención es aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia¹⁵

Este estado de excepción deviene a comprobar la vulneración al debido proceso legal en juicio constitucional, inmersos en el artículo 8.1¹⁶ y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¹² Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de derechos humanos en México, 2015, página 47, párrafo, 63

¹³

¹⁴ A la parte quejosa nos han sometido a castigos, pagando un costo muy alto: por haber solicitado acceso a la justicia: incriminaron a las quejas, daño a la propiedad, de una edificación que ésta asentada en la vía pública denominada Andador Tabaqueros¹⁴. Siguiendo un proceso en la que torturaron en interrogatorio por segunda ocasión a la quejosa Carolina González Nava, con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dando lugar, a que en días posteriores tuviera que acudir por atención médica, que culminó con atención especializada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud, presentando cuadro de ansiedad, con daños físicos y un eminente riesgo que puedan agravarse derivado de éste estado de excepción de Derecho y de violación flagrante y sistemática de derechos inderogables, que derivan en persecución objetiva y la amenaza en la que vuelvan a torturar no sólo a ésta; de incriminación...

¹⁵ Párrafo 23, ídem

¹⁶ El artículo 8 de la Convención en su párrafo 1 señala que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

La Corte señaló, "que el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención."¹⁷

Por lo tanto, el artículo 8 de la Convención, reconoce el llamado "debido proceso legal", mismo que es aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, éste no puede suspenderse aún bajo situaciones de excepción

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que "En ningún caso puede postergarse un derecho ya que quien tiene derecho merece protección"¹⁸

En el presente caso las resoluciones en los innumerables juicios de amparo, distan de ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley.

Sirve de apoyo las tesis siguientes:

Tesis aislada, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 871, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: **"SENTENCIA DEFINITIVA, EN JUICIO CIVIL"**:

"Deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley; y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales de derecho."

Con apoyo en la jurisprudencia anterior, el acto privativo de estado de excepción de Derecho y la vulneración a derechos no derogables es ilegal, esto es, la parte quejosa ha solicitado acceso a la justicia en juicio constitucional, la protección de la justicia de la unión para la investigación de los hechos (fact-finding), en que está investigación, la cesación de la violación, sanción a los perpetradores de ésta suspensión y una reparación adecuada del daño físico, mental y moral, en que las resoluciones por omisión o bien por acción son hechos notorios de esta privación de derechos, al resolver contrario a la letra o la interpretación jurídica de la ley, lo que clarifica el estado del vacío jurídico, en instancia Constitucional, que en un periodo de un año, con ocho meses, redundan en ésta excepción, en innumerables juicios de amparo, que resultan en un mismo caso.

Es loable mencionar que las actuaciones de las autoridades responsables en los juicios de amparo 1118/2016; 288/2017; 545/2017; 627/2017; 651/2017; 260/2018 han derivado como prueba idónea en juicio constitucional de éste estado de excepción de Derecho, pretendiendo hacer legal lo ilegal, en que éstas autoridades han hecho lo que les ha parecido, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día. Condenable (ilegal) desde cualquier punto de vista.

Al haberse decretado en el presente caso la suspensión de derechos fundamentales, y no regularse ejecutivamente nada al respecto, ello abrió de forma sistemática de forma ilimitada a la ilegalidad de los funcionarios, figuras políticas, particulares, en conjunto y/o "pacto criminoso", han actualizado delitos que pueden constituir de lesa humanidad.

Así tenemos que La garantía de audiencia se compone de cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, que son:

¹⁷ Opinión Consultiva OC-9/87, párrafo 27, *in fine*

¹⁸ Tesis: 1a. CCCLXXXV/2014 (10a.), Decima Época, Primera Sala, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, noviembre de 2014, Página: 719, Registro: 2007923

- a) Un juicio previo al acto privativo, en contra de la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por la disposición constitucional.
- b) Que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos.
- c) Que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y
- d) Que la sentencia respectiva se dicte conforme a las leyes existentes con anterioridad al hecho.

La resolución recurrida, clarifica el estado de excepción de Derecho y las violaciones flagrantes y sistemáticas a derechos inderogables de la parte quejosa, esto es, vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, los razonamientos, fundamentos y falta de estos han sido ilegales, denegando el acceso a la justicia, razonamientos jurídicos contrarios al bien vulnerado, que no dirime las cuestiones debatidas, sin la oportunidad de ofrecer pruebas en que se finque la defensa, derivando en total estado de indefensión.

Luego, La resolución recurrida vulnera el principio de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, que han derivado en el dictado de resoluciones que no dirime de forma alguna las cuestiones debatidas, en que el estado de excepción de Derecho, deriva en el "vacío jurídico", la arbitrariedad, contrario a un Estado de Derecho:

- a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima;
- b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido;
- c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; y,
- d) estar justificada en razones constitucionales, conforme al principio de legalidad:

"GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA. De los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; y, d) estar justificada en razones constitucionales. Lo anterior conforme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados".¹⁹

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha pronunciado que los requisitos esenciales del debido proceso legal que resultan necesarios para garantizar la garantía de audiencia:

- 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
- 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
- 3) La oportunidad de alegar; y
- 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas".:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades

¹⁹ Tesis: P./J. 130/2007, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, diciembre de 2007, página: 8, registro: 170740.

esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado".²⁰

Por todo lo anterior, insto, al Alto Tribunal acceso a la justicia. Pues el acceso a la justicia es una norma imperativa que no admite acuerdo en contrario alguno, a que En ningún caso puede postergarse un derecho ya que quien tiene derecho merece protección".²¹

El más Alto Tribunal de la Nación al interpretar el artículo 133 de la Constitución Federal, ha sostenido que sólo el Poder Judicial Federal puede calificar la constitucionalidad de las leyes o de los actos de autoridad a través del juicio de amparo, entre otros instrumentos.

"Históricamente, las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son un reconocimiento en la norma constitucional de los derechos naturales y fundamentales del hombre. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todos los habitantes de la República contra los actos arbitrarios de autoridad, que dan a sus titulares la potestad de ser exigidos únicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la propia Carta Magna consagra, esto es, la acción constitucional de amparo."

Ahora bien, la resolución recurrida vulnera el artículo 17, 103, 107, de la Constitución, así mismo el numeral 1, 76, 79, 111, 113, 119, 217 artículos de la Ley de Amparo, en relación a la parte convencional en los artículos 1.1 y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos:

Coloca a los quejosos en total indefensión, afectando derechos humanos y la garantía constitucional para su defensa (juicio de amparo), pues nos niega la oportunidad de interponer ampliación de demanda de amparo por conceptos de violación, reduciendo la posibilidad de tener acceso a la justicia. Por lo que causa un avasallador perjuicio a los quejosos, ello constituye una restricción a nuestros derechos fundamentales de defensa y acceso efectivo a la tutela jurisdiccional, pues la resolución recurrida vulnera el principio de la lógica, el principio de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, que han derivado en el dictado de resoluciones que no dirime de forma alguna las cuestiones debatidas, en que el estado de excepción de Derecho, deriva en el "vacío jurídico", la arbitrariedad, a la Ley de Amparo, Tratados Internacionales que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado; actuando con arbitrariedad, pues no dirime las cuestiones verdaderamente debatidas, en la que la resolución recurrida dista de ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley o de la jurisprudencia en la que se ha resuelto contrario a ésta resolución, como hecho notorio la resolución de la queja 54/2015, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, hecho que trae a colación la suscrita, pues éste Tribunal invocó la jurisprudencia 15/2013, visible en la página doce, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, de julio de dos mil trece, Novena Época, bajo el rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE"; advirtiéndole que era factible acudir a ésta jurisprudencia para tener como ampliada la demanda de amparo por conceptos de violación, invocando por igual la suplencia de la queja deficiente, hecho notorio que deviene al presente caso en discriminatorio, privando al caso concreto su derecho inderogable a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues le deniega a la parte quejosa una defensa adecuada, privando la resolución recurrida la oportunidad de argumentar en torno a lo que la autoridad responsable expuso en su informe justificado, así como de ofrecer pruebas, coartando el

²⁰ Tesis: P./J. 47/95, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, diciembre de 1995, Página: 133, registro: 200234.

²¹ Tesis: 1a. CCCLXXXVI/2014 (10a.), Decima Época, Primera Sala, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, noviembre de 2014, Página: 719, Registro: 2007923

derecho a formular nuevos conceptos de violación para plantear una litis constitucional completa.

Lo anterior con apoyo en la Contradicción de tesis 155/2016 Segunda Sala resolvió que la ampliación de la demanda en el juicio de amparo indirecto es una institución jurídica que, constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales de acceso a la justicia (con una impartición pronta expedita y completa) y defensa adecuada; pues le otorga a la parte quejosa la oportunidad de argumentar en torno a lo que la autoridad responsable exponga en su informe justificado, así como de ofrecer pruebas.

Igualmente, menciona que la ampliación de la demanda permite formular nuevos conceptos de violación para plantear una litis constitucional completa, integrada por los actos reclamados inicialmente y por los novedosos que se encuentren relacionados con ellos, ya sea que se conozcan mediante el informe justificado o por cualquier otro medio.

Mencionando que el juicio de amparo indirecto, su procedencia no está condicionada a formalismos excesivos ni desproporcionales.

En este sentido la resolución recurrida, resuelve contrario a lo anteriormente vertido, lo que causa total estado de indefensión, que cabe transcribir lo siguiente:

Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad dicha ampliación, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 111 de la ley de Amparo para que proceda la ampliación de la demanda. Página 3, párrafo primero, de la resolución recurrida.

De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que la ampliación de demanda de amparo es una figura jurídica que confiere a la parte peticionaria el derecho para incorporar a la litis constitucional, diversas autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación, pero ese derecho debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia como son: Página 3, párrafo tercero, ídem.

En el caso, a consideración de este juzgado, el acto que pretende reclamar la parte quejosa a la autoridad responsable no guarda estrecha vinculación con el acto por el cual fue admitida originalmente la demanda de derechos fundamentales, ni con el acto por el cual se tuvo por ampliada. Página 4, párrafo tercero, ídem.

Actos que son totalmente disimiles del que pretende ampliar la demanda de amparo o que éste sea consecuencia de los primeros. Página 5, párrafo primero, ídem.

En las condiciones apuntadas resulta patente que la litis en este juicio ya se encuentra fijada y los referidos actos impugnados que pretende incluir no derivan del contenido del acto inicialmente reclamado, ni del que se tuvo por ampliada la demanda. Página 6, párrafo segundo, ídem.

Razón por la cual, con fundamento en los numerales 113, en concordancia con el diverso 111 de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación de la demanda de amparo, por las razones expuestas en párrafos que anteceden. Página 6, párrafo tercero, ídem.

Ahora bien, la juez A quo, fundamenta la resolución recurrida con el numeral 113 de la Ley de Amparo, hecho que causa incertidumbre jurídica y total estado de indefensión, ya que a la letra dice:

"El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"

Este numeral empleado en relación al artículo 111 de la Ley adjetiva, no es acorde con el artículo 217 de la misma ley, pues para ser jurídicamente legal que la ampliación de demanda de amparo por conceptos de violación su causa para desecharla fuera manifiesta e indudable, tendría que haber sido promovida por actos disímiles que no tuvieran que ver con el presente caso que en sí mismo y por sí mismo es un estado de excepción de Derecho y de violaciones flagrantes y sistemáticas a derechos no derogables, en que en juicio constitucional se deniega el derecho al acceso a la justicia²², ya que, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable para la determinación de sus derechos en el que se ha vulnerado el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ya que la Corte ha señalado, "que el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención."²³

Por lo tanto, el artículo 8 de la Convención, reconoce el llamado "debido proceso legal", mismo que es aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, éste no puede suspenderse aún bajo situaciones de excepción

En el presente caso la resolución recurrida dista de ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley.

Al haberse decretado en el presente caso la suspensión de derechos fundamentales, y no regularse ejecutivamente nada al respecto, ello abrió de forma sistemática de forma ilimitada a la ilegalidad de los funcionarios, figuras políticas, particulares, en conjunto y/o "pacto criminoso", han actualizado delitos que pueden constituir de lesa humanidad. Nada se ha decretado, nada se ha regulado, nada se ha dicho, y las autoridades responsables en innumerables juicios²⁴ que la parte quejosa ha interpuesto, han hecho lo que les ha parecido, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día. Condenable (ilegal) desde cualquier punto de vista.

En esta guisa, es procedente la ampliación de la demanda de amparo respecto a los conceptos de violación, porque todas las personas disponen de medios jurídicos para hacer efectivos sus derechos:

A los quejosos se les ha despojado arbitrariamente de sus derechos más fundamentales, esto es, la autoridad responsable, Secretario Gobernación, desatiende la violación al artículo 1 y 29 de la Constitución en el presente caso. Derivando que se restrinjan las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos más fundamentales conculcados, siendo hecho notorio sus informes justificados en el juicio de amparo indirecto citado al rubro. En el que no se permite a la parte quejosa el derecho de combatir los actos ilegales de los informes justificados que conforman el expediente citado al rubro.

Así, tenemos que la resolución recurrida violenta el debido proceso legal, vulnera el artículo 76 de la Ley de Amparo²⁵, pues el acto reclamado, es el mismo, que en auto de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, la juez A quo, admitió la ampliación de demanda, en el que resolvió que:

²² La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido la categoría de norma del *ius cogens* al derecho al acceso a la justicia "...El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes...".⁵

²³ Opinión Consultiva OC-9/87, párrafo 27, *in fine*

²⁴ 1118/2016;288/2017;349/2017;545/2017;627/2017; 651/2017260/2018.

²⁵ Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.

"A consideración de la suscrita, dichas manifestaciones no constituyen en sí mismas un acto reclamado, sino apreciaciones sobre él, que no son otra cosa que conceptos de violación o agravios.", página diez, del auto de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho que se le notificó a la suscrita.

Razón que hace contradictoria la resolución recurrida, al mencionar en auto de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, página 4:

"En el caso, a consideración de este juzgado, el acto que pretende reclamar la parte quejosa a la autoridad responsable no guarda estrecha vinculación con el acto por el que fue admitida originalmente la demanda de derechos fundamentales, ni con el acto por el cual se tuvo por ampliada." Página 4, párrafo tercero, de la resolución recurrida.

Es así como ésta resolución vulnera el artículo 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo; restringe a la parte quejosa el derecho de acceso a la justicia, esto es, este numeral menciona que el órgano jurisdiccional deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se están violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado en jurisprudencia que la autoridad de amparo debe estudiar la demanda de amparo íntegramente para determinar el acto lesivo dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo. Así se indica en la tesis: 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto:

"ACTOS RECLAMADOS.DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS"

"Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenerse como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo."

La resolución recurrida no está apegada al principio de legalidad, no es razonable, la juez
A quo resuelve:

"A consideración de la suscrita, dichas manifestaciones no constituyen en sí mismas un acto reclamado, sino apreciaciones sobre él, que no son otra cosa que conceptos de violación o agravios.", página diez, del auto de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho que se le notificó a la suscrita.

Razón que hace contradictoria la resolución recurrida, al mencionar en auto de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, página 4:

"En el caso, a consideración de este juzgado, el acto que pretende reclamar la parte quejosa a la autoridad responsable no guarda estrecha vinculación con el acto por el que fue admitida originalmente la demanda de derechos fundamentales, ni con el acto por el cual se tuvo por ampliada." Página 4, párrafo tercero, de la resolución recurrida.

Luego, la resolución recurrida no da cumplimiento a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que sea con fundamento adecuado, idóneo, apta y susceptible de alcanzar un fin legítimo apegado a la ley, esto es, el Juzgado de Distrito resuelve que el acto reclamado por el que se tuvo por ampliada la demanda de amparo no es el mismo que la parte quejosa volvió a manifestar en la solicitud de ampliación de demanda por conceptos de violación, mas,

se transcribe de forma idéntica, en el entendido que la Segunda Sala²⁶ ha expresado que, "del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenerse como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, hecho que a juicio de la juez A quo manifestó, *"A consideración de la suscrita, dichas manifestaciones no constituyen en sí mismas un acto reclamado, sino apreciaciones sobre él, que no son otra cosa que conceptos de violación o agravios."*, en el auto de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho por el cual el Juzgado de Distrito, tuvo por ampliada la demanda de amparo; acto reclamado que fue transcrito de forma idéntica en la solicitud de ampliación de demanda de amparo por conceptos de violación (auto de fecha 31 de julio de dos mil dieciocho).

La resolución recurrida vulnera el artículo 217 de la Ley de Amparo, pues el Alto Tribunal ha establecido criterio, en el sentido de que la demanda de amparo puede recaer por conceptos de violación, cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, como en el caso acontee.

Ello es así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido que la ampliación de la demanda de amparo puede recaer igualmente respecto de las autoridades responsables y conceptos de violación; pues así, lo concluyó en la jurisprudencia P./J. 15/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, con número de registro 183932, cuyos rubro y texto son:

"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE"

La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.

Esto es, la parte quejosa acude a ésta tesis en el que las razones del Pleno al resolver la contradicción de tesis 2/99-P.L. de la que derivó la jurisprudencia P./J. 15/2003 se pronunció en que es factible ampliar la demanda de amparo por conceptos de violación, pues así se podrá resolver la litis constitucional conforme al derecho fundamental de tutela judicial efectiva que se funda en el artículo 17 constitucional.

Asimismo, la Segunda Sala al resolver la Contradicción de tesis 155/2016 resolvió que la ampliación de la demanda en el juicio de amparo indirecto es una institución jurídica que, constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales de acceso a la justicia (con una impartición pronta expedita y completa) y defensa adecuada; pues le otorga a la parte quejosa la oportunidad de argumentar en torno a lo que la autoridad responsable exponga en su informe justificado, así como de ofrecer pruebas.

Igualmente, menciona que la ampliación de la demanda permite formular nuevos conceptos de violación para plantear una litis constitucional completa, integrada por los actos reclamados inicialmente y por los novedosos que se encuentren relacionados con ellos, ya sea que se conozcan mediante el informe justificado o por cualquier otro medio.

Mencionando que el juicio de amparo indirecto, su procedencia no está condicionada a formalismos excesivos ni desproporcionales.

²⁶ tesis: 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: **"ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS"**

Decir lo contrario es ir en contra de las leyes y redundar en el estado de excepción de Derecho que acontece en el presente caso, en el que al acudir a juicio de amparo éste es ilusorio, que deriva en *vacío del derecho*, en violación al proceso, pues los principios de legalidad y reserva de ley constituyen una garantía efectiva de los derechos y libertades de la persona humana, en el que el derecho imperativo de acceso a la justicia encuentra cobijo en la institución procesal del amparo contenido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo establece como un procedimiento sencillo y breve que tiene como objeto la tutela de los derechos fundamentales reconocidos no sólo por la Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución, derecho no susceptible de suspensión en estado de emergencia:

La reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad, dentro del constitucionalismo democrático, es un elemento esencial para que los derechos del hombre puedan estar jurídicamente protegidos y existir plenamente en la realidad. Para que los principios de legalidad y reserva de ley constituyan una garantía efectiva de los derechos y libertades de la persona humana, se requiere no sólo su proclamación formal, sino la existencia de un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado del ejercicio de las competencias de los órganos.²⁷

Invocando el derecho imperativo de acceso a la justicia²⁸ y en la institución procesal del amparo contenido en el artículo 25 de la Convención, lo establece como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales, que igualmente, en términos amplios, menciona la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. De donde concluye, *a fortiori*, que el régimen de protección judicial dispuesto por el artículo 25 de la Convención es aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia²⁹

La ilegalidad de la resolución recurrida deja sin defensa a la parte quejosa en el juicio de amparo citado al rubro, en juicio constitucional ilusorio, en el que a claras vistas la postura de la autoridad responsable, Secretario de Gobernación, toma medidas que hace nugatorio el acceso a la justicia, contrarios a los postulados del derecho, haciendo un llamado al absurdo jurídico, en el que el Juzgado de Distrito con esta resolución recurrida, deniega ilegalmente al caso concreto la oportunidad de argumentar en torno a lo que la autoridad responsable expuso en su informe justificado, y así formular nuevos conceptos de violación para plantear una litis constitucional completa, lo que vulnera la ley de amparo, en sí mismo es un vacío de derecho en que permanece el presente caso, el Derecho es negado. Es insoslayable, en el presente caso no mencionar la Jurisprudencia emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado, publicada en la tesis: I.11o.C.23 K (105), en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2215, tomo III, septiembre 2015; en la que manifiesta que cuando se advierte que ha habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo, numeral que contiene la procedencia de la acción constitucional contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que trasgrede los derechos humanos establecidos para su protección. Siendo el único medio de control de mayor jerarquía para la tutela de los derechos fundamentales de conformidad con los artículos 1o. y 133 de la Constitución, **"porque si conforme a estos numerales las autoridades del Estado y, entre éstas, los órganos de control constitucional, están obligadas a garantizar a los individuos la protección más amplia de sus derechos fundamentales, asegurando también la primacía de la Constitución ante**

²⁷ Opinión Consultiva OC-6/86, párrafo 24, Corte Interamericana de Derechos Humanos.

²⁸ A la parte quejosa nos han sometido a castigos, pagando un costo muy alto: por haber solicitado acceso a la justicia: incriminaron a las quejas, daño a la propiedad, de una edificación que ésta asentada en la vía pública denominada Andador Tabaqueros²⁸. Siguiendo un proceso en la que torturaron en interrogatorio por segunda ocasión a la quejosa Carolina González Nava, con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dando lugar, a que en días posteriores tuviera que acudir por atención médica, que culminó con atención especializada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud, presentando cuadro de ansiedad, con daños físicos y un eminente riesgo que puedan agravarse derivado de éste estado de excepción de Derecho y de violación flagrante y sistemática de derechos inderogables, que derivan en persecución objetiva y la amenaza en la que vuelvan a torturar no sólo a ésta; de incriminación...

²⁹ Párrafo 23, ídem

cualquier otra disposición que la contrarie", haciendo hincapié, que las autoridades del Estado, mencionando que entre estas se encuentran, los órganos de control constitucional, están obligados a garantizar a los individuos la protección más amplia de sus derechos fundamentales:

el Juzgado de Distrito no realiza una interpretación *pro personae, pro debilis, pro actione*, a fin de favorecer la protección más amplia, aunado que es esencial referir el alcance e intensidad de la dignidad humana como condición y base de los demás derechos fundamentales de la que deriva la integridad física, psíquica y moral, degradación, discriminación, por lo que la dignidad de la persona constituye una condición *per-se*, irrenunciable, en este contexto el principio de interdependencia en relación al principio de indivisibilidad en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí, de tal forma que la trasgresión de uno de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos.

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE SI EL TRIBUNAL REVISOR ADVIERTE PATENTEMENTE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CUMPLIRSE UNA HIPÓTESIS LEGAL ESPECÍFICA, PERO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCIÓ DEL JUICIO INVOCÓ UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA QUE NO RIGE A AQUEL.

En términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo debe suplirse la queja deficiente cuando se advierta que ha habido un contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 10 de esta ley. Ahora bien, esa transgresión puede actualizarse por acción u omisión y ello debe advertirse en forma "evidente", que significa de manera cierta, clara, patente o sin la menor duda. A su vez, dicha infracción debe incidir en los derechos a que se contrae el referido artículo 10, el cual contiene la procedencia genérica de la acción constitucional; esto es, contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que transgredan los derechos humanos establecidos para su protección. Resalta que, por excelencia, la garantía para la tutela de esos derechos es el juicio de amparo, al tratarse del mecanismo constitucional y de mayor jerarquía para obtener la restitución en el goce del derecho fundamental transgredido. Por ende, se concluye que el tribunal revisor está constreñido a suplir la queja deficiente cuando advierta una clara y patente infracción a las reglas de procedencia del amparo, de acuerdo con los artículos 10 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si conforme a estos numerales las autoridades del Estado y, entre éstas, los órganos de control constitucional, están obligados a garantizar a los individuos la protección más amplia de sus derechos fundamentales, asegurando también la primacía de la Constitución ante cualquier otra disposición que la contrarie, cuya obligación vista desde la perspectiva del procedimiento constitucional, permite sostener que una vez probada la transgresión a dichas reglas de procedencia del mecanismo garantía para la tutela de los derechos fundamentales de un individuo, su restauración resulta ineludible, sin que sea válido soslayarla invocando impedimentos de rigor técnico que permitan la subsistencia del acto inconstitucional y sus efectos perjudiciales para los derechos fundamentales reconocidos. Entonces, en los casos donde el tribunal revisor advierta patentemente la procedencia del juicio de amparo, por cumplirse una hipótesis legal específica que regula el acto reclamado, pero en contravención el órgano jurisdiccional que conoció del juicio invocó un motivo de improcedencia que no rige a aquél, el tribunal revisor está constreñido a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción VI, citado, a fin de promover, proteger y garantizar la procedencia del mecanismo por excelencia para tutelar los derechos humanos, dando a la figura de la suplencia el alcance protector más amplio y eficiente posible. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO."

Nota. Lo resaltado es propio.

El auto recurrido vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, a un recurso efectivo y al acceso a la justicia, y contraviene las disposiciones de la Ley de Amparo (1,76,79,217 y demás), la cual establece que el Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará de manera supletoria, y en su defecto, los principios generales de derecho en el entendido de que la interpretación de dicho código adjetivo y los principios generales de derecho debe tomar en cuenta el principio de buena fe, el principio de favorecimiento de la acción (*pro actione*) y el principio de interpretación más favorable (*principio pro personae*) en relación al derecho de

acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y aun recurso efectivo, principios inspirados en el artículo 17 de la Constitución incluyendo *inter alia*, el artículo 25.1 y 25.2 b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual establece que *"Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"* y la obligación de *"desarrollar las posibilidades del recurso judicial"*.

Al respecto la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado tesis aisladas 1a. CCXCIV/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: ***"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL LEGISLADOR NO DEBE ESTABLECER NORMAS QUE, POR SU RIGORISMO O FORMALISMO EXCESIVO, REVELEN UNA DESPROPORCIÓN ENTRE LOS FINES DE LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY PARA PRESERVAR LA CORRECTA Y FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA"***.

Si bien es cierto que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos gozan de un margen de apreciación para articular la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también lo es que los requisitos y las formalidades establecidos en sede legislativa deben ser proporcionales al fin u objetivo perseguido, esto es, no deben lesionar la sustancia de ese derecho. Así, en el acceso a la jurisdicción se prohíbe al legislador no sólo la arbitrariedad e irrazonabilidad, sino también el establecimiento de normas que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelen una desproporción entre los fines que aquellas formalidades y requisitos previstos en la ley preservan para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, frente a los intereses que sacrifican.

Nota. Lo resaltado es propio.

Por tanto, la resolución recurrida veda la tutela judicial, de contar con un recurso adecuado y efectivo como parte del derecho de garantías y protección judiciales que tienen las víctimas y/o sus familiares, víctimas directas e indirectas de contar con un recurso adecuado y efectivo frente a las violaciones de derechos humanos, especialmente cuando están involucradas autoridades. Ello es así, ya que el respeto a los derechos fundamentales no derogables, particularmente los relativos a la vida, a la integridad personal, a un proyecto de vida, a la libertad, a una vivienda digna, derecho del niño, a la no violencia de género, al principio de legalidad y de retroactividad **de las garantías judiciales indispensables para la protección de derechos fundamentales no derogables:** artículo 27.2 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; normas de *ius cogens*, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo, que tienen su origen en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado; y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que están reconocidos en el artículo 1, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Estado debe asumir una conducta activa y decidida para prevenir su vulneración, a través de las acciones legislativas, administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo necesario para que, en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser **sancionadas y reparadas**, al respecto³⁰ la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CCCXLI/2015 (10a.), publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: ***"DERECHOS HUMANOS. DE LA OBLIGACIÓN GENERAL DE GARANTIZARLOS, DERIVA EL DEBER DE LAS AUTORIDADES DE LLEVAR***

³⁰ Asimismo, el pronunciamiento emitido por El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la tesis aislada P. LXIII/2010, febrero de 2011, tomo XXXIII, pág. 25, con el rubro: ***"DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA"***. Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009

A CABO UNA INVESTIGACIÓN SERIA, IMPARCIAL Y EFECTIVA, UNA VEZ QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL HECHO.”:

De la obligación general de garantía de los derechos humanos deriva la obligación de llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que las autoridades tengan conocimiento del hecho. El alcance del deber de investigar es parte del deber de garantía de las normas sustantivas violadas con un hecho en particular, como parte del derecho a las garantías y protección judiciales que tienen las víctimas y/o sus familiares de contar con un recurso adecuado y efectivo frente a violaciones de derechos humanos. Estos recursos deben sustanciarse con base en las garantías de debido proceso.

En ésta guisa, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito³¹, funcionando en Pleno, en el presente caso no ha respetado los principios de razonabilidad, legalidad y proporcionalidad jurídica, hechos notorios en las resoluciones de éste Tribunal, que derivaron de los juicios de amparo indirecto: 288/2017; 545/2017; 651/2017; 260/2018, y 74/2018³², esto a colación, ya que, no puede ser de conocimiento de este tribunal de nueva vez ésta resolución recurrida, esto es, a la parte quejosa le ha denegado el derecho humano de acceso a la justicia, derivando en excepción de estado de Derecho.

Ello es así, el presente caso forma parte de un todo, tal como se dilucida en los escritos de demanda de amparo y sus anexos en los juicios 1118/2016; 288/2017; 545/2017; 627/2017³³; 651/2017; 260/2018 y 349/2017³⁴, que forman parte integra de los actos y omisiones que se le reclaman a las autoridades responsables en el presente caso; por lo que para llegar a la verdad jurídica, tal como lo menciona el artículo 79 párrafo primero³⁵, y el numeral 200³⁶, del Código Federal de Procedimientos Civiles, es necesario tener como un conjunto a éstos expedientes, ya que, “cualquier que sean las razones que hayan podido existir para interrumpir el proceso constitucional democrático, es inaceptable e inadmisibles la supresión y/o violación de ciertos derechos humanos que constituyen siempre el mínimo necesariamente vigente e inderogable y cuya existencia y respeto necesario en todo momento y en toda situación, sin que sea posible justificar su derogación, desconocimiento o violación” que generó este estado de excepción de derecho y de vulneración sistemática a derechos fundamentales no derogables.

Éste estado de excepción de Derecho y de violaciones a derechos humanos fundamentales, derechos protegidos por normas del *ius cogens*³⁷; en relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.³⁸ En el que el Estado ha tolerado su perpetración en el presente caso.

³¹ 288/2017; 545/2017; 651/2017; 260/2018

³² Substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito.

³⁴ Substanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, sin soslayar el juicio de amparo con número de expediente 74/2018, que el Juzgado Tercero de Distrito de amparo en Materia Penal del Primer Circuito resolvió tener ilegalmente por no presentado, esto con apoyo y denegación de acceso a la justicia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

³⁵ Numeral que literalmente dice: “que para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata en los hechos controvertidos.”

³⁶ **ARTICULO 200.-** Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.

³⁷ artículo 53 de la Convención de Viena de fecha 23 de mayo de 1969, ratificándola el Estado Mexicano en misma fecha, menciona que “es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario, y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general que tenga el mismo carácter.

³⁸ Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

Por lo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a sus Estados Partes la de respetar y garantizar la totalidad de los derechos y garantías en él reconocidos, siendo una protección internacional. Asimismo, los artículos 40 al 43 de éste Pacto prevé los mecanismos de queja entre Estados o conforme al Protocolo Facultativo, toda persona que alegue una violación de los derechos que protege el Pacto Internacional podrá someter a la consideración del Comité de Derechos Humanos una comunicación escrita. En el cumplimiento de las garantías formales y materiales, exigidas por el artículo 4 del Pacto Internacional.

En este entendido, no existe justificación alguna para la suspensión de los derechos no derogables, amparados en el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego el presente caso es una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos. La inderogabilidad de derechos humanos fundamentales, aun durante situaciones de excepción de hecho, pueden constituir delitos de lesa humanidad

Lo que representa un cuadro grave, persistente y manifiesto de violaciones a los derechos humanos. en el que se ha violentado, el artículo 29 de la Constitución. Un ejemplo son los múltiples juicios de amparo indirecto interpuestos por la parte quejosa que son hechos notorios de inacceso a la justicia, en la que la parte quejosa solicita el respeto y vigencia real de los derechos y libertades fundamentales sin discriminación; que conlleva reparación integral y sanción a los perpetradores de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que acontecen en el presente caso, derecho que está reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Un ejemplo que clarifica la situación de esta inderogabilidad de derechos fundamentales es el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

"...que cualquier que sean las razones que hayan podido existir para interrumpir el proceso constitucional democrático, es inaceptable e inadmisibles la supresión y/o violación de ciertos derechos humanos que constituyen siempre el mínimo necesariamente vigente e inderogable y cuya existencia y respeto necesario en todo momento y en toda situación sin que sea posible justificar su derogación, desconocimiento o violación. Este criterio de la inderogabilidad absoluta de ciertos derechos- en especial del derecho a la vida, del derecho a no ser sometido a la tortura o a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes y del derecho a no ser sometido a la esclavitud o a la servidumbre reconocido en el artículo 27 párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Bolivia en Parte y enunciado también en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la consecuencia de un principio general que se encuentra en el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos..."³⁹

Asimismo, menciona:

"Estos derechos inderogables - en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes -, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la médula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran"⁴⁰

Cita de párrafos anteriores, que dan luz al presente caso, en que se clarifica el daño que ha planificado el Gobierno de la Ciudad de México, invadiendo la esfera de competencia federal prescrita en el artículo 29 de la Constitución, violentando el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Pues las actuaciones y omisiones que se han realizado en el presente caso son ilícitas (que no están permitidas ni siquiera en conflictos armados, tal como lo prohíben los Convenios de Ginebra, en que todas las personas, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, artículo 3), actos que se han ejecutado

³⁹ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

⁴⁰ Doc. E/CN.4/1981/1500, nota 76.



con la intención de destruir, total o parcialmente la integridad física, psíquica y moral de los quejosos.

Ahora bien, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 27, prevé que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, podrá adoptar disposiciones limitadas de suspensión de determinados derechos

Más, igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no autoriza la suspensión de derechos inderogables de la persona humana, entre las que se cuentan las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos (artículo 27.2 *in fine*).

Redundando, si bien es cierto que a consideración de la parte quejosa que tratándose de un juicio de amparo indirecto debe ser del conocimiento de un Juzgado de Distrito, y se surtirá la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁴¹ cuando se interponga un recurso en contra de una resolución, tal como acontece, más es loable plantear a éste Alto Tribunal, que se hace imperativo su intervención en el presente caso, en el que el Estado, a la parte quejosa, le ha arrebatado un proyecto de vida, llevando las acciones referidas en los juicios de amparo citados en párrafos anteriores, que conllevan planificación, las medidas adoptadas no deben ser dirigidas a un grupo para su exterminio como en el caso acontece, lo que hace ilícita y bajo ninguna circunstancia toda suspensión de derechos humanos que afecte solamente a un sector de la población por razones de anular el derecho humano a la existencia.

Ahora bien, en el presente caso, se violenta lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, sin tener facultades para ello, ha establecido por un periodo de cinco años, con ocho meses, ilegalmente, excepción de estado de Derecho, y violaciones flagrantes y sistemáticas a derechos fundamentales no derogables, luego, al acudir a instancia constitucional, mediante los juicios de amparo indirecto y sus anexos: 1118/2016, 288/2017, 349/2017⁴², 545/2017; 627/2017, 651/2017, 260/2018, 74/2018, hacen hechos notorios, de esta excepción de derechos fundamentales, en el que las autoridades, siguen vulnerando en el caso concreto derechos inderogables de la persona humana, en el que no se observa a la fecha que se dé cumplimiento a los preceptos constitucionales conculcados; los perpetradores de delitos que en sí y por sí mismos, pueden constituir de lesa humanidad, en el que los juicios de amparo citados y sus anexos, son pruebas de este estado de excepción de Derecho y las flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, pues, los preceptos constitucionales y los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos que el Estado Mexicano a firmado y ratificado, demarca prohibición expresa para actualizar delitos de lesa humanidad, luego, "excepción de Derecho y de derechos fundamentales: en el que se violenta una serie de derechos protegidos en los artículos 1; 4, párrafo VII y VIII; 14; 16; 17; 22; 27, (derecho a la propiedad); 29 y 133, de la Constitución.

La parte quejosa acude como hecho notorio, a las razones de la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 69/2007-SS, de la que derivó la jurisprudencia 105/2008, se pronunció:

"Que de conformidad con la doctrina de la ampliación de las garantías individuales, el juicio de amparo no se constriñe a proteger a los veintinueve primeros artículos constitucionales a través de la fracción I, del artículo 103, de la Carta Magna, sino que resulta procedente aún por violaciones cometidas a disposiciones no incluidas

⁴¹ Tesis Pleno, de rubro y texto: "**CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES PLANTEADAS POR PARTICULARES**", publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 175-180, primera parte, página 35: El artículo 105 constitucional, se refiere, entre otros, al caso en el que se plantee una controversia constitucional en la que figuren como partes la Federación, por un lado, y una o más entidades federativas, por el otro. Así que si en el caso no es un Estado el que plantea una controversia constitucional contra la Federación, sino unos gobernados, por su propio derecho, los que solicitan el amparo de la justicia federal, es evidente que no tiene aplicación el artículo 105 constitucional y, en consecuencia, las disposiciones que resultan aplicables son las contenidas en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y tratándose de un amparo indirecto, debe conocer del juicio en primera instancia un Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto por las fracciones VII y VIII del artículo 107 constitucional, y se surtirá la competencia de esta Suprema Corte cuando se interponga el recurso de revisión contra la sentencia que dicte el Juez Federal. Asimismo, debe ponerse de manifiesto que, en términos del artículo 107, fracción V, constitucional, en la especie no procede el juicio de amparo directo, toda vez que no se reclama una sentencia definitiva o un laudo.

⁴² Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México

dentro de los preceptos mencionados, siempre y cuando éstas consignen una explicación, reglamentación, limitación o ampliación de las garantías individuales propiamente dichas.

El término "*garantías individuales*" no es restrictivo sino por el contrario, extensivo, es decir, que si bien las garantías individuales se identifican en los veintinueve primeros artículos de la Constitución, pues éstos las enuncian en forma sistemática, esto no quiere decir que el contenido de otros preceptos constitucionales ubicados en la llamada parte dogmática de la Constitución no pueda ser considerado como garantías del gobernado, como por ejemplo los contenidos en el artículo 123, o bien, que por razón de la competencia constitucional establecida en favor de los órganos que integran los diferentes niveles de gobierno puedan éstos emitir actos que vulnere en la esfera jurídica del particular, excediéndose en dichas atribuciones.

Así, a través del concepto de "*autoridad competente*" a que se refiere el artículo 16 constitucional, la extensión protectora legal del juicio de amparo se puede ampliar considerablemente.

En efecto, cuando dicho precepto establece que "*Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento*", se está refiriendo a la necesidad de que la autoridad emisora de dichos actos de molestia esté expresamente facultada para ello por la propia Constitución o por la norma secundaria correspondiente.

Por tanto, si la autoridad ordena un acto fuera de su competencia constitucional o legal, que origine en el gobernado un agravio personal, surge la posibilidad de que el perjudicado deduzca la acción de amparo, la que, como se puede ver, tiende a proteger no sólo el artículo 16, sino, si se trata de un ordenamiento secundario, también la garantía de exacta aplicación de la ley establecida en el artículo 14 constitucional."

Con apoyo en lo anterior, en la especie, el artículo 29 constitucional se encuentra ubicado en la parte dogmática de la Constitución y se refiere a un catálogo de derechos que no se pueden suspender mismos que son coherentes con las Obligaciones Internacionales del Estado Mexicano ha firmado y ratificado, en relación con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que genera obligaciones erga omnes; precepto constitucional que garantiza que ninguna autoridad puede invadir la esfera jurídica de la autoridad federal su autonomía y determina su competencia exclusiva, entre otros mandatos, solamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que podrá restringir o suspender de manera formal y no de hecho en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Sin embargo, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos, el principio de legalidad; la prohibición de la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos; que esta restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Por lo que si otro nivel de gobierno como en el caso concreto el Gobierno de la Ciudad de México invadió la esfera de facultades constitucionalmente reservadas a la Federación, actos que acontecen, ya que conforme a la Constitución corresponde de manera exclusiva al ámbito federal, invadió y sobrepasó la esfera de competencia federal, incurriendo en violación al artículo 29, 16 y 14 de la Carta Magna, siendo importante mencionar que de conformidad con el principio de interdependencia al ser vulnerado un derecho, se vulneran en el caso concreto los preceptos constitucionales: 1, 4, 14, 16, 17, 22, 27, 29, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si el agraviado (autoridad responsable) con estos actos es la autoridad federal y/o ejecutivo, estaría en aptitud de promover controversia constitucional, **pero si con motivo**

de esa invasión de competencias el afectado es un particular procederá, en su caso, el juicio de amparo, como acontece en el presente caso.

Por lo que con apoyo de la contradicción de tesis 69/2007 SS en el que se resolvió que, "En los casos examinados fueron particulares quienes se ostentaron afectados con motivo de la invasión de competencias, razón por la que se encuentran en aptitud de promover el juicio de garantías."

Luego, "el Estado está obligado a responder *sua sponte* con determinadas medidas de investigación, actos encaminados a sancionar y castigar a los perpetradores, y mecanismos que garanticen el acceso a la indemnización" y, "[a]l mismo tiempo, la víctima tiene un derecho directo a procurarse protección y reparación judicial"⁴³; violentando a la fecha estás obligaciones que mandatan el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ante este estado de excepción de Derechos y vulneraciones sistemáticas a derechos humanos no derogables, solicitó la suplencia de la queja:

A la luz del artículo primero de la Constitución y del numeral 1o. de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, solicitamos a este órgano de control constitucional, la suplencia de la queja, esto con fundamento en el artículo 79, fracción III, in fine, de la Ley de Amparo, que mencionan:

"...la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio"

Figura procesal, que contrarresta el grado de vulnerabilidad, a una interpretación pro homine, intensificado al derecho de debido proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en aras de la protección de los más débiles (pro debilis), el daño al proyecto de vida: el derecho a la existencia comprende condiciones mínimas de una vida digna, de seguridad, certeza jurídica e integridad de la persona humana.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en pronunciamiento en el Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala, es clarificador del presente caso, la comprensión del principio de interdependencia de los derechos humanos: el proyecto de vida es consustancial del derecho de la existencia, que requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad, e integridad de la persona humana:

El proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a la libertad, como derecho de cada persona a elegir su propio destino. (...) El proyecto de vida envuelve plenamente el ideal de la Declaración Americana [de los Derechos y Deberes del Hombre] de 1948 de exaltar el espíritu como finalidad suprema y categoría máxima de la existencia humana⁴⁴.

Aunado a una interpretación pro persona, a fin de favorecer la protección más amplia, máxime que es esencial referir el alcance e intensidad de la dignidad humana como condición y base de los demás derechos fundamentales no derogables de la que deriva la integridad física, psíquica y moral, degradación, discriminación, por lo que la dignidad de la persona constituye una condición per-se, irrenunciable, en este contexto el principio de interdependencia en relación al principio de indivisibilidad en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí, de tal forma que la trasgresión de uno de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos.


Trayendo a colación el postulado del *ius naturalismo*, la reforma Constitucional fue reconocer la existencia de los derechos humanos e imponer a las autoridades mexicanas, de todos los órdenes, promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia de conformidad con los principios de universalidad (igualdad jurídica), interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

⁴³ Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala

Por lo anteriormente, expuesto y fundado a Usted C. Juez Rosa María Cervantes Mejía Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal; actualmente Ocurro y pido:

Me tenga, por presente con éste escrito, para que se sirva resolver conforme al texto del mismo.

PROTESTO LO NECESARIO


Carolina González Nava
Ciudad de México, a 10 de agosto de 2018

Por lo anteriormente expuesto y fundado,

A Usted C. **PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**;
actualmente ocurro y pido:

ÚNICO. - Por propio derecho y en calidad de representante común de la parte quejosa, se me tenga interponiendo en tiempo y forma, solicitud de acceso a la justicia, concediéndome, la figura procesal de la suplencia de la queja deficiente.

PROTESTO LO NECESARIO


Carolina González Nava

Ciudad de México 10 de agosto de 2018



100



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Q.P. 145/2018

QUEJOSOS Y RECURRENTES:
CAROLINA, MARTHA PATRICIA, JULIO
CÉSAR E ISRAEL, todos de apellidos
GONZÁLEZ NAVA.

Derivado del amparo indirecto 260/2018.

*Relacionado con la Q.P. 152/2017, Q.P.
165/2017, R.P. 291/2017, Q.P. 28/2018,
Q.P. 61/2018, INCP. 28/2018 y R.P.
116/2018, ya resueltos. y, la INCP.
53/2018, pendiente de resolver).*

PONENTE: MAGISTRADO TERESO RAMOS HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE ESTUDIO: LETICIA JARDINES LÓPEZ

Ciudad de México.- Acuerdo del Sexto Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito correspondiente a la sesión de
cuatro de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver los autos relativos al **recurso de queja**
145/2018, interpuesto por **CAROLINA GONZÁLEZ NAVA**, por sí y en
representación de los quejosos Martha Patricia, Julio César e Israel,
de apellidos González Nava, contra el auto de **treinta y uno de julio**
de dos mil dieciocho, dictado por la **juez Décimo Segundo de**
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en
el juicio de amparo indirecto 260/2018; y,

RESULTANDO:

I. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, **CAROLINA, MARTHA PATRICIA, JULIO CÉSAR E ISRAEL**, todos de apellidos **GONZÁLEZ NAVA**, por sí, solicitaron el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos reclamados, siguientes:

“3.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES:

I.- Secretario de Gobernación; ...

***Acto reclamado:** la omisión del derecho de petición, presentado en la Oficialía de partes de la Secretaría de Gobernación con fecha 13 de marzo de 2018, mediante el cual se solicita la intervención al Secretario de Gobernación referente a las violaciones sistemáticas y flagrantes de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México; en relación a la obligación particular de la Secretaría de Gobernación, en lo relativo a la vigilancia del cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, en lo que se refiere a las graves violaciones a derechos humanos; por las omisiones de la vinculación entre la norma y justicia como fin principal del derecho.”.*

II. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda a la Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien por acuerdo de **veintiséis de marzo de dos**



Q.P. 145/2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

002

mil dieciocho, la registró con el número de juicio de amparo 260/2018; y, **admitió** el asunto contra el acto que reclaman los quejosos, ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, señaló día y hora para que se llevara a cabo la audiencia constitucional, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de amparo, tuvo como representante común de los quejosos a Carolina González Nava, y respecto de las pruebas que ofreció la parte quejosa, admitió una de ella, y desechó las restantes al estimar que no eran idóneas, ni pertinentes para evidenciar la inconstitucionalidad del acto reclamado.

Inconforme con el anterior proveído, por escrito presentado en la Oficialía de Partes del Juzgado de Amparo, el nueve de abril de dos mil dieciocho, Carolina González Nava, por su propio derecho y en su carácter de representante común de los promoventes interpuso recurso de queja, al que le recayó proveído del diez de abril siguiente, en el que la Juez de Amparo ordenó suspender el procedimiento y remitir copia certificada del juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, correspondiendo conocer a este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registrándose con el número QP.- 61/2018.

El veinte de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, el informe justificado del Secretario de Gobernación, suscrito por el Director General de Procedimientos

Constitucionales de la citada dependencia, en su representación, en el cual aceptó el acto reclamado, esgrimiendo que había cesado en sus efectos, pues mediante oficio UDDH/911/DGAIAC/0459/2918, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se había dado respuesta a la petición formulada por la parte quejosa, el cual en proveído de veinticuatro del citado mes y año, se agregó a los autos reservándose acordar lo referente al citado informe.

III. Por libelo de veinticuatro de mayo del año en curso, presentado ante la aludida Oficina de Correspondencia Común, la representante común de los quejosos, formuló ampliación de demanda de amparo, **aduciendo como nuevo acto reclamado**, el siguiente:

“Se reclama la vulneración directa del derecho humano de acceso a la justicia y el derecho humano a no sufrir discriminación aplicativa, normativa y sistemática: la obligación estatal de cumplir con sus deberes y obligaciones de conformidad con los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado en materia de derechos humanos, y el derecho que deriva, que el Estado tiene la obligación de prevenir, reparar, investigar y sancionar a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, esto es, no se ha ordenado la investigación, sanción, reparación, no repetición del derecho humano vulnerado y atracción del presente caso (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de derechos humanos en México, 2015, página 234, inciso 17.); en este mismo contexto, la de vincular sus acciones con la Corte



Q.P. 145/2018

02 003

PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN

Interamericana sobre Derechos Humanos, ya que el presente caso cuenta con número de petición P-1814-16, esto es con fundamento en el artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; numerales 26, 27 y 29 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados; artículo I y II de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad; 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, fracciones XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, numerales del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación: 5, fracción XII y XXII y 24, fracción VII, VIII, IX, XI. Esto es así, la búsqueda de justicia a puesto en alto riesgo la vida de los quejosos; el presente caso ha sido puesto a la vista, por esta autoridad; para la atención y conocimiento del Procurador General de Justicia, Titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, sin tomar en cuenta, que la responsabilidad en la cadena de mando, lo involucra directamente en las violaciones graves a derechos humanos: tortura (En el entendido que la tortura no cesa hasta que los perpetradores de la vulneración a este derecho humano no han sido debidamente sancionados, máxime si está denuncia de acceso a la justicia solo ha puesto en riesgo la integridad física y psíquica de los quejosos, perpetrándose con ello la espiral de impunidad.), vejaciones, humillaciones, intimidación, amenazas, violencia de género, violencia en la comunidad, incriminación, hostigamiento, obstrucción de acceso a la justicia, penas infamantes, impunidad, discriminación, vulneración al derecho humano a la vida; vulneración directa al derecho humano a la propiedad; hechos que a la fecha perpetúan la violencia, ya que estos actores no enfrentan las

consecuencias de sus actos, creándose en el presente caso un espiral de impunidad.”.

Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado asentó:

Bajo protesta de decir verdad [...] Con fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, la parte quejosa, tuvo conocimiento del informe justificado que la autoridad responsable rindió ante su señoría en juicio de amparo citado al rubro; asimismo, a este informe, fue anexado, el oficio número UDDH/991/DGAIAC/0459/2018, emitido por la autoridad responsable; en esta guisa el contenido de este oficio causa de forma directa un gravísimo agravio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Este acto, ipso facto, vulnera el derecho humano de acceso a la justicia (derecho a la legalidad), derecho que subsume el derecho humano a no ser discriminado, el derecho humano a la vida. Luego es un oficio dirigido a limitar o nulificar el reconocimiento del caso concreto y el derecho a la no repetición...”

En proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se glosó a los autos el referido curso, reservándose acordar lo conducente al encontrarse suspendido el procedimiento.

Por auto de **ocho de junio de dos mil dieciocho**, se agregó a los autos la resolución dictada por este Sexto Tribunal Colegido en Materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de queja 61/2018, se reanudó el procedimiento en el juicio de amparo, se tuvo por rendido el informe de la autoridad responsable, y por hecha la petición de los



Q.P. 145/2018

2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

quejosos relativa a ampliar la demanda respecto de un nuevo acto reclamado; y con el propósito de fijar la litis en el juicio y generar certeza jurídica a las partes y a fin de que autoridad responsable estuviera en aptitud de rendir con precisión su informe justificado, precisó que el acto reclamado por los peticionarios lo constituía:

- El oficio UDDH/911/DGAIAC/0459/2018, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa el trece de marzo del año en curso.

Atribuido al Secretario de Gobernación y por el cual tuvo por ampliada la demanda de amparo, al reunir los requisitos previstos en el artículo 111 fracción I de la Ley de Amparo.

También señaló que, las manifestaciones que vertía la quejosa y por las que también pretendía ampliar la demanda, no constituían un nuevo acto reclamado, sino que eran apreciaciones sobre él, esto es, conceptos de violación o agravios.

Así, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y señaló día y hora para que se llevara a cabo la audiencia constitucional.

En acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, se agregó a los autos el informe justificado rendido por el Director General de Procedimientos Constitucionales en representación del Secretario de

Gobernación, en el que negó la existencia del acto reclamado, al sostener que el oficio mediante el cual se dio respuesta a la petición de los quejosos no fue emitido por él, sino por el Director General Adjunto de Investigación y Atención a Casos de la Unidad para la defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación; de ahí que, la Juez de Distrito ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la señalada, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se continuaría con el procedimiento en el juicio de amparo, únicamente respecto de la autoridad precisada en he escrito inicial de demanda.

IV. Por escrito presentado el **veintisiete de julio de dos mil dieciocho**, nuevamente los quejosos formularon ampliación de demanda de amparo, por un nuevo acto reclamado que advirtieron del informe justificado, en los términos siguientes:

“... Que mediante el presente escrito, vengo a formular ampliación de demanda de ampro por conceptos de violación, que resulta del informe justificado rendido ante su Señoría por la autoridad responsable, en el juicio de amparo citado al rubro.

Por lo que el conocimiento del nuevo acto reclamado surge con la vista del informe justificado, pues de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Amparo, los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir de día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el de vencimiento.

La vista del Informe justificado me fue notificada por medio de



Q.P. 145/2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

lista el diez de julio de dos mil dieciocho, surtiendo efectos el día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 22; fracción III del artículo 26, ambos numerales de la Ley de Amparo.

Dicho acto constituye la fuente de los nuevos conceptos de violación, razón por la cual se está dentro del término genérico de 15 días que dispone la Ley de Amparo para hacer ampliación de demanda de derechos fundamentales por conceptos de violación, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución; 22 y 111, de la Ley de Amparo, vengo a hacer ampliación de demanda de amparo por conceptos de violación[...]

IV.- ACTO RECLAMADO EN AMPLIACIÓN DE DEMANDA:

Se reclama la vulneración directa del derecho humano de acceso a la justicia y el derecho humano a no sufrir discriminación aplicativa, normativa y sistemática: la obligación estatal de cumplir con sus deberes y obligaciones de conformidad con los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado en materia de derechos humanos, y el derecho que deriva, que el Estado tiene la obligación de prevenir, reparar, investigar y sancionar a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, esto es, no se ha ordenado la investigación, sanción, reparación, no repetición del derecho humano vulnerado y atracción del presente caso en este mismo contexto, la de vincular sus acciones con la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, ya que el presente caso cuenta con número de petición P-1814-16, esto con fundamento en el artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; numerales 26, 27 y 29 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados; artículo I y II de la Convención sobre

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad; 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, fracciones XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, numerales del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación: 5, fracción I, XII y XXIII y 24, fracción VII, VIII, IX, XI. Esto es así, la búsqueda de justicia ha puesto en alto riesgo la vida de los quejosos; el presente caso ha sido puesto a la vista, por esta autoridad; para la atención y conocimiento del Procurador General de Justicia, Titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, sin tomar en cuenta, que la responsabilidad en la cadena de mando, lo involucra directamente en las violaciones graves a derechos humanos: tortura, vejaciones, humillaciones, intimidación, amenazas, violencia de género, violencia en la comunidad, incriminación, hostigamiento, obstrucción de acceso a la justicia, penas infamantes, impunidad, discriminación, vulneración al derecho humano a la vida; vulneración directa al derecho humano a la propiedad; hechos que a la fecha perpetúan la violencia, ya que estos actores no enfrentan las consecuencias de sus actos, creándose en el presente caso un espiral de impunidad.”

Por auto de **treinta y uno de julio de dos mil dieciocho**, la Juez Federal **desechó** la ampliación de demanda de amparo respecto de nuevos actos reclamados, autoridad responsable y conceptos de violación.

V. Inconforme con el anterior proveído, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Juzgado de Amparo, el diez



Q.P. 145/2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de agosto de dos mil dieciocho, Carolina González Nava, interpuso recurso de queja, escrito al que le recayó el proveído de trece ese mes y año, en el que la Juez de Amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, tuvo por interpuesto dicho medio de impugnación, ordenó distribuir entre las partes copia del escrito de agravios, requirió a las partes para que señalar las constancias que deberían remitirse al Tribunal Colegiado, y suspendió el procedimiento de amparo; por diverso auto de veintiuno de agosto siguiente ordenó remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el escrito de cuenta y copia, así como copias certificadas del amparo indirecto 260/2018, para el trámite correspondiente, además precisó que **es cierto** el auto recurrido.

VI. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito, admitió el recurso de queja, registrándolo con el número **Q.P. 145/2018**, en términos de lo dispuesto por los ordinales 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; asimismo, ordenó se notificara ese proveído al Agente del Ministerio Público adscrito.

VII. Debidamente integrado el toca, en auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se turnaron los autos al **Magistrado Tereso Ramos Hernández**, para que en términos del artículo 101, último párrafo, de la Ley de Amparo, formule el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, es competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso **a)**, 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. El auto recurrido en lo atinente, señala:

“Ciudad de México, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. - - - Agréguese a los autos para que conste como corresponda y surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por Carolina González Nava, representante común de los quejosos, mediante el cual refiere que en atención al informe justificado notificado el diez de los actuales, es su deseo ampliar la demanda respecto de **conceptos de violación**. - - - Previo a pronunciarse sobre la admisión o no de la ampliación de la demanda, cabe destacar que de la lectura íntegra del escrito que se provee, la representante común amplía conceptos de violación, empero, con motivo de que es su pretensión de ampliar dicha demanda respecto al siguiente acto reclamado: - - - ‘Se reclama la vulneración directa del derecho humano de acceso a la justicia y el derecho humano a no sufrir discriminación aplicativa, normativa y sistémica: la obligación estatal de cumplir con sus deberes y obligaciones de conformidad con los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado en materia de derechos humanos, y el derecho que deriva, que el Estado



Q.P. 145/2018

DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

tiene la obligación de prevenir, reparar; investigar y sancionar a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, esto es, no se ha ordenado una investigación; sanción, reparación, no repetición del derecho humano vulnerado y atracción del presente caso; en este mismo contexto, la de vincular sus acciones con la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, ya que el presente caso cuenta con número de petición P-1814-16, esto con fundamento en el artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; numerales 26, 27 y 29 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados; artículo I y II de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad; 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, fracciones XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, numerales del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación: 5, fracción I, XII, XXIII y 24, fracción VII, VIII, IX, XI. Esto es así, la búsqueda de justicia ha puesto en alto riesgo la vida de los quejosos; el presente caso ha sido puesto a la vista, por esta autoridad; para la atención y conocimiento del Procurador General de Justicia, Titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, sin tomar en cuenta, que la responsabilidad en la cadena de mando, lo involucra directamente en las violaciones graves a derechos humanos: tortura, vejaciones, humillaciones, intimidación, amenazas, violencia de género, violencia en la comunidad, incriminación, hostigamiento, obstrucción de acceso a la justicia, penas infamantes, impunidad, discriminación, vulneración al derecho humano a la vida; vulneración directa del derecho humano a la propiedad; hechos que a la fecha perpetúan la violencia, ya que estos

actores no enfrentan las consecuencias de sus actos, creándose en el presente caso una espiral de impunidad.' - - - El cual atribuye al **Secretario de Gobernación**. - - - En este contexto, se advierte que la promovente no desahoga la prevención realizada mediante acuerdo de cuatro de julio del presente año, en el que se le dio vista para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al **Director General Adjunto de Investigación y Atención a Casos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos**; si no que pretende incorporar a la litis un nuevo acto reclamado atribuido a la autoridad responsable señalada en su escrito inicial de demanda. - - - **NO SE ADMITE AMPLIACIÓN DE DEMANDA**. - - - Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad dicha ampliación, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 111 de la Ley de Amparo para que proceda la ampliación de la demanda. - - - El referido numeral establece: (Se transcribe contenido). - - - De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que la ampliación de demanda de amparo es una figura jurídica que confiere a la parte peticionaria el derecho para incorporar a la litis constitucional, diversas autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación, pero ese derecho debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia, como son: - - - a) Que del informe justificado aparezcan datos no conocidos por la parte promovente, que en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o bien cuando dicha parte, por cualquier medio, tenga conocimiento de diversos actos de autoridad; - - - b) Que lo anterior tenga estrecha vinculación con el acto originalmente reclamado en el escrito de demanda; y - - - c) Que la solicitud se haga valer en los



Q.P. 145/2018

005

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

plazos establecidos por la Ley de Amparo de acuerdo a la naturaleza de los actos reclamados y no se haya celebrado la audiencia constitucional. - - - En el caso, a consideración de este juzgado, el acto que pretende reclamar la parte quejosa a la autoridad responsable no guarda estrecha vinculación con el acto por el que fue admitida originalmente la demanda de derechos fundamentales, ni con el acto por el cual se tuvo por ampliada. - - - El acto por el que fue admitida la demanda de amparo se hizo consistir en: - - - **'La omisión de dar contestación al escrito presentado el trece de marzo de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de la Secretaría de Gobernación.'** - - - En tanto, el acto por el que se tuvo por ampliada consiste en: - - - **El oficio UDDH/911/DGAIAC/0459/2018, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa el trece de marzo del año en curso.** - - - Actos que son totalmente disímiles del que pretende ampliar su demanda de amparo o que éste sea consecuencia de los primeros. - - - Esto es así porque los quejosos inicialmente señalaron como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito presentado el trece de marzo de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de la Secretaría de Gobernación; y, posteriormente, se tuvo por ampliada la demanda respecto a la respuesta a dicho escrito, la cual recayó en el oficio UDDH/911/DGAIAC/0459/2018, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho; en tanto, en el escrito que se provee manifiesta su voluntad de señalar como nuevos actos reclamados, diversas omisiones de la autoridad responsable en proteger sus derechos fundamentales, sin embargo, no es procedente tener por ampliada la

demanda, pues como ya se expuso, uno de los supuestos en los que se puede ampliar y que prevé el artículo 111 de la Ley de Amparo, **es que deben estar ESTRECHAMENTE relacionados con los que se señaló inicialmente en el escrito inicial de demanda** -supuesto que no se actualiza en el presente asunto-, pues la circunstancia de que los actos que -a su consideración-, son violatorios de derechos fundamentales, no implica necesariamente que los actos se encuentren estrechamente vinculados, pues este término jurídico tiene una acepción no en su literalidad, sino que implica que aquéllos tengan una naturaleza similar a los que se señalaban primigeniamente en el escrito inicial de demanda, o bien, que en los nuevos actos se fundamenten o motiven los actos inicialmente reclamados. - - - Por lo que, no es jurídicamente admisible que pretenda introducir actos totalmente diversos a la omisión y actuación que señaló en su escrito de demanda y ampliación. - - - En las condiciones apuntadas, resulta patente que la litis en este juicio ya se encuentra fijada y los referidos actos impugnados que pretende incluir, no derivan del contenido del acto inicialmente reclamado, ni del que se tuvo por ampliada la demanda. - - - Razón por la cual, con fundamento en los numerales 113, en concordancia con el diverso 111 de la Ley de Amparo, **se desecha la ampliación de demanda de amparo**, por las razones expuestas en párrafos que anteceden. - -

- Es aplicable la jurisprudencia cuyo rubro dice: - - - **‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE’**. (Se transcribe texto y datos de localización). -

- - Asimismo, cobra aplicación la tesis cuyo tenor es el siguiente: - - - **‘JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE CIERRA LA LITIS’**. (Se



Q.P. 145/2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*transcribe texto y datos de localización). - - - Bajo este contexto, se desecha la ampliación de demanda de amparo planteada respecto a los nuevos actos reclamados y por la autoridad a quien los atribuye, así como a los conceptos de violación que refiere, al no actualizarse alguna de las hipótesis necesarias para la procedencia de dicha institución procesal, sin que ello restrinja el derecho de la impetrante para promover diverso juicio de amparo. - - - Sin que lo anterior, implique que se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de procedencia, en el caso, la ampliación de demanda procederá cuando de los informes justificados se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, debiendo existir una relación o vinculación con los actos primigenios, y se reitera, en el caso, no es así. - - - **Notifíquese personalmente. [...]**"*

TERCERO. No se transcriben los agravios expuestos por los recurrentes, que obran a fojas 3 a 23, del expediente en que se actúa, ello para evitar transcripciones innecesarias.

CUARTO. Son **infundados e inoperantes** los agravios esgrimidos por los recurrentes, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones.

Ahora, la parte recurrente en sus agravios sostiene que en el auto impugnado la Juez de Distrito vulneró el artículo 17, 103, 107 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La aseveración que precede es **inoperante**, en virtud de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, que los jueces de distrito, dada la naturaleza de sus funciones, actúan como órganos de control constitucional y sus resoluciones se sustentan en la Ley de Amparo, por lo cual, los agravios que se hagan valer deben ser contra infracciones a ésta y no contra normas constitucionales, pues los juzgadores federales no incurrir en violaciones a derechos fundamentales, ya que, si así se hiciera, se le trataría como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo.

Lo expuesto tiene sustento en la tesis de jurisprudencia número P/J. 2/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:

“AGRAVIOS INOPERANTES LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESTE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de



Q.P. 145/2018

020

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de los procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de

amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.”¹

En principio, es menester señalar que las reglas inherentes a la ampliación de una demanda de amparo, derivan de lo previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, que señala:

“Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:

I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;

II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley.

En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.”.

En dicho precepto se prevén dos supuestos para la procedencia de la ampliación de una demanda de amparo indirecto.

¹ Tesis visible en la página 5, Tomo V, de enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro No. 199492.



Q.P. 145/2018

SENER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

011

En el primero, la demanda puede ampliarse en cualquiera de sus contenidos o capítulos, o sea señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, siempre y cuando se esté dentro del término que prevé la ley para la presentación de la demanda.

Mientras que, en el segundo supuesto, es decir, con la rendición de los informes justificados, la demanda podrá ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado con los actos iniciales, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, en cuanto aspectos referentes a los conceptos de violación, al tener conocimiento integral del acto reclamado mediante las constancias remitidas por la autoridad responsable; dicha ampliación, de igual manera, debe hacerse dentro del plazo que establece la Ley de Amparo para la presentación de la demanda principal.

Cabe señalar que, como regla general del amparo indirecto, toda ampliación debe hacerse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional.

Es aplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 15/2003, visible a página doce, Tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. *La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional."*

En el caso que se analiza, se advierte que la ampliación de la demanda se pretendió efectuar bajo la fracción II del precepto 111 de la ley de la materia, pues cuando la parte quejosa exhibió el escrito relativo, según se corrobora con las constancias allegadas para la resolución del presente recurso de queja, la autoridad responsable **Secretario de Gobernación ya había rendido su informe justificado**, además de que remitió copia certificada del oficio UDDH/911/DGAIAC/0459/2018, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa el trece de marzo del año en curso.



Q.P. 145/2018

012

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En su caso, la Juez de Distrito sustentó su determinación de no proveer favorable la ampliación de demanda de los quejosos, porque se trata de un nuevo acto desvinculado con los impugnados inicialmente, que no pueden formar parte de la litis constitucional.

Consideraciones que este Tribunal Colegiado comparte al encontrarse ajustada a la legalidad.

En efecto, como se observa a continuación, el acto inicialmente reclamado, en el juicio de amparo lo constituyó:

La omisión del derecho de petición, presentado en la Oficialía de partes de la Secretaría de Gobernación con fecha 13 de marzo de 2018, mediante el cual se solicita la intervención al Secretario de Gobernación referente a las violaciones sistemáticas y flagrantes de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México; en relación a la obligación particular de la Secretaría de Gobernación, en lo relativo a la vigilancia del cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, en lo que se refiere a las graves violaciones a derechos humanos; por las omisiones de la vinculación entre la norma y justicia como fin principal del derecho.

El Secretario de Gobernación, representado por el Director General de Procedimientos Constitucionales, al rendir su informe justificado aceptó la omisión atribuida, manifestando que habían cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que mediante

oficio UDDH/911/DGAIAC/0459/2018, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa, haciendo de su conocimiento que dada la naturaleza de su solicitud, la autoridad competente para atenderla es la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que por imperio de Ley, es quien cuenta con las atribuciones legales para brindar la atención a su caso, de igual forma se hizo de su conocimiento que se remitió su petición a la Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, Coordinación Internacional y de Derechos Humanos de la citada dependencia, brindándole para ello, los datos de contacto ante quien puede acudir.

La sola argumentación de la parte quejosa, de que el contenido del oficio UDDH/911/DGAIAC/0459/2018, trastocó sus derechos fundamentales, se erigió en una razón suficiente para que la Juez de Amparo diera trámite a la ampliación de la demanda, puesto que existían argumentos nuevos que los impetrantes formularon a partir del conocimiento cierto y pleno del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al que anexó la contestación que dio la autoridad a los planteamientos de los promoventes.

En ese tenor, la Juez de Distrito en auto de **ocho de junio de dos mil dieciocho**, para generar certeza jurídica a las partes, y a efecto de que la autoridad responsable estuviera en aptitud de rendir con precisión su informe justificado, determinó que el acto reclamado por el cual los peticionarios ampliaban la demanda, se constituía en:



Q.P. 145/2018

00 013

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

- El oficio UDDH/911/DGAIAC/0459/2018, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa el trece de marzo del año en curso.

Atribuido al Secretario de Gobernación, por el cual tuvo por ampliada la demanda de amparo; y distinguió que los argumentos que los impetrantes señalaban como acto reclamado, atinentes a la vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a la justicia, derecho a la legalidad, derecho humano a no ser discriminado, así como el derecho a la vida no constituían un acto reclamado, sino eran en realidad conceptos de violación, pues se encontraban dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad de la respuesta que dio la autoridad responsable; de ahí que, adujo que no podía tenerlos como acto reclamado sino como conceptos de violación o agravios, sin que el referido acuerdo fuera impugnado por los accionantes del amparo ahí que, quedo firme.

En acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, la Juez Federal, previno a la parte quejosa, para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Director General Adjunto de Investigación y Atención a Casos de la Unidad para la defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación; por haber sido quien signó el oficio UDDH/911/DGAIAC/0459/2018.

Sin embargo, mediante escrito presentado en el juzgado de amparo el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, los quejosos

pretendieron ampliar nuevamente la demanda de amparo contra un nuevo acto que manifestaron advertir del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Secretario de Gobernación y que hicieron consistir en:

“Se reclama la vulneración directa del derecho humano de acceso a la justicia y el derecho humano a no sufrir discriminación aplicativa, normativa y sistemática: la obligación estatal de cumplir con sus deberes y obligaciones de conformidad con los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado en materia de derechos humanos, y el derecho que deriva, que el Estado tiene la obligación de prevenir, reparar, investigar y sancionar a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, esto es, no se ha ordenado la investigación, sanción, reparación, no repetición del derecho humano vulnerado y atracción del presente caso en este mismo contexto, la de vincular sus acciones con la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, ya que el presente caso cuenta con número de petición P-1814-16, esto con fundamento en el artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; numerales 26, 27 y 29 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados; artículo I y II de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad; 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, fracciones XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, numerales del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación: 5, fracción I, XII y XXIII y 24, fracción VII, VIII, IX, XI. Esto es así, la búsqueda de justicia ha puesto en alto riesgo la vida



Q.P. 145/2018

016

PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN

de los quejosos; el presente caso ha sido puesto a la vista, por esta autoridad; para la atención y conocimiento del Procurador General de Justicia, Titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, sin tomar en cuenta, que la responsabilidad en la cadena de mando, lo involucra directamente en las violaciones graves a derechos humanos: tortura, vejaciones, humillaciones, intimidación, amenazas, violencia de género, violencia en la comunidad, incriminación, hostigamiento, obstrucción de acceso a la justicia, penas infamantes, impunidad, discriminación, vulneración al derecho humano a la vida; vulneración directa al derecho humano a la propiedad; hechos que a la fecha perpetúan la violencia, ya que estos actores no enfrentan las consecuencias de sus actos, creándose en el presente caso un espiral de impunidad."

En ese contexto, contrario a lo aducido por los inconformes en los motivos de disenso se considera que estuvo en lo correcto la Juez de Amparo al no proveer favorablemente la ampliación de demanda, pues si se parte de que ésta se planteó una vez que fue rendido el informe justificado del Secretario de Gobernación, representado por el Director General de Procedimientos Constitucionales, lo que hace necesario verificar si de dicho informe se puede desprender que el nuevo acto por el que se pretende ampliar la demanda, está vinculado a lo que expone la referida autoridad, pues sólo de esa forma se justificaría la inclusión del mismo a la litis constitucional (vía ampliación de demanda).

De esta manera, se advierte que el Secretario de Gobernación representado por el Director General de Procedimientos Constitucionales, al rendir su informe justificado, en lo que interesa, señaló:

“Oficio número UDDH/911/DGAIAC/0459/2008. - - - Ciudad de México, 23 de marzo de 2018. - - - REF: UDDH/911/DGAIAC/0727/2017. - - - CC. Carolina, Martha Patricia, Julio Cesar e Israel González Nava. - - - Presentes. - - - Me refiero a su escrito de fecha 13 de marzo del presente año, remitido al secretario de gobernación Lic. Alfonso Navarrete Prida, turnado a esta unidad administrativa para su atención el 16 de marzo de 2018, al que anexa su escrito petitorio en el que refieren presuntas violaciones a sus derechos humanos, por servidores públicos adscritos a esa Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Magdalena Contreras, Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón; consistente en violación a su derecho de acceso a la justicia en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01, denuncia que dio origen a la Carpeta de Investigación con número CI-FMC/MC-1/UI-1C/D/00753/12-2015, integrada en su contra por daño en propiedad, asimismo solicitan la recuperación del bien del dominio público Andador Tabaqueros. - - - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 24 fracciones V, VIII y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y con el objeto



Q.P. 145/2018

015

PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN

de colaborar en la implementación de una adecuada política de Estado en Derechos Humanos que tiene como principal propósito el respeto a la ley y en su correcta aplicación, anteponiendo primordialmente la defensa y el respeto de los derechos humanos de las personas, acorde a lo que establece nuestra constitución, hace de su conocimiento que esta Unidad no cuenta con facultades para atender de manera directa su petición y como ya que en el diverso oficio UDDH/911/DGAIAC/0727/2017, del 24 de noviembre de 2017, le informamos que remitimos su petición para la atención debida a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que por imperio de Ley, es quien cuenta con las atribuciones legales para brindar la atención a su caso, de igual forma remitimos su petición a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien es quien cuenta con las facultades para determinar si existen violaciones a sus derechos humanos. - - - En atención a lo antes expuesto y fundado le comento que esta Unidad remitió su petición a la Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con domicilio en General Gabriel Hernández número 56, planta baja, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en Avenida Universidad 1449, Colonia Pueblo Axotla, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, para que estas dependencias de acuerdo a sus atribuciones y marco legal competente, se sirvan dar la atención y seguimiento a su caso, por lo que rogaríamos a usted se acerque a estas dependencias a efecto de que le informen sobre el estado que guardan sus expedientes."

De lo transcrito se puede advertir, como correctamente lo señaló la Juez de Distrito, que el acto que pretenden reclamar los quejosos, en vía ampliación de demanda, son de diversa naturaleza al inicialmente reclamado (omisión de derecho de petición) y su ampliación respuesta proporcionada mediante el oficio UDDH/911/DGAIAC/0459/2018, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho.

En ese orden de ideas, son **infundados** los motivos inconformidad hechos valer por los quejosos, porque a juicio de este Tribunal Colegiado no es posible jurídicamente interpretar el artículo 111 de la Ley de Amparo, con los alcances que pretende la parte quejosa; pues no debe soslayarse que de conformidad con el precepto 74, fracción I, de la ley de la materia, ya se encuentra fijada la litis en el juicio de garantías, pues corre glosado el informe justificado rendido por la autoridad responsable; actuar en contrario, propiciaría una serie interminable de ampliaciones, so pretexto de encontrarse dentro del término legal para su promoción, lo que redundaría en detrimento del principio de expeditéz en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 constitucional.

En todo caso, este Tribunal Colegiado estima que la ampliación de la demanda, no versó sobre hechos novedosos que guarden estrecha relación con el acto reclamado inicialmente, sino que los inconformes en realidad pretenden ampliar sus conceptos de violación al haber conocido el informe justificado de la responsable en



Q.P. 145/2018

016

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

el que se exhibió el oficio que dio contestación a los promoventes, cuyo contenido reclamaron en ampliación de demanda, de ahí que la Juez A quo tuviera como acto reclamado en acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciocho, el oficio UDDH/911/DGAIAC/0459/2018, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho; y en ese caso, procede su admisión siempre y cuando haya sido presentada dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia; y así lo advirtió la Juez de Amparo, en auto de ocho de junio de dos mil dieciocho, pues en éste se acordó tener por rendido el informe justificado del Secretario de Gobernación, habida cuenta que hasta esa fecha se reanudó el procedimiento en el juicio de amparo, esto es, no había corrido término para dar vista a los quejosos con él, y tampoco existe constancia de que los inconformes hubieran sido notificados por la responsable; de ahí que, lo conocieron hasta que la autoridad rindió su informe con justificación y se glosó a los autos, y en torno al acto que señalan los inconformes como reclamado, expuso:

"... A consideración de la suscrita, dichas manifestaciones no constituyen en sí mismas un acto reclamado, sino apreciaciones sobre él, que no son otra cosa que conceptos de violación o agravios.

Por tanto, no ha lugar a tenerlas como acto reclamado..."

Como puede verse, el acto que precisan ahora los inconformes como reclamado, ya formaban parte de la litis del juicio constitucional, pero no como tal, sino como como conceptos de violación; de ahí lo

innecesario de que se diera trámite a la ampliación respectiva, ni aun como motivos de inconformidad.

Finalmente devienen **infundados** los motivos de disenso en donde los recurrentes aducen que se agravia el principio de discriminación, así como que la Juez de Amparo le ha restringido durante un año ocho meses un recurso sencillo y efectivo y que vulneró al no ampliar la demanda en los términos solicitados los artículos 1°, 76, 79, 111, 113, 119 y 217 de la Ley de Amparo, la cual establece que el Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará de manera supletoria y en su defecto los principios generales de derecho, en relación con los ordinales 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; porque el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, de ninguna manera puede ser interpretado en el sentido de que los requisitos establecidos para la ampliación de una demanda en el juicio de amparo sean inaplicables.

Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de analizar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida; por tanto, los requisitos establecidos en el artículo 111 la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, los elementos que condicionan la procedencia de la



ampliación de la demanda de amparo consisten en que los hechos novedosos guarden una estrecha vinculación con los actos inicialmente reclamados, pues esa conexión constituye una exigencia de carácter lógico jurídico que se explica en atención que de ella depende que en el mismo enjuiciamiento se decida, conjuntamente, tanto sobre lo planteado inicialmente, como respecto de la materia de la ampliación, sin que ello lesione el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido o cualquier otro medio de defensa efectivo.

Apoya lo anterior, por las razones que la informan la Tesis IV.2o.A.19 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que se comparte, visible en la página 2056 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Décima Época, con número de registro 2003108, de rubro y texto siguientes:

“PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA QUE LO PREVÉ, RESPETA EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen en favor de las personas los derechos humanos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, los cuales suponen un estándar internacional mínimo de protección que los Estados miembros de dicho instrumento internacional deben adoptar en sus normas de derecho

interno. Bajo esta perspectiva, el hecho de que el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo condicione la procedencia del juicio de amparo al agotamiento de los recursos ordinarios, respeta ese estándar internacional pues, en primer lugar, no se priva al particular del acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo, dado que dentro del derecho positivo mexicano existen otros medios de defensa como el juicio contencioso administrativo federal previsto en los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o bien, los recursos ante la propia autoridad administrativa y, en segundo, el principio de definitividad del juicio de amparo contiene un presupuesto procesal que se encuentra justificado en el hecho de evitar su proliferación innecesaria, en atención a su naturaleza de medio extraordinario. Aunado a lo anterior, el alcance de los referidos derechos humanos no implica soslayar presupuestos procesales que no resulten excesivos o desproporcionales para hacer procedente una vía jurisdiccional, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1587, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL."

Tampoco asiste razón a los inconformes en cuanto alegan que la Juez de Amparo les ha restringido durante un año ocho meses un



Q.P. 145/2018

C15

ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

recurso sencillo y efectivo, pues con independencia de que este Tribunal Colegiado no puede pronunciarse en este recurso en torno a la legalidad de la totalidad de los acuerdos dictados por la A quo en la tramitación de juicio de garantías, si puede advertir que la suspensión del procedimiento, obedece a los recursos de queja que los promoventes han interpuesto contra las decisiones tomadas por la juzgadora.

Finalmente, resulta **inoperante**, la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles que refieren los recurrentes, porque la Ley de la Materia, en el artículo 111 estableció los requisitos que deben satisfacerse para la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo; por tanto, al existir regulación expresa en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales sobre ese tópico, no hay porque aplicar supletoriamente la legislación civil federal.

En las relatadas condiciones, ante lo **infundado e inoperantes** de los agravios esgrimidos por los recurrentes, lo que se impone es declarar infundado el presente recurso de queja.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

ÚNICO. Se declara **infundado** el recurso de queja interpuesto por **CAROLINA, MARTHA PATRICIA, JULIO CÉSAR e ISRAEL**, todos de apellidos **GONZÁLEZ NAVA**, contra el auto de **treinta y uno de julio de dos mil dieciocho**, dictado dentro del juicio de amparo indirecto 260/2018.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria devuélvanse las copias certificadas de los autos al Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese el expediente.

Así, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por **UNANIMIDAD** de votos de los Magistrados Doctora María Elena Leguízamo Ferrer (Presidenta), Licenciado Tereso Ramos Hernández (Relator) y Secretario en Funciones de Magistrado Licenciado Gerardo Flores Zavala, en ausencia del Magistrado Roberto Lara Hernández, por licencia oficial, de conformidad con el oficio CCJ/ST/4625/2018, mediante el cual se comunica, que en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Carrera Judicial, lo autoriza desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, a partir del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno adscriba Magistrado que integre este Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con los artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de



Q.P. 145/2018

013

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Colegiado de Circuito, de conformidad con los artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales.

Firman la Magistrada Presidenta Doctora María Elena Leguízamo Ferrer, Magistrado Licenciado Tereso Ramos Hernández y Secretario en Funciones de Magistrado Licenciado Gerardo Flores Zavala que integran el Tribunal, quienes actúan ante el Secretario de Acuerdos que da fe.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, **CERTIFICA:** QUE LA SENTENCIA ANTERIOR ES **COPIA FIEL Y EXACTA** DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE **Q.P. 145/2018**, INTERPUESTO POR **CAROLINA GONZÁLEZ NAVA**, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS QUEJOSOS MARTHA PATRICIA, JULIO CÉSAR E ISRAEL, DE APELLIDOS GONZÁLEZ NAVA, CONTRA EL AUTO DE **TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO**, DICTADO POR LA **JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO**, Y SE EXPIDE EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, PARA ENVIARSE A LOS QUEJOSOS A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE COMÚN **CAROLINA GONZÁLEZ NAVA**, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS.- DOY FE.- CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. FRANCISCO EDMUNDO MEXIA PACHECO

3/c
Cayo
Agencia de
Demanda

QUEJOSOS: Carolina González Nava,
Martha Patricia González Nava,
Julio César González Nava
AMPARO INDIRECTO: 909/2018
Asunto: Desahogo de Prevención

LICENCIADA ANA LUISA HORTENSIA PRIEGO ENRÍQUEZ, JUEZA
DECIMOTERCERA DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Presente.

Carolina González Nava, por propio derecho, en mi calidad de representante común de la parte quejosa, en el amparo al rubro citado ante usted, con el debido respeto, comparezco, y expongo:

DESAHOGO DE REQUERIMIENTOS

Estando en el término de catorce días, a efecto de dar cumplimiento con lo decretado por su Señoría en auto notificado el primero de octubre de dos mil dieciocho, a esta parte quejosa, comparezco a desahogar los requerimientos que se me formularon, que consisten en lo siguiente:

"...con fundamento en los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término que aún le queda ya que el presente escrito interrumpe el término de quince días concedido en la vista de ampliación; es decir catorce días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído realice lo siguiente:

1.- Aclare la denominación autoridad responsable, toda vez que la vista concedida el once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 160 a 162), se desprende la participación de una autoridad diversa a la que señala en su escrito de ampliación de demanda

Lo anterior en razón de que la carta al ciudadano de catorce de marzo de dos mil dieciocho, con número de identificación 20180313GONCM1, con el que se dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa, fue emitido por el Director General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República y no por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2.-Exhiban tres copias del escrito aclaratorio. [...]

En virtud de lo anterior, la parte quejosa desahoga la prevención ordenada en el proveído indicado, en los términos siguientes:

PRIMERO: Por lo que hace a la prevención señalada con el inciso 1. Se señala como **AUTORIDADES RESPONSABLES:**

a) La violación indirecta administrativa de incumplir con sus obligaciones y facultades de naturaleza "erga omnes" de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna en el caso concreto al **Presidente de los Estados Unidos Mexicanos**, y

b) La carta ciudadano, con número de identificación 20180313GONCM1 al **Director General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República**

Ello es así, el acto que imputamos a la autoridad responsable consiste en la concatenación de una serie de vulneraciones Constitucionales que se desarrollan a continuación:

La proyección de la dignidad de toda persona, se ve reflejado en el reconocimiento al proyecto de vida sin discriminación o segregación alguna.

Tomando en cuenta que el principio de no discriminación constituye un elemento fundamental inherente a los derechos humanos, es un principio de las normas imperativas de Derecho Internacional (*ius cogens*)¹.

Los derechos humanos tienen como base el derecho a la existencia, al reconocimiento integral de los derechos inherentes a toda persona, que requiere para su desarrollo condiciones de vida digna: certeza y seguridad jurídica, integridad física, psicológica y moral.

Por consiguiente, a toda persona le es inherente todos los derechos y libertades que corresponden al ser humano sin que sea admitida distinción o segregación alguna por razón de género, social, económico, o cualquier otra condición. La vulneración al principio de no discriminación constituye un caso del *ius cogens*, pues es un elemento constitutivo del concepto de los Derechos Humanos.

El respeto de los Derechos Humanos es un caso del *ius cogens*, de consiguiente, la violación sistemática a derechos fundamentales inderogables protegidos por Convenciones, Convenios, tratados en materia de Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, hace del presente caso una violación sistemática a normas imperativas de Derecho Internacional General (*ius cogens*).

Al violentar gravemente de forma sistemática los derechos fundamentales inderogables en el caso concreto se actualiza la negación del derecho a la existencia de una familia, la separación de derechos, segregación por discriminación basada en motivos económicos, sociales, de género. Con consecuencias inmediatas de sometimiento intencional a condiciones de existencia que han acarreado lesión grave a la integridad física, mental y moral de los quejosos.

Los actos de la autoridad responsable están apartados del principio de supremacía constitucional, pues los actos de autoridad para ser legales deben ser acordes a los ordenamientos jurídicos de la Constitución y tratados internacionales en materia de los Derechos Humanos firmados y ratificados por la autoridad responsable.

Las graves violaciones sistemáticas a derechos fundamentales inderogables que acontecen en el presente caso, tienen como objetivo la segregación de una familia a un Estado de Derecho, que tiene como principio de Supremacía Constitucional la Constitución y Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos², normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*).

El acto de segregación en sí y por sí mismo, representa el objetivo de anular el derecho a la vida, la amenaza constante de volver a ser torturado, o detenido arbitrariamente, sin certeza y seguridad jurídica³.

El respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin discriminación alguna, en el presente caso está muy lejos de ser reconocido.

² del artículo 133 Constitucional, se puede deducir los aspectos que caracterizan al principio de supremacía constitucional:

- a) La Constitución Federal es la Ley suprema y fundamental; y
- b) Los ordenamientos jurídicos derivados de ella, sean leyes federales, tratados internacionales o leyes locales, **inclusive los actos de autoridad**,
- c) deben estar acordes a lo preceptuado por la Constitución, para que resulten válidos.

³ Sin saber que delito se ha cometido y por consiguiente ser juzgado ante un Tribunal de delitos oficiosos (carpeta judicial 011/0384/2017, la Representación Social no hizo del conocimiento a la imputada por qué se le estaba investigando), juicio de amparo indirecto 627/2017, que derivó en recurso de revisión 157/2017, asimismo, en recurso de reclamación. A la fecha, la Representación Social, sólo afirman que nos están investigando, acusándonos de delitos oficiosos, sin saber la parte quejosa qué delitos y cómo cometimos esos delitos oficiosos.

Los actos de la autoridad vulneran el principio de igualdad jurídica, combatiéndolo con la violación al principio de no discriminación, que a su vez vulnera el principio de igualdad de derechos, por consiguiente, vulnera los derechos humanos más básicos en el presente caso.

La violación de normas imperativas de Derecho Internacional, normas que, el Estado mexicano ha firmado y ratificado que le genera obligaciones *erga omnes*, a la autoridad responsable, en el presente caso se pretende que aplicando la política de discriminación, despojándonos de derechos protegidos por normas del *ius cogens*, la parte quejosa sea segregada por todas las Instituciones del Estado mexicano, para seguir aplicando impunemente la técnica semejante a la tortura de la "gota de agua" con el objetivo de sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen destrucción física, mental y moral, total, y esto no produzca necesariamente consecuencias jurídicas, pues el Estado mexicano tiene deberes ineludibles e irrenunciables como sujeto de Derecho Internacional, que forma parte de la Comunidad Internacional.⁴

La persistente denegación del derecho a no ser objeto de tortura⁵, de vejámenes, castigos prohibidos, penas infamantes, fabricación de delitos, discriminación, amenazas de pérdida de la libertad, la destrucción al derecho a la vivienda⁶, entre otros, hacen del caso una vulneración sistemática a normas imperativas de Derecho Internacional, una radical negación a normas del *ius cogens*.

Lo que hace del presente caso una segregación. Sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total; ello es así, el caso concreto presenta métodos semejantes a la técnica de tortura de la gota de "agua" en violación a los artículos 1.1.2, 2.1. a). b). d)., 3, 5, párrafo primero, inciso a), b), e): iii), 6) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en consecuencia lógica en violación al artículo primero, 2 y 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales⁷

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial artículos 1.1.2, 2.1. a). b). d)., 3, 5, párrafo primero, inciso a), b), e): iii), 6), a la letra dicen:

⁴ Estado Miembro de las Naciones Unidas.

⁵ En este orden, no puede admitirse dentro de una lógica formal y jurídica el por qué la juez a quo en juicio 627/2017, legaliza⁵ la tortura, castigos, fabricación de delitos en una investigación penal, instaurada *ad infinitum*. Métodos que ni siquiera en conflictos armados están permitidos.

⁶ Juicio de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018.

Artículo primero

1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que constituye la forma extrema del racismo.

Artículo 2

1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento.

Artículo 6

1. El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por todos los individuos y todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.

"Artículo 1

1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 2

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;

Artículo 3

Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.

Artículo 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;

b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:

iii) El derecho a la vivienda;

Artículo 6

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación."

La segregación ha tenido por resultado desconocer los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera de los quejosos.

El acto de la autoridad fomenta la discriminación racial practicada en el presente caso.

Los Estados partes de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.

El acto de autoridad en discriminación racial en contravención en el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley; veda el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia, el derecho a la seguridad personal, a la vivienda y a la protección del Estado contra los actos de violencia y contra la integridad personal cometido por Instituciones, funcionarios públicos, figuras políticas, particulares que conforman un grupo de poder público y privado.

El acto de la autoridad responsable vulnera como Estado Parte que le genera obligaciones *erga omnes* ante la Comunidad Internacional, como Estado

Democrático, asegurar en el presente caso, protección y recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra los actos de discriminación racial que, contraviniendo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, viola derechos fundamentales inderogables y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a los tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo el daño de que hemos sido víctimas como consecuencia de tal discriminación y cese el Sometimiento intencional a condiciones de existencia que pretenden acarrear la destrucción física, total.

El acto de autoridad es ilegal, pues todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.

La autoridad responsable no puede legitimar ni en derecho ni de facto ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de segregación que en presente caso constituye una forma extrema del racismo, sin derechos, pues todo acto u omisión que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

Porque como bien lo dice el artículo segundo de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, "El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento."

Los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos asumen responsabilidades primordiales a la autoridad responsable en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales a todos los individuos y todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.

En el presente caso la autoridad responsable se niega a intervenir en el presente caso, por consiguiente, vulnera sistemáticamente y reiteradamente los principios y normas del *ius cogens*, por lo que no es legítimo que a la parte quejosa se le considere inferior, sin plena igualdad de dignidad y derechos por causa de diferencias económicas y sociales, justificando esas desigualdades destruyendo el principio de Supremacía Constitucional en relación al principio de no discriminación, con razonamientos desprovistos de fundamento, pues la negación de sus obligaciones que le genera obligaciones *erga omnes* como Estado Democrático hace del presente caso una permisión ilegal.

La autoridad responsable, "Protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen"⁸ ello es así la protección de un Estado de Derecho, esta en proteger el principio de Supremacía Constitucional, que va unido al principio de no discriminación, considerando, que la segregación a la que se le somete a la parte quejosa hace del caso una violación reiterada a normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*), afectando la legitimidad como Estado Democrático.

En el presente caso la segregación en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que por consiguiente desconoce las condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos, en violación al artículo 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales.

⁸ **Artículo 87 Constitucional.** "...El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande..."

En este orden de ideas la parte quejosa dirigió escrito de petición de forma respetuosa a la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la Oficina de atención ciudadana de la Presidencia de la Republica, en el escrito, se denuncia la segregación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el caso concreto, alcanzando su plena realización en violaciones procesales, en que el engaño y discriminación es manifiesto. "El proceso ha sido "a modo" y la sentencia sirve a determinado designio, mejor que al objetivo de justicia", no se pretende hacer justicia sólo simularla, los juicios están viciados y, por consiguiente, a la fecha no existe un auténtico proceso⁹, por lo que la sentencia que éste produce no es genuina, acompañada de violencia y destrucción del estado de derecho, el escrito signado por la parte quejosa, fue el de hacer ver que el presente caso se le ha sometido intencionalmente a condiciones de existencia en la que pretenden acarrear la destrucción física, mental y moral, total, siendo esto objetivo, pues se puede probar de forma lógica y jurídica con la violencia institucional, violencia de género, humillación, segregación, tortura, incriminación, amenazas de pérdida de la libertad, de pérdida de la vida, de violación al derecho de vivienda, pues en el transcurso de cinco años, con diez meses: los suscritos hemos acudido a todas las Instancias en el Estado mexicano, un ejemplo de ello, es el Consejo de la Judicatura Federal, Instituto Federal de Defensoría Pública, ya que, la Licenciada Yasmín Rosales Muñoz y otros defensores públicos, son partícipes de la segregación manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el caso concreto, después de haber elaborado un amparo a la parte quejosa, que distó por mucho de ser un escrito efectivo, resultó, con condicionamientos dependientes hacia el Estado, en violación a los derechos humanos¹⁰, deponiendo la justicia a la merced de la ficción.

Al acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública, la Licenciada Yasmín Rosales Muñoz y otros asesores jurídicos pertenecientes a ésta defensoría, en segregación manifiesta (afirmaban lo que ahora la juez a quo¹¹ resuelve en juicio constitucional contrario al artículo 1 y 217 de la Ley de Amparo), que a la parte quejosa no se le ha vulnerado ningún derecho, a pesar de la tortura, que ha derivado en graves daños físicos, psicológicos. Con absoluta malicia, nos vejaba, se burlaban que no podíamos hacer nada, que sólo se veía que había afectado a nuestra salud¹², haciéndonos esperar cerca de cuatro horas, para después de ese tiempo, mencionar que no teníamos nada que hacer ahí, que ellos no podían hacer nada por nuestro caso, que acudiéramos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Asimismo, acudimos como último recurso a instar las garantías judiciales para la protección y reconocimiento del derecho vulnerado en diciembre de dos mil dieciséis con el juicio de amparo 1118/2016 y subsecuente 288/2017, 349/2017, 545/2017, 651/2017, 627/2017, 74/2018, 260/2018.¹³

⁹ Juicio de amparo indirecto 260/2018, Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal del primer Circuito, autoridad responsable Secretario de Gobernación.

¹⁰ La dignidad humana de la parte quejosa fue pisoteada, ni siquiera nos proporcionaron el número de amparo que fue interpuesto por ésta licenciada

¹¹ Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, cabe traer a colación, que el licenciado Héctor Molinero Orduña, Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, preguntó en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, si existía abogado, al responder la parte quejosa..., mencionó **"aun así, no se les ha negado el servicio"**, prosiguiendo en actitud discriminatoria, que no entendíamos, diciendo, qué cómo nos explicaba..., en este punto, es válido traer a colación, que es por nuestra apariencia que consideran que no tenemos derechos, que somos ignorantes, con absoluta malicia.

¹² **Llegando a mencionar la suscrita Carolina González Nava, que seguiríamos solicitando acceso a la justicia, mencionando que existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que respondían burlones los asesores jurídicos pertenecientes al Instituto Federal de Defensoría Pública: "creo que apoyan con recursos para transportarse", que al parecer se encontraba en Costa Rica (refiriéndose a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).**

¹³ Cabe hacer mención que los juicios de amparo ("Habeas Corpus") 349/2017 y 74/2018, fueron en relación a las graves amenazas de policía de investigación que acuden armados

Por consecuencia lógica y jurídica la ilegalidad del acto reclamado causa total estado de indefensión, el informe justificado de la autoridad responsable y sus anexos, infringe en perjuicio directo el principio de no discriminación, en el estado de excepción de suspensión de derechos fundamentales inderogables. Fomenta la discriminación racial que han hecho del presente caso sin que a la fecha del presente escrito, la autoridad responsable condene la segregación de derechos fundamentales inderogables y la destrucción del Estado de Derecho que han hecho del caso una vulneración a las normas imperativas de Derecho Internacional General (*ius cogens*).

Los diversos juicios constitucionales referidos han sido substanciados en los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, de ahí que, la parte quejosa solicita atentamente a su Señoría, el derecho humano de acceso a la justicia.

En este orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis P.LXXXVI/96, Tomo III, junio de 1996, pág. 459, registro 200110¹⁴, clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho.**

La definición del concepto de violaciones graves a derechos humanos se perfecciona con el **distanciamiento constitucional** que ha sido una constante en el presente caso.

En referencia a la tortura en este distanciamiento constitucional (juicio de amparo 627/2017 y 260/2018), la parte quejosa plantea, que el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ("Protocolo de Estambul"), menciona que no se presenta como un protocolo fijo, pues el informe médico ofertado por la parte quejosa es idóneo para demostrar que el Estado mexicano ha destruido deliberadamente no sólo el bienestar físico, psíquico y moral de la parte quejosa sino también, la dignidad y la voluntad, pues la víctima tuvo que acudir por atención especializada al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, derivado de estos ataques sistemáticos altamente planificados a sangre fría, métodos de tortura semejantes a la técnica de la "gota de agua".¹⁵

a tratar de detenernos arbitrariamente, sin que la parte quejosa haya cometido ningún injusto, vulnerando derechos fundamentales inderogables de certeza y seguridad jurídica. Por consiguiente, la parte quejosa se ha visto obligada a auto salvaguardarse.

¹⁴ "GARANTÍAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.

Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis."

¹⁵ la excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables son manifiestos, en el transcurso de cinco años con diez meses, las autoridades responsables en el presente caso actualizan día con día, atentados contra la vida, contra la integridad

Ello es así, la parte quejosa hace planteamientos lógicos y jurídicos que versan sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ("Protocolo de Estambul") en relación a la idoneidad de la prueba especializada (informe médico) adecuada para probar la testimonial de tortura, vejaciones, humillaciones, de castigos, fabricación de delitos que han derivado en graves daños físicos, psicológicos y morales, probanza que hace patente la segregación que acontece en el presente caso en el que se busca que la vivienda que habitan los suscritos se derrumbe, llevando a cabo todos los actos para que este hecho suceda (juicio de amparo 651/2017).

En este orden de ideas, la segregación racial, dentro de una lógica formal, clarifica el presente caso, el por qué las autoridades responsables en abuso del derecho, con la intención de dañar a la parte quejosa, en violación a la función social del derecho, ha planificado graves violaciones sistemáticas, los motivos inaceptables que implica un abuso de las Instituciones como medio para destruir el proyecto de vida, con el objetivo de exterminio, la parte quejosa ha sido torturada, humillada, con la amenaza constante de pérdida de la libertad o de la vida, en violencia institucional y de la comunidad, precedente que solicitamos atentamente, sea analizado por su Señoría, con el objetivo de que no se vuelva a repetir estas graves violaciones sistemáticas a un caso similar, por un largo periodo de cinco años con diez meses que se advierte *ad infinitum*, a alguna persona por considerar que se encuentra en desigualdad estructural o discriminación estructural, que la autoridad responsable debe reconocer la vulneración que el Estado mexicano ha hecho del presente caso.

Teniendo en cuenta la situación la segregación en la que se enmarcan los hechos ocurridos por un periodo de cinco años con diez meses: graves violaciones sistemáticas, que conforma una historia de torturas, vejaciones humillaciones, fabricación de delitos, erigiéndose en un Tribunal que ha impuesto penas inusitadas, castigos. Hechos ocurridos en un lugar determinado. El Estado obligado a garantizar, las condiciones jurídicas para la no vulneración del Derecho imperativo, lo permite, destruyendo el Estado de Derecho, contraviniendo todo ordenamiento en materia de los Derechos Humanos, tratados, convenios, suspendiendo derechos fundamentales inderogables, sin garantías de debido proceso... en el caso concreto. Es válido mencionar el principio de la carga de la prueba es dependiente del acceso a la justicia en condiciones de igualdad, lo que obliga a los órganos jurisdiccionales del país a que está sea impartida con perspectiva de género, a observar la desigualdad estructural del actor frente al Estado, que al destruir el derecho, ha impuesto segregación racial, pues no importa las pruebas aportadas, la invocación de Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, es como si estos no existieran, pues la parte quejosa ha sido despojada de derechos fundamentales inderogables, sin garantías de debido proceso...

Considerando que a la fecha la parte quejosa ha sido segregada de derechos y garantías que son inherentes al ser humano. El derecho al pleno y efectivo ejercicio a las garantías judiciales han sido suspendidas, acudiendo ante su Señoría para el reconocimiento y restablecimiento del derecho vulnerado.

Hechos notorios son los innumerables juicios de amparo que en el presente caso han resultado fallidos, resoluciones contrarias a la intención de proteger, a un recurso sencillo, rápido y efectivo, derechos implícitos en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los resolutivos que engrosan los juicios de amparo indirecto en materia penal, son contradictorias a un Estado de Derecho; mas nada se puede hacer, cuando se simula juicio de amparo en el caso concreto, con sendas violaciones procesales, dilación en el proceso, es el pan de cada día, actuaciones que conforman un "engaño", es en sí mismo violencia en



juicio constitucional, formalizando segregación de derechos fundamentales inderogables¹⁶.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en opinión consultiva OC-8/87, que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Que "los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia."¹⁷

La corte Interamericana de Derechos Humanos en ésta opinión consultiva, menciona que el artículo 25.1, es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, que debe ser un procedimiento judicial sencillo y breve que tiene como objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, máxime, lo son los que estén señalados de manera expresa en el artículo 27.2 como no susceptibles de suspensión¹⁸

Sigue diciendo que el recurso de amparo constituye el instrumento más idóneo no sólo para corregir con prontitud los abusos de la autoridad, siendo un medio eficaz para prevenir la tortura y otros apremios físicos y psicológicos. Es importante destacar que, en el presente caso, por un periodo de un año, con diez meses, se han suspendido los medios y recursos legales efectivos para hacer valer sus derechos de la parte quejosa (juicio de amparo 260/2018¹⁹).

Las medidas adoptadas por el Estado en el presente caso es una desviación a la legalidad en abuso de poder y de la Instituciones desmedido, luego, la figura procesal del amparo es una garantía judicial indispensable para la protección de los derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¹⁶ Juicio de Amparo Indirecto 1118/2016, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018. Las disposiciones que se han adoptado en juicio de amparo son ilegales, el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone límites al poder de los Estados Partes para suspender derechos y libertades, estableciendo que hay algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna circunstancia incluyendo en este grupo las "garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos". La suspensión del Estado de Derecho a autorizado a las autoridades responsables a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, en el que se han investido de poderes absolutos, se han extralimitado *ad infinitum* de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada.

¹⁷ Párrafo 25, página 9.

¹⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 32, página 10.

¹⁹ En este orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado la violación al artículo 8.1 de la CADH, en los casos en los que no se ha respetado el debido proceso.

Los hechos notorios en el que no se ha respetado en debido proceso, lo conforman los innumerables juicios de amparo indirecto, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 651/2017, 627/2017¹⁹, 74/2018, 260/2018¹⁹, la Juez a quo y los recursos que han derivado de éstos, han sido substanciados en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que se han negado a tener las pruebas por vertidas, de amenazas, hostigamientos, por solicitar acceso a la justicia, no obstante, las probanzas de las penas de castigos prohibidos, en connivencia con las autoridades responsables: defensor público y particular torturas¹⁹, coacción, penas infamantes, falsas acusaciones, procedimientos ilegales del Ministerio Público, de la fuerza pública, del Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México humillaciones públicas, vejaciones, etcétera) que las autoridades responsables han ejecutado con un alto grado de planificación, es notorio que el proyecto de vida ha sido destruido, sin certeza y seguridad jurídica ("*habeas corpus*"), atendidos a la nada jurídica.

Un ejemplo que clarifica la situación en el que permanece el presente caso en juicio de amparo es el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

"...que cualquier que sean las razones que hayan podido existir para interrumpir el proceso constitucional democrático, es inaceptable e inadmisibles la supresión y/o violación de ciertos derechos humanos que constituyen siempre el mínimo necesariamente vigente e inderogable y cuya existencia y respeto necesario en todo momento y en toda situación, sin que sea posible justificar su derogación, desconocimiento o violación. Este criterio de la inderogabilidad absoluta de ciertos derechos- en especial del derecho a la vida, del derecho a no ser sometido a la tortura o a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes y del derecho a no ser sometido a la esclavitud o a la servidumbre reconocido en el artículo 2º párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Bolivia es Parte y enunciado también en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la consecuencia de un principio general que se encuentra en el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos..."²⁰

Asimismo, menciona:

"Estos derechos inderogables -y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes -, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran"²¹

El presente caso se encuentra en la inefectiva igualdad ante la ley, el inacceso a la justicia carece de justificación objetiva y razonable de conformidad con el actual marco constitucional de protección, la autoridad responsable tiene obligaciones *erga omnes* específicas en materia de derechos humanos; protección y garantía, noción de igualdad, principio de no discriminación que es inseparable de la dignidad de la persona, ello es así, el principio de no discriminación constituye un elemento fundamental inherente a los derechos humanos, por consiguiente, el acto de la autoridad responsable es contrario al principio de igualdad y no discriminación, respecto al ejercicio y reconocimiento de los derechos inderogables, acción que es incompatible con los derechos reconocidos en la Constitución, pues a la parte quejosa se nos considera inferiores, hecho, que ha afectado el reconocimiento y goce a los derechos inderogables de los quejosos, las cuales han sido definidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, de la manera siguiente:

IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS²².

El precepto referido establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a

²⁰ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

²¹ Doc. E/CN.4/1981/1500, nota 76.

²² Tesis: 1a./J. 49/2016 (10a.), Décima Época, Primera Sala del Alto Tribunal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre de 2016, Tomo I, Página: 370, registro: 2012715

igual protección de la ley." Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición -Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127; Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No. 184; Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, No. 195- y, al respecto, ha sostenido que **la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona;** sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana. Por tanto, sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y razonable". Ahora bien, las distinciones constituyen diferencias compatibles con dicha Convención por ser razonables, proporcionales y objetivas, mientras que las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. En ese tenor, la prohibición de discriminación contenida en el artículo 1o., numeral 1, de la Convención en comento, respecto de los derechos contenidos en ésta, se extiende al derecho interno de los Estados parte, de manera que éstos tienen la obligación de no introducir o eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, **combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas.**

Nota. Lo resaltado es propio.

Por consiguiente, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el **trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria**, la segregación tiene por objetivo el exterminio, lo constituye un acto **arbitrario que redunde en violación de los derechos humanos inderogables:**

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL²³.

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación **que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos** que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el **trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria**, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una **diferencia arbitraria que redunde en detrimento de los derechos humanos.** En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como

²³ Tesis: P./J. 9/2016 (10a.), Décima Época, El Tribunal Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2016, libro 34, Tomo I, Página: 112, registro: 2012594

nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.

Nota. Lo resaltado es propio.

En el presente caso, la autoridad responsable, a pesar de tener las atribuciones legales, derivadas de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar nuestros derechos fundamentales inderogables, se ha negado llanamente a ejercer actividades tendientes a lograr garantizar el ejercicio de tales derechos fundamentales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH²⁴) con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), establece que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad²⁵.

La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la —adopción de medidas positivas—, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal, la segregación o por la situación específica en que se encuentre²⁶.

Por tanto, ante una conducta o violación indirecta administrativa, la Justicia Federal puede tutelar a las personas gobernadas por la vía del juicio de amparo; sirva de apoyo el criterio judicial siguiente:

²⁴ Sobre la obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las autoridades mexicanas vale la pena ver el criterio jurisprudencial siguiente: **JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.** Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

²⁵ Cfr. CoIDH. Caso *Tribunal Constitucional vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71; Caso *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Caso *Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso de la "Panel Blanca" (*Paniagua Morales y otros*) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37

²⁶ Cfr. CoIDH. Caso *González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205

OMISIÓN LEGISLATIVA O ADMINISTRATIVA. EL MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE UNA DEMANDA DE AMPARO, CONSISTENTE EN QUE NO PROCEDE EL JUICIO EN SU CONTRA, NO ES NOTORIO, MANIFIESTO NI INDUDABLE, PORQUE IMPLICA UN ESTUDIO EXHAUSTIVO SOBRE EL TEMA QUE NO ES PROPIO DE UN ACUERDO, SINO DE LA SENTENCIA²⁷.

Tomando en consideración que para analizar si existe una inconstitucionalidad omisiva el operador jurídico debe revisar que: i) exista un mandato normativo expreso (ya sea de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de un tratado internacional o de una ley) que, luego de declarar la norma "programática" que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes; ii) se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación por el legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y, iii) **esa conducta vulnere un derecho o garantía**, lo que se sitúa en la tensión entre la máxima efectividad que debe atribuirse a un texto constitucional y la realidad, que pasa por el núcleo de los poderes del Estado, así como que para hacer efectivos los derechos fundamentales existen dos principios a colmar: el de legalidad y el jurisdiccional; en atención al nuevo bloque de constitucionalidad y a la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se concluye que el motivo de desechamiento de una demanda de amparo, consistente en que no procede el juicio contra omisiones legislativas o administrativas, no es notorio, manifiesto ni indudable, porque implica un estudio exhaustivo sobre el tema que no es propio de un acuerdo, ya que no es posible hablar de una causa de improcedencia notoria y manifiesta, al no derivar de los argumentos de la demanda o de las pruebas, sino del estudio e interpretación que lleve a cabo el Juez de Distrito en la sentencia. **PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.**

En el caso que nos ocupa, se configuran los tres elementos necesarios para actualizar la omisión o conducta administrativa:

- i) **exista un mandato normativo expreso (ya sea de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de un tratado internacional o de una ley) que, luego de declarar la norma "programática" que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes;**

En este sentido, es pertinente revisar el contenido de los artículos 1º, y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte conducente y tocante a lo relacionado con las obligaciones en materia de derechos humanos fundamentales:

"ARTICULO 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

²⁷ Tesis: XI.1o.A.T.33 A (10a.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2014, Tomo III, Página: 1861, registro: 2007189



universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, **el género, la edad,** las discapacidades, **la condición social,** las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil **o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.**

ARTICULO 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, **solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,** con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, **podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo** para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales **y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.** Si la restricción o suspensión tuviere lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, **no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia,** al nombre, a la nacionalidad; **los derechos de la y niñez;** los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; **el principio de legalidad y retroactividad;** la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; **la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.**

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

[...]

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez

Adicionalmente a la obligación general impuesta en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la obligación de todas las autoridades para promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establecen atribuciones específicas al Presidente de la República, entre las que se encuentra las siguiente:

Artículo 60.- Para los efectos del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la República.

En este empalme, el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere al Presidente de la República facultades



y obligaciones, tales como, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.

Pues el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen (artículo 87 Constitucional)

En efecto, la obligación principal que la autoridad responsable protestó guardar y hacer guardar el principio de Supremacía Constitucional, asimismo ha asumido como Estado Parte de los instrumentos convencionales mencionados en párrafos anteriores, la respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en los mismos, entre estos instrumentos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4o.); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27), prevén la posibilidad que por circunstancias de hecho excepcionales, los estados partes pueden suspender las obligaciones contraídas, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional (normas imperativas de Derecho Internacional, *ius cogens*) **sin discriminación alguna.**

Circunstancias excepcionales que están muy lejos del presente caso, segregación manifiesta, pues la tortura, humillación, penas infamantes, incriminación, destrucción del proyecto de vida, violencia de género, violencia Institucional, amenaza de pérdida de la vida y de la libertad²⁸, pérdida al derecho humano a una vivienda, la negación de garantías para su protección y el reconocimiento del derecho vulnerado, negación de la existencia de obligaciones *erga omnes* en relación al principio de no discriminación en vulneración a Derechos Humanos, hacen del presente caso la destrucción del Derecho, la nada jurídica, en violación a los artículos 1.1.2, 2.1.a).b).d)., 3, 5, párrafo primero, inciso a), b), e): iii), 6) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial²⁹ en consecuencia lógica en violación al artículo

²⁸ "habeas corpus"

²⁹ **Artículo 1**

1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 2

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

- a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;
- b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;
- d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;

Artículo 3

Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.

Artículo 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

- a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;
- b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;
- e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:

primero, 2 y 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales³⁰, hacen del presente caso actos ilegales que están en oposición a normas imperativas de Derecho Internacional.

La persistente denegación del derecho a no ser objeto de tortura³¹, de vejámenes, castigos prohibidos, penas infamantes, fabricación de delitos, discriminación, amenazas de pérdida de la libertad, entre otros, hacen del caso una radical negación a normas del *ius cogens*.

En este orden, no puede explicarse dentro de una lógica formal y jurídica que la autoridad responsable determine, en radical negación a normas imperativas de Derecho Internacional que la parte quejosa acuda a solicitar al perpetrador de graves violaciones sistemáticas y flagrantes, que reconozca y restablezca los derechos fundamentales inderogables, sancione, repare e indemnice.

Lo que equivale a afirmar que acuda a solicitar el cumplimiento del principio de Supremacía Constitucional en relación al principio de no discriminación, al mismo torturador que nos ha arrastrado a sufrimientos ignominiosos, que nos ha sometido de forma intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear a sangre fría la destrucción física, total, para que se auto sancione, lo que evidencia un abuso del derecho y destrucción del mismo. Por consiguiente, el acto es discriminatorio que indudablemente es equivalente a decir, que la parte quejosa se someta por voluntad propia a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física y mental, total, lo que ni siquiera en conflictos armados ésta permitido.

Ello es así, las probanzas señalan directamente como responsable del presente caso al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que nos ha sometido a condiciones de existencia para acarrear de forma intencional nuestra destrucción física y mental total, pues las probanzas demuestran esta destrucción física y mental, parcial.

iii) El derecho a la vivienda;

Artículo 6

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación.

³⁰ **Artículo primero**

1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que constituye la forma extrema del racismo.

Artículo 2

1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento.

Artículo 6

1. El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por todos los individuos y todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.

³¹ En este orden, no puede admitirse dentro de una lógica formal y jurídica el por qué la juez a quo en juicio 627/2017, legaliza³¹ la tortura, castigos, fabricación de delitos en una investigación penal, instaurada *ad infinitum*. Métodos que ni siquiera en conflictos armados están permitidos.



Contrario al acto de autoridad, existen derechos fundamentales inderogables cuya suspensión está prohibida en toda circunstancia, regulados en los artículos 4.2 del Pacto Internacional, 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; Derecho a la Vida; Derecho a la Integridad Personal; Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre; Principio de Legalidad y de Retroactividad; Libertad de Conciencia y de Religión; Protección a la Familia; Derecho al Nombre; Derechos del Niño; Derecho a la Nacionalidad, y Derechos Políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos); y 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Los cuales son normas de *ius cogens*, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo, que tienen su origen en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado; y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que están reconocidos en el artículo 1, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convenciones Internacionales que no admiten ninguna posibilidad de suspensión de los derechos fundamentales que protegen, Instrumentos que la autoridad responsable ha firmado y ratificado, que le exigen obligaciones *erga omnes*: Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales...

Que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que la violación al principio de no discriminación hace que cualquier acto que sea contrario al mismo ilegal.

La destrucción física y mental, parcial o total, es contrarios a los derechos humanos inderogables implícitos en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado; y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que están reconocidos en el artículo 1, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo anterior es factible concluir que el Presidente de la Republica tiene mandatos Constitucionales y legales expresos para poder intervenir en un caso como el que exponemos y que sin embargo se niega a intervenir en contravención a sus obligaciones *erga omnes*, respetando el principio de no discriminación de conformidad como Estado Parte de la Comunidad Internacional que ha firmado y ratificado Tratados, Convenciones en materia de los derechos humanos³² que lo convierten en un Estado Legítimo. Máxime que protestó guardar y hacer guardar el principio de Supremacía Constitucional (artículo 87 Constitucional)

ii) se configura la omisión del cumplimiento de tal obligación por el funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y,

La negativa del cumplimiento de las obligaciones expuestas en las normas citadas, recae en la autoridad señalada como responsable quien al haber omitido acatar dichas disposiciones y teniendo competencia para ello, han provocado una gravísima afectación a nuestro interés legítimo y a nuestra esfera de derechos.

En este sentido es importante señalar que ninguna de las disposiciones aludidas y que han sido incumplidas, imponen una carga de solicitud o excitativa a nuestra parte, ya que al tratarse de obligaciones Constitucionales, Convencionales y legales de carácter general no necesitan de una acción primigenia para poder ser invocada, **esa conducta vulnera los derechos**

³² Artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

54
55

fundamentales inderogables y el derecho al acceso a la justicia³³, y las garantías para su protección, lo que se sitúa en la tensión entre la máxima efectividad que debe atribuirse a un texto constitucional y la realidad, que pasa por el núcleo de los poderes del Estado.

SEGUNDO: En atención a la solicitud de copias realizada en el punto 3., por este Juzgado de Distrito, las mismas se anexan al presente escrito. Asimismo, anexo copia de la ampliación de la demanda de amparo de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

Los recurrentes solicitan atentamente a su Señoría declare el presente escrito, por ser el desahogo de una prevención, como parte de la demanda de amparo indirecto en que se actúa.

En virtud de lo antes expuesto y el desahogo de todos y cada uno de los requerimientos formulados por su Señoría, solicitamos deje sin efectos el apercibimiento decretado en el proveído de prevención y admita la ampliación de demanda de amparo indirecto en que se actúa.

Por lo anteriormente descrito, la parte quejosa se permite anexar las siguientes documentales, en copia simple:

1. Escrito del seis de mayo de dos mil quince, dirigido al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hoja 5 del escrito de ampliación de demanda.
 - 1.1. Hojas 103 a 105; 109 a 111 del juicio de nulidad: V-76315/15 Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. (en destrucción del Derecho éste Tribunal concedió la nulidad sobre un bien del dominio público), hoja 13 del escrito de ampliación de demanda.
2. Carnet de citas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (paciente Carolina González Nava)
 - 2.1. Informe médico expedido por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. hoja 6 del escrito de ampliación de demanda.
 - 2.2. Audiencia de ratificación de queja ante el Director de Quejas y Denuncias "B", de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Consta que la suscrita acudió el primero de septiembre de dos mil dieciséis con graves afectaciones psicológicas y físicas derivadas del decreto de facto de suspensión de derechos fundamentales inderogables por el Gobierno de la Ciudad de México, a ratificar denuncia de la tortura misma que fue aplicada a sangre fría con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. hoja 9 del escrito de ampliación de demanda
3. Carnet del Consejo de la Judicatura Federal Instituto Federal de Defensoría Pública, con número de expediente interno 057/2015, que versó sobre la vía pública Andador Tabaqueros, (cabe hacer mención que después de haber elaborado escrito de solicitud de amparo por derecho de petición, la asesora jurídica Lic. Yasmín Rosales Muñoz, entre otros asesores jurídicos de la misma Defensoría incurrieron en segregación manifiesta. hoja 9 del escrito de ampliación de demanda

³³ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido la categoría de norma del *ius cogens* al derecho al acceso a la justicia "...El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes...". Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, serie, C, núm. 153, numeral 131. Cfr. Voto razonado del juez A. A. Cancado Trindade, p. 22, numeral 64. Cfr. Corte I.D.H., Almonacid y Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, voto razonado del juez A.A. Cancado Trindade, serie C, núm. 154, p. 7, numeral 22

4. Escritos de la Comisión Federal de Electricidad derivados de la aquiescencia de esta Empresa pública, en relación a la suspensión de derechos fundamentales inderogables: derecho a una vivienda digna, pues el empleado federal Diego Arturo Lara Nava (habitante del Andador Tabaqueros), aparte de estar ocasionando daños de tracto sucesivo a la casa habitación de los quejosos, pretende privarnos de energía eléctrica. Hoja 9 del escrito de ampliación de demanda.
5. Dictamen emitido por el Perito Julio Eduardo Cabrera Godínez Ingeniero Arquitecto, que prueba los daños de tracto sucesivo que los habitantes de la vía pública Andador Tabaqueros con aquiescencia del Estado llevan a cabo todas las acciones para que la vivienda de los quejosos se derrumbe.
6. Escrito de información pública, que redundó sobre la vía pública Andador Tabaqueros, pues la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México declaró que según el Acuerdo A/0001/2016, no podía ocuparse del delito, hoja 11 del escrito de ampliación de demanda.
7. Escrito de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del siete de septiembre de dos mil dieciséis, con número de folio 81467. Hoja 9 del escrito de ampliación de demanda.
8. Escrito de fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince dirigido al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, en la que se denuncia la destrucción del Estado de Derecho, en la que el agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán señala en forma de amenaza, que *el presente caso lo había encargado el Procurador...* que los habitantes del Andador Tabaqueros tenían *el conecte con la Delegación*
9. Hojas 121 a 122; 137 a 138; 160 a 165; 168 a 175; y audiencia-sentencia (11 hojas) todas del juicio de nulidad V-76315/2015 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Hoja 13 del escrito de ampliación de demanda.
10. Hojas 259 a 264 del juicio de nulidad V-76315/2015 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Hoja 12 del escrito de ampliación de demanda.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, A Usted Honorable **JUEZA DE DISTRITO**, atentamente solicitamos:

PRIMERO. Tener por desahogada, en tiempo y forma, la prevención realizada en su auto de fecha primero de octubre de dos mil dieciocho y determinar que el presente escrito forma parte integrante de la ampliación demanda de amparo del juicio en que se actúa.

SEGUNDO. Dejar insubsistente el apercibimiento decretado en el proveído del que se desahoga la prevención.

TERCERO. Admitir a trámite la ampliación de demanda de amparo del juicio en que se actúa.

CUARTO. En su oportunidad conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitada.

PROTESTO LO NECESARIO

Carolina González Nava

Ciudad de México a 08 de octubre de 2018

C. JUEZ ROSA MARÍA CERVANTES MEJÍA
JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.

Presente.

Martha Patricia González Nava; de generales conocidas, en el expediente citado al rubro que promoví ante Usted con el debido respeto que se merece comparezco y expongo:

Con fundamento en los artículos 1, 7, fracción II, 192, 193, párrafo segundo, 194, 197, 199, 271 de la Ley de Amparo; la quejosa viene a decir a su Señoría que la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado a las responsables.

La repetición del acto reclamado es evidente, tal como lo es el incumplimiento de la sentencia, en abierta dilación procesal, pues el plazo razonable para el cumplimiento de la ejecutoria ha sido por un periodo de aproximadamente siete meses, en clara violación al principio de no discriminación, principio inherente a las normas imperativas de Derecho Internacional. La destrucción al derecho a la vivienda, a la vida, a la libertad.¹

La declaración de la autoridad responsable, son afirmaciones que no encuentran sustento en las constancias que integran la indagatoria, pues de forma incongruente e ilegal son contrarias a las probanzas científicas emitidas por el perito Julio Eduardo Cabrera Godínez Ingeniero Arquitecto,

En este orden, se puede explicar dentro de una lógica formal y jurídica, el por qué en juicio constitucional la responsable con las probanzas públicas a que hace referencia el considerando SEXTO (escrito y anexos de demanda de amparo) y SÉPTIMO de la sentencia del juicio de amparo indirecto citado al rubro, hace declaraciones abiertamente contrarias a los autos, al igual que en su Pliego de Consignación (considerando SEXTO de la sentencia) que tuvo como consecuencia el juicio de amparo que ahora nos ocupa:

La repetición del acto reclamado es la actualización de segregación manifiesta, en sí y por sí mismo, representa el objetivo de anular el derecho a la vida, la amenaza constante de volver a ser torturado, o detenido arbitrariamente, sin certeza y seguridad jurídica².

Ello es así, la segregación en el caso concreto es manifiesto e indudable la vivienda de la quejosa tiene alto riesgo de derrumbarse, esto con aquiescencia del Estado mexicano, juicio de amparo 627/2017 y 260/2018, juicios que tienen relación con el presente juicio de amparo de la destrucción al derecho humano a

¹ Juicio de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018.

² Sin saber que delito se ha cometido y por consecuente ser juzgado ante un Tribunal de delitos oficiosos (carpeta judicial 011/0384/2017, la Representación Social no hizo del conocimiento a la imputada por qué se le estaba investigando), juicio de amparo indirecto 627/2017, que derivó en recurso de revisión 157/2017, asimismo, en recurso de reclamación. A la fecha, la Representación Social, sólo afirman que nos están investigando, acusándonos de delitos oficiosos, sin saber la parte quejosa qué delitos y cómo cometimos esos delitos oficiosos.

la vida, a no perder la libertad arbitrariamente, por consiguiente, mi vivienda está siendo destruida con connivencia del Estado mexicano.

Lo que hace del presente caso una segregación. Sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total; luego, el caso concreto presenta métodos semejantes a la técnica de tortura de la gota de "agua" en violación a los artículos 1.1.2, 2.1. a). b). d)., 3, 5, párrafo primero, inciso a), b), e): iii), 6) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en consecuencia, lógica y jurídica, en violación al artículo primero, 2 y 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Para", artículos 1, 2.C, 3, 4, 5, 6.a.,7, 12.

Con apoyo al artículo 271 de la ley de Amparo, los autos de la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01 (Anexo V del juicio de amparo citado al rubro), probanzas científicas y documentales públicas que constan en el considerando **SÉPTIMO** de la sentencia son contrarias a lo declarado por la autoridad responsable en el auto notificado en fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho y hojas anexas suscritas por la responsable de esta notificación: **"SE DA VISTA CON CUMPLIMIENTO"** de la sentencia. Por lo que se permite la quejosa, anexar escrito de denuncia al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México del veintitrés de diciembre de dos mil quince con número de folio **31629**, que robustece las amenazas, coacción e intimidación y connivencia con los probables responsables de los hechos que acontecen en el juicio de amparo 651/2017 que tienen relación con el juicio de amparo indirecto 627/2017.

La violencia institucional contra la quejosa se ha configurado plenamente en juicio de amparo, en abierta segregación se pretende que mi vivienda se derrumbe en violación al derecho a la vida, al derecho a no perder la libertad arbitrariamente, al derecho a la no ser objeto de violencia institucional, intimidación, amenazas, entre otros gravosos delitos. Por consiguiente, la violación al principio de no discriminación al derecho de acceso a la justicia es pleno.

Los delitos que la autoridad responsable está configurando en juicio de amparo son evidentes, hechos que tienen relación con el juicio de amparo 627/2017, los anexos son pruebas plenas que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pretende seguir fabricando *ad infinitum* delitos en contra de la suscrita y de mi familia, con la finalidad de privar a la suscrita y a mi familia de la libertad y de la vida.

Anexó como prueba de la destrucción del Estado de Derecho y la suspensión de derechos fundamentales inderogables, la NOTIFICACION PERSONAL del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la vista con cumplimiento que hace su Señoría a la suscrita, en la que la autoridad responsable, configura, violencia institucional, amenazas, intimidación, declaraciones de la responsable contrarias a las probanzas científicas y documentales públicas que integran los autos del Anexo V, del considerando **SEXTO** y **SÉPTIMO** de la sentencia, autos del juicio de amparo citado al rubro.

Ello es así, la NOTIFICACION PERSONAL y sus anexos del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, consta el oficio del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho signado por la agente del Ministerio Público Lic. Edith Guadalupe Ortiz Valencia, en la misma hoja al reverso informe del Policía de Investigación, al declaración de la responsable es incongruente al considerando **SÉPTIMO** de la sentencia (probanzas científicas y documentales públicas que constan en los autos del Anexo V del juicio de amparo citado al rubro) en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, en violación a los principios de la lógica formal, jurídica y violación al principio de no discriminación en relación a las normas imperativas del Derecho internacional.

Luego, con apoyo del artículo 217, 271 de la Ley de amparo, la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales que limita de forma total su ejercicio. Esto con sustento en la Tesis I.9o.P.82 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 2015, Tomo III, pág. 2094, Décima Época, bajo el texto y rubro:

“ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. ES OBLIGATORIO PARA LOS JUZGADORES DAR VISTA DE OFICIO A LA AUTORIDAD MINISTERIAL CUANDO DE AUTOS ADVIERTAN DICHA CIRCUNSTANCIA.

En términos de los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), se advierte que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que limita total o parcialmente su goce o ejercicio, esto es, la violencia contra la mujer incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad; por lo que el Estado también es responsable de los actos de violencia contra las mujeres perpetrados por particulares en tanto no adopte medidas con la diligencia debida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En ese sentido, cuando el juzgador advierta de autos que una mujer sufre, sufrió o puede sufrir algún tipo de violencia, oficiosamente deberá dar vista con tales hechos a la autoridad ministerial, a fin de que ésta determine lo que a su representación social corresponda. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Lo resaltado es propio

Ello es así, la anterior jurisprudencia mandata:

“cuando el juzgador advierta de autos que una mujer sufre, sufrió o puede sufrir algún tipo de violencia, oficiosamente deberá dar vista con tales hechos a la autoridad ministerial, a fin de que ésta determine lo que a su representación social corresponda. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO”. Lo resaltado es propio

Por consiguiente, el artículo 271 de la Ley de Amparo mandata:

“Cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado además de violar derechos humanos y garantías constituye delito, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público que corresponda”.

En este orden de ideas, la repetición del acto reclamado lo viene a robustecer el considerando **SEXTO y SÉPTIMO** de la sentencia, remarcando las pruebas científicas y las documentales públicas, que son contrarias a las declaraciones de la autoridad responsable lo autos del juicio de amparo en el que se actúa, resaltando las fojas 155 y 156, pues la autoridad responsable en abierta dilación procesal, intimidación, se burla de lo mandado en la ejecutoria de amparo, de lo verdaderamente expuesto y probado, el escrito signado por la autoridad responsable, sólo prueba la repetición del acto reclamado, la dilación dolosa, la



1
2
3
4

destrucción del Estado de Derecho, en violación al principio de no discriminación, hechos que resaltan a la vista de cualquier observador, el "pacto criminoso" entre autoridades responsables y probables responsables, son esencialmente remarcado en las fojas 155 y 156:

Esto es, las fojas 155 y 156 suscritas por el tercer interesado en este juicio, describen:

"... que el andador que colinda con la casa de ellas les ocasionaba daños a su propiedad por el paso de vehículos que transitan en el andador.

Lo cual fue verificado por personal técnico de la Delegación de nuestra demarcación, no encontrando daño alguno que haya propiciado el uso del andador según indicó el personal que acudió a la inspección técnica. Ya que los carros que ingresan lo hacen a una velocidad máxima de 5 a 10 km/hr. ya que sólo es utilizado por los familiares que ingresan a sus domicilios."

Ello es así, las Ampliaciones de Dictamen de perito Oficial en Ingeniería y Arquitectura Julio Eduardo Cabrera Godínez, que constan en autos de la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01 (Anexo V) demuestran de forma técnica y científica que el pasar de los automóviles por este Andador Tabaqueros, al carecer de muros de contención hace presión sobre la cimentación y estructura de la casa habitación habitada por la quejosa y mi familia, misma que puede derrumbarse por la conducta dolosa de los probables responsables y de las autoridades que tienen responsabilidad en el presente caso. Probanzas que resalta este Estado de excepción de derechos fundamentales en abierta violación al principio de no discriminación

Las fojas citadas en el párrafo anterior, constan en autos del juicio de amparo citado al rubro, son del pleno conocimiento de la autoridad responsable, los probables responsables circulan día con día con sus automóviles por el Andador Tabaqueros, en esta vía pública, las probanzas científicas en autos del Anexo V del juicio en que se actúa en relación al considerando SEXTO y SÉPTIMO de la sentencia, son probanzas idóneas del delito de tracto sucesivo.

La autoridad responsable actualiza día con día la repetición del acto reclamado, de forma lógica y jurídica prueba, el Estado de excepción de Derecho que acontece en el presente caso y el estado de segregación.

La foja 156 de autos, hace mención del "Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México", por lo que la quejosa se vio en la imperiosa necesidad de mostrar el juicio de nulidad V-76315/2015, substanciado y fallado³ en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, juicio que tiene estrecha relación lógica y jurídica con el juicio de amparo 627/2017, en el que se prosigue con el Estado de excepción de derechos fundamentales inderogables formalizado por las autoridades responsables en juicio de amparo citado al rubro, segregación manifiesta.

Tristemente la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01 que nos ocupa, fue uno de los hechos notorios que han dado origen a actos que formalizan un Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables en abierta violación al principio de no discriminación contra de la quejosa y de mi familia, en el que las autoridades responsables en estos innumerables juicios de amparo que han sido sustanciados en este Juzgado de Distrito, tienen un "pacto

³ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado la institución de la "cosa juzgada fraudulenta" utilizada en el caso *Carpio Nicolle y otros Vs Guatemala*³ y en el caso *Gutiérrez Soler Vs Colombia*. En éste último caso, el juez Sergio García Ramírez, en voto razonado, refiere a **sentencias que fueron dictadas de manera engañosa y que en realidad no pretenden hacer justicia sino simularla**. En la "cosa fraudulenta", **el juicio está viciado y por tanto no existe un auténtico proceso**. Así, el enjuiciamiento posterior "por los mismos hechos y en contra de las mismas personas no sería un nuevo juicio ni se desatendería el principio *ne bis in idem*":

criminoso", asimismo, innumerables abogados que tienen nexos con figuras políticas, tienen responsabilidad en el presente caso (juicio de amparo 627/2017 y juicio de nulidad V-76315/2015), amigos y familiares de los probables responsables que han actualizado todos los actos a su alcance en este Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01 fue uno de los motivos para detonar hechos que ni siquiera en conflictos armados están permitidos en los que se busca que la parte quejosa pierda la libertad y la vida, los demás derechos fundamentales nos han sido suspendidos *ad infinitum*; la destrucción física, psíquica y moral, total, de la quejosa y de mi familia, que pretende llevar el Estado es manifiesto, en la vulneración al debido proceso legal en juicio de amparo.

Es un hecho notorio los juicios de amparo que han derivado del presente caso la ejecutoria de amparo debe ser cumplida por todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, mismas que están sujetos a las mismas responsabilidades que la autoridad responsable⁴.

En este orden de ideas, es un hecho notorio que el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México tiene pleno conocimiento del acontecer del presente caso, siendo autoridad responsable en juicio de amparo indirecto 627/2017, juicio que está unido a la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01, y del juicio de nulidad con número de expediente **V-76315/2015**⁵, del procedimiento administrativo para la recuperación del bien del dominio público Andador Tabaqueros (modo tiempo y lugar de los hechos) con número de expediente PARA/LMC/DGJG/010/2015, sustanciado en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, tal como se menciona en la foja 156 de autos **"...que esta situación fue resuelta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México"**, ello es así, fue resuelta con aquiescencia del Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, destruyendo el Estado de Derecho y ejecutando suspensión de derechos fundamentales inderogables, en abierta violación al principio de no discriminación.

Juicio de nulidad **V-76315/2015**, que viene al caso, pues es una de las probanzas idóneas de los motivos antijurídicos que conlleva a que actualice día con día la repetición del acto reclamado por consiguiente de las declaraciones contrarias a los autos, intimidación, amenazas de la autoridad responsable.

En este orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis P.LXXXVI/96, Tomo III, junio de 1996, pág. 459, registro 2001106,

⁴ **Artículo 197 de la Ley de Amparo a la letra dice:** "Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo".

⁵ Autoridades demandadas: Jefe delegacional en Magdalena Contreras (**José Fernando Mercado Guaida**) y Director General Jurídico y de Gobierno en Magdalena Contreras; actor Odilón Nava de la Rosa (tercer interesado en el juicio de amparo citado al rubro).

⁶ **"GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.**

Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho.**

De forma manifiesta se ha depuesto a la justicia a merced de la ficción; los anexos y escrito signado por la autoridad responsable, luego la repetición del acto reclamado es manifiesto e indudable, la declaración de la autoridad responsable es contraria a los autos de la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01 (Anexo V), específicamente a los Dictámenes signados por el perito Julio Eduardo Cabrera Godínez, Ingeniero Arquitecto, probanzas científicas u documentales públicas que son hechos notorios pues constan en el considerando séptimo de la sentencia que ahora nos ocupa, asimismo en esta magnitud las fojas 155 y 156 de los autos del juicio de amparo citado al rubro.

En este punto con fundamento en el artículo 197 y 271 de la Ley de Amparo cabe anexar a este escrito, la denuncia hecha al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México de veintitrés de diciembre de dos mil quince, con número de folio 31629, misma que consta en autos de la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01 (Anexo V del juicio de amparo citado al rubro), que clarifica los motivos por los cuales la autoridad responsable actualiza la repetición del acto reclamado.

Al haberse decretado en el presente caso la suspensión de derechos fundamentales, y no regularse ejecutivamente nada al respecto, ello abrió de forma sistemática de forma ilimitada a la ilegalidad de los funcionarios, figuras políticas, particulares, en conjunto y/o "pacto criminoso", han actualizado delitos que pueden constituir de lesa humanidad. Nada se ha decretado, nada se ha regulado, nada se ha dicho, y las autoridades han hecho lo que les ha parecido, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, legalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día. Condenable (ilegal) desde cualquier punto de vista.

Ello es así, la repetición del acto reclamado de forma lógica y jurídica es indudable, la dilación dolosa se actualiza día con día, es un hecho notorio la tesis I.14o.C.4 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2014, Tomo IV, pág. 2215, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, menciona que cuando en el juicio de amparo se advierte una violación al derecho humanos de acceso a la justicia, en su vertiente de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que clarifica el presente caso, la autoridad responsable no actúa en los términos y plazos que establece la ley, es claro que el acto reclamado es de carácter negativo, lo que a su vez, obliga a la responsable a cumplir la ejecutoria de amparo, respetar el derecho de que se trate y cumplir con lo que éste exija, de acuerdo con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, el artículo 199 de la ley citada prevé que la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada dentro del plazo de quince días:

"INCIDENTE DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. TRATÁNDOSE DE ACTOS DE CARÁCTER NEGATIVO QUE IMPLICAN OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESPETAR LOS PLAZOS LEGALES, SU PROMOCIÓN PUEDE HACERSE HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE

Cuando en el juicio de amparo se advierte una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Juez responsable no actúa en los términos y plazos que establece la ley y, en consecuencia, se otorga la protección constitucional para el efecto de dar celeridad al procedimiento de origen y respetar los términos y plazos establecidos en la ley; es claro que el acto reclamado es de carácter negativo (omisión de la autoridad de respetar los plazos legales) lo que, a su vez, obliga a la responsable a cumplir la ejecutoria de amparo, respetar el derecho de que se trate y cumplir con lo que éste exija, de acuerdo con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si bien es cierto que el artículo 199 de la ley citada prevé que la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada dentro del plazo de quince días (se entiende a partir de que conozca el cumplimiento de la ejecutoria), no menos lo es que tratándose de estos casos, en que el acto reclamado es de carácter negativo, dicho plazo debe empezar a computarse hasta que la autoridad haya respetado los plazos legales o cuando

no lo haga porque ya han transcurrido. DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.”

En concordancia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó en la Tesis P./J. 10/2018 (10a.), Libro 53, abril de 2018, Tomo I, pág. 12, registro 2016694, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que la denuncia de repetición del acto reclamado su procedencia no está condicionada a que previamente exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto al cumplimiento del fallo protector, bajo el rubro y texto: **“DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR.**

Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considera que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional, dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo.”

Por lo que es dable mencionar que el considerando **SEXTO** y **SÉPTIMO** parte medular de la sentencia que derivaron a los puntos resolutivos, en el entendido que su Señoría le mandató a la autoridad responsable, realizará dentro del plazo de treinta días siguientes a que causará ejecutoria la sentencia todas las diligencias necesarias a efecto de poder determinar la averiguación previa, hecho que conlleva una dilación dolosa de aproximadamente un periodo de siete meses:

Considerando que el artículo 193, 194 y 197 de la Ley de Amparo mandata que si la sentencia de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, a su vez las autoridades que tengan o deban tener intervención con el cumplimiento de la sentencia, seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo, a su vez están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento.

Es de resaltar el párrafo segundo del artículo 193 de la Ley adjetiva, “Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo”

Ergo, la quejosa acudió el primero de agosto de dos mil diecisiete a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, hecho que recayó en el juicio de amparo indirecto citado al rubro, denunciando las mismas violaciones en las que de nueva vez está recayendo la autoridad responsable y su superior jerárquico, Responsable de Agencia (Alejandro Rangel Arenas) que es importante mencionar, que también tiene calidad de autoridad responsable.



Ahora bien, el considerando séptimo de la sentencia, en la antepenúltima hoja, párrafo veintitrés, inciso a) y b) a la letra dice:

“En vista de lo expuesto a lo largo de este fallo, procede conceder a Martha Patricia González Nava el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la agente del Ministerio Público (Edith Guadalupe Ortiz Valencia) Titular de la Unidad de Investigación Sin Detenido Unidad Dos de la Coordinación Territorial AO-3 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Alvaro Obregón, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, realice lo siguiente:

- a) Dentro del plazo de treinta días siguientes a que cause ejecutoria este fallo, lleve a cabo todas las diligencias necesarias a efecto de poder determinar la averiguación previa FMC/MC-2/T2/42/13-01
- b) Recabados los medios de prueba respectivos y que le fueron ordenados por la Juez Cuarto de Delitos No Graves de la Ciudad de México, determine la indagatoria de donde emana el acto reclamado”

Asimismo, el considerando **SEXTO** y **SÉPTIMO** del fallo protector que nos ocupa se desprende que la autoridad responsable actualiza la repetición del acto reclamado en desacato a lo ordenado.

En ese sentido es relevante mencionar que la autoridad responsable, no ha ordenado algunas de la totalidad de las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa tales como:

1. La clausura del lugar de los hechos, paso vehicular, que tiene cabida en Andador Tabaqueros, con la finalidad de preservar los indicios que día con día, perpetran el “pacto criminoso” y no se consume el injusto de que se derrumbe la casa habitación con la consabida pérdida de vidas humanas.
2. La citación del ahora otrora jefe Delegacional en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida y del Director General Jurídica y de Gobierno, del Órgano Político Administrativo en Magdalena Contreras, ambas autoridades pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México, asimismo, para que respondan sobre el injusto que tiene cabida en la vía pública Andador Tabaqueros, autoridades que tienen conocimiento de los hechos, y que tienen responsabilidad plena, asimismo simularon el juicio de nulidad con número de expediente **V-76315/2015**, del procedimiento administrativo PARA/LMC/DGJG/010/2015 objeto de este juicio de nulidad, expediente que derivó de la denuncia de obstrucción de justicia en la Averiguación previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01, ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México el seis de mayo de dos mil catorce; denuncia que inició de manera formal la suspensión de derechos fundamentales inderogables en el presente caso: el veintitrés de mayo de dos mil catorce, un representante de Jurídico y de Seguridad Pública, autoridades del Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras del Gobierno de la Ciudad de México, torturaron en conjunto con el Fiscal Desconcentrado de Investigación en Magdalena Contreras y el Responsable de Agencia de MC-2, a mis testigos de los hechos (juicio de amparo 627/2017). Otro hecho, que prueba la dilación procesal es la necesaria citación de la ahora Alcaldesa de la Magdalena Contreras, autoridad perteneciente al Gobierno de la Ciudad de México.
3. La diligencia de perito en fotografía del lugar de los hechos, en donde se sigue perpetrando día con día el “pacto criminoso”, Andador Tabaqueros.

4. La diligencia de perito en fotografía, de los automóviles que conducen los habitantes del Andador Tabaqueros, que día con día circulan por el paso vehicular que tiene cabida en el andador en comento, que hacen presión sobre los muros y estructura de mi casa habitación habitada, misma que está en riesgo alto de derrumbarse, tal como consta en autos de la indagatoria.

5. La diligencia de perito en fotografía forense del allanamiento de morada

Contrario a los puntos anteriores, la Representación Social acude a intimidar a la quejosa y a mi familia, actualizando violencia institucional, incriminación, amenazas, etc.

Ahora bien, en referencia al inciso E1, del considerando séptimo de la sentencia, a la letra dice:

E1) El diez de noviembre de dos mil dieciséis la agente del Ministerio Público (Edith Guadalupe Ortiz Valencia) Titular de la Unidad de Investigación Sin Detenido Unidad Dos de la Coordinación Territorial AO-3 de la Fiscalía Desconcentrada de investigación en Álvaro Obregón, de la Procuraduría de General de Justicia de la Ciudad de México, remitió la indagatoria al Fiscal Desconcentrado de investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección urbana B, para su continuación y perfeccionamiento legal; sin embargo, fue devuelta el dieciséis siguiente por diversas inconsistencias (fojas 750 y 752)

Por lo que la vulneración al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza día con día. (Considerando séptimo párrafo, tres, al catorce, de la Sentencia); hechos que conllevan cinco años con diez meses, sin que la hoy quejosa tenga acceso a la justicia, sin que ésta derive en persecución objetiva, tortura, incriminación, intimidación, amenazas, coacción, violencia institucional, entre otros, por tratar de que mi casa habitación no se derrumbe, máxime si los habitantes del Andador Tabaqueros en conjunto con autoridades de la Delegación Política en la Magdalena Contreras y policía acuden con marros a golpear los muros de mi vivienda, para provocar que al salir me detengan arbitrariamente (hechos denunciados en juicio de amparo 627/2017).

En esta guisa, el artículo 197 de la Ley de Amparo en correlación a lo que mandata el artículo 107, fracción XVI de la Constitución, en la que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia (superiores jerárquicos), están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley de Amparo.

En virtud, que les es exigible que cumplan, en sus términos, la sentencia que otorgó la protección federal, es decir, están sometidos al requerimiento y escrutinio que exige la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales para el cumplimiento irrestricto de las ejecutorias protectoras de derechos fundamentales en lo tocante al artículo 192, primer párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, puesto que esta autoridad responsable no actúa de forma autónoma, tiene superiores jerárquicos que tienen conocimiento de su actuar contumaz, el nuevo acto de autoridad está viciado con el que pretende prohibir el acceso a la justicia y no dar cumplimiento cabal a la sentencia protectora, con el objeto de que no se acaten en sus términos los efectos por los que se concedió el amparo a la suscrita quejosa, esto con fundamento en el artículo 193 y 197 de la Ley de Amparo.

Porque es lógico, que si la autoridad responsable en conjunto con sus superiores jerárquicos, en incumplimiento a la ejecutoria, emitiera un acto

repetitivo de las violaciones, como acontece en el caso, por las cuales se otorgó la protección constitucional, sería razonable y necesario que el Juzgado de Distrito, considere que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento por la autoridad responsable, puesto que esta autoridad, ha demostrado en instancia constitucional, la malicia, intimidación, con la que se conduce la conducta de la autoridad deriva en una espiral de impunidad; los innumerables juicios de amparo indirecto con número de expediente 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 260/2018, que han tenido como origen esta indagatoria, son hechos notorios para el Juzgado de Distrito, puesto que como se ha venido diciendo, han torturado a sangre fría, como plan preconcebido y esmeradamente planificar incriminación, intimidación, humillaciones, amenazas, inaccesso a la justicia, malos tratos, castigos infamantes, ... en contra de la suscrita y de mi familia, para exonerar arbitrariamente a los probables responsables de su responsabilidad penal y a otras autoridades; aun y cuando existen pruebas en contra de la autoridad responsable de su actuar doloso, esta, sigue destruyendo el Estado de Derecho.

En este empalme se hace necesario transcribir un resumen del considerando séptimo de la sentencia:

La amparista se duele de dos incumplimientos: el primero, relativo a la supervisión del Responsable de Agencia; y el segundo, concerniente a la formulación del plego de consignación por parte del Ministerio Público responsable, ambos actos vinculados con la dilación en la integración y determinación de la averiguación previa FMC/MC-2/T2/42/13-01.

Al respecto, es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional el razonamiento de la amparista encaminado a evidenciar que el atraso en la indagatoria de donde emana el acto reclamado, ha impedido que se determine, aunque para arribar a esa conclusión este Juzgado de distrito supla la deficiencia de la queja, al tenor de las razones siguientes:

De inicio es pertinente atender al contenido del primer párrafo del numeral 17, de la Carta Magna, que establece:

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibida las costas judiciales.

[...]

El derecho fundamental de acceso a la justicia cobra aplicación a la integración y determinación de la averiguación previa, ya que, por disposición de la Carta magna, el Agente del Ministerio Público debe proceder a la investigación del delito, lo cual, en modo alguno ha de realizar en forma irracional sino ajustándose a los plazos que norman su actuar, caso contrario, su proceder trasgrede derechos fundamentales del justiciable.

Así las cosas, es factible considerar que el trámite y resolución de los asuntos en la etapa de averiguación previa está sujeto al principio de expeditéz, razón por la cual, cuando en un juicio constitucional se considera vulnerado el numeral 17 de la Carta Magna, el juez de amparo deberá considerar:

- a) Cuál es el término con que cuenta la fiscalía para agotar la investigación*

- b) Si se han llevado a cabo las diligencias ordenadas por el órgano técnico, -sin que esto entrañe la posibilidad de estudiar el fondo de la denuncia a querella planteada por el gobernado-
- c) Sin han transcurrido un plazo razonable para que la Representación Social dicte la determinación que conforme a derecho corresponda.

[...]

j) Declaraciones ministeriales de Lucrecia Nava Gallegos, Marcos Nava Gallegos, Rosa Gallegos Caballero, José Luis Nava Gallegos, y Diego Arturo Lara Nava, rendidas el veintiséis de noviembre de dos mil trece, en las que expresaron que el andador que refiere la querellante en la que colocaron las rejillas de aguas pluviales, es parte de la vía pública de acuerdo al plano de urbanización de la Delegación Magdalena Contreras, y tampoco las vibraciones que refiere pudieron causar un daño a su vivienda (fojas 160 a 236, Anexo V)

- i. Es necesario resaltar en este punto, que los probables responsables citados en el inciso j del considerando SÉPTIMO de la sentencia, declaran su participación en el "pacto criminoso", declarando que es una vía pública (misma que ésta cerrada ilegalmente al libre paso), autos de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, ello es así:

Los probables responsables de nombre Lucrecia Nava Gallegos; Marcos Nava Gallegos; Rosa Gallegos Caballero (tercera interesada en juicio de amparo 627/2017); José Luis Nava Gallegos; Diego Arturo Lara Nava en compañía de su abogado José Máximo Pérez Romero, realizaron su declaración de forma escrita en compañía de su abogado de nombre José Máximo Pérez Romero (figura política), (fojas 187 a 236 del Anexo I del juicio de amparo 288/2017):

"...Debo manifestar, que el acceso al inmueble del suscrito, lo es por andador tabaqueros..., también debo mencionar que el andador que da acceso..., es un andador público porque este andador de acuerdo con los planos de urbanización de la delegación magdalena contreras, se contempla como vía pública...

Asimismo...la querellante pretenda hacer valer que son las vibraciones que dice se causan por la circulación de los vehículos sobre dicho andador las que causaron los daños a su propiedad..."

k) Ampliación de declaración de la querellante Martha Patricia González Nava de doce de diciembre de dos mil trece, en la que manifestó: que el diecinueve de enero de la citada anualidad sorprendió a su vecino Marcos Nava Gallegos en la azotea de su domicilio en compañía de un desconocido, sin autorización...

l) Declaración de Carolina González Nava rendida el doce de diciembre de dos mil trece, en la que expreso que el diecinueve de enero se encontraba con su hermana Martha Patricia en su domicilio y escucharon diversos golpes como si ranuraran la pared, al salir al patio se dieron cuenta que en la azotea se encontraba Marcos Nava Gallegos en compañía de otro sujeto con herramientas y al verlas se retiraron...

m) Oficio de seis de mayo de dos mil catorce, suscrito por el agente del Ministerio Público Investigador (**Ofelia García Monroy**), dirigido al Director Jurídico y de Gobierno de la Delegación Magdalena Contreras en el que solicitó informara si el andador vehicular que se encuentra en la calle Tabaqueros, 45, Colonia San Nicolás Totolapan, es vía pública (foja 251 Anexo V). Lo resaltado es propio.

ii. Es de resaltar que la agente del Ministerio Público Ofelia García Monroy es autoridad responsable en el juicio de amparo 627/2017

n) Oficio de tres de junio de dos mil catorce, suscrito por la Directora Jurídica (Dolores Hernández García) de la Delegación Magdalena Contreras y dirigido al agente del Ministerio Público investigador (**Ofelia García Monroy**), con el que le informa que el andador de la calle Tabaqueros, 45, es de dominio público, ello de acuerdo al plano 1363-a/45 de la Dirección General de Colonias Y tenencia de la Tierra (foja 254, Anexo V). Lo resaltado es propio

ñ) Oficio de doce de junio de dos mil catorce, suscrito por el agente del Ministerio Público Investigador (**Ofelia García Monroy**), dirigido al Director General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en el que solicitó informara si el andador vehicular que se encuentra en la calle Tabaqueros, 45, colonia San Nicolás Totolapan, es **vía pública** (foja 260, Anexo V). Lo resaltado es propio

o) Oficio de dos de julio de dos mil catorce, suscrito por el Director General de Administración Urbana de la Ciudad de México y dirigido al agente del ministerio público investigador (**Ofelia García Monroy**), con el que le informa que el andador de tabaqueros, ubicado entre la cerrada Tabaqueros y calle Tepetates de la Manzana 45, del pueblo de San Nicolás Totolapan, es considerado como vía pública de conformidad con lo señalado por el artículo 55 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito federal (foja 266, Anexo V). Lo resaltado es propio

x) El veinticinco de marzo de dos mil quince, compareció la querellante Martha Patricia González Nava y expresó que se exhibían diversos oficios suscritos por la Subdirección de licencias y alineamientos de la delegación magdalena Contreras (foja 431, Anexo V)

z) el doce de mayo de dos mil quince, compareció Martha Patricia González Nava ante la Agente del ministerio Público investigador para ratificar dos escritos que suscribió, asimismo tuvo conocimiento de diversos oficios suscritos por autoridades de la Delegación Magdalena Contreras, relacionadas con el permiso para una rampa de acceso a los lotes 6 a 11 de la Manzana 45, de la calle Tabaqueros, colonia San Nicolás Totolapan, así como la identificación del Andador tabaqueros como vía pública (fojas 441 a 442, Anexo V)

A.1) Ampliación de dictamen en materia de arquitectura de veintiséis de junio de dos mil quince, rendido por el perito Julio Eduardo Cabrera Godínez (foja 478 a 483, Anexo V)

ii. Ampliación de Dictamen, oficio: I-13597-2015, que a la letra dice:

“No se fabricó un muro de contención que absorba las presiones que ejerce dicha circulación, debido a la diferencia de niveles de desplante en ambos predios (de mayor altura el de circulación vehicular), para evitar que el muro y cimentación del predio que nos ocupa, reciba presiones, lo anterior toda vez que se aprecia por medio de calas, que el terreno natural está en contacto directo con el muro y cimentación del inmueble que nos ocupa, muro y cimentación que por sus características constructivas, no fueron diseñados para tal fin, generando con esas presiones movimientos en el inmueble que nos ocupa, y como consecuencia fisuras en sus elementos, los detalles citados se consideran de tracto sucesivo...”

Por lo que, en ese momento, se estableció la tipicidad de tiempo, modo y lugar, de la antijuridicidad: La conducta que, día con día se actualiza (**fojas 155 y 156 de los autos del juicio citado al rubro**), las declaraciones (rendidas, acompañados de su abogado de nombre José Máximo Pérez Romero) de los probables responsables de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece (inciso

j) rendidas ante el ministerio público, fueron demostradas con pruebas científicas; luego, cabe resaltar; que la autoridad responsable se niega a acatar su fallo protector, máxime que hace declaraciones contrarias a los autos que constan en el juicio de amparo citado al rubro, resaltando que se actualiza día con día la repetición del acto reclamado haciéndose parte del injusto, que no sólo conlleva daño a la propiedad doloso, sino que estos probables responsables en conjunto con autoridades pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México, planificaron graves violaciones a derechos humanos en contra de la suscrita quejosa y mi familia (juicio de nulidad V-76315/2015, juicio de amparo indirecto 627/2017).

B.1) *ampliación de dictamen en materia de arquitectura de treinta de septiembre de dos mil quince, suscrito por el perito Julio Eduardo Cabrera Godínez (foja 498 a 500, Anexo V)*

E1) *El diez de noviembre de dos mil dieciséis la agente del Ministerio Público (Edith Guadalupe Ortiz Valencia) Titular de la Unidad de Investigación Sin Detenido Unidad Dos de la Coordinación Territorial AO-3 de la Fiscalía Desconcentrada de investigación en Álvaro Obregón, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, remitió la indagatoria al Fiscal Desconcentrado de investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección urbana B, para su continuación y perfeccionamiento legal; sin embargo, fue devuelta el dieciséis siguiente por diversas inconsistencias (fojas 750 y 752)*

[...]

De esa relatoria, es factible concluir que desde el doce de enero de dos mil trece, cuando la ofendida Martha Patricia González Nava presentó su denuncia ante diversa agente del ministerio Público (Elvia Liliana Preciado Copado) titular de la Unidad de Investigación Dos Sin Detenido, de la agencia investigadora MC-2, de la Fiscalía Desconcentrada en Magdalena Contreras quien radicó la indagatoria bajo el registro FMC/MC-2/T2/42/13-01, y en veintiséis de febrero de dos mil quince, fue enviada a la Fiscalía desconcentrada de investigación en Álvaro Obregón a solicitud de la querellante para ser turnada a la agente del Ministerio Público (Edith Guadalupe Ortiz Valencia) Titular de la Unidad de investigación Sin Detenido Unidad Dos de la Coordinación Territorial AO-3, al uno de agosto de dos mil diecisiete, momento en que se presentó la demanda de amparo, transcurrieron aproximadamente cuatro años, siete meses, sin que se hubiera determinado la averiguación previa, lo cual es contrario a derecho, a pesar de ser consignada en tres ocasiones, sin corregirse los errores señalados por la Juez Penal de delitos No Graves que conoció de ésta.

Lo cual impacta directamente en la prerrogativa reconocida a favor de la quejosa en el numeral 17 de la Carta Magna, en su vertiente de que se administre justicia dentro de los plazos y términos que fije la ley.

Máxime, debe recordarse que el Ministerio Público cuenta con herramientas que el legislador estableció en la ley para hacer cumplir sus determinaciones-medios de apremio- cuyo empleo se justifica a partir del hecho de administrar justicia pronta, lo cual permite constreñir a cualquier ente obligado a observar las peticiones que el Fiscal formule, en aras de una pronta obtención

Siendo estos límites de la cosa juzgada material fueron los objetos y cuestiones que se decidieron y definieron en la sentencia.

Por lo anteriormente, expuesto y fundado a Usted **C. Juez Rosa María Cervantes Mejía Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal**; actualmente Ocurro y pido:

Primero. Con fundamento en el artículo 213 de la Ley de Amparo solicito atentamente a su Señoría, suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por la quejosa.

Segundo. Me tenga por presente con éste escrito, para que se sirva resolver conforme al texto del mismo.

Tercero. Tener en consideración las documentales que la suscrita acompaña a este ocurso en copia simple, asimismo las hojas que la suscrita anexó⁸, al escrito de denuncia de repetición del acto reclamado del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho:

- a) Documental del veintitrés de diciembre de dos mil quince, dirigido al Procurador General de Justicia de la Ciudad De México.
- b) Notificación del cuatro de octubre de dos mil dieciocho y sus anexos: oficio y documentales de la autoridad responsable, declaraciones de la responsable contrarias a los autos del juicio de amparo citado al rubro, probanzas idóneas de intimidación, violencia institucional, violación al principio de no discriminación.

PROTESTO LO NECESARIO

Marta Patricia González Nava

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2018

⁸ Hojas 63, 97, 259 a 264 (que conforma el expediente PARA/LMC/DGJG/010/2015), y copia se la audiencia-sentencia, todas del juicio de nulidad V-76315/2015 (es importante mencionar, que la quejosa no cuenta con copias certificadas de éste juicio, pues le fueron negadas por la Oficina de información pública, otorgando copias simples por un total de 409 hojas)



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-54

PROMOCIÓN
044048

CUADERNILLO DERIVADO DEL
RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018
EN LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018

En veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el escrito y anexos de los recurrentes, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia. Conste.

Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.

Por encontrarse en estudio el recurso de reclamación 1734/2018, agréguese al presente cuadernillo el escrito y anexos de los recurrentes.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 13, de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los recurrentes a Carolina González Nava; por hechas manifestaciones; reiterando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizadas para dichos efectos e imponerse de autos, a las personas referidas en el escrito de cuenta; y por exhibidas copias simples de documentales.

Entréguese el presente cuadernillo a la Ponencia del Señor **MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO**, y en su oportunidad, agréguese al expediente principal del recurso de reclamación en comento.

CUADERNILLO DERIVADO DEL
RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018
EN LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018

2

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA**
HERNÁNDEZ, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez
Gatica.

OACA.

El 29 OCT 2018, se notificó el acuerdo anterior a los interesados
por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26,
fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presente.

Carolina González Nava, por propio derecho; en mi calidad de representante común de la parte quejosa; señalando como domicilio para oír notificaciones el ubicado en Calle Tabaqueros número 43, Colonia San Nicolás Totolapan, Delegación la Magdalena Contreras en la Ciudad de México, C.P.10900; autorizando a Martha Patricia y/o a Julio César, ambos de apellidos González Nava, para oír notificaciones, aun las de carácter personal; ante Usted con el debido respeto que se merece comparezco y expongo:

Con fundamento en el principio de dignidad de la persona humana y el principio de no discriminación, principios básicos del artículo 29, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos que a la letra dice:

“Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”

Vengo a hacer ampliación de demanda de amparo, pues el Estado mexicano ha sometido de forma intencional a la parte quejosa a condiciones de existencia que han acarreado lesión grave a nuestra integridad física y mental, aunado a la fabricación de delitos que deriva en amenaza latente de pérdida de la libertad.

En este orden de ideas, el Estado mexicano, día con día, destruye la vivienda de los quejosos, lo que actualiza la búsqueda de la destrucción total física de sus habitantes.

En esta contextura, la parte quejosa insta atentamente a este Alto Tribunal del país, la revisión de las medidas adoptadas en la suspensión de derechos fundamentales no derogables cuya excepción está vedada por el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-8/87, menciona que, “el Pacto de San José es el primer instrumento internacional de derechos humanos que prohíbe expresamente la suspensión de las “garantías judiciales indispensables” para la protección de los derechos que no pueden ser suspendidos”.¹

Concluye la Corte en la opinión consultiva citada anteriormente, que “los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática”.

¹ Párrafo 37.

Luego, en el transcurso de un año con once meses, a la parte quejosa se le han suspendido las "garantías judiciales indispensables" para la protección de los derechos fundamentales no derogables.

Por lo que fundamento en el artículo 17, fracción IV y 108 de la Ley de Amparo, y los numerales 25.1 y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta parte quejosa viene a formular ampliación de demanda de amparo en el juicio 260/2018:

Por lo que para dar cumplimiento con el artículo 108 de la Ley de Amparo que a la letra dice:

"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:"

I. El nombre y domicilio del quejoso:

Carolina González Nava, Martha Patricia González Nava, Julio César González Nava e Israel González Nava.

II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad:

Bajo protesta de decir verdad, no lo conozco

III. La autoridad o autoridad responsable:

Secretario de Gobernación

IV. acto u omisión que se reclama:

La configuración de Estado de excepción *de facto*.

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación:

Las anomalías jurídicas e institucionales que entrañan el estado de excepción *de facto*, o la **supresión de derechos fundamentales no derogables**. La ilegalidad y perennización en que permanece el presente caso.

Ejemplo de ello, el cuatro de octubre de dos mil dieciocho en el juicio de amparo indirecto 651/2017 se hizo sabedora la parte quejosa, que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con aquiescencia del Estado mexicano, pretende que el delito de tracto sucesivo, les permite a los habitantes de una vía pública denominada Andador Tabaqueros que en conjunto con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a título de dolo lleven a cabo día con día la conducta para que la vivienda que habitan los quejosos se derrumbe, llegando a los extremos de anexar probanzas de intimidación, fabricación de delitos, con la consiguiente amenaza de pérdida de la libertad o de la vida, permitiendo la juez A quo ésta conducta ilegal desplegada por la responsable en juicio constitucional. (se anexa notificación que consta de cuatro hojas)

27
64

La adopción de las severas medidas en esta configuración de estado de excepción *de facto*, han traído como consecuencia un cuadro de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales no derogables.

Fabricación de delitos², para implementar tortura, amenaza de pérdida de la libertad y de la vida, intimidación, vejaciones públicas, humillaciones, ataques verbales, discriminación, segregación, violencia institucional, destrucción de la vivienda (llegando a los extremos de utilizar marros y cinces con la que golpean los muros de esta vivienda).

Es necesario explicar que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha estado a cargo de la aplicación de los métodos de tortura en el caso concreto, ejemplo de ello es la forma, en el que con fecha 23 de mayo de dos mil catorce en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el Fiscal, Responsable de Agencia, Representante de Jurídico, Representante de Seguridad Pública, por medio de tortura le advirtieron a la parte quejosa que no acudiéramos de nueva vez a la Procuraduría.

El Secretario de Gobernación, mediante informe justificado, acto mediante el cual hace oficial la **supresión de derechos fundamentales no derogables**, declarando que el presente caso le corresponde a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por consiguiente, la parte quejosa interpuso ampliación de demanda la cual fue desechada, lo que dio cabida a recurso de queja, dando los razonamientos jurídicos idóneos al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de que el presente caso es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más como se puede evidenciar, el Estado de Derecho ha sido destruido, resolviendo que el recurso de queja es infundado, probanza idónea de esta afirmación es el expediente de éste recurso 145/2018.

La certeza de que al solicitar ampliación de demanda, se resolverá que no ha lugar, derivando en recuso de queja, resolviendo que esta es infundada, por lo que se dictará sentencia después de dos meses, en el que se resolverá que se ha vulnerado ningún derecho. Por consiguiente, a la parte quejosa se le ha despojado de derechos fundamentales no derogables. en esta supresión de derechos fundamentales no derogables, deriva en total estado de indefensión, segregación, discriminación que no es otra cosa que un genocidio. La destrucción física, psíquica o moral, total o parcial en relación a la tipificación de la destrucción de un grupo como tal, en relación al derecho a no ser discriminado que se relaciona de manera directa a la Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio, convención que protege el derecho a la existencia.

Las conductas desplegadas por el Estado mexicano es la perennización de una supresión de derechos humanos.

Probanzas bastantes y suficientes, son los juicios de amparo 1082/2016, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018 que en sí y por sí mismos prueban la nula intención de hacer que se respete la Constitución, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es Parte, en clara desviación a la legalidad, la destrucción del Estado de

² Otro ejemplo de ello, es el Juicio de amparo indirecto 349/2017, substanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, policía de investigación acude a nuestro domicilio para señalarnos y amenazarnos que en cualquier momento nos privarán de la libertad y de la vida arbitrariamente.

derecho, la jurisprudencia de carácter obligatorio, ajustada al presente caso, brilla por su ausencia. La perennización de este estado de excepción *de facto* conlleva amnistía, las autoridades que han perpetrado graves delitos que constituyen de genocidio, han sido sustraídas de su responsabilidad penal. Basta ver la sentencia derivada del juicio de amparo 627/2017 del treinta de abril de dos mil dieciocho, el Juzado de Distrito ha resuelto que no existe interés jurídico, luego afectación a la parte quejosa, habilitando a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a aplicar métodos, *inter alia*, de tortura, violencia institucional, fabricación de delitos, amenaza de pérdida de la libertad al ejercer acción penal ante un Tribunal de delitos oficiosos, por hechos que la parte quejosa desconoce cómo, cuándo y en dónde cometimos el injusto, que los autorice a intimidar, coaccionar en interrogatorio, a que el defensor de oficio "ayude" en el método de tortura a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, entre otros graves delitos, que clarifican que en este estado de supresión de derechos fundamentales no derogables, los castigos corren a cargo de la Representación Social, pues el Secretario de Gobernación, tal como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, han girado oficios en el que decretan que esta Institución debe resolver el presente caso, hecho que conlleva el designio de exterminio.

El principio de Supremacía Constitucional (tratados internacionales, los preceptos constitucionales) ha sido destruido. Estos juicios de amparo no han sido ni son sustanciados de manera imparcial, es notorio que las decisiones conllevan la nula intención de que el estado de excepción cese, que sea reconocido el derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, que se reconozca el derecho violado, la **sanción**, reparación e indemnización a que tiene derecho toda víctima conforme al artículo 5, párrafo primero, inciso a), b), e). iii); 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Ello es así, la restricción indebida de la parte quejosa al derecho de acceso a la justicia ha sido formalizada en juicio constitucional, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales no son inatacables en todos los casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que "Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Difícilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos. La improcedencia o impertinencia de la resolución judicial interna que pone fin a una contienda puede advertirse a partir de diversos datos: error en el que incurre quien la emite, sin que se añada otro motivo de injusticia; o bien, ilegalidad o ilegitimidad con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones procesales que destruyen el debido proceso), sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la sentencia. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia -- formalmente-- atiende a la seguridad jurídica."³

Para considerar en el presente caso la legitimidad de cosa juzgada que solo se justifica por la autoridad que le trasmite la regularidad del proceso y la legitimidad en la actuación del juzgador, en el que en el proceso no importa las pruebas presentadas, estas no han sido admitidas o bien no

³ Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia*, Sentencia De 12 de septiembre De 2005.

han sido tomadas en cuenta, o bien resolver contrario al caso concreto, cambiando lo verdaderamente expuesto y probado, en la inaplicación de jurisprudencia de carácter obligatorio, lo que hace que la sentencia o resoluciones pronunciadas no sean genuinas, no basta simular un juicio de amparo y emitir una sentencia que contiene vicios, luego, no se desatiende el principio *ne bis in idem*, pues no se han observado los preceptos Constitucionales, los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos que el Estado mexicano ha firmado y ratificado.

En este punto es menester traer a colación el juicio de amparo 74/2018, que fue substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, la parte quejosa acudió ante las amenazas de pérdida de la libertad y de la vida ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que en conjunto con los habitantes de la vía pública denominada Andador Tabaqueros en “pacto criminoso” con figuras políticas (juicios de amparo 651/2017 y 627/2017, anexos V y I, respectivamente) nos procuran certeza que en cualquier momento ocurrirán estos hechos, aunado a la destrucción de la vivienda de la parte quejosa y despojo del lugar en donde está edificado nuestro domicilio.

Todo lo anterior clarifica en probanza idónea, el por qué, la autoridad jurisdiccional ha recibido a trámite los escritos de solicitud de juicio de amparo que la parte quejosa a suscrito, los innumerables juicios de amparo son prueba idónea de lo que han hecho del caso concreto, dar validez a las graves violaciones sistemáticas y flagrantes, se pretende hacer legal lo ilegal, el estado de excepción de derechos no derogables, amnistía ilegal a las graves violaciones sistemáticas y flagrantes empleando la institución procesal del amparo, el engaño resalta a la vista, se acotan razonamientos tendenciosos en el que se considera que aun cuando las probanzas se dirigen a un estado de excepción *de facto* de derechos fundamentales no derogables. Los órganos jurisdiccionales que han tenido conocimiento del presente caso han resuelto un “engaño” que se pretende dar como cosa juzgada, hecho que es inadmisibles pues el proceso ha sido “a modo” y la sentencia sirve a determinado designio, mejor que al objetivo de justicia.⁴

La dignidad humana de la parte quejosa ha sido pisoteada en juicio de amparo, en el que el derecho no existe, los tratados en materia de los derechos humanos no existen, la ilegalidad permea el presente caso, se señala al torturador, se presentan pruebas (expedientes de los juicios de amparo y sus anexos), de fabricación de delitos, de tortura, de atentados en contra de la vida, coacción, intimidación, violencia institucional, Dictámenes (pruebas científicas) de que la vivienda de la parte quejosa está siendo destruida con aquiescencia del Estado mexicano; más, lo que se ha hecho es instalar un arsenal judicial represivo a fin de descartar y nulificar toda posibilidad de retorno a la normalidad, resoluciones que validan el despojo de la vigencia de los derechos humanos fundamentales.

Más lo anterior, solo resalta la segregación manifiesta, la destrucción de la dignidad humana, la normalidad de un estado de excepción *de facto*, que conlleva genocidio.

⁴ Párrafo 17, *idem*.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hechos que son contrarios al artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone:

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

El artículo anterior recoge la institución procesal del amparo, en el que dispone que debe ser sencillo y breve, tal como lo ha manifestado la Corte en opinión consultiva OC-8/87 que, “tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, **lo son también los que están señalados de manera expresa por el artículo 27.2 como no susceptibles de suspensión en situaciones de emergencia.**” Lo resaltado es propio.

VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame;

Artículo 1, 14, 16, 17, 22, 27, 29, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Para”; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, Convención sobre los derechos del Niño (artículo 6); Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

VII. Los conceptos de violación.

Violación a las garantías judiciales indispensables a que alude el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos en relación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción ⁵.

La parte quejosa solicita atentamente al Máximo Tribunal del país, que sea revisado el Estado de excepción *de facto* y/o la supresión de derechos fundamentales no derogables en el caso concreto:

Las medidas tomadas en el caso concreto supera las restricciones permitidas en situaciones ordinarias, castigando con severos castigos a la

⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86

parte quejosa por circunstancias que no encuentran motivos legales, estos son motivos de odio, de segregación, discriminación, de genocidio.

La validación de los métodos de tortura, fabricación de delitos, amenazas de pérdida de la libertad y de la vida, la amenaza de volver a ejercer acción penal ante un Tribunal de delitos oficiosos, prohibición de acudir al Ministerio Público so pena de tortura o de detención ilegal, en el mejor de los casos, hechos que configuran un estado de excepción *de facto*.

La perpetuación lisa y llana en la aplicación de un estado de excepción *de facto*, en el presente caso se ha establecido en regla, anomalía, la legalización en juicio constitucional, la violación impune de los derechos más fundamentales negar las graves violaciones sistemáticas y flagrantes, la excepción de derechos fundamentales no derogables, disfrazada de Estado de Derecho. Hecho que atenta contra el sistema democrático que dispone límites infranqueables a derechos esenciales de la persona.

En este orden de ideas el Estado mexicano ha vulnerado el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los artículos anteriores constituyen el marco jurídico ineludible de los Estados Partes, la suspensión de derechos no derogables, es la suspensión en el caso concreto del Estado de Derecho, hecho que ha autorizado a las autoridades jurisdiccionales, al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Secretario de Gobernación a apartar su conducta de la legalidad.

En el presente caso la parte quejosa está atendida a la nada jurídica, las violaciones de derechos humanos, la dignidad de los quejosos ha sido destruida. Los factores que han influido son los nexos políticos de los probables responsables en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01 y familiares de éstos, han empleado en conjunto con servidores públicos a las Instituciones en una destrucción del Estado de Derecho, la suspensión *de facto* de derechos fundamentales no derogables, han derivado en la solicitud de la institución procesal de juicio de amparo 1082/2016, 1118/2016, 288/2017, 349/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018, juicios que representan una utopía en el que se ha formalizado un Estado de excepción. Han creado a los quejosos un clima de terror y miedo.

La aplicación abusiva e injustificada del poder público es representado por los innumerables juicios de amparo citados en el párrafo anterior, los expedientes son probanzas de la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos en el caso concreto.

El orden público y democrático radica es el fortalecimiento y el deber de defender los derechos humanos de los gobernados, más en el presente caso, el poder público ha destruido los derechos humanos más fundamentales de la parte quejosa.

La función del Estado es defender el orden público, asegurar que los derechos humanos no sean trasgredidos. Pues, los derechos humanos y las garantías constitucionales para su protección, y las Convenciones sobre derechos humanos, le generan obligaciones *erga omnes* al Estado mexicano ante la Comunidad Internacional.

Los derechos fundamentales no derogables, encuentran su fundamento en la protección de la dignidad inherente de la persona humana, por lo que

no existe legitimidad alguna del Estado mexicano para seguir vulnerando los derechos fundamentales no derogables de la parte quejosa, misma que insta atentamente a este Alto Tribunal del país, el acceso a la protección constitucional, a que nuestros perpetradores de violaciones sistemáticas y flagrantes sean sancionados, que los graves daños físicos, psicológicos y morales sean indemnizados por el Estado mexicano, que éste reconozca, que los quejosos tenemos derechos fundamentales no derogables, solicitud que está consagrada en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado de excepción en el presente caso es una anomalía del objetivo de un genocidio, para proteger intereses personales del poder público finalidad que está alejado de la defensa de la democracia y de las instituciones del Estado de Derecho.

La carencia de efectividad en los recursos de garantía judicial han redundando en perjuicio de la libertad, integridad y del derecho a la vida en el que se ha negado la protección de los derechos y libertades de la parte quejosa, los innumerables juicios de amparo son probanzas idóneas, se pretende dar por cosa juzgada la anomalía del estado de excepción de derechos fundamentales no derogables, segregando a la parte quejosa para un genocidio eminente. Despojados de derechos fundamentales inderogables la parte quejosa se atiene a la nada jurídica. Los actos arbitrarios de las autoridades responsables han sido validados por decisiones jurisdiccionales.

Las violaciones sistemáticas y flagrantes a los derechos humanos se han vuelto impunes, las facultades de las autoridades, en correlación a la utopía del derecho a la garantía de un amparo para la defensa de los derechos humanos fundamentales por fuerza acarrearla la destrucción total de la parte quejosa el derecho a la vida; la libertad e integridad personal, el derecho al debido proceso y a la justicia han desaparecido, formalizando la práctica de la tortura, de fabricación de delitos, de ejercicios de la acción penal ante Tribunales de delitos oficiosos, en el estado latente de excepción a, *inter alia*, un debido proceso, humillaciones públicas. Las investigaciones penales son *ad infinitum*, la pérdida de la libertad y de la vida, las denuncias de las graves violaciones sistemáticas y flagrantes a nuestros derechos humanos no derogables sus perpetradores cuentan con aquiescencia del Estado mexicano.

Ninguno de los tratados o convenciones que el Estado mexicano ha firmado y ratificado autorizan a suspender las garantías judiciales indispensables para proteger y defender los derechos humanos fundamentales, contenidas en los referidos instrumentos internacionales.

Las violaciones sistemáticas y flagrantes a los derechos humanos de la parte quejosa, tales como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad e integridad del ser humano, nos ha colocado en un estado de absoluta indefensión con grave violación a los derechos de justicia, de protección jurisdiccional.

A pesar de los convincentes medios de prueba aportadas que conforman los innumerables juicios de amparo, se válida como cosa juzgada la supresión de derechos fundamentales no derogables, negándose llanamente la protección jurisdiccional a la violación sistemática y flagrante de derechos humanos por medio de la institución procesal de juicio de amparo.

11
12
13
14

La tortura en el presente caso es una práctica usual, investigaciones penales de toda clase, la amenaza eminente de detención sin saber qué delito se cometió, ataques verbales, tentativas de homicidio, el temor de la parte quejosa es fundado en el que se nos ha impuesto tormentos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y en Tribunales de delitos oficiosos. Sin recursos legales para la salvaguardia de nuestros derechos humanos más fundamentales.

En situaciones de plena normalidad existe un goce absoluto de derechos fundamentales no derogables, en la que ninguna autoridad le es conferido poderes absolutos de erigirse como torturador, que fábrica delitos para causar verdaderos daños, en el que no se válida delitos de lesa humanidad, so pretexto de una investigación penal, con amenazas de pérdida de la libertad y de la vida, en el que no se ejerce acción penal ante un Tribunal de delitos oficiosos sin saber la víctima de que se le acusa, qué delito cometió, suspendiendo el derecho de presunción de inocencia, en que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se ha erigido como verdugo en este Estado de excepción **o supresión de derechos fundamentales no derogables.**

El párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, define la finalidad última del Derecho al expresar que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar, el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Y en el artículo 30 de la citada Declaración Universal dispone:

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquier de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración

La violación a la dignidad, hace del presente caso, que los actos o decretos dictados *de facto* o bien derivados de resoluciones, sean hechos nulos que ilegítiman tales actos o resoluciones.

La naturaleza *erga omnes* de las obligaciones que engendran los tratados y convenios de derechos humanos, mandatando que sus normas deben aplicarse sin discriminación alguna. Derechos que contienen una doble dimensión la obligación del Estado de cumplirlas y el derecho de reclamar su violación, máxime si ésta es sistemática y flagrante.

El estado de excepción de Derecho y de violaciones a derechos humanos fundamentales, derechos protegidos por normas del *ius cogens*⁶; en

⁶ artículo 53 de la Convención de Viena de fecha 23 de mayo de 1969, ratificándola el Estado Mexicano en misma fecha, menciona que "es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario, y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general que tenga el mismo carácter.

relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.⁷ han sido expuestos ante el Presidente de la Republica, representado por la Secretaria de Gobernación en juicio de amparo indirecto 909/2018, solicitando ésta responsable, se le niegue a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Esta negativa perenniza el Estado de Excepción *de facto* que obedece a factores políticos que ha implicado la permisión a la supresión del Estado de Derecho, autorizando a los Gobernantes a apartar su conducta de la legalidad. Pues la noción de un Estado Democrático es inherente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Ello es así, las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la defensa y protección de los derechos humanos son inseparables.

Las normas y principios que regulan los Estados de Excepción se han inobservado en el presente caso, los requisitos que los estados de excepción deben reunir para que su regulación se ajuste a las exigencias de las normas internacionales.

En estos razonamientos lógicos y jurídicos, la parte quejosa solicita atentamente a este Alto Tribunal del país su revisión, por las razones siguientes:

El principio de legalidad es consustancial a la naturaleza de la institución del Estado de Derecho, la inexistencia de normas y control, tanto internos como internacionales que lo regulen.

El principio de proclamación, la inexistencia de este principio, hace de éste Estado de excepción *de facto*.

Hecho que ha redundado en la permisión a la supresión del Estado de Derecho, autorizando a los Gobernantes, Instituciones a apartar su conducta de la legalidad.

El impacto directo e ilegal a la en el presente caso ha derivado en la nulidad al derecho al principio de dignidad y no discriminación, la suspensión de derechos fundamentales inderogables, situación que *de facto* vive la parte quejosa, obedece a razones ilegales.

La vulneración al principio de proclamación del estado de excepción apunta a la condición indispensable para su validez, aun cuando ha sido proclamado en juicio constitucional, su temporalidad es incierta, pues a la fecha conlleva un periodo de cinco años con diez meses, que comprende una temporalidad de un año con once meses en juicio de amparo en el que existe la proclamación *de facto*.

La circunstancia que lo justifica, el periodo por el cual se implanta, las medidas que autoriza, los mandatos de la Constitución, los tratados y convenios que se han de desaplicado en el presente caso por las medidas de excepción.

El no cumplimiento de la comunicación oficial, que cabe decir, debe ser inmediata ante el Secretario General de las Naciones Unidas en lo que respecta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en cuanto a las Convenciones regionales, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y el Secretario General del Consejo de Europa,

⁷Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.



92

respectivamente, debe señalar expresamente las medidas que autoriza, las razones que motivaron este largo periodo de suspensión.

La notificación formal juega un papel sumamente importante, en tanto prerequisite cuyo cumplimiento habilita a los Estados Parte a prevalerse de las cláusulas de derogación.

La parte quejosa siendo la afectada por las medidas de suspensión que el Estado mexicano ha impuesto, aunque lo haya hecho de conformidad a alguna norma nacional que la parte quejosa desconoce, como bien nos lo han comunicado en juicio de amparo, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México⁹, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, actuando en Pleno la juez A quo (Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal) o bien, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura Federal Instituto Federal de Defensoría Pública, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Contraloría General de la Ciudad de México, que, *somos ignorantes, que no tenemos para el pasaje⁹, que no entendemos*, que no es competencia de las Instituciones, que la tortura, vejaciones, humillaciones, intimidación, amenazas de pérdida de la libertad, atentado en contra de la vida... no causa daño a nuestra esfera jurídica, más, no han mostrado la comunicación y/o notificación oficial de la excepción frente al orden internacional, cuyo cumplimiento habilita a los Estados a prevalerse de las cláusulas de derogación, máxime si se han desaplicado tratados y convenios en materia de los Derechos Humanos que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado. Por consiguiente, los suscritos presumimos que éste Estado de excepción de derechos o supresión de derechos fundamentales no derogables es *de facto*.

La información jurídica que sustenta lo anterior son los juicios de amparo indirecto siguientes: 1082/2016, 1118/2019, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018, todos substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, a excepción de los juicios 349/2017 y 74/2018 que fueron substanciados en el Juzgado Quinto y Tercero de Distrito, respectivamente.

No obstante, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió encarecidamente la solicitud de juicio de amparo con número de expediente 909/2018, en éste estado de suspensión *de facto*, la responsable Secretaría de Gobernación en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó se nos negara el amparo y protección de la Justicia de la Unión, hecho que hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera oficiosa manifieste lo conducente, al ser consecuencia lógica y jurídica de los amparos promovidos y las resoluciones que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito han hecho del presente caso. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que "Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Difícilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de

⁹ Consejo de la Judicatura Federal Instituto Federal de Defensoría Pública

derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos. La improcedencia o impertinencia de la resolución judicial interna que pone fin a una contienda puede advertirse a partir de diversos datos: error en el que incurra quien la emite, **sin que se añada otro motivo de injusticia**; o bien, **ilegalidad o ilegitimidad** con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones procesales que destruyen el debido proceso), **sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la sentencia**. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia -- formalmente-- atiende a la seguridad jurídica."¹⁰

Pues sin justificación objetiva, se persiste en el mantenimiento del estado de urgencia en restricción institucionales en el caso concreto por un tiempo indeterminado, con causas subyacentes que no se han proclamado, que vale traer a colación, pues en días anteriores a este escrito, la oficial de seguridad Elvia Camacho Martínez adscrita a la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación en conjunto con su hermana María de la Luz Camacho Martínez¹¹, volvieron a agredir¹² a la parte quejosa, amenazando con el Presidente de la Republica electo, Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, mencionando que nos van a *desaparecer*. Hecho que hace presumir¹³ la **perennización** del estado de excepción, con el objetivo de genocidio.

Luego, las autoridades responsables y jurisdiccionales no han dado razones jurídicas sobre los presupuestos de hecho que los ha llevado a la perennización del estado de excepción del presente caso. **Lo que hace hecho notorio, que está suspensión se debe a motivos de odio, económicos, sociales, de género, destrucción de un grupo, las agresiones han sido constantes tal como la aplicación de castigos prohibidos, incriminación, tortura, humillación, penas infamantes, intimidación, entre otros motivos ilegales. Hecho que sólo tienen cabida en un decreto de facto de genocidio.**

El principio de proporcionalidad que debe imperar en el estado de excepción, éstos deben ser en relación de adecuación entre éste y los medios utilizados para repelerlo, ya que, se han desaplicado los Convenios y tratados, siguientes: *inter alia*, la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración sobre la raza y los prejuicios

¹⁰ Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia*, Sentencia De 12 de septiembre De 2005.

¹¹ Juicio de amparo indirecto 74/2018, substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del primer Circuito y 260/2018 substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de la misma Materia y Circuito

¹² Empleando otros conceptos para dirigirse a la parte quejosa y al señor Presidente electo.

¹³ Pues sus agresiones y amenazas se han cumplimentado a cabalidad, los juicios de amparo y sus anexos son pruebas plenas de esta afirmación.

raciales, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Por consiguiente, las restricciones impuestas en el presente caso, están encaminadas a la destrucción de los derechos reconocidos en los Tratados y Convenios en materia de los Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, pues en esta perennización de suspensión de derechos, han sido desaplicados éstos. Lo que implica la perpetuación de la suspensión de derechos fundamentales inderogables. Se ha desvinculado del artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, excluyendo derechos que son inherentes al ser humano.

Las normas de excepción impuestas en el presente caso han reemplazado al principio de Supremacía Constitucional, cuya complejidad en esta desviación se pretende legitimar en juicio constitucional. En consecuencia lógica y jurídica, se hace necesario la intervención de este Alto Tribunal del país:

La discriminación en la impartición de justicia, la intolerancia en la protección de los derechos humanos en relación a la violación al principio de no discriminación, principio vinculado con el derecho de toda persona a la existencia sin distinción de origen social, posición económica.

Resaltando que el objetivo de genocidio por no tener familiares y/o amigos con nexos políticos, económicos, sociales, de género, de odio, etc., que derivan en privilegios de amnistía legal, se pretende destruir a la parte quejosa legalizando la supresión de derechos fundamentales no derogables.

El principio de no discriminación su elemento material es la protección del individuo, su pertenencia a un determinado grupo humano, derecho que protege la diferencia tanto económica, social, política, de género, o de cualquier otra índole.

La vulneración al principio de no discriminación por condiciones sociales, económicas, o por razones de odio, de género o de cualquier otra condición como el de no contar o pertenecer a la clase política, son distinciones que versan sobre el goce y ejercicio de los derechos fundamentales.

La destrucción física, psíquica o moral, total o parcial en relación a la tipificación de la destrucción de un grupo como tal, en relación al derecho a no ser discriminado que se relaciona de manera directa a la Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio, convención que protege el derecho a la existencia.

El presente caso es un ejemplo claro y extremo de discriminación, de la formalización de este estado de excepción en juicio de amparo.

Los juicios de amparo indirecto, 1082/2016, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018. Por si y en sí mismos, representan segregación manifiesta, desconociendo el principio de la igualdad en dignidad y derechos, en consiguiente la denegación del derecho a la vida y a la libertad, la negación de la igualdad en dignidad, la imposición deliberada a condiciones de existencia que por consecuencia lógica acarreará la destrucción física, psicológica y moral, total.

La discriminación en la aplicación de la ley es manifiesta e indudable la denegación a los derechos de igualdad ante la ley y de protección de la ley sin ningún tipo de distinción.

1951
52

Los actos o las prácticas que a la fecha el Estado mexicano ha impuesto en el presente caso, sus efectos se explican en los juicios de amparo citados anteriormente, la discriminación en la aplicación de la ley.

Las resoluciones de suspensión de derechos fundamentales que en juicio de amparo se han dictado, se ha anulado el reconocimiento a los derechos humanos y libertades fundamentales.

La segregación de derechos fundamentales es manifiesta e indudable, promueve el odio manifiesto. Basta ver los autos de los innumerables juicios de amparo que versan sobre los mismos hechos, los expedientes que en conjunto con sus anexos son pruebas indudables de lo ahora afirmado, el derecho al acceso a la administración de justicia ha sido vedado, el derecho a la seguridad e integridad personal ha desaparecido.

La vulneración al principio de igualdad, la ausencia de una razón aceptable que sustente la distinción en la aplicación de la ley, negar el derecho a su ejercicio, por consiguiente, en juicio constitucional no se da razón lógica y jurídica suficiente para fundar el derecho a distinguir a la parte quejosa. El de validar que el Estado Mexicano puede someter a cualquier persona a condiciones de existencia que acarrearán su destrucción, física, psicológica, total.

Pues no se puede invocar razonamientos jurídicos que no estén ajustados al caso concreto, para que estos resulten validos tendría que resolverse el presente caso ajustado a derecho.

Más en consecuencia lógica y jurídica inmediata, la destrucción del Estado de Derecho es manifiesta e indudable, basta leer las resoluciones del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (recurso de queja 145/2018, etc.), en el que resuelve contrario al principio de Supremacía constitucional en relación al principio de no discriminación, por consiguiente, destruye el Estado de Derecho, el Estado Democrático, y el derecho a la protección de los derechos humanos.

Por un periodo de un año, con cuatro meses, los recursos que han derivado del presente caso, han recaído una y otra vez en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito¹⁴, los argumentos de corte despectivo resaltan a la ausencia de una razón aceptable que sustente la distinción en la aplicación de la ley.

Las resoluciones en el presente caso por sus consecuencias concretas deponen el acceso a la justicia a la discriminación, la imposición deliberada a condiciones de existencia que por consecuencia lógica acarrearán la destrucción física, psicológica y moral, total de la parte quejosa.

Los derechos fundamentales inderogables constituyen un derecho, la autorización otorgada por una norma imperativa de Derecho Internacional a las personas para exigir la realización de una conducta o su abstención.

La justificación de las decisiones jurídicas en el presente caso, no están ajustadas al principio de Supremacía Constitucional, por consiguiente, existe una clara segregación a derechos fundamentales inderogables.

¹⁴ Comparables a la resolución del juicio de nulidad con número de expediente V-76315/2015 substanciado en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que versó sobre el dominio particular de una vía pública, la destrucción del Estado de derecho es patente.

La igualdad ante la ley cuando la ley no distingue, se sustenta en la dignidad, fundamento de los derechos humanos, la dignidad es inherente a la vida y a la forma en que ésta se verifica. Por consiguiente, la segregación degrada a la persona.

El principio de no discriminación constituye un elemento fundamental inherente a los derechos humanos protegidos mediante el juicio de amparo, derecho subjetivo público que faculta al gobernado para reclamar una acción u abstención frente al Estado que tiene la obligación correlativa, derecho absoluto oponible *erga omnes*, puesto que respecto del Estado significa un deber de abstención.

La limitación de derechos contraviene el derecho humano de acceso a la justicia, el daño que produce, sus consecuencias reales se manifiestan en relación a la anulación de derechos fundamentales.

El principio de no discriminación se presenta como el derecho de acceso a la justicia el derecho a tener derechos, las condiciones de igualdad han sido vedadas, los derechos humanos en el caso concreto han sido nulificados, un ejemplo de ello es el derecho a la vivienda (juicio de amparo 651/2017) en relación al derecho a la libertad, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la vida, el derecho a no ser intimidado, amenazado, humillado, el derecho a no ser juzgado y condenado por autoridades no jurisdiccionales, sin derechos a que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con toda impunidad fabrique delitos falsos ante un Tribunal de Delitos oficiosos, en el que no se tiene derecho a un debido proceso, sin derechos a no ser torturado, sin derechos a una defensa adecuada¹⁵, sin derecho a saber el por qué se investiga o los motivos subyacentes por los que se nos acusa penalmente *ad infinitum* a la parte quejosa, sin derecho a no ser amenazado que en cualquier momento perderemos la libertad o la vida, sin derecho a presentar una denuncia o querrela aun cuando han atentado en contra de la vida de los suscritos, sin derecho a no ser objeto de violencia institucional, sin derecho a no ser intimidado en juicio constitucional, sin derecho al proyecto de vida,... La negación de éstos derechos es implícita en juicio constitucional, la denegación de derechos fundamentales, alimentan la vulnerabilidad y el estigma, la legalización de la impunidad. La restricción ilegal al reconocimiento de derechos fundamentales inderogables, derechos que están protegidos por normas convencionales.

La persecución sistemática y flagrante de la parte quejosa, la amenaza de volver a ser torturado, la amenaza de perder la libertad arbitrariamente, es la persecución y destrucción del plan de vida, por consiguiente, la destrucción física, psicológica y moral, total (juicio de amparo indirecto 651/2017, 627/2017, 260/2018)

La destrucción de la vivienda que habita la parte quejosa, en los extremos de utilizar marros y cinces para que se derrumbe ésta (juicio de amparo 651/2017).

El Estado de Derecho ha sido destruido totalmente, sin garantías judiciales para el restablecimiento del cauce constitucional, sin la

¹⁵ Tomando en cuenta que el defensor de oficio en el presente caso en interrogatorio "participó" en la aplicación del método de tortura, o el defensor particular en connivencia con el Ministerio Público, en violación flagrante al debido proceso ante el Tribunal de Delitos oficiosos (juicio de amparo 627/2017)

posibilidad legal de exigir el establecimiento de derechos fundamentales, clarificando los extremos de un genocidio aplicado al caso concreto.

La destrucción al proyecto de vida en el caso concreto en relación a los sufrimientos ignominiosos que el Estado mexicano ha arrastrado a la parte quejosa en un transcurso de cinco años, con diez meses, en la destrucción física, psicológica y moral, como plan preconcebido, se clarifica en las siguientes notas periodísticas extraídas del libro *La Lucha por la dignidad. Teoría de la felicidad política*, de José Antonio Marina y María de Válgoma, página 11, en la que traen a colación un par de notas publicadas en el *The New York Times*:

“En Sierra Leona, los guerrilleros cortan la mano derecha de los habitantes de una aldea antes de retirarse. Una niña, que está muy contenta porque ha aprendido a escribir, pide que le corten la izquierda para poder seguir haciéndolo. En respuesta, un guerrillero le amputa las dos. En Bosnia, unos soldados detienen a una muchacha con su hijo. La llevan al centro del salón. Le ordenan que se desnude. “Puso al bebé en el suelo, a su lado. Cuatro chetniks la violaron. Ella miraba en silencio a su hijo, que lloraba. Cuando terminó la violación, la joven preguntó si podía amamantar al bebé. Entonces, un chetnik decapitó al niño con un cuchillo y dio la cabeza ensangrentada a la madre. La pobre mujer gritó. La sacaron del edificio y no se volvió a ver más.”

La cita del párrafo anterior dimensiona el desprecio por la dignidad de la persona, permite comprender los métodos aplicados con el objetivo de destruir a la persona, ya sea física, mental o moralmente, los métodos de tortura que han corrido a cargo de la procuraduría General de justicia de la Ciudad de México, hechos legalizados en juicio de amparo indirecto 627/2017 y 260/2018, sentencia que habla en sí y por sí misma, ello es así, la dignidad humana, es la base de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más en el presente caso han sido destruidos.

La destrucción del Estado de Derecho y de los principios más básicos, como es el reconocimiento de la dignidad que es inherente al principio de no discriminación, fundamento de las normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*), aunado a la destrucción de la vivienda de la parte quejosa juicio de amparo indirecto 627/2017, 651/2017 y 260/2018.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, A este Alto Tribunal del país, atentamente solicitamos:

Primero. – La revisión oficiosa del presente caso, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 4 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.

Segundo. - Atentamente se tome en cuenta que el presente caso es la supresión de derechos fundamentales no derogables, por lo que el juicio de amparo indirecto 909/2018, substanciado en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa del Primer Circuito, que encarecidamente la Juez A quo tuvo por interpuesto, forme parte de esta revisión oficiosa.

Estado de Excepción *de facto*
Juicio de amparo 260/2018
Ampliación de demanda de amparo

PROTESTO LO NECESARIO

Carolina González Nava

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2018

045344

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2018 OCT 29 PM 3 57

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibí de un estado en (17) folios

cos.

Divensos anexos en copias simples en (4) folios

4/2018

10
2
11
12
13
14
15
16
17



4 octubre 2017

NOTIFICACIÓN PERSONAL

Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil dieciocho.

SE DA VISTA CON CUMPLIMIENTO

**Amparo
indirecto**

Mesa 1

Pral.-651/2017

LMA*CHSC

Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Uno (Sistema Tradicional), de la Coordinación Territorial AO-3, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete de julio del año en curso, remite el cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio.

Ahora, visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de treinta de agosto pasado, se tuvo por recibido el oficio y su anexo, en el que la autoridad oficiante informó las gestiones relativas al cumplimiento de la sentencia protectora; por tanto, con fundamento en el párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de la parte quejosa y parte tercero interesada el citado oficio y anexo, así como el diverso de cuenta, para que dentro del plazo de **tres días**, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en el entendido que una vez transcurrido el mismo y aun ante la ausencia de argumentos, con apoyo en el segundo párrafo del artículo citado, este órgano de control constitucional dictará la determinación que corresponda en torno al cumplimiento del fallo protector.

Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19 Libro XII, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época de rubro:

"PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."

Notifíquese personalmente.

Así lo proveyó y firma **Rosa María Cervantes Mejía**, Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria **Lizbeth Martínez Arias** quien autoriza y da fe.

Lizbeth Martínez Arias, Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, hace constar que la presente copia autorizada es fiel reproducción de su original que obra en los autos del juicio de amparo **651/2017**.
CONSTE.



MÉXICO

PGJ

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL.
FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON
COORDINACIÓN TERRITORIAL DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA AO-3
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 02
AV PREVIA : FMC/MC-2/T2/00042/13-01
DELITO : DAÑO A LA PROPIEDAD
ASUNTO: SE RINDE INFORME DE POL. DE INV.

LIC. EDITH GUADALUPE ORTIZ VALENCIA.
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
DOS SIN DETENIDO
EN ALVARO OBREGÓN - 1
P R E S E N T E .

CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 6 Y 41 FRACCIONES I, III Y IV DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; 3 FRACCIÓN I Y 273 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 2 Y 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; 75 Y 76 FRACCIÓN V DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LOS ARTICULOS 2, 25, 26 Y 27 DEL MANUAL DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

ANTECEDENTES: ME DIRIJO A USTED EN RELACIÓN A SU OFICIO GIRADO EL DIA, 08 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL QUE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE ESTA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SE AVOQUEN A LA COMPLEMENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- ACUDIR AL LUGAR DE LOS HECHOS, EN RELACION A CUANDO SE PERCATARON DE LA CONSTRUCCION DE LA REJILLA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE TABAQUEROS COLINDANTE CON EL NÚMERO 43, COLONIA SAN NICOLAS TOTOLAPAN EN BÚSQUEDA DE MAS DATOS, INDICIOS Y TESTIGOS PRESENCIALES DIRECTOS, INDIRECTOS O DE ZONA. INVESTIGAR SU NOMBRE Y DOMICILIO E INVITARLOS A DECLARAR AL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS

MOTIVO POR EL QUE SE INFORMA LO SIGUIENTE:

CON EL FIN DE DARLE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE ORDEN EL SUSCRITO SE TRASLADO A LA CALLE DE TABAQUEROS CONLINDANTE CON EL NÚMERO 43, COLONIA NICOLAS TOTLAPAN PARA LA LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TESTIGOS DE CUANDO SE CONTRULLO LA REJILLA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE TABAQUEROS CONLINDANTE CON EL NÚMERO 43, COLONIA NICOLÁS TOTLAPAN, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, POR LO QUE AL ACUDIR EN VARIAS OCASIONES EN DISTINTAS FECHAS Y PREGUNTAR A TRANSEUNTES DE LA MISMA CALLE NOS REFIRIERON QUE NO SE PERCATARON DE LA FECHA EXACTA EN LA CUAL COMENZARON A CONTRUIR DICHA REJILLA, PERO QUE NO DESEABAN DAR SUS DATOS PARA NO METERSE EN PROBLEMAS CON LAS HERMANAS NAVA YA QUE SON MUY ESPECIALES Y REFIEREN SER INFLUYENTES EN LA DELEGACIÓN, MOTIVO POR LO QUE SE RINDE EL PRESENTE INFORME.

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON
COORDINACIÓN TERRITORIAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA AO-3
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 02
B.O.

(SISTEMA CARGADO DE GRUPO DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN DEL D.F.)

ARMANDO TORRES OLVERA.

RESPECTUOSAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO., NO REELECCIÓN
MÉXICO D. F. A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
EL C. AGENTE DE LA POL. DE INV. DEL D.F.

ARMANDO ORTIZ CERRITEÑO

76876

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

PGJ

SECRETARÍA DE JUSTICIA
DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

2018 OCT -2 A 9:00

EN MATERIA PENAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS
DESCONCENTRADAS
FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON
COORDINACIÓN TERRITORIAL AO-3
UNIDAD DOS S/D

2018 OCT 1 PM 8:48

C. JUEZ DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO
EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE:

LIC. CARLOS ALBERTO
FLORES CASTILLO
CON FIRMA
COPIAS
FOLIOS

013594

Por este conducto, y en atención a su oficio número 37230/2018 relativo al Juicio de Amparo 651/2017, promovido por la quejosa **MARTHA PATRICIA GONZALEZ NAVA**, en contra de actos de esta Autoridad, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo, la suscrita procedo a rendir el **INFORME JUSTIFICADO**, en los siguientes términos:

Se recabo informe del Agente de Policía de Investigación Armando Ortiz Cerriteño de fecha 20 de septiembre del año 2018, en el cual refiere que no encontraron testigos que recordaran con exactitud la fecha en la cual comenzó a construirse la rejilla motivo del inicio de la indagatoria número **FMC/MC-2/T2/00042/13-01**, motivo por el cual en fecha 24 de septiembre se determina la indagatoria **FMC/MC-2/T2/00042/13-01**, se anexa copia certificada del informe de policía de investigación y de la determinación de la indagatoria **FMC/MC-2/T2/00042/13-01**.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 74 Fracción IV de la Ley de Amparo, solicito a usted que por lo que hace a la suscrita sobresea el juicio de Garantías en virtud de no existir el acto reclamado.

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
LIC. EDITH GUADALUPE ORTIZ VALENCIA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON
COORDINACIÓN TERRITORIAL AO-3
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN UNO
(SISTEMA DE INVESTIGACIÓN)

PGJ
PGJDF

PGJ

FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON.

AGENCIA INVESTIGADORA DEL M.P.: AO-3

UNIDAD DE INVESTIGACION No.: 2 SIN DETENIDO

PRIMER TURNO

INDAGATORIA No.: FMC/MC-2/T2/00042/13-01.

DAÑO A LA PROPIEDAD (NO EXCEDA DE 20 SALARIOS MINIMOS O

INDETERMINADO) - DAÑO A LA PROPIEDAD CULPOSO A BIENES INMUEBLES

FORMATO UNICO

DIRECTA

En la Ciudad de México Distrito Federal, a los 24 veinticuatro días del mes de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, la suscrito Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad Investigadora sin Detenido Número dos de la Agencia Investigadora AO-3, Fiscalía Desconcentrada en Alvaro Obregón, y quien actúa en compañía de su Oficial secretario con quien al final firma y DA FE.-----
-A C O R D O-----V I S T A S para resolver las presentes diligencias contenidas en el expediente de la averiguación previa citada al rubro, y toda vez que por el momento no se encuentran reunidos los requisitos de procedibilidad que exigen los artículos 14, 16 y 21 de nuestra Constitución, así como lo dispuesto por los artículos 122 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Distrito Federal; artículo 3 fracción XV inciso b); lo señalado en el Acuerdo A/003/99 y el Oficio Circular número OC/11/2009, emitidos por el Titular de esta institución, actuaciones que se instruyen en contra de ODILON NAVA DE LA ROSA por el delito de DAÑO A LA PROPIEDAD, y toda vez que en concepto del suscrito no es posible desahogar mayores diligencias ministeriales pertinentes para el debido esclarecimiento de los hechos a los que se contrae la presente indagatoria y como a juicio del Titular de esta Unidad de Investigación, se procede a formular ACUERDO DE RESERVA, en base a los siguientes:-----R E S U M E N D O S-----Que la querellante refiere que aproximadamente desde el año 2009 sin recordar el mes exacto los vecinos del predio ubicado en Tabaqueros Manzana 45 Andador del 6 al 11, instalaron una rejilla para captación de aguas pluviales en un pasillo que se ubica en la colindancia trasera de su vivienda, misma rejilla que fue instalada por el probable responsable pero aproximadamente en el mes de septiembre de octubre del año 2010, su vivienda comenzó a presentar humedad dentro de la misma toda vez que la rejilla colocada por el probable responsable acumulaba mucha agua y la misma comenzó a filtrarse dentro del domicilio de la querellante, toda vez que la rejilla se encuentra cerca de la paso vehicular y ocasiono que su vivienda comenzara a tener fisuras e incluso pequeñas grietas que ocasionaron el circular de vehículos de gran peso con sus vibración, por lo que acudió la querellante a la Coordinación de Protección civil de la delegación política en Magdalena Contreras, en donde determinaron el grado de afectación que ha sufrido la vivienda de la querellante misma que quedo específicamente determinada en el oficio número BD10.1.0.9.1/226/2012 de fecha 04 de diciembre del año 2012, suscrito por el C. ABUNDIO S. MANZANARES DIMAS, por lo que la querellante formulo querrelar el delito de Daño a la propiedad cometida en su agravio en contra de ODILON NAVA DE LA ROSA Y QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por lo que se consignan las presentes actuaciones al probable responsable ODILON NAVA DE LA ROSA al Juez Cuarto Penal de Delitos no Graves, quien deja bajo los efectos del artículo 36 del Código de procedimientos penales vigente para el Distrito Federal.-----Por lo que se inicia la investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos, y se ordenan y practican todas y cada una de las diligencias pertinentes, mismas que en su orden cronológico a continuación se citan a efecto de satisfacer los dispuesto por el artículo 61 del acuerdo A/003/99, por lo que todas y cada una de las constancias y actuaciones que conforman la presente investigación fueron:-----1.- Formato unico para el inicio de actas especiales Averiguaciones previas Especiales, Averiguaciones previas Directas sin Detenido ante el Ministerio Público.-----2.- Informe de Policía de Investigación.-----3.- Declaración Querellante.-----4.- Declaración de los Probables Responsables.-----C O N S I D E R A N D O-----PRIMERO.- Por lo que hace al delito de Daño a la propiedad se encuentra previsto en el artículo 239 del código penal vigente para el distrito federal que a la letra dice: : " al que destruya o deteriore una cosa ajena en perjuicio de otro,..." En el presente caso de las diligencias practicadas se desprende que hasta el momento no se ha podido

PGJ

FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON.

AGENCIA INVESTIGADORA DEL M.P.: AO-3

UNIDAD DE INVESTIGACION No.: 2 SIN DETENIDO

PRIMER TURNO

INDAGATORIA No.: FMC/MC-2/T2/00042/13-01.

DAÑO A LA PROPIEDAD (NO EXCEDA DE 20 SALARIOS MINIMOS O

INDETERMINADO) - DAÑO A LA PROPIEDAD CULPOSO A BIENES INMUEBLES

FORMATO UNICO

DIRECTA

acreditar la probable responsabilidad del probables responsables hasta el momento no ha sido posible toda vez que no se cuenta con testigos de los hechos que respalden el dicho del denunciante, ya que si bien es cierto la querellante ha acreditado fehacientemente la propiedad del inmueble dañado y el daño que ha ocasionado la rejilla que se colocó desde aproximadamente el año 2009, y los daños comenzaron a ser visibles en la vivienda de la querellante, lo cual queda acreditado con el oficio BD10.1.0.9.1/226/2012 de fecha 04 de diciembre del año 2012, suscrito por el C. ABUNDIO S. MANZANARES DIMAS, también es cierto que hasta la fecha no se ha acreditado fehacientemente las fecha en la cual se construyó la rejilla en cemento y quien realmente la construyó ya que de actuaciones hasta el momento se desprende que la querellante solo refiere que el probable responsable fue quien ordenó la construcción de dicha rejilla, pero no se ha acreditado que el realmente la haya construido y que haya tenido los conocimientos básicos para construirla, para poder acreditar que fue omiso de manera dolosa al no realizar las medidas de precaución necesarias para evitar que dicha rejilla ocasionara los daños a la vivienda de la querellante ahora la querellante fue hasta el año 2013 que solicito el inicio de la presente indagatoria es decir tres años después de que se percató de los daños ocasionados a su vivienda tiempo que afecta para la investigación de las presentes actuaciones toda vez que los testigos presenciales de los hechos narrados por la querellante ya no son del todo ciertos para los testigos que pudieran ayudar a esta investigación, y si bien es cierto es obligación de esta representación social como órgano investigador y persecutor de los delitos acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal para estar en posibilidad de ejercer la pretensión punitiva ello desde luego, respetando y salvaguardando en todo momento las garantías y derechos fundamentales de todo gobernado, y al respecto es necesario señalar que el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en vigor en su segundo y tercer párrafo establece: "el cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito. en los casos en que la ley incorpore en la descripción de la conducta prevista como delito un elemento subjetivo o normativo, como elemento constitutivo esencial, será necesaria la acreditación del mismo para la comprobación del cuerpo del delito y después de haber efectuado un análisis de todos y cada uno de los elementos probatorios recabados en la presente indagatoria se arriba a la conclusión de que no existen suficientes elementos probatorios como para ejercer la pretensión punitiva en contra de los probables responsables, pues esta autoridad ministerial como representante del interés social tiene como facultad constitucional la de perseguir e investigar los delitos, facultad que debe ejercer en estricto apego a derecho y salvaguardando en todo momento los derechos y garantías de todo gobernado incluyendo, desde luego, los derechos de los individuos sujetos a investigación, pues del análisis efectuado a los elementos probatorios que integran la presente indagatoria se arriba a la conclusión de que no existe elemento probatorio alguno que sustente la acusación hecha en contra de los probables responsables, no son suficientes pues sería un exceso dar valor probatorio pleno al señalamiento que hace el denunciante, pues se trata de una testimonial aislada que no se encuentra robustecida con elemento probatorio pleno, por lo que resultaría un exceso por parte de esta representación social, aunado a que los probables responsables niegan los hechos, por lo que basar el actuar de esta representación social en una sola imputación carente de sustento probatorio sería contrario a derecho, por lo que en consideración de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16 constitucionales, 37, 122 y 124 bis a contrario sensu, del código de procedimientos penales del distrito federal, al no existir medios de prueba suficientes para tener por comprobado el cuerpo del delito ni

DIRECTA

PGJ

HIOJA: 244.

PGJ

FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON.
AGENCIA INVESTIGADORA DEL M.P.: AO-3
UNIDAD DE INVESTIGACION No.: 2 SIN DETENIDO
PRIMER TURNO
INDAGATORIA No.: FMC/MC-2/T2/00042/13-01.
DAÑO A LA PROPIEDAD (NO EXCEDA DE 20 SALARIOS MINIMOS O
INDETERMINADO) - DAÑO A LA PROPIEDAD CULPOSO A BIENES INMUEBLES
FORMATO UNICO
DIRECTA

III y 16 fracción I el Reglamento interno de esta Institución, así como del artículo 60 fracción IV que a la letra dice "Cuando los medios de prueba sean insuficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad y resulte imposible desahogar medios de prueba ulteriores relevantes para el efecto; ...", del Acuerdo A/003/99; y el Oficio Circular OC/11/2009, emitido por el Titular de esta Institución por lo que es de resolverse y se.-----
E E S U E L V E-----PRIMERO.-----Es competente para conocer respecto del ACUERDO DE RESERVA la Lic. JUANA GAMA CORONA Responsable de la Agencia AO-3 de la Fiscalía desconcentrada en Alvaro Obregón, con base en los razonamientos jurídicos citados en el cuerpo del presente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 y Décimo quinto Transitorio del acuerdo A/003/99, en relación con el artículo 17 del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.-----
SEGUNDO.-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 del Acuerdo A/003/99 emitido por el Titular de esta Institución, por tratarse de un delito cuyo término medio aritmético de la pena no rebasa los cinco años, habiendo acordado con la Lic. JUANA GAMA CORONA Responsable de la Agencia AO-3 de la Fiscalía desconcentrada en Alvaro Obregón, se determina el ACUERDO DE RESERVA.-----
TERCERO.- Notifíquese por Estrados el contenido del presente Acuerdo a los Querellantes para que de estimarlo procedente hagan valer su inconformidad en un término que no exceda de diez días hábiles a partir de su notificación, lo anterior con fundamento en el contenido del artículo 68 del Acuerdo A/003/99.-----
CUARTO.-Infórmese del presente Acuerdo al C. Fiscal desconcentrada en Alvaro Obregón y a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público auxiliares del C. Procurador, para que en su caso de estimarlo pertinente efectúen una revisión de la presente determinación y resuelvan lo que conforme a derecho proceda y transcurrido el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 63 del citado acuerdo en el resolutivo anterior, sin que exista revocación por parte de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del C. Procurador, archívese la presente indagatoria como asunto concluido.-----
ASI LO ACORDO Y FIRMAN, EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR QUIEN ACTUA CON SU OFICIAL SECRETARIO CON QUIEN AL FINAL FIRMA Y DA FE, Y CON LA APROBACION DEL RESPONSABLE DE AGENCIA DE INVESTIGACION QUIEN AL FINAL TAMBIEN FIRMA.-----C U M P L A S E-----SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO-----D A M O S F E-----AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. LIC. EDITH GUADALUPE ORTIZ VALENCIA. OFICIAL SECRETARIO MARIA DEL CARMEN ACOSTA RUIZ. LA RESPONSABLE DE LA AGENCIA AO-3 LIC. JUANA GAMA CORONA.

AGENCIA DE
LA CIUDAD DE MEXICO
DESCONCENTRADA DE
EN ALVARO OBREGON
CION TERRITORIAL AO-3
DE INVESTIGACION UNO
FORMATO UNICO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las ____ hrs. del día 28 del mes de 09 de 2017. El suscrito Agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de Investigación No. HOJA: 245. de la Coordinación Territorial AO-3 en la Delegación Alvaro Obregón, Fiscalía Desconcentrada

Que las presentes copias fotostáticas de los originales, son copia fiel de sus que se llevan en el expediente dentro de la A. mismas que concuerdan en todas y cada una de las partes.

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
Titular de la Unidad de Investigación
Sin Detenido
LIC. Edith Guadalupe Ortiz Valencia
FISCALIA DESCONCENTRADA DE
INVESTIGACION EN ALVARO OBREGON
UNIDAD DE INVESTIGACION UNO
(SISTEMA DE INVESTIGACION)

3-58

Estado de Excepción de facto

Recurso de Reclamación: 1734/2018

Juicio de amparo 260/2018

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presente.

Carolina González Nava, por propio derecho; en mi calidad de representante común de la parte quejosa, ante Usted, con el debido respeto que se merece comparezco y expongo:

Con fundamento en el principio de dignidad de la persona humana y el principio de no discriminación, principios básicos del artículo 29, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos que a la letra dice:

“Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”

Vengo a hacer ampliación de demanda de amparo, pues el Estado mexicano ha sometido de forma intencional a la parte quejosa a condiciones de existencia que han acarreado lesión grave a nuestra integridad física y mental, aunado a la fabricación de delitos que deriva en amenaza latente de pérdida de la libertad.

En este orden de ideas, el Estado mexicano, día con día, destruye la vivienda de los quejosos, lo que actualiza la búsqueda de la destrucción total física de sus habitantes.

En esta contextura, la parte quejosa insta atentamente a este Alto Tribunal del país, la revisión de las medidas adoptadas en la suspensión de derechos fundamentales no derogables cuya excepción está vedada por el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-8/87, menciona que, “el Pacto de San José es el primer instrumento internacional de derechos humanos que prohíbe expresamente la suspensión de las “garantías judiciales indispensables” para la protección de los derechos que no pueden ser suspendidos”.¹

Concluye la Corte en la opinión consultiva citada anteriormente, que “los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática”.

30-000 18
12-000

¹ Párrafo 37.

Luego, en el transcurso de un año con once meses, a la parte quejosa se le han suspendido las "garantías judiciales indispensables" para la protección de los derechos fundamentales no derogables.

Por lo que fundamento en el artículo 17, fracción IV y 108 de la Ley de Amparo, y los numerales 25.1 y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta parte quejosa viene a formular ampliación de demanda de amparo en el juicio 260/2018:

Por lo que para dar cumplimiento con el artículo 108 de la Ley de Amparo que a la letra dice:

"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:"

I. El nombre y domicilio del quejoso:

Carolina González Nava, Martha Patricia González Nava, Julio César González Nava e Israel González Nava.

II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad:

Bajo protesta de decir verdad, no lo conozco

III. La autoridad o autoridad responsable:

Secretario de Gobernación

IV. acto u omisión que se reclama:

La configuración de Estado de excepción *de facto*.

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación:

Las anomalías jurídicas e institucionales que entrañan el estado de excepción *de facto*, o la **supresión de derechos fundamentales no derogables**. La ilegalidad y perennización en que permanece el presente caso.

Ejemplo de ello, el cuatro de octubre de dos mil dieciocho en el juicio de amparo indirecto 651/2017 se hizo sabedora la parte quejosa, que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con aquiescencia del Estado mexicano, pretende que el delito de tracto sucesivo, les permite a los habitantes de una vía pública denominada Andador Tabaqueros que en conjunto con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a título de dolo lleven a cabo día con día la conducta para que la vivienda que habitan los quejosos se derrumbe, llegando a los extremos de anexar probanzas de intimidación, fabricación de delitos, con la consiguiente amenaza de pérdida de la libertad o de la vida, permitiendo la juez A quo ésta conducta ilegal desplegada por la responsable en juicio constitucional. (se anexa notificación que consta de cuatro hojas)

La adopción de las severas medidas en esta configuración de estado de excepción *de facto*, han traído como consecuencia un cuadro de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales no derogables.

Fabricación de delitos², para implementar tortura, amenaza de pérdida de la libertad y de la vida, intimidación, vejaciones públicas, humillaciones, ataques verbales, discriminación, segregación, violencia institucional, destrucción de la vivienda (llegando a los extremos de utilizar marros y cincales con la que golpean los muros de ésta vivienda).

Es necesario explicar que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha estado a cargo de la aplicación de los métodos de tortura en el caso concreto, ejemplo de ello es la norma, en el que con fecha 23 de mayo de dos mil catorce en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el Fiscal, Responsable de Agencia, Representante de Jurídico, Representante de Seguridad Pública, por medio de tortura le advirtieron a la parte quejosa que no acudiéramos de nueva vez a la Procuraduría.

El Secretario de Gobernación, mediante informe justificado, acto mediante el cual hace oficial la **supresión de derechos fundamentales no derogables**, declarando que el presente caso le corresponde a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por consiguiente, la parte quejosa interpuso ampliación de demanda la cual fue desechada, lo que dio cabida a recurso de queja, dando los razonamientos jurídicos idóneos al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de que el presente caso es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más como se puede evidenciar, el Estado de Derecho ha sido destruido, resolviendo que el recurso de queja es infundado, probanza idónea de esta afirmación es el expediente de éste recurso 145/2018.

La certeza de que al solicitar ampliación de demanda, se resolverá que no ha lugar, derivando en recuso de queja, resolviendo que esta es infundada, por lo que se dictará sentencia después de dos meses, en el que se resolverá que se ha vulnerado ningún derecho. Por consiguiente, a la parte quejosa se le ha despojado de derechos fundamentales no derogables. en esta supresión de derechos fundamentales no derogables, deriva en total estado de indefensión, segregación, discriminación que no es otra cosa que un genocidio. La destrucción física, psíquica o moral, total o parcial en relación a la tipificación de la destrucción de un grupo como tal, en relación al derecho a no ser discriminado que se relaciona de manera directa a la Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio, convención que protege el derecho a la existencia.

Las conductas desplegadas por el Estado mexicano es la perennización de una supresión de derechos humanos.

² Otro ejemplo de ello, es el Juicio de amparo indirecto 349/2017, substanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, policía de investigación acude a nuestro domicilio para señalarnos y amenazarnos que en cualquier momento nos privarán de la libertad y de la vida arbitrariamente.



1
1
2

Probanzas bastantes y suficientes, son los juicios de amparo 1082/2016, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018 que en sí y por sí mismos prueban la nula intención de hacer que se respete la Constitución, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es Parte, en clara desviación a la legalidad, la destrucción del Estado de derecho, la jurisprudencia de carácter obligatorio, ajustada al presente caso, brilla por su ausencia. La perennización de este estado de excepción *de facto* conlleva amnistía, las autoridades que han perpetrado graves delitos que constituyen de genocidio, han sido sustraídas de su responsabilidad penal. Basta ver la sentencia derivada del juicio de amparo 627/2017 del treinta de abril de dos mil dieciocho, el Juzado de Distrito ha resuelto que no existe interés jurídico, luego afectación a la parte quejosa, habilitando a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a aplicar métodos, *inter alia*, de tortura, violencia institucional, fabricación de delitos, amenaza de pérdida de la libertad al ejercer acción penal ante un Tribunal de delitos oficiales, por hechos que la parte quejosa desconoce cómo, cuándo y en dónde cometimos el injusto, que los autorice a intimidar, coaccionar en interrogatorio, a que el defensor de oficio "ayude" en el método de tortura a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, entre otros graves delitos, que clarifican que en este estado de supresión de derechos fundamentales no derogables, los castigos corren a cargo de la Representación Social, pues el Secretario de Gobernación, tal como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, han girado oficios en el que decretan que esta Institución debe resolver el presente caso, hecho que conlleva el designio de exterminio.

El principio de Supremacía Constitucional (tratados internacionales, los preceptos constitucionales) ha sido destruido. Estos juicios de amparo no han sido ni son susanciados de manera imparcial, es notorio que las decisiones conllevan la nula intención de que el estado de excepción cese, que sea reconocido el derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, que se reconozca el derecho violado, la **sanción**, reparación e indemnización a que tiene derecho toda víctima conforme al artículo 5, párrafo primero, inciso a), b), e). iii); 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Ello es así, la restricción indebida de la parte quejosa al derecho de acceso a la justicia ha sido formalizada en juicio constitucional, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales no son inatacables en todos los casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que "Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Difícilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos. La improcedencia o impertinencia de la resolución judicial interna que pone fin a una contienda puede advertirse a partir de diversos datos: error en el que incurre quien la emite, sin que se añada otro motivo de injusticia; o bien, ilegalidad o ilegitimidad con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones procesales que destruyen el debido proceso), sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la

sentencia. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia -- formalmente-- atiende a la seguridad jurídica.”³

Para considerar en el presente caso la legitimidad de cosa juzgada que solo se justifica por la autoridad que le trasmite la regularidad del proceso y la legitimidad en la actuación del juzgador, en el que en el proceso no importa las pruebas presentadas, estas no han sido admitidas o bien no han sido tomadas en cuenta, o bien resolver contrario al caso concreto, cambiando lo verdaderamente expuesto y probado, en la inaplicación de jurisprudencia de carácter obligatorio, lo que hace que la sentencia o resoluciones pronunciadas no sean genuinas, no basta simular un juicio de amparo y emitir una sentencia que contiene vicios, luego, no se desatiende el principio *ne bis in idem*, pues no se han observado los preceptos Constitucionales, los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos que el Estado mexicano ha firmado y ratificado.

En este punto es menester traer a colación el juicio de amparo 74/2018, que fue substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, la parte quejosa acudió ante las amenazas de pérdida de la libertad y de la vida ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que en conjunto con los habitantes de la vía pública denominada Andador Tabaqueros en “pacto criminoso” con figuras políticas (juicios de amparo 651/2017 y 627/2017, anexos V y I, respectivamente) nos procuran certeza que en cualquier momento ocurrirán estos hechos, aunado a la destrucción de la vivienda de la parte quejosa y despojo del lugar en donde está edificado nuestro domicilio.

Todo lo anterior clarifica en probanza idónea, el por qué, la autoridad jurisdiccional ha recibido a trámite los escritos de solicitud de juicio de amparo que la parte quejosa a suscrito, los innumerables juicios de amparo son prueba idónea de lo que han hecho del caso concreto, dar validez a las graves violaciones sistemáticas y flagrantes, se pretende hacer legal lo ilegal, el estado de excepción de derechos no derogables, amnistía ilegal a las graves violaciones sistemáticas y flagrantes empleando la institución procesal del amparo, el engaño resalta a la vista, se acotan razonamientos tendenciosos en el que se considera que aun cuando las probanzas se dirigen a un estado de excepción *de facto* de derechos fundamentales no derogables. Los órganos jurisdiccionales que han tenido conocimiento del presente caso han resuelto un “engaño” que se pretende dar como cosa juzgada, hecho que es inadmisibles pues el proceso ha sido “a modo” y la sentencia sirve a determinado designio, mejor que al objetivo de justicia.⁴

La dignidad humana de la parte quejosa ha sido pisoteada en juicio de amparo, en el que el derecho no existe, los tratados en materia de los derechos humanos no existen, la ilegalidad permea el presente caso, se señala al torturador, se presentan pruebas (expedientes de los juicios

³ Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia*, Sentencia De 12 de septiembre De 2005.

⁴ Párrafo 17, *idem*.

17A

de amparo y sus anexos), de fabricación de delitos, de tortura, de atentados en contra de la vida, coacción, intimidación, violencia institucional, Dictámenes (pruebas científicas) de que la vivienda de la parte quejosa está siendo destruida con aquiescencia del Estado mexicano; más, lo que se ha hecho es instalar un arsenal judicial represivo a fin de descartar y nulificar toda posibilidad de retorno a la normalidad, resoluciones que validan el espejo de la vigencia de los derechos humanos fundamentales.

Más lo anterior, solo resalta la segregación manifiesta, la destrucción de la dignidad humana, la normalidad de un estado de excepción *de facto*, que conlleva genocidio.

Hechos que son contrarios al artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone:

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

El artículo anterior recoge la institución procesal del amparo, en el que dispone que debe ser sencillo y breve, tal como lo ha manifestado la Corte en opinión consultiva OC-8/87 que, “tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, **lo son también los que están señalados de manera expresa por el artículo 27.2 como no susceptibles de suspensión en situaciones de emergencia.**” Lo resaltado es propio.

VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame;

Artículo 1, 14, 16, 17, 22, 27, 29, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Para”; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, Convención sobre los derechos del Niño (artículo 6); Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

VII. Los conceptos de violación.

Violación a las garantías judiciales indispensables a que alude el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos en relación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción ⁵.

La parte quejosa solicita atentamente al Máximo Tribunal del país, que sea revisado el Estado de excepción *de facto* y/o la supresión de derechos fundamentales no derogables en el caso concreto:

Las medidas tomadas en el caso concreto supera las restricciones permitidas en situaciones ordinarias, castigando con severos castigos a la parte quejosa por circunstancias que no encuentran motivos legales, estos son motivos de odio, de segregación, discriminación, de genocidio.

La validación de los métodos de tortura, fabricación de delitos, amenazas de pérdida de la libertad y de la vida, la amenaza de volver a ejercer acción penal ante un Tribunal de delitos oficiosos, prohibición de acudir al Ministerio Público so pena de tortura o de detención ilegal, en el mejor de los casos, hechos que configuran un estado de excepción *de facto*.

La perpetuación lisa y llana en la aplicación de un estado de excepción *de facto*, en el presente caso se ha establecido en regla, anomalía, la legalización en juicio constitucional, la violación impune de los derechos más fundamentales negar las graves violaciones sistemáticas y flagrantes, la excepción de derechos fundamentales no derogables, disfrazada de Estado de Derecho. Hecho que atenta contra el sistema democrático que dispone límites infranqueables a derechos esenciales de la persona.

En este orden de ideas el Estado mexicano ha vulnerado el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los artículos anteriores constituyen el marco jurídico ineludible de los Estados Partes, la suspensión de derechos no derogables, es la suspensión en el caso concreto del Estado de Derecho, hecho que ha autorizado a las autoridades jurisdiccionales, al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Secretario de Gobernación a apartar su conducta de la legalidad.

En el presente caso la parte quejosa está atendida a la nada jurídica, las violaciones de derechos humanos, la dignidad de los quejosos ha sido destruida. Los factores que han influido son los nexos políticos de los probables responsables en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01 y familiares de éstos, han empleado en conjunto con servidores públicos a las Instituciones en una destrucción del Estado de Derecho, la suspensión *de facto* de derechos fundamentales no derogables, han derivado en la solicitud de la institución procesal de juicio de amparo 1082/2016, 1118/2016, 288/2017, 349/2017,

⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86

627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018, juicios que representan una utopía en el que se ha formalizado un Estado de excepción. Han creado a los quejosos un clima de terror y miedo.

La aplicación abusiva e injustificada del poder público es representado por los innumerables juicios de amparo citados en el párrafo anterior, los expedientes son probanzas de la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos en el caso concreto.

El orden público y democrático radica es el fortalecimiento y el deber de defender los derechos humanos de los gobernados, más en el presente caso, el poder público ha destruido los derechos humanos más fundamentales de la parte quejosa.

La función del Estado es defender el orden público, asegurar que los derechos humanos no sean transgredidos. Pues, los derechos humanos y las garantías constitucionales para su protección, y las Convenciones sobre derechos humanos, le generan obligaciones *erga omnes* al Estado mexicano ante la Comunidad Internacional.

Los derechos fundamentales no derogables, encuentran su fundamento en la protección de la dignidad inherente de la persona humana, por lo que no existe legitimidad alguna del Estado mexicano para seguir vulnerando los derechos fundamentales no derogables de la parte quejosa, misma que insta atentamente a este Alto Tribunal del país, el acceso a la protección constitucional, a que nuestros perpetradores de violaciones sistemáticas y flagrantes sean sancionados, que los graves daños físicos, psicológicos y morales sean indemnizados por el Estado mexicano, que éste reconozca, que los quejosos tenemos derechos fundamentales no derogables, solicitud que está consagrada en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado de excepción en el presente caso es una anomalía del objetivo de un genocidio, para proteger intereses personales del poder público finalidad que está alejado de la defensa de la democracia y de las instituciones del Estado de Derecho.

La carencia de efectividad en los recursos de garantía judicial han redundando en perjuicio de la libertad, integridad y del derecho a la vida en el que se ha negado la protección de los derechos y libertades de la parte quejosa, los innumerables juicios de amparo son probanzas idóneas, se pretende dar por cosa juzgada la anomalía del estado de excepción de derechos fundamentales no derogables, segregando a la parte quejosa para un genocidio eminente. Despojados de derechos fundamentales inderogables la parte quejosa se atiene a la nada jurídica. Los actos arbitrarios de las autoridades responsables han sido validados por decisiones jurisdiccionales.

Las violaciones sistemáticas y flagrantes a los derechos humanos se han vuelto impunes, las facultades de las autoridades, en correlación a la utopía del derecho a la garantía de un amparo para la defensa de los derechos humanos fundamentales por fuerza acarrearla la destrucción total de la parte quejosa el derecho a la vida; la libertad e integridad personal, el derecho al debido proceso y a la justicia han desaparecido, formalizando la práctica de la tortura, de fabricación de delitos, de ejercicios de la acción penal ante Tribunales de delitos oficiosos, en el

estado latente de excepción a, *inter alia*, un debido proceso, humillaciones públicas. Las investigaciones penales son *ad infinitum*, la pérdida de la libertad y de la vida, las denuncias de las graves violaciones sistemáticas y flagrantes a nuestros derechos humanos no derogables sus perpetradores cuentan con aquiescencia del Estado mexicano.

Ninguno de los tratados o convenciones que el Estado mexicano ha firmado y ratificado autorizan a suspender las garantías judiciales indispensables para proteger y defender los derechos humanos fundamentales, contenidas en los referidos instrumentos internacionales.

Las violaciones sistemáticas y flagrantes a los derechos humanos de la parte quejosa, tales como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad e integridad del ser humano, nos ha colocado en un estado de absoluta indefensión con grave violación a los derechos de justicia, de protección jurisdiccional.

A pesar de los convincentes medios de prueba aportadas que conforman los innumerables juicios de amparo, se válida como cosa juzgada la supresión de derechos fundamentales no derogables, negándose llanamente la protección jurisdiccional a la violación sistemática y flagrante de derechos humanos por medio de la institución procesal de juicio de amparo.

La tortura en el presente caso es una práctica usual, investigaciones penales de toda clase, la amenaza eminente de detención sin saber qué delito se cometió, ataques verbales, tentativas de homicidio, el temor de la parte quejosa es fundado en el que se nos ha impuesto tormentos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y en Tribunales de delitos oficiosos. Sin recursos legales para la salvaguardia de nuestros derechos humanos más fundamentales.

En situaciones de plena normalidad existe un goce absoluto de derechos fundamentales no derogables, en la que ninguna autoridad le es conferido poderes absolutos de erigirse como torturador, que fábrica delitos para causar verdaderos daños, en el que no se válida delitos de lesa humanidad, so pretexto de una investigación penal, con amenazas de pérdida de la libertad y de la vida, en el que no se ejerce acción penal ante un Tribunal de delitos oficiosos sin saber la víctima de que se le acusa, qué delito cometió, suspendiendo el derecho de presunción de inocencia, en que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se ha erigido como verdugo en este Estado de excepción **o supresión de derechos fundamentales no derogables.**

El párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, define la finalidad última del Derecho al expresar que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar, el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Y en el artículo 30 de la citada Declaración Universal dispone:

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquier de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración

La violación a la dignidad, hace del presente caso, que los actos o decretos dictados *de facto* o bien derivados de resoluciones, sean hechos nulos que ilegitiman tales actos o resoluciones.

La naturaleza *erga omnes* de las obligaciones que engendran los tratados y convenios de derechos humanos, mandando que sus normas deben aplicarse sin discriminación alguna. Derechos que contienen una doble dimensión la obligación del Estado de cumplirlas y el derecho de reclamar su violación, máxime si ésta es sistemática y flagrante.

El estado de excepción de Derecho y de violaciones a derechos humanos fundamentales, derechos protegidos por normas del *ius cogens*⁶; en relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.⁷ han sido expuestos ante el Presidente de la Republica, representado por la Secretaria de Gobernación en juicio de amparo indirecto 909/2018, solicitando ésta responsable, se le niegue a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Esta negativa perenniza el Estado de Excepción *de facto* que obedece a factores políticos que ha implicado la permisión a la supresión del Estado de Derecho, autorizando a los Gobernantes a apartar su conducta de la legalidad. Pues la noción de un Estado Democrático es inherente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Ello es así, las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la defensa y protección de los derechos humanos son inseparables.

Las normas y principios que regulan los Estados de Excepción se han inobservado en el presente caso, los requisitos que los estados de excepción deben reunir para que su regulación se ajuste a las exigencias de las normas internacionales.

En estos razonamientos lógicos y jurídicos, la parte quejosa solicita atentamente a este Alto Tribunal del país su revisión, por las razones siguientes:

El principio de legalidad es consustancial a la naturaleza de la institución del Estado de Derecho, la inexistencia de normas y control, tanto internos como internacionales que lo regulen.

El principio de proclamación, la inexistencia de este principio, hace de éste Estado de excepción *de facto*.

⁶ artículo 53 de la Convención de Viena de fecha 23 de mayo de 1969, ratificándola el Estado Mexicano en misma fecha, menciona que "es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario, y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general que tenga el mismo carácter.

⁷Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

Hecho que ha redundado en la permisión a la supresión del Estado de Derecho, autorizando a los Gobernantes, Instituciones a apartar su conducta de la legalidad.

El impacto directo e ilegal a la en el presente caso ha derivado en la nulidad al derecho al principio de dignidad y no discriminación, la suspensión de derechos fundamentales inderogables, situación que *de facto* vive la parte quejosa, obedece a razones ilegales.

La vulneración al principio de proclamación del estado de excepción apunta a la condición indispensable para su validez, aun cuando ha sido proclamado en juicio constitucional, su temporalidad es incierta, pues a la fecha conlleva un periodo de cinco años con diez meses, que comprende una temporalidad de un año con once meses en juicio de amparo en el que existe la proclamación *de facto*.

La circunstancia que lo justifica, el periodo por el cual se implanta, las medidas que autoriza, los mandatos de la Constitución, los tratados y convenios que se han de desaplicado en el presente caso por las medidas de excepción.

El no cumplimiento de la comunicación oficial, que cabe decir, debe ser inmediata ante el Secretario General de las Naciones Unidas en lo que respecta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en cuanto a las Convenciones regionales, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y el Secretario General del Consejo de Europa, respectivamente, debe señalar expresamente las medidas que autoriza, las razones que motivaron este largo periodo de suspensión.

La notificación formal juega un papel sumamente importante, en tanto prerequisite cuyo cumplimiento habilita a los Estados Parte a prevalerse de las cláusulas de derogación.

La parte quejosa siendo la afectada por las medidas de suspensión que el Estado mexicano ha impuesto, aunque lo haya hecho de conformidad a alguna norma nacional que la parte quejosa desconoce, como bien nos lo han comunicado en juicio de amparo, el Procurador General de justicia de la Ciudad de México⁸, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaria de Gobernación, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, actuando en Pleno, la juez A quo (Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal) o bien, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura Federal Instituto Federal de Defensoría Pública, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Contraloría General de la Ciudad de México, que, *somos ignorantes, que no tenemos para el pasaje*⁹, *que no entendemos*, que no es competencia de las Instituciones, que la tortura, vejaciones, humillaciones, intimidación, amenazas de pérdida de la libertad, atentado en contra de la vida... no causa daño a nuestra esfera jurídica, más, no han mostrado la comunicación y/o notificación oficial de la excepción frente al orden internacional, cuyo cumplimiento habilita a los Estados a prevalerse de

⁹ Consejo de la Judicatura Federal Instituto Federal de Defensoría Pública

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

las cláusulas de derogación, máxime si se han desaplicado tratados y convenios en materia de los Derechos Humanos que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado. Por consiguiente los suscritos presumimos que éste Estado de excepción de derechos o supresión de derechos fundamentales no derogables es *de facto*.

La información jurídica que sustenta lo anterior son los juicios de amparo indirecto siguientes: 1082/2016, 1118/2019, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018, todos substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, a excepción de los juicios 349/2017 y 74/2018 que fueron substanciados en el Juzgado Quinto y Tercero de Distrito, respectivamente.

No obstante, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió encarecidamente la solicitud de juicio de amparo con número de expediente 909/2018, en éste estado de suspensión *de facto*, la responsable Secretaría de Gobernación en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó se nos negara el amparo y protección de la Justicia de la Unión, hecho que hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera oficiosa manifieste lo conducente, al ser consecuencia lógica y jurídica de los amparos promovidos y las resoluciones que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito han hecho del presente caso. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que "Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Difícilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos. La improcedencia o impertinencia de la resolución judicial interna que pone fin a una contienda puede advertirse a partir de diversos datos: error en el que incurre quien la emite, **sin que se añada otro motivo de injusticia**; o bien, **ilegalidad o ilegitimidad** con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones procesales que destruyen el debido proceso), **sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la sentencia**. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia -- formalmente-- atiende a la seguridad jurídica."¹⁰

Pues sin justificación objetiva, se persiste en el mantenimiento del estado de urgencia en restricción institucionales en el caso concreto por un tiempo indeterminado, con causales subyacentes que no se han proclamado, que vale traer a colación, pues en días anteriores a este escrito, la oficial de seguridad Elvia Camacho Martínez adscrita a la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación en conjunto con su hermana María de la Luz Camacho Martínez¹¹,

¹⁰ Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia*, Sentencia De 12 de septiembre De 2005.

¹¹ Juicio de amparo indirecto 74/2018, substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del primer Circuito y 260/2018 substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de la misma Materia y Circuito

volvieron a agredir¹² a la parte quejosa, amenazando con el Presidente de la Republica electo, Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, mencionando que nos van a *desaparecer*. Hecho que hace presumir¹³ la **perennización** del estado de excepción, con el objetivo de genocidio.

Luego, las autoridades responsables y jurisdiccionales no han dado razones jurídicas sobre los presupuestos de hecho que los ha llevado a la perennización del estado de excepción del presente caso. **Lo que hace hecho notorio, que está suspensión se debe a motivos de odio, económicos, sociales, de género, destrucción de un grupo, las agresiones han sido constantes tal como la aplicación de castigos prohibidos, incriminación, tortura, humillación, penas infamantes, intimidación, entre otros motivos ilegales. Hecho que sólo tienen cabida en un decreto *de facto* de genocidio.**

El principio de proporcionalidad que debe imperar en el estado de excepción, éstos deben ser en relación de adecuación entre éste y los medios utilizados para repelerlos ya que, se han desaplicado los Convenios y tratados, siguientes: *inter alia*, la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Por consiguiente, las restricciones impuestas en el presente caso, están encaminadas a la destrucción de los derechos reconocidos en los Tratados y Convenios en materia de los Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, pues en esta perennización de suspensión de derechos, han sido desaplicados éstos. Lo que implica la perpetuación de la suspensión de derechos fundamentales inderogables. Se ha desvinculado del artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, excluyendo derechos que son inherentes al ser humano.

Las normas de excepción impuestas en el presente caso han reemplazado al principio de Supremacía Constitucional, cuya complejidad en esta desviación se pretende legitimar en juicio constitucional. En consecuencia lógica y jurídica, se hace necesario la intervención de este Alto Tribunal del país:

La discriminación en la impartición de justicia, la intolerancia en la protección de los derechos humanos en relación a la violación al principio de no discriminación, principio vinculado con el derecho de toda persona a la existencia sin distinción de origen social, posición económica.

¹² Empleando otros conceptos para dirigirse a la parte quejosa y al señor Presidente electo.

¹³ Pues sus agresiones y amenazas se han cumplimentado a cabalidad, los juicios de amparo y sus anexos son pruebas plenas de esta afirmación.

Resaltando que el objetivo de genocidio por no tener familiares y/o amigos con nexos políticos, económicos, sociales, de género, de odio, etc., que derivan en privilegios de amnistía ilegal, se pretende destruir a la parte quejosa legalizando la supresión de derechos fundamentales no derogables.

El principio de no discriminación su elemento material es la protección del individuo, su pertenencia a un determinado grupo humano, derecho que protege la diferencia tanto económica, social, política, de género, o de cualquier otra índole.

La vulneración al principio de no discriminación por condiciones sociales, económicas, o por razones de odio, de género o de cualquier otra condición como el de no contar o pertenecer a la clase política, son distinciones que versan sobre el goce y ejercicio de los derechos fundamentales.

La destrucción física, psíquica o moral, total o parcial en relación a la tipificación de la destrucción de un grupo como tal, en relación al derecho a no ser discriminado que se relaciona de manera directa a la Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio, convención que protege el derecho a la existencia.

El presente caso es un ejemplo claro y extremo de discriminación, de la formalización de este estado de excepción en juicio de amparo.

Los juicios de amparo indirecto, 1082/2016, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018. Por si y en si mismos, representan segregación manifiesta, desconociendo el principio de la igualdad en dignidad y derechos, en consiguiente la denegación del derecho a la vida y a la libertad, la negación de la igualdad en dignidad, la imposición deliberada a condiciones de existencia que por consecuencia lógica acarreará la destrucción física, psicológica y moral, total.

La discriminación en la aplicación de la ley es manifiesta e indudable la denegación a los derechos de igualdad ante la ley y de protección de la ley sin ningún tipo de distinción.

Los actos o las prácticas que a la fecha el Estado mexicano ha impuesto en el presente caso, sus efectos se explican en los juicios de amparo citados anteriormente, la discriminación en la aplicación de la ley.

Las resoluciones de suspensión de derechos fundamentales que en juicio de amparo se han dictado, se ha anulado el reconocimiento a los derechos humanos y libertades fundamentales.

La segregación de derechos fundamentales es manifiesta e indudable, promueve el odio manifiesto. Basta ver los autos de los innumerables juicios de amparo que versan sobre los mismos hechos, los expedientes que en conjunto con sus anexos son pruebas indudables de lo ahora afirmado, el derecho al acceso a la administración de justicia ha sido vedado, el derecho a la seguridad e integridad personal ha desaparecido.

La vulneración al principio de igualdad, la ausencia de una razón aceptable que sustente la distinción en la aplicación de la ley, negar el derecho a su ejercicio, por consiguiente, en juicio constitucional no se

da razón lógica y jurídica suficiente para fundar el derecho a distinguir a la parte quejosa. El de validar que el Estado Mexicano puede someter a cualquier persona a condiciones de existencia que acarrearán su destrucción, física, psicológica, total.

Pues no se puede invocar razonamientos jurídicos que no estén ajustados al caso concreto, para que estos resulten válidos tendría que resolverse el presente caso ajustado a derecho.

Más en consecuencia lógica y jurídica inmediata, la destrucción del Estado de Derecho es manifiesta e indudable, basta leer las resoluciones del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (recurso de queja 145/2018, etc.), en el que resuelve contrario al principio de Supremacía constitucional en relación al principio de no discriminación, por consiguiente, destruye el Estado de Derecho, el Estado Democrático, y el derecho a la protección de los derechos humanos.

Por un periodo de un año, con cuatro meses, los recursos que han derivado del presente caso, han recaído una y otra vez en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito¹⁴, los argumentos de corte despectivo resaltan a la ausencia de una razón aceptable que sustente la distinción en la aplicación de la ley.

Las resoluciones en el presente caso por sus consecuencias concretas deponen el acceso a la justicia, a la discriminación, la imposición deliberada a condiciones de existencia que por consecuencia lógica acarrearán la destrucción física, psicológica y moral, total de la parte quejosa.

Los derechos fundamentales inderogables constituyen un derecho, la autorización otorgada por una norma imperativa de Derecho Internacional a las personas para exigir la realización de una conducta o su abstención.

La justificación de las decisiones jurídicas en el presente caso, no están ajustadas al principio de Supremacía Constitucional, por consiguiente, existe una clara segregación a derechos fundamentales inderogables.

La igualdad ante la ley cuando la ley no distingue, se sustenta en la dignidad, fundamento de los derechos humanos, la dignidad es inherente a la vida y a la forma en que ésta se verifica. Por consiguiente, la segregación degrada a la persona.

El principio de no discriminación constituye un elemento fundamental inherente a los derechos humanos protegidos mediante el juicio de amparo, derecho subjetivo público que faculta al gobernado para reclamar una acción u abstención frente al Estado que tiene la obligación correlativa, derecho absoluto oponible *erga omnes*, puesto que respecto del Estado significa un deber de abstención.

La limitación de derechos contraviene el derecho humano de acceso a la justicia, el daño que produce, sus consecuencias reales se manifiestan en relación a la anulación de derechos fundamentales.

¹⁴ Comparables a la resolución del juicio de nulidad con número de expediente V-76315/2015 substanciado en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que versó sobre el dominio particular de una vía pública, la destrucción del Estado de derecho es patente.

El principio de no discriminación se presenta como el derecho de acceso a la justicia el derecho a tener derechos, las condiciones de igualdad han sido vedadas, los derechos humanos en el caso concreto han sido nulificados, un ejemplo de ello es el derecho a la vivienda (juicio de amparo 651/2017) en relación al derecho a la libertad, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la vida, el derecho a no ser intimidado, amenazado, humillado, el derecho a no ser juzgado y condenado por autoridades no jurisdiccionales, sin derechos a que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con toda impunidad fabrique delitos falsos ante un Tribunal de Delitos oficiosos, en el que no se tiene derecho a un debido proceso, sin derechos a no ser torturado, sin derechos a una defensa adecuada¹⁵, sin derecho a saber el por qué se investiga, o los motivos subyacentes por los que se nos acusa penalmente *ad infinitum* a la parte quejosa, sin derecho a no ser amenazado que en cualquier momento perderemos la libertad o la vida, sin derecho a presentar una denuncia o querrela aun cuando han atentado en contra de la vida de los suscritos, sin derecho a no ser objeto de violencia institucional, sin derecho a no ser intimidado en juicio constitucional, sin derecho al proyecto de vida,... La negación de éstos derechos es implícita en juicio constitucional, la denegación de derechos fundamentales, alimentan la vulnerabilidad y el estigma, la legalización de la impunidad. La restricción ilegal al reconocimiento de derechos fundamentales inderogables, derechos que están protegidos por normas convencionales.

La persecución sistemática y flagrante de la parte quejosa, la amenaza de volver a ser torturado, la amenaza de perder la libertad arbitrariamente, es la persecución y destrucción del plan de vida, por consiguiente, la destrucción física, psicológica y moral, total (juicio de amparo indirecto 651/2017, 627/2017, 260/2018)

La destrucción de la vivienda que habita la parte quejosa, en los extremos de utilizar marros y cinceles para que se derrumbe ésta (juicio de amparo 651/2017).

El Estado de Derecho ha sido destruido totalmente, sin garantías judiciales para el restablecimiento del cauce constitucional, sin la posibilidad legal de exigir el establecimiento de derechos fundamentales, clarificando los extremos de un genocidio aplicado al caso concreto.

La destrucción al proyecto de vida en el caso concreto en relación a los sufrimientos ignominiosos que el Estado mexicano ha arrastrado a la parte quejosa en un transcurso de cinco años, con diez meses, en la destrucción física, psicológica y moral, como plan preconcebido, se clarifica en las siguientes notas periodísticas extraídas del libro *La Lucha por la dignidad. Teoría de la felicidad política*, de José Antonio Marina y María de Válgoma, página 11, en la que traen a colación un par de notas publicadas en el *The New York Times*:

¹⁵ Tomando en cuenta que el defensor de oficio en el presente caso en interrogatorio "participó" en la aplicación del método de tortura, o el defensor particular en connivencia con el Ministerio Público, en violación flagrante al debido proceso ante el Tribunal de Delitos oficiosos (juicio de amparo 627/2017)

“En Sierra Leona, los guerrilleros cortan la mano derecha de los habitantes de una aldea antes de retirarse. Una niña, que está muy contenta porque ha aprendido a escribir, pide que le corten la izquierda para poder seguir haciéndolo. En respuesta, un guerrillero le amputa las dos. En Bosnia, unos soldados detienen a una muchacha con su hijo. La llevan al centro del salón. Le ordenan que se desnude. “Puso al bebé en el suelo, a su lado. Cuatro chetniks la violaron. Ella miraba en silencio a su hijo, que lloraba. Cuando terminó la violación, la joven preguntó si podía amamantar al bebé. Entonces, un chetnik decapitó al niño con un cuchillo y dio la cabeza ensangrentada a la madre. La pobre mujer gritó. La sacaron del edificio y no se volvió a ver más.”

La cita del párrafo anterior dimensiona el desprecio por la dignidad de la persona, permite comprender los métodos aplicados con el objetivo de destruir a la persona, ya sea física, mental o moralmente, los métodos de tortura que han corrido a cargo de la procuraduría General de justicia de la Ciudad de México, hechos legalizados en juicio de amparo indirecto 627/2017 y 260/2018, sentencia que habla en sí y por sí misma, ello es así, la dignidad humana, es la base de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más en el presente caso han sido destruidos.

La destrucción del Estado de Derecho y de los principios más básicos, como es el reconocimiento de la dignidad que es inherente al principio de no discriminación, fundamento de las normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*), aunado a la destrucción de la vivienda de la parte quejosa juicio de amparo indirecto 627/2017, 651/2017 y 260/2018.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, A Usted Honorable **Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala** atentamente solicitamos:

Primero. – La revisión oficiosa del presente caso, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 4 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.

Segundo. - Atentamente se tome en cuenta que el presente caso es la supresión de derechos fundamentales no derogables, por lo que el juicio de amparo indirecto 909/2018, substanciado en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa del Primer Circuito, que encarecidamente la Juez A quo tuvo por interpuesto, forme parte de esta revisión oficiosa.

Estado de Excepción *de facto*
Juicio de amparo 260/2018
Ampliación de demanda de amparo

PROTESTO LO NECESARIO

Carolina González Nava

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2018

045345

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2018 OCT 29 PM 3 58

OFICINA DE
CERTIFICACION JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Revis. de on enviados en (18) Folios

cos:

Diversos anexos en copias simples en (4) Folios

Atte. [Firma]

RECEIVED
2018 OCT 30 PM 10 30
SECRETARIA DE JUSTICIA



4 October 2018

NOTIFICACIÓN PERSONAL

Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil dieciocho.

SE DA VISTA CON CUMPLIMIENTO

Amparo
indirecto

Mesa 1

Pral.-651/2017

LMA*CHSC

Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Uno (Sistema Tradicional), de la Coordinación Territorial AO-3, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete de julio del año en curso, remite el cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio.

Ahora, visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de treinta de agosto pasado, se tuvo por recibido el oficio y su anexo, en el que la autoridad oficiante informó las gestiones relativas al cumplimiento de la sentencia protectora; por tanto, con fundamento en el párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de la parte quejosa y parte tercero interesada el citado oficio y anexo, así como el diverso de cuenta, para que dentro del plazo de **tres días**, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en el entendido que una vez transcurrido el mismo y aun ante la ausencia de argumentos, con apoyo en el segundo párrafo del artículo citado, este órgano de control constitucional dicte la determinación que corresponda en torno al cumplimiento del fallo protector.

Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19 Libro XII, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época de Libro:

"PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."

Notifíquese personalmente.

Así lo proveyó y firma Rosa María Cervantes Mejía, Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Lizbeth Martínez Arias quien autoriza y da fe.

Lizbeth Martínez Arias, Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, hace constar que la presente copia autorizada es fiel reproducción de su original que obra en los autos del juicio de amparo 651/2017.
CONSTE.



76876

CDMX
CIUDAD DE MEXICO

PGJ

2018 OCT -2 A 9:00

EN MATERIA PENAL
LA CIUDAD DE MEXICO

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS
DESCONCENTRADAS
FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON
COORDINACIÓN TERRITORIAL AO-3
UNIDAD DOS S/D

CIUDAD DE MEXICO

2018 OCT 1 PM 8 48

C. JUEZ DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO
EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE:

CON FIRMA
COPIAS

013594

Por este conducto, y en atención a su oficio número 37230/2018 relativo al Juicio de Amparo 651/2017, promovido por la quejosa **MARTHA PATRICIA GONZALEZ NAVA**, en contra de actos de esta Autoridad, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo, la suscrita procedo a rendir el **INFORME JUSTIFICADO**, en los siguientes términos:

Se recabo informe del Agente de Policía de Investigación Armando Ortiz Cerriteño de fecha 20 de septiembre del año 2018, en el cual refiere que no encontraron testigos que recordaran con exactitud la fecha en la cual comenzó a construirse la rejilla motivo del inicio de la indagatoria número **FMC/MC-2/T2/00042/13-01**, motivo por el cual en fecha 24 de septiembre se determina la indagatoria **FMC/MC-2/T2/00042/13-01**, se anexa copia certificada del informe de policía de investigación y de la determinación de la indagatoria **FMC/MC-2/T2/00042/13-01**.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 74 Fracción IV de la Ley de Amparo, solicito a usted que por lo que hace a la suscrita sobresea el juicio de Garantías en virtud de no existir el acto reclamado.

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
CIUDAD DE MEXICO A 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
LIC. EDITH GUADALUPE ORTIZ VALENCIA

CIUDAD DE MEXICO
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS
DESCONCENTRADAS
FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON
COORDINACIÓN TERRITORIAL AO-3
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN UNO
(SISTEMA DE INVESTIGACIÓN)

PGJ
PGJDF

MÉXICO



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL.
FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON
COORDINACIÓN TERRITORIAL DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA AO-3
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 02
AV PREVIA : FMC/MC-2/T2/00042/13-01
DELITO : DAÑO A LA PROPIEDAD
ASUNTO: SE RINDE INFORME DE POL. DE INV.

LIC. EDITH GUADALUPE ORTIZ VALENCIA.
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
DOS SIN DETENIDO
EN ÁLVARO OBREGÓN - 1
P R E S E N T E .

CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 6 Y 41 FRACCIONES I, III Y IV DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; 3 FRACCIÓN I Y 273 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 2 Y 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; 75 Y 76 FRACCIÓN V DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 2, 25, 26 Y 27 DEL MANUAL DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

ANTECEDENTES: ME DIRIJO A USTED EN RELACIÓN A SU OFICIO GIRADO EL DIA, 08 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL QUE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE ESTA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SE AVOQUEN A LA COMPLEMENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- ACUDIR AL LUGAR DE LOS HECHOS, EN RELACION A CUANDO SE PERCATARON DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REJILLA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE TABAQUEROS COLINDANTE CON EL NÚMERO 43, COLONIA SAN NICOLAS TOTOLAPAN EN BÚSQUEDA DE MAS DATOS, INDICIOS Y TESTIGOS PRESENCIALES DIRECTOS, INDIRECTOS O DE ZONA. INVESTIGAR SU NOMBRE Y DOMICILIO E INVITARLOS A DECLARAR AL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS

MOTIVO POR EL QUE SE INFORMA LO SIGUIENTE:

CON EL FIN DE DARLE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE ORDEN EL SUSCRITO SE TRASLADO A LA CALLE DE TABAQUEROS CONLINDANTE CON EL NÚMERO 43, COLONIA NICOLAS TOTLAPAN PARA LA LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TESTIGOS DE CUANDO SE CONTRULLO LA REJILLA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE TABAQUEROS CONLINDANTE CON EL NÚMERO 43, COLONIA NICOLAS TOTLAPAN, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, POR LO QUE AL ACUDIR EN VARIAS OCASIONES EN DISTINTAS FECHAS Y PREGUNTAR A TRANSEUNTES DE LA MISMA CALLE NOS REFIRIERON QUE NO SE PERCATARON DE LA FECHA EXACTA EN LA CUAL COMENZARON A CONTRUIR DICHA REJILLA, PERO QUE NO DESEABAN DAR SUS DATOS PARA NO METERSE EN PROBLEMAS CON LAS HERMANAS NAVA YA QUE SON MUY ESPECIALES Y REFIEREN SER INFLUYENTES EN LA DELEGACIÓN, MOTIVO POR LO QUE SE RINDE EL PRESENTE INFORME.

INVESTIGACIÓN QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO PARA LO QUE A BIEN TENGA DETERMINAR.
COORDINACIÓN TERRITORIAL
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

(SISTEMA) ENCARGADO DE GRUPO DE LA
POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL D. F.

ARMANDO TORRES OLVERA.

RESPECTUOSAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO., NO REELECCIÓN
MÉXICO D. F. A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
EL C. AGENTE DE LA POL. DE INV. DEL D.F.

ARMANDO ORTIZ CERRITEÑO

PGJ

FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON.

AGENCIA INVESTIGADORA DEL M.P.: AO-3

UNIDAD DE INVESTIGACION No.: 2 SIN DETENIDO

PRIMER TURNO

INDAGATORIA No.: FMC/MC-2/T2/00042/13-01.

DAÑO A LA PROPIEDAD (NO EXCEDA DE 20 SALARIOS MINIMOS O

INDETERMINADO) - DAÑO A LA PROPIEDAD CULPOSO A BIENES INMUEBLES

FORMATO UNICO

DIRECTA

En la Ciudad de México Distrito Federal a los 24 veinticuatro días del mes de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, la suscrito Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad Investigadora sin Detenido Número dos de la Agencia Investigadora AO-3, Fiscalía Desconcentrada en Alvaro Obregón, y quien actúa en compañía de su Oficial secretario con quien al final firma y DA FE.-----
-A C O R D O------V I S T A S para resolver las presentes diligencias contenidas en el expediente de la averiguación previa citada al rubro, y toda vez que por el momento no se encuentran reunidos los requisitos de procedibilidad que exigen los artículos 14, 16 y 21 de nuestra Constitución, así como lo dispuesto por los artículos 122 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Distrito Federal; artículo 3 fracción XV inciso b); lo señalado en el Acuerdo A/003/99 y el Oficio Circular número OC/11/2009, emitidos por el Titular de esta institución, actuaciones que se instruyen en contra de ODILON NAVA DE LA ROSA por el delito de DAÑO A LA PROPIEDAD, y toda vez que en concepto del suscrito no es posible desahogar mayores diligencias ministeriales pertinentes para el debido esclarecimiento de los hechos a los que se contrae la presente indagatoria y como a juicio del Titular de esta Unidad de Investigación, se procede a formular ACUERDO DE RESERVA, en base a los siguientes:-----R E S U M E N D E-----Que la querellante refiere que aproximadamente desde el año 2009 sin recordar el mes exacto los vecinos del predio ubicado en Tabaqueros Manzana 45 Andador del 6 al 11, instalaron una rejilla para captación de aguas pluviales en un pasillo que se ubica en la colindancia trasera de su vivienda, misma rejilla que fue instalada por el probable responsable pero aproximadamente en el mes de septiembre u octubre del año 2010, su vivienda comenzó a presentar humedad dentro de la misma toda vez que la rejilla colocada por el probable responsable acumulaba mucha agua y la misma comenzó a filtrarse dentro del domicilio de la querellante, toda vez que la rejilla se encuentra cerca de la paso vehicular y ocasiono que su vivienda comenzara a tener fisuras e incluso pequeñas grietas que ocasionaron el circular de vehículos de gran peso con sus vibración, por lo que acudio la querellante a la Coordinación de Protección civil de la delegación política en Magdalena Contreras, en donde determinaron el grado de afectación que ha sufrido la vivienda de la querellante misma que quedo específicamente determinada en el oficio número BD10.1.0.9.1/2267/2012 de fecha 04 de diciembre del año 2012, suscrito por el C. ABUNDIO S. MANZANARES DIMAS, por lo que la querellante formulo querrela el delito de Daño a la propiedad cometida en su agravio en contra de ODILON NAVA DE LA ROSA Y QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por lo que se consignan las presentes actuaciones al probable responsable ODILON NAVA DE LA ROSA al Juez Cuarto Penal de Delitos no Graves, quien deja bajo los efectos del artículo 36 del Código de procedimientos penales vigente para el Distrito Federal.-----Por lo que se inicia la investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos, y se ordenan y practican todas y cada una de las diligencias pertinentes, mismas que en su orden cronológico a continuación se citan a efecto de satisfacer lo dispuesto por el artículo 61 del acuerdo A/003/99, por lo que todas y cada una de las constancias y actuaciones que conforman la presente investigación fueron:-----1.- Formato único para el inicio de actas especiales Averiguaciones previas Especiales, Averiguaciones previas Directas sin Detenido ante el Ministerio Público.-----2.- Informe de Policía de Investigación.-----3.- Declaración Querellante.-----4.- Declaración de los Probables Responsables.-----C O N S I D E R A N D O-----PRIMERO.- Por lo que hace al delito de Daño a la propiedad se encuentra previsto en el artículo 239 del código penal vigente para el distrito federal que a la letra dice: : " al que destruya o deteriore una cosa ajena en perjuicio de otro,-----En el presente caso de las diligencias practicadas se desprende que hasta el momento no se ha podido

PGJ

FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON.
AGENCIA INVESTIGADORA DEL M.P.: AO-3
UNIDAD DE INVESTIGACION No.: 2 SIN DETENIDO
PRIMER TURNO
INDAGATORIA No.: FMC/MC-2/T2/00042/13-01.
DAÑO A LA PROPIEDAD (NO EXCEDA DE 20 SALARIOS MINIMOS O
INDETERMINADO) - DAÑO A LA PROPIEDAD CULPOSO A BIENES INMUEBLES
FORMATO UNICO
DIRECTA

acreditar la probable responsabilidad del probables responsables hasta el momento no ha sido posible toda vez que no se cuenta con testigos de los hechos que respalden el dicho del denunciante, ya que si bien es cierto la querellante ha acreditado fehacientemente la propiedad del inmueble dañado y el daño que ha ocasionado la rejilla que se colocó desde aproximadamente el año 2009, y los daños comenzaron a ser visibles en la vivienda de la querellante, lo cual queda acreditado con el oficio BD10.1.0.9.1/226/2012 de fecha 04 de diciembre del año 2012, suscrito por el C. ABUNDIO S. MANZANARES DIMAS, también es cierto que hasta la fecha no se ha acreditado fehacientemente las fecha en la cual se construyó la rejilla en cemento y quien realmente la construyó ya que de actuaciones hasta el momento se desprende que la querellante solo refiere que el probable responsable fue quien ordenó la construcción de dicha rejilla, pero no se ha acreditado que el realmente la haya construido y que haya tenido los conocimientos básicos para construirla, para poder acreditar que fue omiso de manera dolosa al no realizar las medidas de precaución necesarias para evitar que dicha rejilla ocasionara los daños a la vivienda de la querellante ahora la querellante fue hasta el año 2013 que solicito el inicio de la presente indagatoria es decir tres años después de que se percató de los daños ocasionados a su vivienda tiempo que afecta para la investigación de las presentes actuaciones toda vez que los testigos presenciales de los hechos narrados por la querellante ya no son del todo ciertos para los testigos que pudieran ayudar a esta investigación, y si bien es cierto es obligación de esta representación social como órgano investigador y persecutor de los delitos acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal para estar en posibilidad de ejercer la pretensión punitiva ello desde luego, respetando y salvaguardando en todo momento las garantías y derechos fundamentales de todo gobernado, y al respecto es necesario señalar que el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en vigor en su segundo y tercer párrafo establece: "el cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito. en los casos en que la ley incorpore en la descripción de la conducta prevista como delito un elemento subjetivo o normativo, como elemento constitutivo esencial, será necesaria la acreditación del mismo para la comprobación del cuerpo del delito y después de haber efectuado un análisis de todos y cada uno de los elementos probatorios recabados en la presente indagatoria se arriba a la conclusión de que no existen suficientes elementos probatorios como para ejercer la pretensión punitiva en contra de los probables responsables, pues esta autoridad ministerial como representante del interés social tiene como facultad constitucional la de perseguir e investigar los delitos, facultad que debe ejercer en estricto apego a derecho y salvaguardando en todo momento los derechos y garantías de todo gobernado incluyendo, desde luego, los derechos de los individuos sujetos a investigación, pues del análisis efectuado a los elementos probatorios que integran la presente indagatoria se arriba a la conclusión de que no existe elemento probatorio alguno que sustente la acusación hecha en contra de los probables responsables, no son suficientes pues sería un exceso dar valor probatorio pleno al señalamiento que hace el denunciante, pues se trata de una testimonial aislada que no se encuentra robustecida con elemento probatorio pleno, por lo que resultaría un exceso por parte de esta representación social, aunado a que los probables responsables niegan los hechos, por lo que basar el actuar de esta representación social en una sola imputación carente de sustento probatorio sería contrario a derecho, por lo que en consideración de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16 constitucionales, 37, 122 y 124 bis a contrario sensu, del código de procedimientos penales del distrito federal, al no existir medios de prueba suficientes para tener por comprobado el cuerpo del delito ni

HOJA: 243.

PGJ

FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON.

AGENCIA INVESTIGADORA DEL M.P.: AO-3

UNIDAD DE INVESTIGACION No.: 2 SIN DETENIDO

PRIMER TURNO

INDAGATORIA No.: FMC/MC-2/T2/00042/13-01.

DANO A LA PROPIEDAD (NO EXCEDA DE 20 SALARIOS MINIMOS O

INDETERMINADO) - DANO A LA PROPIEDAD CULPOSO A BIENES INMUEBLES

FORMATO UNICO

DIRECTA

III y 16 fracción I el Reglamento Interno de esta Institución, así como del artículo 60 fracción IV que a la letra dice "Cuando los medios de prueba sean insuficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad y resulte imposible desahogar medios de prueba ulteriores relevantes para el efecto; ...", del Acuerdo A/003/99; y el Oficio Circular OC/11/2009, emitido por el Titular de esta Institución por lo que es de resolverse y se. - - - -
-R E S U E L V E- - - - -PRIMERO.-.-.-Es competente para conocer respecto del ACUERDO DE RESERVA la Lic. JUANA GAMA CORONA Responsable de la Agencia AO-3 de la Fiscalía desconcentrada en Alvaro Obregón, con base en los razonamientos jurídicos citados en el cuerpo del presente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 y Décimo quinto Transitorio del acuerdo A/003/99, en relación con el artículo 17 del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. - - - - -
-SEGUNDO.-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 del Acuerdo A/003/99 emitido por el Titular de esta Institución, por tratarse de un delito cuyo término medio aritmético de la pena no rebasa los cinco años, habiendo acordado con la Lic. JUANA GAMA CORONA Responsable de la Agencia AO-3 de la Fiscalía desconcentrada en Alvaro Obregón, se determina el ACUERDO DE RESERVA. - - - - -
-TERCERO.- Notifíquese por Estrados el contenido del presente Acuerdo a los Querellantes para que de estimarlo procedente hagan valer su inconformidad en un término que no exceda de diez días hábiles a partir de su notificación, lo anterior con fundamento en el contenido del artículo 68 del Acuerdo A/003/99. - - - - -
-CUARTO.-Infórmese del presente Acuerdo al C. Fiscal desconcentrada en Alvaro Obregón y a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público auxiliares del C. Procurador, para que en su caso de estimarlo pertinente efectúen una revisión de la presente determinación y resuelvan lo que conforme a derecho proceda y transcurrido el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 63 del citado acuerdo en el resolutivo anterior, sin que exista revocación por parte de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del C. Procurador, archívese la presente indagatoria como asunto concluido. - - - - -
-ASI LO ACORDO Y FIRMAN, EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR QUIEN ACTUA CON SU OFICIAL SECRETARIO CON QUIEN AL FINAL FIRMA Y DA FE, Y CON LA APROBACION DEL RESPONSABLE DE AGENCIA DE INVESTIGACION QUIEN AL FINAL TAMBIEN FIRMA. - - - - -
-C U M P L A S E- - - - -SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO - - - - -
-D A M O S F E- - - - -AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. LIC. EDITH GUADALUPE ORTIZ VALENCIA. OFICIAL SECRETARIO MARIA DEL CARMEN ACOSTA RUIZ. LA RESPONSABLE DE LA AGENCIA AO-3 LIC. JUANA GAMA CORONA..

VENGE L DE
LA CIUDA DE MEXICO
DESCONCENTRADA DE
OFEN ALVARO OBREGON
CION TERIORAL AO-3
DE INVESTICION UNO
TEMA TRADICIONAL

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las ____ hrs. del día 28 del mes de 09 de 2017, en la suscrita Agencia del Ministerio Público adscrita a la unidad de investigación No. HOJA: 245 de la Procuraduría Territorial AO-3 en la Delegación Alvaro Obregón, Fiscalía Desconcentrada.

Que las presentes copias fotostáticas de los originales, son copia fiel de sus que se lleva en el expediente dentro de la A. mismas que concuerdan en todas y cada una de las partes.

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
Titular de la Unidad de Investigación
SIN DETENIDO
LIC. Edith Guadalupe Ortiz Valencia
FISCALIA DESCONCENTRADA DE
INVESTIGACION EN ALVARO OBREGON
UNIDAD DE INVESTIGACION UNO
(SISTEMA DE INVESTIGACION)

PGJ

FISCALIA DESCONCENTRADA EN ALVARO OBREGON.

AGENCIA INVESTIGADORA DEL M.P.: AO-3

UNIDAD DE INVESTIGACION No.: 2 SIN DETENIDO

PRIMER TURNO

INDAGATORIA No.: FMC/MC-2/T2/00042/13-01

DANO A LA PROPIEDAD (NO EXCEDE DE 20 SALARIOS MINIMOS O

INDETERMINADO) - DANO A LA PROPIEDAD CULPOSO A BIENES INMUEBLES

FORMATO UNICO

DIRECTA

la probable responsabilidad de ODILON NAVA DE LA ROSA resultando también aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia que a continuación se cita: - - - - - NUMERO DE REGISTRO: 213,939, Jurisprudencia, Materia(s): Penal, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 72, Diciembre de 1993, Tesis: II.3o. J/65, Página: 71, OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACION. La imputación del ofendido merece credibilidad en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario, de tal suerte que si su versión esta administrada con algún otro medio de convicción, debe concluirse que adquiere validez preponderante para sancionar al acusado. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 462/89. Jaime Leal Arellano. 30 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa. Amparo directo 597/92. Reyes Salcedo Ríos. 8 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Amparo directo 721/92. Epifanio Berra Olascoaga. 21 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa. Amparo directo 851/92. Demetrio Ovando Avilés. 7 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Héctor Fernando Vargas Bustamante. Amparo en revisión 292/93. Ramón Robles Bañuelos. 20 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa. - - - - - Tesis que sirve de apoyo y nos brinda mayor luz respecto de la valoración probatoria que se efectúa en el presente acuerdo, pues al no existir ningún otro elemento probatorio que aporte credibilidad a la manifestación hecha por la querellante nos encontramos en presencia de una declaración aislada y unilateral que no es suficiente para considerar que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de DANO A LA PROPIEDAD y mucho menos la probable responsabilidad penal de la probable responsable y considerar lo contrario, el actuar de esta representación social sería notoriamente violatorio de garantías individuales y para no conculcar los derechos de cualquiera situación que se traduciría en violación de garantías individuales y parcialidad por parte de la institución del ministerio público, toda vez que no se acredita que el probable responsable haya tenido conocimiento de las medidas precautorias que debería realizar al construir o mandar construir la rejilla en comento, siendo el elemento material del tipo penal que nos ocupa, por lo que de acuerdo con el artículo 261 del Código de procedimientos Penales Vigente para el Distrito Federal, los principios de objetividad, singularidad y racionalidad y para no conculcar los derechos de cualquiera situación que se traduciría en violación de garantías individuales y parcialidad por parte de la institución del ministerio público, en contravención con los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia, por los que se rige esta institución, es procedente realizar ACUERDO DE RESERVA, en términos del 3 fracción de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; artículo 8 fracción III y 16 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; artículo 60 fracción IV acuerdo A/003/99, y Oficio Circular número OC/11/2009, expedidos por el titular de esta Institución. - - - - - P R E S C R I P C I O N - - - - - El delito de Daño a la Propiedad se encuentra sancionado en el artículo 239 fracción II que tiene una penalidad mínima de seis meses y una máxima de dos años, por lo que el término necesario para la prescripción del presente delito es de tres años. - - - - - Por lo expuesto y fundado en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos: 3 y 122 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Distrito Federal; 3 fracción XV inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 8 fracción



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIONES
045344
045345

261
FORMA A-34
CUADERNILLO DERIVADO DEL
RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018
EN LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018

En seis de noviembre de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con dos escritos y los anexos respectivos, de Carolina González Nava, representante común de los recurrentes, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia. Conste. *ℓ*

Ciudad de México, a seis de noviembre de dos mil dieciocho.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse en estudio el recurso de reclamación 1734/2018, agréguense al presente cuadernillo dos escritos y los anexos respectivos, de Carolina González Nava, representante común de los recurrentes, para los efectos legales a que haya lugar. *ℓ*

Entréguese el presente cuadernillo a la Ponencia del Señor **MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO**, y en su oportunidad, agréguese al expediente principal del recurso de reclamación en comento.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.

OACA.

El **12 NOV 2018**, se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN
1734/2018.**

**DERIVADO DE LA SOLICITUD DE
EJERCICIO DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN 479/2018.**

**RECURRENTE: CAROLINA
GONZÁLEZ NAVA.**

**PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.
SECRETARIA: MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH.**

ÍNDICE

	Pág.
Síntesis	I-IV
Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción	1-2
Recurso de reclamación	2
Competencia de la Sala	2-3
Legitimación y Procedencia	3
Oportunidad	3-5
Acto Materia del recurso de reclamación	5
Motivos de agravio del recurso de reclamación	5-11
Estudio del asunto	11-16
Puntos resolutivos	16

ANEXO I. Constancias necesarias para resolver.

ANEXO II. SEFA y Acuerdo impugnado.

ANEXO III. Recurso de reclamación.

3380

**RECURSO DE RECLAMACIÓN
1734/2018.**

**DERIVADO DE LA SOLICITUD DE
EJERCICIO DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN 479/2018.**

**RECURRENTE: CAROLINA
GONZÁLEZ NAVA.**

**PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.
SECRETARIA: MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH.**

S Í N T E S I S:

Acto Reclamado:

El proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018.

Recurrentes:

Carolina González Nava y otros.

El proyecto consulta:

En las consideraciones:

Se dice que esta Primera Sala es competente para conocer del recurso de reclamación planteado, que fue promovido por parte legítima; es procedente y su presentación fue oportuna.

También, se señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación procede contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los Presidentes de las Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Bajo ese contexto, debe deducirse que la materia del citado recurso se limita a analizar la legalidad del acuerdo de trámite dictado, en este caso, por la Ministra Presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual, los agravios que se hagan valer en el escrito de mérito, debe circunscribirse sólo a combatir

la resolución recurrida, sin que aborden aspectos ajenos a dicha cuestión.

Ahora bien, el problema jurídico a resolver en el presente caso, consiste en examinar la legalidad del auto emitido el diez de julio de dos mil dieciocho, por el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018.

En dicho proveído, podemos advertir que, se señaló que, no se surtía alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte final y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se refieren expresamente a amparos directos y amparos en revisión, para que este Alto Tribunal ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver los juicios de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018, todos del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

Ello, de conformidad con el criterio contenido en la tesis 2ª.CLXV/2008, de rubro: **“FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA”**.

A continuación, se procede al estudio de los agravios aducidos por la parte recurrente, mismos que se estiman **infundados** por un lado e **inoperantes**, por el otro, en atención a las siguientes consideraciones.

Son **infundados** los argumentos en los que se sostiene que es incorrecto el auto impugnado, porque como bien se señala en el auto recurrido por el Ministro Presidente de este Máximo Tribunal carece de atribuciones para conocer del amparo indirecto números 651/2017, 627/2017 y 260/2018.

Efectivamente, la atribución constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de aquellos casos que *prima facie* no son de su competencia, está prevista en los artículos 105, fracción III; 107, fracciones V, último párrafo, y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal.

Conforme a dichos preceptos, este Máximo Tribunal puede conocer de amparos directos, amparos en revisión y recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos

procesos en que la Federación sea parte, cuando por su interés y trascendencia así lo ameriten a juicio del Pleno o alguna de las Salas del Alto Tribunal.

En ese orden de ideas, no existe supuesto constitucional ni legal que posibilite a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atraer amparos indirectos cuando se encuentran en primera instancia, pues la posibilidad de ejercer dicha facultad extraordinaria sólo opera en relación con su segunda instancia, es decir, cuando se tramita el recurso de revisión.

Máxime, que como lo señala la parte recurrente y de las constancias de autos se advierte, que el treinta de abril de dos mil dieciocho, **se resolvió el amparo indirecto 627/2017**, cuya atracción se pide; y si bien, al respecto se promovió recurso de revisión, el cual fue registrado con el número 157/2018, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; lo cierto es, que el seis de julio de dos mil dieciocho, **también se resolvió dicho amparo en revisión.**

Consecuentemente, al no colmarse el requisito formal o de procedencia relativo a que los asuntos que se pretendan atraer encuadren en alguno de los casos previstos en los artículos 105, fracción III, y 107, fracciones V, último párrafo, y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, devienen infundados los agravios del reclamante, al estar encaminados a que se efectúe una actuación inconducente, como es la verificación de su reclamo mediante la atracción de juicios de amparo indirecto tramitados en primera instancia.

Sin que lo anterior se pueda considerar como una violación al derecho de justicia pronta, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues dicho principio no tiene el alcance de soslayar el resto de normas constitucionales que regulan la actividad jurisdiccional, incluidas aquellas relativas a la competencia de los tribunales federales para conocer de determinados asuntos, como de alguna forma pretende el reclamante.

Por último, en relación al resto de los agravios expresados por los recurrentes, en su escrito de reclamación, debe decirse que son **inoperantes**, porque no están dirigidos a combatir los razonamientos en los que apoya su determinación el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, sino que resultan ajenos a la materia del presente recurso de reclamación, por lo que no pueden ni deben ser analizados al resolver este medio de impugnación.

Hacer lo contrario, sería desvirtuar el sentido propio del recurso de reclamación, pues su objeto –como ya quedó precisado– se encuentra

acotado al análisis de los acuerdos de trámite y, en lógica secuencia, los tribunales competentes requieren de los agravios que combatan efectivamente los razonamientos jurídicos de esos acuerdos.

En ese orden de ideas, al no advertirse una cuestión que amerite ser suplida en deficiencia en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo y, no existe un motivo que conduzca a considerar que la decisión del Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es errónea y deba revocarse, se procede a confirmar su acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018, por lo que se concluye que el presente recurso de reclamación planteado es procedente, pero resulta infundado.

EN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS SE DICE:

PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación **1734/2018**, a que este toca se refiere.

SEGUNDO. Se confirma el proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018.

TESIS QUE SE CITA:

“RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU MATERIA DE ESTUDIO”

**RECURSO DE RECLAMACIÓN
1734/2018.**

**DERIVADO DE LA SOLICITUD DE
EJERCICIO DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN 479/2018.**

**RECURRENTE: CAROLINA
GONZÁLEZ NAVA.**

VISTO BUENO
SR. MINISTRO

**PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.
SECRETARIA: MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH.**

17 Págs

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día

VISTOS, para resolver el recurso de reclamación número
1734/2018, promovido por **Carolina González Nava y otros**, por
derecho propio, contra el acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho,
dictado por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número
479/2018; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción.

El cinco de julio de dos mil dieciocho, **Carolina González Nava y otros**,
solicitaron a este Máximo Tribunal, el ejercicio de su facultad de
atracción para el conocimiento del caso recaídos en los juicios de
amparo indirecto, 651/2017, 627/2017 y 260/2018.

Mediante acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, el
Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó

formar y registrar el expediente relativo a la solicitud de ejercicio de facultad de atracción presentada, al cual le correspondió el número 479/2018. Asimismo, **determinó desechar por notoriamente improcedente la mencionada petición.**

SEGUNDO. Recurso de Reclamación. Inconforme con lo anterior, **Carolina González Nava** por su propio derecho y ostentándose como representante común de otros recurrentes, hizo valer recurso de reclamación, el cual fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho.¹

En proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho,² el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con reserva de los motivos de improcedencia que pudieran existir, lo admitió y registró con el número 1734/2018; asimismo, lo turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y, ordenó el envío de los autos a la Primera Sala, por ser la de su adscripción.

Mediante acuerdo de su Presidenta de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho,³ esta Primera Sala se avocó al conocimiento del mismo y se ordenó la remisión de los autos a la ponencia correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo

¹ Ibid. Fojas 2 a 8.

² Ibid. Fojas 17 y 18.

³ Ibid. Foja 19.

dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se interpone en contra de un acuerdo de trámite dictado por el Presidente de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Legitimación y procedencia. El recurso de reclamación fue interpuesto por parte legítima, de acuerdo con el artículo 104, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en tanto que quien lo interpone es Carolina González Nava, promovente en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018, del índice de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También es procedente en términos del artículo 104, párrafo primero de la Ley de Amparo, dado que se interpone en contra de un acuerdo emitido por el Presidente de este Máximo Tribunal, mediante el cual desechó por notoriamente improcedente el amparo directo en revisión planteado.

TERCERO. Oportunidad. A continuación, se procede analizar si el recurso de reclamación que nos ocupa, se presentó dentro del plazo a que se refiere el párrafo segundo del artículo 104, de la Ley de Amparo aplicable.⁴

- La parte recurrente quedó notificada del acuerdo reclamado el **veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.**
- La notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto fue el **veintisiete de agosto de dos mil dieciocho.**

⁴ “**Artículo 104...** Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.”

- El plazo de tres días para impugnar el proveído que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo transcurrió del **veintiocho al treinta del mes y año en cita.**
- En ese sentido, si el escrito del recurso de reclamación se presentó el **veintisiete de agosto de dos mil dieciocho**, ante este Máximo Tribunal, es dable considerar que su presentación fue oportuna.

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la presentación del recurso haya sido anterior al inicio del plazo para hacerlo, puesto que el numeral 104 de la Ley de Amparo, únicamente prevé que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días lo cual no impide que el recurso de reclamación correspondiente se interponga antes de este término. Resulta aplicable en la especie, lo establecido en la jurisprudencia número 1ª./J. 41/2015, de esta Primera Sala de rubro, texto y datos de identificación siguientes:

“Época: Décima Época.

Registro: 2009408.

Instancia: Primera Sala.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 19, Junio de 2015, Tomo I.

Materia(s): Común.

Tesis: 1a./J. 41/2015 (10a.).

Página: 569.

RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO. Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de

que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea.”⁵

CUARTO. Acto materia del recurso de reclamación. Por auto de diez de julio de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó por notoriamente improcedente, la petición de los promoventes de solicitar a este Alto Tribunal para que ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver los juicios de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018, todos del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, toda vez que no se surte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte final y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se refieren expresamente a amparos directos y amparos en revisión.

QUINTO. Motivos de agravio del recurso de reclamación. La parte recurrente, en su recurso de reclamación precisó como agravios, en lo medular, lo siguiente:

- 1) El acuerdo recurrido viola el artículo 10, fracción e, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación al

⁵ Recurso de reclamación 953/2013. 9 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Recurso de reclamación 1067/2014. Raúl Rodríguez Cervantes. 28 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.

Recurso de reclamación 895/2014. 18 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Rodrigo Montes de Oca Arboleya. Recurso de reclamación 1164/2014. Paula Abascal Valdez. 18 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Lorena Goslinga Remírez.

Recurso de reclamación 1231/2014. 18 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara. Tesis de jurisprudencia 41/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de mayo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- 2) Causa un grave agravio a la parte quejosa los proveídos recurridos, pues los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento los atributos de la persona humana, el reconocimiento a las garantías judiciales para la protección de los derechos fundamentales vulnerados en el caso concreto, son prueba de ello. Las garantías judiciales indispensables a que alude el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 4.2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no autoriza ni siquiera en conflictos armados la suspensión a un recurso sencillo y efectivo que proteja los derechos fundamentales inderogables conculcados en el presente caso.
- 3) Los proveídos recurridos causan un grave agravio, redundando en detrimento manifiesto a las normas internacionales de derechos humanos, el derecho de las víctimas a tener un acceso igual a un recurso judicial efectivo de acceso a la justicia a un procedimiento justo e imparcial, al inaccesso del remedio al estado de excepción de Derecho y violaciones flagrantes y sistemáticas a derechos fundamentales inderogables. El derecho a una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. La reparación e indemnización ha de ser proporcional a la gravedad de la de las violaciones y al daño sufrido.
- 4) Los acuerdos recurridos violan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Anulando la posibilidad que este Alto Tribunal reconozca en el presente caso el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia, considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derechos a igual protección de la ley, sin exclusión alguna. Ello es así, los acuerdos recurridos son ilegales, violan el artículo 10 fracción II, inciso c de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el artículo 79 in fine de la Ley de Amparo; el principio de progresividad, "pro homine", pro actione, favor debilis, favor libertatis. Esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno cuando se trate de los casos comprendidos en la fracción III del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el estado de excepción de Derecho ha sido formalizado en los juicios de amparo indirecto 627/2017, 651/2017 y 260/2018, todos substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito en concatenación con las resoluciones del Sexto Tribunal Colegiado

en Materia Penal del mismo circuito, recursos, que carecen de independencia e imparcialidad para la obtención de la justicia. Ello es así, éstos tres juicios que no han causado estado, son hechos notorios que dan soporte de iure a este estado de excepción de Derecho. Sin garantías judiciales efectivas, en el que se ha simulado juicios constitucionales, en un asombroso desprecio al orden jurídico, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día.

- 5) Los acuerdos recurridos violan la certeza y seguridad jurídica, pues el presente caso cuenta con sentencias, quejas. Solicitud de amparos que, por un periodo de un año, con ocho meses, cuentan con sendas violaciones procesales que violentan el derecho humano al acceso a la justicia, en relación al artículo 25, 27.2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al artículo 29 párrafo II, in fine, y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 6) Un ejemplo de ello es el amparo en revisión 627/2017, con número de toca 157/2018, en el que se resolvió, "en razón que de oficio se advierte la existencia de sendas violaciones procesales en el procedimiento del juicio de amparo, lo cual obliga a revocar el fallo impugnado y ordenar su reposición...", en el que la Juez a quo, formaliza y prosigue el estado de excepción de Derecho. Lo que deviene a probar la desviación a la legalidad. Luego, los proveídos recurridos son vagos, no dan razón jurídica suficiente para considerar que son emitidos en plena legalidad. Los amparos mencionados anteriormente, tienen recursos en revisión², por lo que le causa total indefensión a la parte recurrente la invocación de la jurisprudencia con el número 2a. CLXV /2008, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, bajo el rubro "*FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA*", en la que se basó los proveídos recurridos para desechar la solicitud de acceso al derecho humano al acceso a la justicia.
- 7) El presente caso se encuentra en un absurdo jurídico, existe plena inseguridad jurídica ("habeas corpus") que ha afectado el Estado de Derecho, lo cual configura un cuadro sistematizado de delitos de lesa humanidad. Dando una formalidad jurídica de estado de excepción de Derecho, suspensión de derechos fundamentales inderogables por un periodo de cinco años con ocho meses (enero de dos mil trece al mes de agosto de dos mil dieciocho), sin garantías judiciales efectivas, en el que se ha simulado que los

quejosos tenemos acceso a un juicio de amparo, a la fecha no se ha dado de forma mínima un establecimiento al orden jurídico, limitación a la ilegalidad o régimen relativo al ejercicio de los derechos que han sido suspendido. En un asombroso desprecio y rechazo al orden jurídico, en el presente caso, se ha "suspendido el Estado de Derecho, ateniéndonos la parte quejosa a la informalidad y la inseguridad jurídica.

- 8) La suspensión de los derechos fundamentales, ha incidido sobre diversos derechos fundamentales a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre; los derechos de la niñez; la inviolabilidad del hogar doméstico (vivienda); el derecho de acceso a la justicia; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición y la tortura; a las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Al haberse decretado en el presente caso la suspensión de derechos fundamentales, y no regularse ejecutivamente nada al respecto, ello abrió de forma sistemática de forma ilimitada a la ilegalidad de los funcionarios, figuras políticas, particulares, en conjunto y/o "pacto criminoso", han actualizado delitos que pueden constituir de lesa humanidad. Nada se ha decretado, nada se ha regulado, nada se ha dicho, y las autoridades han hecho lo que les ha parecido, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día. Condenable (ilegal) desde cualquier punto de vista.
- 9) En más de una ocasión a la parte quejosa: nos han torturado, la Representación Social ha hecho acusaciones insólitas, en el catálogo penal, no existe el tipo penal de solicitud de acceso a la justicia; el despojo de seguridad jurídica, lo demuestra; ello es así, en el presente caso se ha suspendido formalmente el derecho.
- 10) Pues sin el menor respeto al Estado Constitucional, la parte quejosa ha sido arrastrada a sufrimientos ignominiosos por un periodo de cinco años, con ochó meses, hechos que no han cesado, en que se nos ha denegado la protección judicial en los términos que mandata el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 11) En el presente caso las normas imperativas, relativas a los derechos del hombre, al reconocimiento de la dignidad humana base de los demás derechos: a la no impunidad, a la justicia, al derecho de no ser torturado como forma de castigo, el derecho a la vida, al derecho de no ser discriminado, el derecho a no ser amenazado con pena privativa de la libertad o de la vida, el derecho de que no se imponga a los quejosos castigos como penas anticipadas, el de ejercer acción penal ante un Juez Oral con competencia para delitos oficiosos, como forma de castigo, el derecho a que no se soslaye el interés superior de la niñez, el

derecho a la propiedad, el derecho a una vida libre de violencia de género, el derecho a una defensa técnica adecuada, el derecho a no vivir con zozobra, que en cualquier momento el Gobierno de la Ciudad de México nos impute hechos falsos con toda impunidad, en los que no se permita conocer a los quejosos de que se nos acusa, ejerciendo acción penal, como delito oficioso (unidad de gestión once, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México), el derecho a no ser privados de seguridad jurídica, a no ser vejado, a no recibir castigos infamantes, actualizando persecución basada en motivos políticos y sociales cometida por autoridades y un grupo que ejerce un poder sobre un territorio determinado con objeto de someter a la parte quejosa a una forma de vida en la que se ha negado y se sigue negando de forma permanente el goce de derechos fundamentales de los quejosos, entre otras violaciones graves a derechos humanos, denunciando una y otra vez inaccesso a la justicia; solicitando en el transcurso de cinco años con ocho meses ante diferentes autoridades (órganos de gobierno de la Ciudad de México) que cesaran estas graves violaciones, máxime si en el presente caso la sistemática y planificada violación a los derechos humanos que han sido denunciados: al Procurador General de Justicia del Distrito Federal al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; al Secretario de Gobernación.

- 12) Ahora bien, las resoluciones recurridas son un resumen de la nula disposición a actuar en el presente caso, sin tomar en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidas por el derecho internacional. Los juicios de amparo 627/2017, 651/2017 y 260/2018, representan el treinta y tres por ciento del total de solicitud de acceso a la justicia, un ejemplo de parcialidad y de violación al artículo 8, 25, 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la queja administrativa 1022/2018-II, documental, que se anexa en copia simple.
- 13) Ello es, los juicios de amparo indirecto: 1118/2016; 288/2017; 349/2017; 627/2017; 651/2017; 74/2018; 260/2018; 909/2018. Representan este estado excepción de Derecho, es loable presentar como prueba el juicio 627/2017, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ha reconocido las sendas violaciones procesales enjuicio constitucional que acontecen en el presente caso, el injustificado inaccesso a la justicia; así mismo, el juicio de amparo 909/2018, substanciado en el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, representa otra probanza (no existió violación inicial al artículo 76 de la Ley de Amparo) en contra de lo que acontece en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito que en conjunto con el Sexto Tribunal

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, han hecho del caso un estado de excepción de Derecho formal.

- 14) En estos juicios en marcha en sí mismos y por sí mismos demuestran que las resoluciones de la Juez a quo han sido adoptadas con el propósito de sustraer a las autoridades responsables de su responsabilidad penal por delitos que pueden constituir de lesa humanidad, las demoras injustificadas en estos juicios son compatibles con la nula intención de hacer que se respete la Constitución, en una clara desviación a la legalidad, en el que no se ha acatado la jurisprudencia de carácter obligatorio; así mismo los juicios no han sido ni son sustanciados de manera imparcial, es notorio que las decisiones han sido con la nula intención de que el estado de excepción de Derecho y de suspensión de derechos no derogables, cese, que sea reconocido el derecho violado, la sanción, reparación e indemnización a que tiene derecho toda víctima.
- 15) Así es, la parte quejosa ha ofrecido probanzas, los expedientes y anexos de lo innumerables juicios de amparo, documentales públicas, que en sí y por sí mismas, demuestran el estado de excepción de Derecho y la violación sistemática y flagrante de derechos fundamentales inderogables, un ejemplo de ello, es el informe médico suscrito por la doctora Yamel Rito García, Subdirectora de Consulta Externa, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud, informe, que prueba de forma idónea y fehacientemente los daños físicos y psicológicos, que derivaron del “estado de excepción” de Derecho y suspensión de derechos no derogables, documento público, que está basado en exámenes científicos y técnicos, en el que la suscrita se sometió a estudios de resonancia magnética, entre otros estudios. Probanza que demuestra los daños presentes y futuros que han derivado en violación al proyecto de vida; daños planificados con la finalidad de destruir, de anular el derecho humano a la existencia. Ello es así, hechos que devienen a comprobar que el Estado busca el exterminio de la parte quejosa, hechos que son comparables a la tortura de la “gota de agua”.
- 16) Lo anterior es así, por lo que las resoluciones recurridas hace nugatorio de manera formal el derecho de la parte quejosa al derecho humano a un juicio imparcial, efectivo, sencillo, pues no sólo se trata de vicios cometidos en las decisiones judiciales federales de mérito, los recursos promovidos que son previstos en la ley de la materia, sus resoluciones nos han privado de manera formal de la posibilidad de obtener una sentencia que proteja a la parte quejosa, pues las violaciones a la Constitución son manifiestas, si el Máximo Órgano Jurisdiccional del país lo ratifica, veda el acceso a la justicia, a un recurso efectivo y sencillo. Cabe

hacer la pregunta a este Alto Tribunal si es legal la violación al artículo 25, 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al artículo 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en violación al artículo 1, 17, 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en juicio constitucional.

SEXTO. Estudio del asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación procede contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los Presidentes de las Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Bajo ese contexto, debe deducirse que la materia del citado recurso se limita a analizar la legalidad del acuerdo de trámite dictado, en este caso, por la Ministra Presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual, los agravios que se hagan valer en el escrito de mérito, debe circunscribirse sólo a combatir la resolución recurrida, sin que aborden aspectos ajenos a dicha cuestión.

Ahora bien, el problema jurídico a resolver en el presente caso, consiste en examinar la legalidad del auto emitido el diez de julio de dos mil dieciocho, por el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018.

En dicho proveído, podemos advertir que se señaló que no se surtía alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte final y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se refieren expresamente a amparos directos y amparos en revisión, para que este Alto Tribunal ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver los juicios de

amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018, todos del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

Ello, de conformidad con el criterio contenido en la tesis 2ª.CLXV/2008, de rubro: “**FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA**”.

A continuación, se procede al estudio de los agravios aducidos por la parte recurrente, mismos que se estiman **infundados** por un lado e **inoperantes**, por el otro, en atención a las siguientes consideraciones.

Son **infundados** los argumentos en los que sostiene que es incorrecto el auto impugnado, porque como bien se señala en el auto recurrido por el Ministro Presidente de este Máximo Tribunal carece de atribuciones para conocer del amparo indirecto números 651/2017, 627/2017 y 260/2018.

Efectivamente, la atribución constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de aquellos casos que *prima facie* no son de su competencia, está prevista en los artículos 105, fracción

III,⁶ 107, fracciones V, último párrafo,⁷ y VIII, penúltimo párrafo,⁸ de la Constitución Federal.

Conforme a dichos preceptos, este Máximo Tribunal puede conocer de amparos directos, amparos en revisión y recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte, cuando por su interés y trascendencia así lo ameriten a juicio del Pleno o alguna de las Salas del Alto Tribunal.

En ese orden de ideas, no existe supuesto constitucional ni legal que posibilite a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atraer amparos indirectos cuando se encuentran en primera instancia, pues la posibilidad de ejercer dicha facultad extraordinaria sólo opera en relación con su segunda instancia, es decir, cuando se tramita el recurso de revisión.

Máxime, que como lo señala la parte recurrente y de las constancias de autos, se advierte que el treinta de abril de dos mil dieciocho **se resolvió el amparo indirecto 627/2017**, cuya atracción se pide; y si bien, al respecto se promovió recurso de revisión, el cual fue registrado con el número 157/2018, del índice del Quinto Tribunal

⁶ "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...] III.- De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los **recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito** dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. [...]". [énfasis añadido]

⁷ La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los **amparos directos** que por su interés y trascendencia así lo ameriten. [énfasis añadido]

⁸ Texto: "La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los **amparos en revisión**, que por su interés y trascendencia así lo ameriten". [énfasis añadido]

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; lo cierto es que, el seis de julio de dos mil dieciocho **también se resolvió dicho amparo en revisión.**

Consecuentemente, al no colmarse el requisito formal o de procedencia relativo a que los asuntos que se pretendan atraer encuadren en alguno de los casos previstos en los artículos 105, fracción III, y 107, fracciones V, último párrafo, y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, devienen infundados los agravios del reclamante, al estar encaminados a que se efectúe una actuación inconducente, como es la verificación de su reclamo mediante la atracción de juicios de amparo indirecto tramitados en primera instancia.

Sin que lo anterior se pueda considerar como una violación al derecho de justicia pronta, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues dicho principio no tiene el alcance de soslayar el resto de normas constitucionales que regulan la actividad jurisdiccional, incluidas aquellas relativas a la competencia de los tribunales federales para conocer de determinados asuntos, como de alguna forma pretende el reclamante.

Por último, en relación al resto de los agravios expresados por el recurrente, en su escrito de reclamación, debe decirse que son **inoperantes**, porque no están dirigidos a combatir los razonamientos en los que apoya su determinación el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, sino que resultan ajenos a la materia del presente recurso de reclamación, por lo que no pueden ni deben ser analizados al resolver este medio de impugnación.

Hacer lo contrario, sería desvirtuar el sentido propio del recurso de reclamación, pues su objeto –como ya quedó precisado– se

encuentra acotado al análisis de los acuerdos de trámite y, en lógica secuencia, los tribunales competentes requieren de los agravios que combatan efectivamente los razonamientos jurídicos de esos acuerdos.

Resulta aplicable al respecto, la tesis jurisprudencial número 1a./J. 68/2014 (10a.), de esta Primera Sala, de rubro, texto y datos de identificación siguientes:

Resulta aplicable al respecto, la tesis jurisprudencial número 1a./J. 68/2014 (10a.), de esta Primera Sala, de rubro, texto y datos de identificación siguientes:

“Época: Décima Época.

Registro: 2007787.

Instancia: Primera Sala.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I.

Materia(s): Común.

Tesis: 1a./J. 68/2014 (10a.).

Página: 457.

RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU MATERIA DE ESTUDIO. Del artículo 104, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se infiere que la materia del recurso de reclamación se limita a analizar la legalidad del acuerdo de trámite dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los Presidentes de sus Salas o por los de los tribunales colegiados de circuito. En esa virtud, los agravios que se hagan valer en el escrito relativo deben circunscribirse sólo a combatir la resolución recurrida, sin que puedan abordar aspectos ajenos a dicha cuestión, en cuyo caso deberán declararse inoperantes.”⁹

⁹ Recurso de reclamación 748/2013. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Recurso de reclamación 202/2014. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.

En ese orden de ideas, al no advertirse una cuestión que amerite ser suplida en deficiencia en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo y, no existe un motivo que conduzca a considerar que la decisión del Ministro Presidente de esta Suprema Corte es errónea y deba revocarse, se procede a confirmar su acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018, por lo que se concluye que el presente recurso de reclamación planteado es procedente, pero resulta infundado.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación 1734/2018, a que este toca se refiere.

SEGUNDO. Se confirma el proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018.

Recurso de reclamación 345/2014. 18 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Recurso de reclamación 302/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez.

Recurso de reclamación 381/2014. 2 de julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.

Tesis de jurisprudencia 68/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de quince de octubre de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 3 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Notifíquese con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRIMERA SALA

274

FORMA A-53

RECURSO DE RECLAMACIÓN
1734/2018.
DERIVADO DE LA SOLICITUD DE
EJERCICIO DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN 479/2018.
RECURRENTE: CAROLINA
GONZÁLEZ NAVA Y OTROS.

Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Se hace constar, con fundamento en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que el presente asunto se encuentra listado para verse en la audiencia del día seis de febrero de dos mil diecinueve.

LA SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA.

M.D. MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH.

Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil diecinueve. Se hace constar, con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en sesión de esta fecha, se resolvió:

AFEDERACIÓN
TICIADELA
JERDOSDELA
SALA

PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación 1734/2018, a que este toca se refiere.

SEGUNDO. Se confirma el proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018.

VOTACIÓN

SI	MINISTROS	NO	SE RESERVAN DERECHO FORMULAR VOTOS	EL DE
/	NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ			
/	LUIS MARÍA AGUILAR MORALES			
/	JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO PONENTE			
/	ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA			
/	JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA			

Así por unanimidad de cinco votos, se aprobó la proposición anterior.

LA SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA

M.D. MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH.

17



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

273
FORMA A-55

RECURSO DE RECLAMACIÓN
1734/2018.

DERIVADO DE LA SOLICITUD DE
EJERCICIO DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN 479/2018.

RECURRENTE: CAROLINA
GONZÁLEZ NAVA Y OTROS.

VISTO BUENO
SR. MINISTRO

PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.
SECRETARIA: MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH.


Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día seis
de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver el recurso de reclamación número
1734/2018, promovido por **Carolina González Nava y otros**, por
derecho propio, contra el acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho,
dictado por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número
479/2018; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción.

El cinco de julio de dos mil dieciocho, **Carolina González Nava y otros**,
solicitaron a este Máximo Tribunal, el ejercicio de su facultad de
atracción para el conocimiento del caso recaídos en los juicios de
amparo indirecto, 651/2017, 627/2017 y 260/2018.

 Mediante acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la solicitud de ejercicio de facultad de atracción presentada, al cual le correspondió el número 479/2018. Asimismo, **determinó desechar por notoriamente improcedente la mencionada petición.**

SEGUNDO. Recurso de Reclamación. Inconforme con lo anterior, **Carolina González Nava** por su propio derecho y ostentándose como representante común de otros recurrentes, hizo valer recurso de reclamación, el cual fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho.¹

En proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho,² el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con reserva de los motivos de improcedencia que pudieran existir, lo admitió y registró con el número 1734/2018; asimismo, lo turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y, ordenó el envío de los autos a la Primera Sala, por ser la de su adscripción.

Mediante acuerdo de su Presidenta de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho,³ esta Primera Sala se avocó al conocimiento del mismo y se ordenó la remisión de los autos a la ponencia correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

¹ Ibíd. Fojas 2 a 8.

² Ibíd. Fojas 17 y 18.

³ Ibíd. Foja 19.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018.


PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se interpone en contra de un acuerdo de trámite dictado por el Presidente de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Legitimación y procedencia. El recurso de reclamación fue interpuesto por parte legítima, de acuerdo con el artículo 104, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en tanto que quien lo interpone es Carolina González Nava, promovente en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018, del índice de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También es procedente en términos del artículo 104, párrafo primero de la Ley de Amparo, dado que se interpone en contra de un acuerdo emitido por el Presidente de este Máximo Tribunal, mediante el cual desechó por notoriamente improcedente el amparo directo en revisión planteado.

TERCERO. Oportunidad. A continuación, se procede analizar si el recurso de reclamación que nos ocupa, se presentó dentro del plazo a que se refiere el párrafo segundo del artículo 104, de la Ley de Amparo aplicable.⁴

⁴ "Artículo 104... Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada."

- 
- La parte recurrente quedó notificada del acuerdo reclamado el **veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho**.
 - La notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto fue el **veintisiete de agosto de dos mil dieciocho**.
 - El plazo de tres días para impugnar el proveído que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo transcurrió del **veintiocho al treinta del mes y año en cita**.
 - En ese sentido, si el escrito del recurso de reclamación se presentó el **veintisiete de agosto de dos mil dieciocho**, ante este Máximo Tribunal, es dable considerar que su presentación fue oportuna.

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la presentación del recurso haya sido anterior al inicio del plazo para hacerlo, puesto que el numeral 104 de la Ley de Amparo, únicamente prevé que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días lo cual no impide que el recurso de reclamación correspondiente se interponga antes de este término. Resulta aplicable en la especie, lo establecido en la jurisprudencia número 1ª./J. 41/2015, de esta Primera Sala de rubro, texto y datos de identificación siguientes:

“Época: Décima Época.

Registro: 2009408.

Instancia: Primera Sala.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 19, Junio de 2015, Tomo I.

Materia(s): Común.

Tesis: 1a./J. 41/2015 (10a.).

Página: 569.

RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO. Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea.”⁵


CUARTO. Acto materia del recurso de reclamación. Por auto de diez de julio de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó por notoriamente improcedente, la petición de los promoventes de solicitar a este Alto Tribunal para que ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver los juicios de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018, todos del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, toda vez que no se surte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte final y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se refieren expresamente a amparos directos y amparos en revisión.

⁵ Recurso de reclamación 953/2013. 9 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Recurso de reclamación 1067/2014. Raúl Rodríguez Cervantes. 28 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.

Recurso de reclamación 895/2014. 18 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Rodrigo Montes de Oca Arbolea. Recurso de reclamación 1164/2014. Paula Abascal Valdez. 18 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Lorena Goslinga Remírez.

Recurso de reclamación 1231/2014. 18 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara. Tesis de jurisprudencia 41/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de mayo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

 **QUINTO. Motivos de agravio del recurso de reclamación.** La parte recurrente, en su recurso de reclamación precisó como agravios, en lo medular, lo siguiente:

- 1) El acuerdo recurrido viola el artículo 10, fracción e, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 2) Causa un grave agravio a la parte quejosa los proveídos recurridos, pues los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento los atributos de la persona humana, el reconocimiento a las garantías judiciales para la protección de los derechos fundamentales vulnerados en el caso concreto, son prueba de ello. Las garantías judiciales indispensables a que alude el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 4.2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no autoriza ni siquiera en conflictos armados la suspensión a un recurso sencillo y efectivo que proteja los derechos fundamentales inderogables conculcados en el presente caso.
- 3) Los proveídos recurridos causan un grave agravio, redundando en detrimento manifiesto a las normas internacionales de derechos humanos, el derecho de las víctimas a tener un acceso igual a un recurso judicial efectivo de acceso a la justicia a un procedimiento justo e imparcial, al inaccesso del remedio al estado de excepción de Derecho y violaciones flagrantes y sistemáticas a derechos fundamentales inderogables. El derecho a una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por formalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. La reparación e indemnización ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.
- 4) Los acuerdos recurridos violan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Anulando la posibilidad que este Alto Tribunal reconozca en el presente caso el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia, considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derechos a igual protección de la ley, sin exclusión alguna. Ello es así, los acuerdos recurridos son ilegales, violan el artículo 10 fracción II, inciso c, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el artículo 79 in fine de la Ley de Amparo; el principio de progresividad, "pro homine", pro actione, favor debilis, favor libertatis. Esto es, la




PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno cuando se trate de los casos comprendidos en la fracción III del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el estado de excepción de Derecho ha sido formalizado en los juicios de amparo indirecto 627/2017, 651/2017 y 260/2018, todos substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito en concatenación con las resoluciones del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito, recursos, que carecen de independencia e imparcialidad para la obtención de la justicia. Ello es así, estos tres juicios que no han causado estado, son hechos notorios que dan soporte de iure a este estado de excepción de Derecho. Sin garantías judiciales efectivas, en el que se ha simulado juicios constitucionales, en un asombroso desprecio al orden jurídico, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día.

- 5) Los acuerdos recurridos violan la certeza y seguridad jurídica, pues el presente caso cuenta con sentencias, quejas. Solicitud de amparos que, por un periodo de un año, con ocho meses, cuentan con sendas violaciones procesales que violentan el derecho humano al acceso a la justicia, en relación al artículo 25, 27.2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al artículo 29 párrafo II, in fine, y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 6) Un ejemplo de ello es el amparo en revisión 627/2017, con número de toca 157/2018, en el que se resolvió, "en razón que de oficio se advierte la existencia de sendas violaciones procesales en el procedimiento del juicio de amparo, lo cual obliga a revocar el fallo impugnado y ordenar su reposición...", en el que la Juez a quo, formaliza y prosigue el estado de excepción de Derecho. Lo que deviene a probar la desviación a la legalidad. Luego, los proveídos recurridos son vagos, no dan razón jurídica suficiente para considerar que son emitidos en plena legalidad. Los amparos mencionados anteriormente, tienen recursos en revisión, por lo que le causa total indefensión a la parte recurrente la invocación de la jurisprudencia con el número 2a. CLXV /2008, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, bajo el rubro: "FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA", en la que se basó los proveídos

- 
- recurridos para desechar la solicitud de acceso al derecho humano al acceso a la justicia.
- 7) El presente caso se encuentra en un absurdo jurídico, existe plena inseguridad jurídica ("habeas corpus") que ha afectado el Estado de Derecho, lo cual configura un cuadro sistematizado de delitos de lesa humanidad. Dando una formalidad jurídica de estado de excepción de Derecho, suspensión de derechos fundamentales inderogables por un periodo de cinco años con ocho meses (enero de dos mil trece al mes de agosto de dos mil dieciocho), sin garantías judiciales efectivas, en el que se ha simulado que los quejosos tenemos acceso a un juicio de amparo, a la fecha no se ha dado de forma mínima un establecimiento al orden jurídico, limitación a la ilegalidad o régimen relativo al ejercicio de los derechos que han sido suspendidos. En un asombroso desprecio y rechazo al orden jurídico, en el presente caso, se ha suspendido el Estado de Derecho, ateniéndonos la parte quejosa a la informalidad y la inseguridad jurídica.
 - 8) La suspensión de los derechos fundamentales, ha incidido sobre diversos derechos fundamentales a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre; los derechos de la niñez; la inviolabilidad del hogar doméstico (vivienda); el derecho de acceso a la justicia; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición y la tortura; a las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Al haberse decretado en el presente caso la suspensión de derechos fundamentales, y no regularse ejecutivamente nada al respecto, ello abrió de forma sistemática de forma ilimitada a la ilegalidad de los funcionarios, figuras políticas, particulares, en conjunto y/o "pacto criminoso", han actualizado delitos que pueden constituir de lesa humanidad. Nada se ha decretado, nada se ha regulado, nada se ha dicho, y las autoridades han hecho lo que les ha parecido, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día. Condenable (ilegal) desde cualquier punto de vista.
 - 9) En más de una ocasión a la parte quejosa: nos han torturado, la Representación Social ha hecho acusaciones insólitas, en el catálogo penal, no existe el tipo penal de solicitud de acceso a la justicia; el despojo de seguridad jurídica, lo demuestra; ello es así, en el presente caso se ha suspendido formalmente el derecho.
 - 10) Pues sin el menor respeto al Estado Constitucional, la parte quejosa ha sido arrastrada a sufrimientos por un periodo de cinco años, con ocho meses, hechos que no han cesado, en que se nos ha denegado la protección judicial en los términos que mandata el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018.

11) En el presente caso las normas imperativas, relativas a los derechos del hombre, al reconocimiento de la dignidad humana base de los demás derechos: a la no impunidad, a la justicia, al derecho de no ser torturado como forma de castigo, el derecho a la vida, al derecho de no ser discriminado, el derecho a no ser amenazado con pena privativa de la libertad o de la vida, el derecho de que no se imponga a los quejosos castigos como penas anticipadas, el de ejercer acción penal ante un Juez Oral con competencia para delitos oficiosos, como forma de castigo, el derecho a que no se soslaye el interés superior de la niñez, el derecho a la propiedad, el derecho a una vida libre de violencia de género, el derecho a una defensa técnica adecuada, el derecho a no vivir con zozobra, que en cualquier momento el Gobierno de la Ciudad de México nos impute hechos falsos con toda impunidad, en los que no se permita conocer a los quejosos de que se nos acusa, ejerciendo acción penal, como delito oficioso (unidad de gestión once, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México), el derecho a no ser privados de seguridad jurídica, a no ser vejados, a no recibir castigos infamantes, actualizando persecución basada en motivos políticos y sociales cometida por autoridades y un grupo que ejerce un poder sobre un territorio determinado con objeto de someter a la parte quejosa a una forma de vida en la que se ha negado y se sigue negando de forma permanente el goce de derechos fundamentales de los quejosos, entre otras violaciones graves a derechos humanos, denunciando una y otra vez inaccesso a la justicia; solicitando en el transcurso de cinco años con ocho meses ante diferentes autoridades (órganos de gobierno de la Ciudad de México) que cesaran estas graves violaciones, máxime si en el presente caso la sistemática y planificada violación a los derechos humanos que han sido denunciados: al Procurador General de Justicia del Distrito Federal; al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y al Secretario de Gobernación.

12) Ahora bien, las resoluciones recurridas son un resumen de la nula disposición a actuar en el presente caso, sin tomar en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidas por el derecho internacional. Los juicios de amparo 627/2017, 651/2017 y 260/2018, representan el treinta y tres por ciento del total de solicitud de acceso a la justicia, un ejemplo de parcialidad y de violación a los artículos 8, 25, 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la queja administrativa 1022/2018-II, documental, que se anexa en copia simple.

13) Ello es, los juicios de amparo indirecto: 1118/2016; 288/2017; 349/2017; 627/2017; 651/2017; 74/2018; 260/2018; 909/2018. Representan este estado excepción de Derecho, es loable

presentar como prueba el juicio 627/2017, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ha reconocido las sendas violaciones procesales en juicio constitucional que acontecen en el presente caso, el injustificado inaccesso a la justicia; así mismo, el juicio de amparo 909/2018, substanciado en el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, representa otra probanza (no existió violación inicial al artículo 76 de la Ley de Amparo) en contra de lo que acontece en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito que en conjunto con el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, han hecho del caso un estado de excepción de Derecho formal.

- 14) En estos juicios en marcha en sí mismos y por sí mismos demuestran que las resoluciones de la Juez a quo han sido adoptadas con el propósito de sustraer a las autoridades responsables de su responsabilidad penal por delitos que pueden constituir de lesa humanidad, las demoras injustificadas en estos juicios son compatibles con la nula intención de hacer que se respete la Constitución, en una clara desviación a la legalidad, en el que no se ha acatado la jurisprudencia de carácter obligatorio; así mismo los juicios no han sido ni son sustanciados de manera imparcial, es notorio que las decisiones han sido con la nula intención de que el estado de excepción de Derecho y de suspensión de derechos no derogables, cese, que sea reconocido el derecho violado, la sanción, reparación e indemnización a que tiene derecho toda víctima.
- 15) Así es, la parte quejosa ha ofrecido probanzas, los expedientes y anexos de los innumerables juicios de amparo, documentales públicas, que en sí y por sí mismas, demuestran el estado de excepción de Derecho y la violación sistemática y flagrante de derechos fundamentales inderogables, un ejemplo de ello, es el informe médico suscrito por la doctora Yamel Rito García, Subdirectora de Consulta Externa, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud, informe, que prueba de forma idónea y fehacientemente los daños físicos y psicológicos, que derivaron del "estado de excepción" de Derecho y suspensión de derechos no derogables, documento público, que está basado en exámenes científicos y técnicos, en el que la suscrita se sometió a estudios de resonancia magnética, entre otros estudios. Probanza que demuestra los daños presentes y futuros que han derivado en violación al proyecto de vida; daños planificados con la finalidad de destruir, de anular el derecho humano a la existencia. Ello es así, hechos que devienen a comprobar que el Estado busca el exterminio de la parte quejosa, hechos que son comparables a la tortura de la "gota de agua".



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018.

16) Lo anterior es así, por lo que las resoluciones recurridas hace nugatorio de manera formal el derecho de la parte quejosa al derecho humano a un juicio imparcial, efectivo, sencillo, pues no sólo se trata de vicios cometidos en las decisiones judiciales federales de mérito, los recursos promovidos que son previstos en la ley de la materia, sus resoluciones nos han privado de manera formal de la posibilidad de obtener una sentencia que proteja a la parte quejosa, pues las violaciones a la Constitución son manifiestas, si el Máximo Órgano Jurisdiccional del país lo ratifica, veda el acceso a la justicia, a un recurso efectivo y sencillo. Cabe hacer la pregunta a este Alto Tribunal si es legal la violación al artículo 25, 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al artículo 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en violación a los artículos 1, 17, 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en juicio constitucional.

SEXTO. Estudio del asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación procede contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los Presidentes de las Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Bajo ese contexto, debe deducirse que la materia del citado recurso se limita a analizar la legalidad del acuerdo de trámite dictado, en este caso, por la Ministra Presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual, los agravios que se hagan valer en el escrito de mérito, debe circunscribirse sólo a combatir la resolución recurrida, sin que aborden aspectos ajenos a dicha cuestión.

Ahora bien, el problema jurídico a resolver en el presente caso, consiste en examinar la legalidad del auto emitido el diez de julio de dos mil dieciocho, por el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018.

En dicho proveído, podemos advertir que se señaló que no se surtía alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte final y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se refieren expresamente a amparos directos y amparos en revisión, para que este Alto Tribunal ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver los juicios de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018, todos del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

Ello, de conformidad con el criterio contenido en la tesis 2ª.CLXV/2008, de rubro: ***"FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA"***.

A continuación, se procede al estudio de los agravios aducidos por la parte recurrente, mismos que se estiman **infundados** por un lado e **inoperantes**, por el otro, en atención a las siguientes consideraciones.

Son **infundados** los argumentos en los que sostiene que es incorrecto el auto impugnado, porque como bien se señala en el auto recurrido por el Ministro Presidente de este Máximo Tribunal carece de atribuciones para conocer del amparo indirecto números 651/2017, 627/2017 y 260/2018.

Efectivamente, la atribución constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de aquellos casos que *prima facie*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018.

no son de su competencia, está prevista en los artículos 105, fracción III;⁶ 107, fracciones V, último párrafo,⁷ y VIII, penúltimo párrafo,⁸ de la Constitución Federal.

Conforme a dichos preceptos, este Máximo Tribunal puede conocer de amparos directos, amparos en revisión y recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte, cuando por su interés y trascendencia así lo ameriten a juicio del Pleno o alguna de las Salas del Alto Tribunal.


En ese orden de ideas, no existe supuesto constitucional ni legal que posibilite a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atraer amparos indirectos cuando se encuentran en primera instancia, pues la posibilidad de ejercer dicha facultad extraordinaria sólo opera en relación con su segunda instancia, es decir, cuando se tramita el recurso de revisión.

Máxime, que como se señala la parte recurrente y de las constancias de autos, se advierte que el treinta de abril de dos mil dieciocho **se resolvió el amparo indirecto 627/2017**, cuya atracción se

⁶ "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...] III.- De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los **recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito** dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. [...]". [énfasis añadido]

⁷ La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los **amparos directos** que por su interés y trascendencia así lo ameriten. [énfasis añadido]

⁸ Texto: "La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los **amparos en revisión**, que por su interés y trascendencia así lo ameriten". [énfasis añadido]

 pide; y si bien, al respecto se promovió recurso de revisión, el cual fue registrado con el número 157/2018, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; lo cierto es que, el seis de julio de dos mil dieciocho **también se resolvió dicho amparo en revisión.**

Consecuentemente, al no colmarse el requisito formal o de procedencia relativo a que los asuntos que se pretendan atraer encuadren en alguno de los casos previstos en los artículos 105, fracción III, y 107, fracciones V, último párrafo, y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, devienen infundados los agravios del reclamante, al estar encaminados a que se efectúe una actuación inconducente, como es la verificación de su reclamo mediante la atracción de juicios de amparo indirecto tramitados en primera instancia.

Sin que lo anterior se pueda considerar como una violación al derecho de justicia pronta, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues dicho principio no tiene el alcance de soslayar el resto de normas constitucionales que regulan la actividad jurisdiccional, incluidas aquellas relativas a la competencia de los tribunales federales para conocer de determinados asuntos, como de alguna forma pretende el reclamante.

Por último, en relación al resto de los agravios expresados por el recurrente, en su escrito de reclamación, debe decirse que son **inoperantes**, porque no están dirigidos a combatir los razonamientos en los que apoya su determinación el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, sino que resultan ajenos a la materia del presente recurso de reclamación, por lo que no pueden ni deben ser analizados al resolver este medio de impugnación.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018.

Hacer lo contrario, sería desvirtuar el sentido propio del recurso de reclamación, pues su objeto —como ya quedó precisado— se encuentra acotado al análisis de los acuerdos de trámite y, en lógica secuencia, los tribunales competentes requieren de los agravios que combatan efectivamente los razonamientos jurídicos de esos acuerdos.

Resulta aplicable al respecto, la tesis jurisprudencial número 1a./J. 68/2014 (10a.), de esta Primera Sala, de rubro, texto y datos de identificación siguientes:

“Época: Décima Época.

Registro: 2007787.

Instancia: Primera Sala.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I.

Materia(s): Común.

Tesis: 1a./J. 68/2014 (10a.).

Página: 457.

RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU MATERIA DE ESTUDIO. Del artículo 104, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se infiere que la materia del recurso de reclamación se limita a analizar la legalidad del acuerdo de trámite dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los Presidentes de sus Salas o por los de los tribunales colegiados de circuito. En esa virtud, los agravios que se hagan valer en el escrito relativo deben circunscribirse sólo a combatir la resolución recurrida, sin que puedan abordar aspectos ajenos a dicha cuestión, en cuyo caso deberán declararse inoperantes.”⁹

⁹ Recurso de reclamación 748/2013. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Recurso de reclamación 202/2014. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.

En ese orden de ideas, al no advertirse una cuestión que amerite ser suplida en deficiencia en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo y, no existe un motivo que conduzca a considerar que la decisión del Ministro Presidente de esta Suprema Corte es errónea y deba revocarse, se procede a confirmar su acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018, por lo que se concluye que el presente recurso de reclamación planteado es procedente, pero resulta infundado.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación **1734/2018**, a que este toca se refiere.

SEGUNDO. Se confirma el proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción número 479/2018.

Recurso de reclamación 345/2014. 18 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Recurso de reclamación 302/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez.

Recurso de reclamación 381/2014. 2 de julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Arriengol Alonso.

Tesis de jurisprudencia 68/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de quince de octubre de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 3 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018.

Notifíquese con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Señores Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

Juan Luis González Alcántara Carrancá

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

PONENTE

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA



LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN

No. expediente: 1734/2018

Pertenece: PRIMERA SALA

Materia:

RECURRENTE: CAROLINA GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSA EN EL JA.- 260/2018 Y JA.- 627/2017), MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSA EN EL JA.- 260/2018, JA.- 651/2017 Y JA.- 627/2017), JULIO CÉSAR GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSO EN EL JA.- 260/2018), ISRAEL GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSO EN EL JA.- 260/2018)
OTRAS EN EL RESPECTIVO JUICIO DE ORIGEN: ODILÓN NAVA DE LA ROSA (TERCERO INTERESADO EN EL JA.- 651/2017)
MINISTERIO PÚBLICO: MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

Acto reclamado: EL PROVEÍDO DE PRESIDENCIA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE 10 DE JULIO DEL 2018, DICTADO EN EL SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018

Acto recurrido: EL PROVEÍDO DE PRESIDENCIA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE 10 DE JULIO DE 2018, DICTADO EN EL SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018. (SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN).

Motivo del conflicto:

Autoridad responsable:

Autoridad emisora del acto:

Garantías violadas:

Tema: CLASIFICACIÓN: OTROS - DESECHA

MECM-*-*-MAGC

F. turno a ponencia: 05/09/2018

Ministro: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

Secretario proyectista: MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH

Sentido de la resolución: 1. ES INFUNDADO.
2. SE CONFIRMA EL ACUERDO RECURRIDO.

F. resolución: 06/02/2019

F. ingreso engrose: 27/02/2019



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

Votos a favor: 5

Votos en contra: 0

LA QUE SUSCRIBE MTRA. MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH, SECRETARIO(A) DE ESTUDIO Y CUENTA ADSCRITA A LA PONENCIA DEL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, HAGO CONSTAR QUE EN ESTA FECHA, SE PROCEDIÓ A CAPTURAR EN LA RED DE INFORMÁTICA JURÍDICA , EL ENGROSE DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2019 , DICTADA POR LA PRIMERA SALA EN EL PRESENTE ASUNTO, PREVIO COTEJO DE SU ORIGINAL DEL CUAL FUE TOMADO.

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE FEBRERO DE 2019


FIRMA



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de actualización de engrose en la red de informática Jurídica

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN

No. expediente: 1734/2018

Pertenece: PRIMERA SALA

Materia:

RECURRENTE: CAROLINA GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSA EN EL JA.- 260/2018 Y JA.- 627/2017), MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSA EN EL JA.- 260/2018, JA.- 651/2017 Y JA.- 627/2017), JULIO CÉSAR GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSO EN EL JA.- 260/2018), ISRAEL GONZÁLEZ NAVA (QUEJOSO EN EL JA.- 260/2018)
OTRAS EN EL RESPECTIVO JUICIO DE ORIGEN: ODILÓN NAVA DE LA ROSA (TERCERO INTERESADO EN EL JA.- 651/2017)
MINISTERIO PÚBLICO: MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

Acto reclamado: EL PROVEÍDO DE PRESIDENCIA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE 10 DE JULIO DEL 2018, DICTADO EN EL SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018

Autoridad responsable:

Tema: CLASIFICACIÓN: OTROS - DESECHA

MECM-*-*-MAGC

F. turno a ponencia: 05/09/2018

Ministro: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

Secretario proyectista: MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH

Sentido de la resolución: 1. ES INFUNDADO.
2. SE CONFIRMA EL ACUERDO RECURRIDO.

F. resolución: 06/02/2019

F. ingreso engrose: 27/02/2019

Votos a favor: 5

Votos en contra: 0

Ingresó el engrose en su versión pública: MTRA. MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH

CIUDAD DE MÉXICO. A 27 DE FEBRERO DE 2019.


FIRMA

100



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

286
FORMA A-53
RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018

LA LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HACE CONSTAR QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, AL CONCLUIR LA SESIÓN PÚBLICA DEL DÍA DE HOY SE FIJÓ EN LOS ESTRADOS DE ESTA SUPREMA CORTE UNA LISTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN DICHA SESIÓN, EN LA QUE SE INCLUYÓ EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018.

CIUDAD DE MÉXICO, A SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESADOS POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL SE PUBLICÓ EN LOS ESTRADOS Y EN EL PORTAL DE INTERNET DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. CONSTE.

ACTUARIO
JONATAN EDUARDO LARA BAZA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ESTA HOJA CORRESPONDE AL RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018. CONSTE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

VICTOR JUAN RUZ ARCE

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E .

PRIMERA SALA

REC. DE RECL.
1734/2018 EN LA
S.E.F.A 479/2018.

OF. No. 1903

ANEXOS:

S.E.F.A. 479/2018.
(88 fojas según
su último folio)

CUADERNO AUXILIAR
RELATIVO A LA S.E.F.A.
479/2018.
(283 fojas según
su último folio)

*Rec. de un acuerdo de la Primera Sala
S.E.F.A 479/2018 es (88) F. de
- un cuaderno auxiliar - (283) F. de*



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARIA DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA

LA SECRETARIA AUXILIAR DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

LIC. JOSEFINA DEL OLMO GUERRERO

Rem.

En atención a que esta Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, emitió la resolución correspondiente
en el recurso de reclamación indicado al margen, el cual se declaró
infundado, dicha resolución se puede consultar en la red jurídica
de este Alto Tribunal, remito los anexos que se señalan al mismo
margen, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

He de agradecer, se sirva ordenar el acuse de recibo
detallando lo que se remite.

Protesto a usted mi atenta consideración.

Ciudad de México, 5 de abril de 2019.

LA SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

LIC. ELSA GUTIÉRREZ OLGUÍN

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

2019 NOV 27 3 35

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

014764

288



2



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2019 ABR 24 PM 1 15

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

SOLICITANTE: CAROLINA GONZÁLEZ NAVA Y OTROS

SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN
NÚMERO: 479/2018

SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

SOLICITUD DE EJERCICIO
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN
479/2018

OF. SSGA-III-9659/2019.-SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE LA
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN.

ANTECEDENTES:
RECURSO DE
RECLAMACIÓN 1734/2018

OFICIO 1903

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

SOLICITANTE: CAROLINA GONZÁLEZ
NAVA Y OTROS
SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD
DE ATRACCIÓN: 479/2018
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

En la Ciudad de México, a nueve de abril de dos mil diecinueve,
se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

CONTENIDO:	PRESENTADO EN:
1. Oficio de remisión número 1903 de cinco de abril de dos mil diecinueve, de la Subsecretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado con el folio 014764.	Original
2. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 479/2018.	Un cuaderno

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de
Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
el cinco de abril del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a nueve de abril de dos mil diecinueve.

Agréguese para que surta los efectos legales consiguientes el
oficio de cuenta. Acúsele recibo.

Ahora bien, toda vez que del oficio de cuenta se advierte que
se declaró infundado el recurso de reclamación 1734/2018, interpuesto por la parte
solicitante, en contra del acuerdo de Presidencia de diez de julio de dos mil
dieciocho, dictado en el presente sumario, lo que se corrobora con el punto
"PRIMERO" de la resolución que obra en el expediente electrónico del citado

14:47
27/05/19

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.


recurso de reclamación, del índice de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y como está ordenado en el referido proveído, ~~archivase el presente toca como asunto concluido.~~ Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina..." **FIRMADO**

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a diez de abril de dos mil diecinueve.


DE MARCO A. FERNÁNDEZ MORALES
ACTUARIO JUDICIAL
ADSCRITO A LA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS



SECR. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

GORAJORR



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

REFERENCIA
PS-01818

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1734/2018
EN LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018

289
FORMA A-34
OK

En veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio SSGA-III-9659/2019, recibido en esta Secretaría de Acuerdos. Conste.

Ciudad de México, a veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

Agréguese a sus autos el oficio SSGA-III-9659/2019, del índice de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase a dicha Subsecretaría acusando recibo del oficio 1903 y de uno de los anexos descritos en el mismo.

Envíense los presentes autos al Archivo Central de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Notifíquese.

Así lo provexó y firma el **MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OACA.

El **30 ABR 2019**, se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

W
L

2
4
21

289